TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **008-2015-00769-**01

Demandante: **CAROLINA DEL PILAR SALAZAR**

Demandada: **LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISION FUTURO DE COLOMBIA Y OTROS**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la accionada SATVA LTDA, contra la sentencia emitida el 11 de agosto de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, término que empieza a correr de manera conjunta para las partes, a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **002-2019-00285-**01

Demandante: **NARCISO HERNANDEZ AGUDELO**

Demandada: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por las apoderadas de la parte accionada, contra la sentencia emitida el 19 de agosto de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **002-2019-00171-**01

Demandante: **ALEJANDRO GARCÍA LAVERDE**

Demandada: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por las apoderadas de la parte accionada, contra la sentencia emitida el 11 de agosto de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **002-2018-00575-**01

Demandante: **JORGE EDUARDO CONTRERAS CIPAMOCHA**

Demandada: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por el apoderados de la parte accionada, contra la sentencia emitida el 02 de agosto de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. – SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-016-2020-00444-01

Demandante: LUZ GIMENA CELY LOPEZ
Demandada(o): SOLUCIONES FACILITY COLOMBIA S.A.S.

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto proferido el 02 de junio de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral segundo (2°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **020-2019-00604-**01

Demandante: **FERNANDO ASDRUAL GUEVARA**

Demandada: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por el apoderados de la parte accionada, contra la sentencia emitida el 28 de mayo de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **016-2021-00158-**01

Demandante: **FABIAN LEONARDO NIÑO**

Demandada: **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

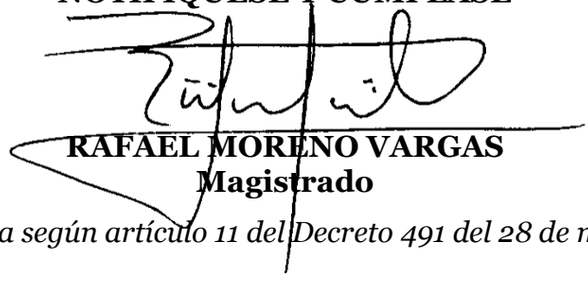
AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la accionada, contra la sentencia del 02 de agosto de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**008-2019-00074-**02

Demandante: **LUZ MERY SOTO AVILA**

Demandada: **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ -ETB S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

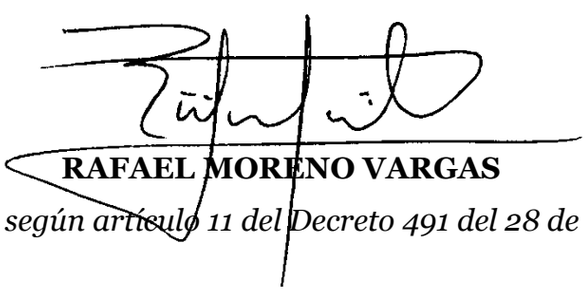
AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia emitida el 23 de agosto de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandante y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandante, empieza a correr el traslado para la parte demandada. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



RAFAEL MORENO VARGAS

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. – SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ejecutivo Laboral No. 110013105-016-2020-00343-01

Demandante: YINNA VANESSA ESGUERRA CELEMIN
Demandada(o): INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la parte demandante, contra el auto proferido el 10 de febrero de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral segundo (2°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **009-2019-00628-**01

Demandante: **ALEXANDER VELEZ ALCALA**

Demandada: **CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de parte accionada, contra la sentencia del 20 de agosto de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **031-2019-00816-**01

Demandante: **JOSE ALFREDO SUAREZ VENEGAS**

Demandada: **FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES Y OTRO**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la accionada UGPP, contra la sentencia emitida el 09 de septiembre de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de la UGPP (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

PROCESO EJECUTIVO LABORAL DE JESÚS EVELIO ARIZA OVALLE CONTRA LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS

RAD 008 2020 00226 01

Bogotá D.C., primero (01) octubre de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ADMITASE el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte **DEMANDADA** contra el **AUTO** proferido el **26 de julio de 2021** por el Juzgado **08** Laboral del Circuito de Bogotá.

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA20-11567 (5-06-2020) y el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se dispone:

Dar traslado a las partes por el término común de **CINCO (5)** días, para que presenten sus alegaciones por escrito, mismas que deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**

Señálese el día **VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)** fecha en la que se proferirá la decisión en el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE NANCY CHEMAS GONZÁLEZ CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.

RAD 008 2019 00637 01

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ADMITASE el recurso de apelación presentado por los apoderados de las demandadas **PORVENIR S.A. y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** contra la **sentencia** proferida el **10 de agosto de 2021** por el Juzgado **08** Laboral del Circuito de Bogotá.

Además, se ordena surtir el grado jurisdiccional de **consulta** a favor de **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** respecto de los puntos no apelados, en atención a lo dispuesto en los artículos 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA20-11567 (5-06-2020) y el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se dispone:

Dar traslado a las partes por el término de **CINCO (5)** días a cada una, iniciando por la parte **DEMANDADA** apelante, y a continuación la que no apeló, para que presenten sus alegaciones por escrito, mismas que deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Señálese el día **VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)** fecha en la que se proferirá la decisión en el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE NURI YADIRA CULMA PIZA CONTRA HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA S.A.

RAD 004 2020 00025 01

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ADMITASE el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte **DEMANDADA** contra el **AUTO** proferido el **18 de agosto de 2021** por el Juzgado **04** Laboral del Circuito de Bogotá.

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA20-11567 (5-06-2020) y el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se dispone:

Dar traslado a las partes por el término común de **CINCO (5)** días, para que presenten sus alegaciones por escrito, mismas que deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**

Señálese el día **VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)** fecha en la que se proferirá la decisión en el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE MODESTO ORTEGA BAQUERO CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

RAD 018 2019 00870 01

Bogotá D.C., primero (01) octubre de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ADMITASE el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte **DEMANDANTE** contra el **AUTO** proferido el **19 de agosto de 2021** por el Juzgado Primero **1** Transitorio Laboral del Circuito de Bogotá.

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA20-11567 (5-06-2020) y el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se dispone:

Dar traslado a las partes por el término común de **CINCO (5)** días, para que presenten sus alegaciones por escrito, mismas que deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Señálese el día **VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)** fecha en la que se proferirá la decisión en el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE MEDARDO DE JESÚS PÉREZ PALACIO CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y COLFONDOS S.A.

RAD 018 2015 01028 03

Bogotá D.C., primero (01) octubre de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ADMITASE el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte **DEMANDANTE** contra la **SENTENCIA** proferida el **20 de agosto de 2021** por el Juzgado Primero **01** Transitorio Laboral del Circuito de Bogotá.

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA20-11567 (5-06-2020) y el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se dispone:

Dar traslado a las partes por el término de **CINCO (5)** días a cada una, iniciando por la parte **DEMANDANTE** apelante, y a continuación la que no apeló, para que presenten sus alegaciones por escrito, mismas que deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**.

Señálese el día **VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)** fecha en la que se proferirá la decisión en el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE CARLOS TRIANA ORTIZ CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.

RAD 011 2019 00059 01

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ADMITASE el recurso de apelación presentado por los apoderados de las demandadas **PORVENIR S.A. y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** contra la **sentencia** proferida el **03 de febrero de 2021** por el Juzgado **11** Laboral del Circuito de Bogotá.

Además, se ordena surtir el grado jurisdiccional de **CONSULTA** a favor de **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** respecto de los puntos no apelados, en atención a lo dispuesto en los artículos 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA20-11567 (5-06-2020) y el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se dispone:

Dar traslado a las partes por el término de **CINCO (5)** días a cada una, iniciando por la parte **DEMANDADA** apelante, y a continuación la que no apeló, para que presenten sus alegaciones por escrito, mismas que deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**.

Señálese el día **VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)** fecha en la que se proferirá la decisión en el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE MODESTO ORTEGA BAQUERO CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

RAD 018 2019 00870 02

Bogotá D.C., primero (01) octubre de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ADMITASE el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte **DEMANDANTE** contra la **SENTENCIA** proferida el **19 de agosto de 2021** por el Juzgado Primero **1** Transitorio Laboral del Circuito de Bogotá.

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA20-11567 (5-06-2020) y el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se dispone:

Dar traslado a las partes por el término de **CINCO (5)** días a cada una, iniciando por la parte **DEMANDANTE** apelante, y a continuación la que no apeló, para que presenten sus alegaciones por escrito, mismas que deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

Señálese el día **VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)** fecha en la que se proferirá la decisión en el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE **LIZETH DANIELA CHICA HERNÁNDEZ** CONTRA **CYZA OUTSOURCINGS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN Y OTROS**

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Magistrado sustanciador la declaró abierta en asocio de los H. Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, en atención a los parámetros dispuestos por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020[1], así como las directrices del H. Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020*;* se corrió traslado a las partes en segunda instancia quienes tuvieron la oportunidad procesal de pronunciarse.

Acto seguido, el Tribunal procede a dictar la siguiente DECISIÓN ESCRITURAL,

P R O V I D E N C I A

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto del 14 de mayo de 2021 proferido por el Juzgado

---

[1] *«Artículo 15. Apelación en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitar así:*

1. *Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita.*
   Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

2. *Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito»*

Veintiocho (28) Laboral del Circuito de esta ciudad, por medio del cual resolvió rechazar la demanda.

A N T E C E D E N T E S

1. La señora **LIZETH DANIELA CHICA HERNÁNDEZ,** actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral contra la empresa **CYZA OUTSOURCINGS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN**, pretendiendo se declare la existencia de un contrato de trabajo entre el 1 de febrero de 2012 y el 20 de junio de 2018; que el salario devengado era de $2.000.000; que la terminación del contrato fue sin justa causa; que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP es solidariamente responsable del pago de las acreencias laborales de la demandante.

2. Como consecuencia de lo anterior, reclama se condene a la empresa CYZA OUTSOURCINGS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y solidariamente a la UGPP a pagar la indemnización por terminación del contrato sin justa causa; salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones dejados de cancelar entre el 1 de enero de 2017 y el 20 de junio de 2018; sanción moratoria, daño moral; reconocer derechos conforme a la facultad ultra y extra petita y costas y agencias en derecho.

3. Mediante proveído del 11 de febrero de 2021 (Archivo 05InadmitDda), el Juzgado de conocimiento resolvió INADMITIR la demanda y ordenó la devolución al convocante a juicio para que fuera adecuado el líbelo, atendiendo las siguientes falencias:

   "*1. Debe allegar constancia del envío de la demanda y de sus anexos al correo electrónico de la pasiva, el cual deberá contener acuse de*

recibo, tal y como lo disponen los artículos 6 y 8 del citado Decreto, en concordancia con el inciso final del numeral 3 del artículo 291 del C.G.P. Lo anterior, en aras de evitar futuras nulidades que puedan afectar el trámite normal del proceso, y garantizar el derecho de defensa...”

4. Con posterioridad, el apoderado de la parte demandante, presentó subsanación de la demanda aduciendo cumplir con lo ordenado en auto que antecede y, aportando documentos como pruebas (Archivo 06Subsanació Dda).

5. A través de auto del 14 de mayo de 2021, el Juez de primer grado dispuso el rechazo de la demanda, al considerar que “*no se puede tener acreditado el requisito dispuesto en el artículo 6 del Decreto 806 de 2020; concordante con lo establecido en el artículo 8 ibidem, en coherencia con el inciso final del numeral 3 del artículo 291 del C.G.P.*”

6. La parte activa presentó recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación contra la anterior determinación.

7. Alega el apelante que una vez inadmitida la demanda por parte del juzgado de conocimiento, el 18 de febrero de la presente calenda, procedió a remitir el escrito de subsanación tanto al juzgado como a las convocadas a juicio; que tanto el Código General del Proceso como el Decreto 806 no indica que se debe acreditar el recibido de la notificación, dado que esta etapa procesal es solo para poner en conocimiento de la contraparte la demanda instaurada en su contra; que tampoco se trata de una providencia que deba ser notificada personalmente; que la prueba de recibido de la demanda no puede ser el argumento para rechazar la demanda.
8. Dadas las circunstancias planteadas por el apoderado de la parte actora, el juzgado de conocimiento con auto del 8 de marzo de 2021

concedió el recurso de alzada y ordenó la remisión de las diligencias a esta Colegiatura.

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA:

Surtido el traslado en los términos previstos por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 los extremos procesales se manifestaron indicando, en síntesis:

El apoderado de la parte **demandante**, señala que el Decreto 806 de 2020 no indica que se debe acreditar el recibido o acreditar acuso de recibido de la comunicación remitida al convocado a juicio; que no estamos frente a un trámite que se deba notificar personalmente; que no se deben realizar exigencias no contempladas en la normativa y consecuencia de ello, la subsanación de la demanda fue presentada en forma idónea.

Razón por la cual, procede la Sala a decidir previas las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Precisa la Sala que, en estricta consonancia con el recurso elevado, el problema jurídico por estudiar y resolver, se concreta en determinar si el rechazo del escrito genitor que impartió la Juez de Conocimiento, atendió los parámetros procesales laborales.

Sobre el particular, juzga conveniente recordar que previo al inicio del proceso especial laboral, como el que nos convoca, el control formal que ejerce el juez en la demanda radica en estudiar si el *libelo* demandatorio incoado cumple con los requisitos establecidos en los artículos 25, 25 A y 26 del Estatuto Adjetivo Laboral, sin que le esté dado al funcionario judicial de primera instancia, colocar obstáculos al ciudadano para que

ejerza su derecho al acceso a la administración de Justicia, pues no puede confundirse el control formal que indican los citados artículos, con el excesivo rigorismo, conforme ya lo ha enseñado la H. Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos, en especial, en la sentencia C- 026 de 1993 con ponencia del H. Magistrado Dr. Jaime Sanin Greiffenstein, al indicar:

> «*Como se puede apreciar la intención del constituyente no fue la de eliminar los preceptos legales que establecen formalidades o requerimientos en el trámite de los procesos judiciales, como se ha tratado de insinuar, ni mucho menos que tales mandatos a la luz de la Carta vigente no deba exigir, ni cumplirse fielmente tanto por las autoridades como por los particulares; sino abolir el excesivo rigorismo formal, es decir, la exigencia de múltiples condicionamientos de forma que en nada toca en el asunto sometido a juicio, o con el derecho en sí mismo considerado , y que su omisión no impide que el fallador profiera decisión definiendo a quién corresponde el derecho.*
>
> *Obsérvese también, con los apartes que se transcribieron, que el querer del constituyente se dirige a evitar la expedición de innumerables sentencias de nulidad, invalidez o inhibición, derivadas del hecho de no haberse cumplido con determinadas formalidades, que como se expresó además de ser fácilmente subsanables, en nada incide sobre el derecho debatido, ni son óbice para que el juez dicte sentencia de mérito. De no ser así, cómo se entendería entonces, que en la misma Constitución se exija dentro de los requisitos del "Debido Proceso" la observancia de la "plenitud de las formas propias de cada juicio*».

De suerte que, tal intervención por el operador de justicia debe implicar un estudio serio del *libelo,* donde determine con precisión cuáles serán las aspectos a ser corregidos o modificados por el profesional del derecho de la parte accionante, supuestos que deben ser enunciados en el auto que inadmita la demanda, permitiendo a la parte objeto de la orden efectuar en el término de 5 días las modificaciones a lugar, conforme al artículo 28 del CST al prever *«antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 de este código, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale»*

Descendiendo al estudio del *sub judice,* y revisado el escrito subsanatorio elevado por el apoderado judicial de la parte accionante,

constata esta Sala de Decisión el acatamiento a los pedimentos señalados por el Juzgado de primera instancia en auto del 11 de febrero de 2021.

Sobre el particular, y en lo que atañe al motivo de rechazo, se tiene que, en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, no se estableció el envío de la demanda previo o en forma coetánea a la presentación de la demanda.

Con la expedición del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, se implementó el uso de las tecnologías, con el fin agilizar los procesos judiciales durante la emergencia sanitaria, ocasionada por la Pandemia del Covid-19.

Así las cosas, con la normativa señalada, se modificó en forma parcial los requisitos para la admisibilidad de un trámite litigioso, ya que en el artículo 6, se dispuso;

> *"Articulo 6. Demanda. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.*
>
> *Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.*
>
> *De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.*
>
> *En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado,* ***el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación****. El secretario o*

el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado." (Resaltado de la Sala).

La H. Corte Constitucional ejerció control de constitucional frente al Decreto 806, y con sentencia C-420 del 24 de septiembre de 2020, con Ponencia del Doctor, Richard S. Ramírez Grisales se declaró exequible en forma condicionada el artículo 6°, y objeto de estudio en este estadio procesal, en el *"entendido de que en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión".*

Al considerar entre sus motivaciones que constituía una "…*barrera de acceso a la administración de justicia en cuanto es una respuesta desproporcionada a los eventos en que el demandante no conoce el canal digital de notificación de los testigos, peritos o terceros que deban ser convocados al proceso por cuanto impone una sanción que afecta la existencia misma del proceso, pese a que la información requerida incide únicamente en una parte de todo el trámite procesal y su ausencia no impide la adopción de una decisión de fondo que resuelva el conflicto.…*"

Ahora bien, se tiene en el sub examine que la demandante, a través de su apoderado, procedieron a remitir al correo electrónico de la empresa convocada a juicio y de la UGPP, la demanda y el escrito de subsanación de la demanda, conforme a la documental acopiada a folio 9 del archivo 06 del expediente digital.

Así las cosas, si revisamos en forma minuciosa lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 806, este indica en forma literal que "*el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados*", sin que se indique allí que debe existir un acuse de recibido por parte de los demandados.

Lo anterior obedece a que, la remisión de la demanda opera únicamente para informar a los accionados sobre la instauración de un proceso, pero no es con el fin de cumplir o entender surtida una notificación.

Luego entonces, pretender que la parte actora acredite o allegue un acuso de recibido respecto al envío de la comunicación de la demanda realizada cuando apenas se está instaurando el litigio y no se ha admitido el mismo, resulta un exceso de rigor.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta, que los correos electrónicos desde donde se remiten estas comunicaciones previas a la emisión del auto admisorio de la demanda, tienden a ser personales y no correos certificados o institucionales, por lo tanto, es muy difícil que el demandante allegue una constancia u acuse de recibido.

Aunado a lo expuesto, la norma también señala, que en caso de no conocerse la dirección electrónica de un demandado, se puede remitir en forma física la demanda y sus anexos, pero en forma alguna se indica que, debe allegarse la constancia de recibido, máxime cuando, es conocido, que los enunciados documentos, no se expiden en forma inmediata, y por tanto, realizar la gestión de envío y expedición la certificación por parte de la empresa de correos certificados pueden llegar a superar el término de subsanación, el cual, es perentorio.

Es por ello, que la norma también previó que, una vez admitida la demanda, se efectuara la gestión de notificación a la misma dirección de correo electrónico suministrada en la demanda y a la cual se remitió la comunicación respecto a la existencia del trámite litigioso, con el fin de surtir ahora sí, la notificación en debida forma y consecuencia de ello, acreditarse en el trámite la constancia de recibido en forma correcta al convocado.

Debe recordarse, que el control que ejerce el Juez al momento de calificar la demanda apunta al saneamiento del proceso desde su génesis en procura de un buen desarrollo de todas y cada una de las etapas procésales, siempre ajustando su proceder a las principios de legalidad y debido proceso, por lo que debe tener presente las causales de inadmisión contempladas por la ley y señalarlas taxativamente a efectos de que la parte concurra a sanear los defectos encontrados, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia.

En claro lo precedente, es patente que el fallador de primera instancia inadmitiera la demanda radicada por el accionante, al constatar que no se satisfacían todos los requisitos legales para proferir el correspondiente auto admisorio de la demanda, sin embargo, al haberse presentado la respectiva subsanación en forma idónea, no se podía rechazar la misma, dado que la parte actora se encontraba legalmente facultada para reformar su demanda en esta etapa procesal y por ende aportar documentos, que en su oportunidad consideró pertinentes a la hora de resolver la controversia planteada.

Por lo que dimana en la revocatoria del proveído de primer grado y en su lugar se ordenará al juez de conocimiento que profiera el correspondiente auto admisorio de la demanda.

Sin lugar a costas, dado el resultado de la alzada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,**

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Veintiocho (28) Laboral del Circuito de Bogotá el 14 de mayo de 2021, dentro del proceso ordinario laboral seguido por **LIZETH DANIELA CHICA HERNÁNDEZ** CONTRA **CYZA OUTSOURCINGS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN**, y en su lugar **ORDENAR** que se profiera el correspondiente auto admisorio de la demanda, de acuerdo a los argumentos esgrimidos en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Sin costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

LUÍS ALFREDO BARÓN CORREDOR

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

AUDIENCIA PÚBLICA ESCRITURAL EN EL PROCESO EJECUTIVO LABORAL DE **SIXTA TULIA FLÓREZ ESQUIVEL** CONTRA **NUEVA SAN MARCOS LTDA.** (Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020).

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Magistrado sustanciador la declaró abierta en asocio de los H. Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, en atención a los parámetros dispuestos por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020[1], así como las directrices del H. Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020*;* se corrió traslado a las partes en segunda instancia quienes tuvieron la oportunidad procesal de pronunciarse.

Acto seguido, el Tribunal procede a dictar la siguiente DECISIÓN ESCRITURAL,

---

[1] *«Artículo 15. Apelación en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitar así:*

1. *Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita.*

   Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

2. *Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito»*

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

P R O V I D E N C I A

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante SIXTA TULIA FLOREZ ESQUIVEL, contra el auto del 7 de mayo de 2021 proferido por el Juzgado Primero (1º) Laboral del Circuito de esta ciudad, por medio del cual accedió parcialmente a la solicitud de medidas cautelares formulada por la activa.

A N T E C E D E N T E S

1. El 23 de agosto de 2011 el A Quo libró mandamiento de pago en favor de SIXTA TULIA FLÓREZ y en contra de NUEVA SAN MARCOS LTDA. hoy S.A.S. en Liquidación, por las sumas en que fue condenada la encargada mediante providencia del 13 de junio de 2008 (fls. 132 a 135).

2. Mediante memoriales radicados el 29 de junio de 2021, la ejecutante solicitó decretar el embargo y el posterior secuestro de los inmuebles identificados con el número de matrícula inmobiliaria 50C187324 y 50C18325 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Centro de Bogotá; igualmente, disponer el embargo y retención de los dineros que la demandada tenga o llegare a tener en los Bancos Popular, de Bogotá, Corbanca, Bancolombia, GNB Sudameris S.A., BBVA, Occidente, Caja Social, Agrario de Colombia, Scotiabank Colpatria, Bancoomeva, Pichincha y AV Villas. De manera subsidiaria, solicitó el levantamiento del velo societario, con el objeto de que sean los socios quienes se hagan responsables de las acreencias laborales, por virtud de la solidaridad, e igualmente, se requiera a la Cámara de Comercio, con el fin que informe de manera detallada desde la fecha de creación de la ejecutada a la actualidad, cuántas veces ha realizado cambios de razón social, cuándo se liquidó y en qué lugar se llevó a cabo dicho proceso, y

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

finalmente, se requiera a la oficina de catastro, para que proceda a aclarar cuáles bienes son de propiedad de la ejecutada, teniendo en cuenta que las direcciones de los inmuebles anteriormente referenciados, son las mismas que se referencian en el certificado de existencia y representación legal de la convocada y de la sociedad Inversiones Colombo San Marcos Ltda.

3. Mediante auto datado 7 de mayo de 2021, el Juzgado de Conocimiento negó la medida de embargo sobre los inmuebles referidos por la parte ejecutante, por considerar que no son de propiedad de la ejecutada, sino de la sociedad denominada Inversiones Carlos Rovida y CIA S en C. De otro lado, precisó que es procedente decretar el embargo y retención de los dineros que la parte ejecutada posea o llegue a poseer en los bancos sobre los cuales no recayó la medida decretada con anterioridad, esto es, Banco Corbanca, Scotiabank Colpatria S.A., Bancoomeva y Banco Pichincha. Sobre el levantamiento del velo societario, manifestó el *a quo* que no es procedente, dado que conforme al artículo *"34"* del CST la responsabilidad de los socios de la sociedad limitada sobre las deudas u obligaciones de la sociedad, no va más allá del monto de sus aportes. Concluye indicando que no es procedente requerir a la Cámara de Comercio y a la Oficina de Catastro, en razón a que la información solicitada no requiere orden de autoridad judicial para su expedición.

4. A su turno, **la parte ejecutante impetró recurso de apelación** aduciendo como motivos de disidencia que, la sociedad Inversiones Carlos Rovida y CIA en C., bajo la denominación de inversiones Colombo San Marcos Limitada, cuenta con el mismo domicilio de la aquí ejecutada, que corresponde a la calle 40 N° 8-86, a más que de los certificados de existencia y representación legal se constata que las empresas las componen

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

las mismas personas, a las cuales no se les ha hecho cambio de razón social, por manera que los socios a través de la creación de diferentes empresas han venido defraudando al Sistema con el objeto de evadir responsabilidades. Por tanto, refiere que en virtud del artículo 42 de la Ley 1258 de 2008, cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y sus administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y pos los perjuicios causados. Agrega que si bien los socios responden hasta el monto de sus aportes, existe una excepción establecida en el artículo 372 del Código de Comercio, de suerte que a estos se les aplica el artículo 36 del CST, en el sentido que responden solidariamente por las obligaciones que emanen de los contratos de trabajo que la sociedad de responsabilidad Ltda. haya celebrado, de manera que en el *examine*, los socios de la ejecutada están llamados a responder por sus acreencias laborales al realizar maniobras fraudulentas, en tanto cambian de razón social, manteniendo el mismo domicilio, e intercambian el nombre de los socios, quienes son los padres e hijos de la misma familia Rovida Iannini, ello con la finalidad de crear confusión al Despacho y evitar que se actúe conforme a derecho. Refiere que lo anterior, se puede constatar en el interrogatorio de los trabajadores y representantes de la compañía, recaudados en el incidente de desembargo, pues estos aceptan que las empresas están conformadas por las mismas personas y tienen el mismo objeto social, sin embargo, convenientemente refieren que los enseres encontrados en la diligencia de secuestro pertenecen a otra sociedad. Manifiesta que la solicitud de requerir a la Cámara de Comercio y a la Oficina de Catastro, si es procedente, como quiera que las partes pueden formularle solicitudes probatorias al señor juez conforme al artículo 173 del CGP, acotando que la

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

documentación requerida no va a ser concedida por medio de derecho de petición, pues los documentos públicos que se requieren para demostrar el fraude cometido y el error al que se hizo incurrir al Tribunal cuando levantó las medidas cautelares decretadas, gozan de una reserva legal.

5. El *A-quo* en auto del 9 de julio de 2021[2], ordenó remitir las diligencias a esta Colegiatura.

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA:

Surtido el traslado en los términos previstos por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 los extremos procesales se manifestaron indicando, en síntesis:

Parte demandante: Este extremo procesal indica que según se evidencia en los certificados de libertad y tradición de los inmuebles se demuestra ante que las direcciones todas coinciden, así se realicen cambios de razón social, por manera que siempre ha existido la misma sociedad con los mismos dueños, como así lo manifestó la señora BÁRBARA ELISA ROVIDA DE COCCIA en su testimonio rendido en la diligencia del incidente de desembargo llevada a cabo el día 6 de marzo de 2018. Refiere que la sociedad ha permanecido de generación en generación, sin embargo, ello no implica que con los cambios que hagan a la razón social y direcciones en el certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio, pueda permitírsele que se evadan las obligaciones con sus empleados, como así se pretende. Aduce que en todos los cambios realizados a la cámara de comercio siempre se consigna el nombre de SAN MARCOS, lo que demuestra que los equipos secuestrados si pertenecen a la sociedad.

[2] Folio 653.

Razón por la cual, procede la Sala a decidir previas las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

PROBLEMA JURÍDICO

Precisa la Sala que, en estricta consonancia con el recurso elevado, el problema jurídico por estudiar y resolver, se concreta en determinar sí, es procedente decretar las medidas cautelares propuestas.

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS

El auto que resuelve sobre medidas cautelares, se encuentra entre los expresamente enlistados como susceptibles del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, y en razón de este presupuesto procesal se entrará al estudio de la alzada.

De cara a resolver el asunto sometido a escrutinio de esta Colegiatura, preciso resulta indicar que la finalidad de las medidas cautelares instituidas en el Libro IV del Código General del Proceso es garantizar la satisfacción de la obligación materia de ejecución, ante el incumplimiento de la parte demandada, pese a lo ordenado en el mandamiento de pago.

En el *sub lite*, en lo que interesa a la alzada, se constata que el *a quo* negó la solicitud de embargo y secuestro de los bienes enlistados por la parte ejecutante, al referir que no eran de propiedad de la ejecutada, e igualmente se abstuvo de acceder al levantamiento del velo societario de la llamada a la acción ejecutiva, por considerar que ello no es procedente en virtud del artículo 36 del CST y del artículo 353 del

Código de Comercio, dado que la responsabilidad de los socios de la sociedad limitada es hasta el límite de sus aportes; finalmente, no accedió a requerir a la Cámara de Comercio y a la Oficina de Catastro en razón a que la información requerida no necesita de orden judicial, debiendo la activa acreditar su trámite.

Decisión que no comparte la parte ejecutante, por considerar -según entiende la Sala de Decisión de su confuso recurso de apelación- que los socios de la ejecutada, son responsables de las obligaciones aquí perseguidas, por virtud de distintos tipos de responsabilidad, como lo son las establecidas en el artículo 36 del CST y en el artículo 42 de la Ley 1258 de 2008, dado que se trata de las mismas personas que en desarrollo de un mismo objeto social, con los mismos trabajadores y domicilio, se han dedicado a cambiar de razón social a la empresa, para evadir sus responsabilidades laborales, que en últimas constituye un fraude a la ley, el cual da paso a las medidas cautelares propuestas.

Sobre el punto, ha de referir la Sala que tal y como lo resolvió el *a quo*, en el caso que ocupa la atención, no es procedente decretar las medidas cautelares propuestas por la ejecutada, y ello porque, la responsabilidad solidaria que se pretende derivar del artículo 36 del CST y la responsabilidad que permite desestimar la personalidad jurídica de la sociedad por acciones simplificadas cuando dicha empresa se utilice en perjuicio de terceros o fraude a la ley conforme al artículo 42 de la Ley 1258 de 2008, involucra un debate que es ajeno al proceso ejecutivo, pues para su determinación se requiere de un debate probatorio, que permita constatar si en el *sub judice* concurren los requisitos para su declaración y reconocimiento respecto de los socios, lo cual es propio de un proceso declarativo, que en el presente caso ya tuvo lugar, pues nótese que la obligación aquí ejecutada, tiene como título ejecutivo la sentencia proferida el 13 de junio de 2008 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en el cual se condenó únicamente a la demanda Nueva San Marcos Ltda. hoy S.A.S.,

al pago de prestaciones sociales, indemnización por despido sin justa causa, indemnización moratoria y aportes pensionales, condena que no se hizo extensiva a ningún socio de la convocada (fls. 109 a 116), circunstancia que además implicó que sólo se librara mandamiento de pago en contra de Nueva San Marcos (fls. 132 a 135).

De manera que, diáfano es concluir que no es posible a través de este trámite ejecutivo, ordenar el levantamiento del velo societario para exigir de los socios el pago de las acreencias laborales, como quiera que ello constituye una petición cuya prosperidad está llamada a ser dilucidada en un proceso de naturaleza declarativa. Criterio que igualmente conlleva a concluir la improcedencia de la petición relativa al requerimiento de la Oficina de Instrumentos Públicos y a la Cámara de Comercio, para que informen todo lo relativo a los cambios de razón social de la ejecutada y su liquidación, así como la titularidad de los bienes sobre los cuales se peticiona la medida de embargo y secuestro, como quiera que ello además de ser una solicitud probatoria y no una medida cautelar, tiene por finalidad como así se reconoce en la alzada, establecer el fraude en el presuntamente han incurrido los socios de la ejecutada, como sustento de las responsabilidades que persigue la activa, lo cual carece de visos de prosperidad al no ser del resorte del proceso ejecutivo la definición de tales asuntos, como ya se advirtió.

En este punto, considera la Sala conveniente aclarar que aun cuando en el certificado de existencia y representación legal se indica que la sociedad se haya *"disuelta por vencimiento del término de duración, y en consecuencia se encuentra en estado de liquidación a partir del 2 de febrero de 2015"* (fl. 611), lo cierto es que no existe constancia alguna en las diligencias relativa a que tal proceso se esté surtiendo en los términos dispuestos por los artículos 218 y siguientes del Código de Comercio.

Finalmente, en lo que atañe a la solicitud de embargo y secuestro de los bienes identificados con los números de matrícula inmobiliaria 50C

187324 y 50C-187325, ha de reiterarse lo que ya había advertido el Juzgado de Conocimiento, en cuanto a que la aquí ejecutada Nueva San Marcos Ltda. hoy S.A.S. En Liquidación, identificada con Nit. 830.133.856-1 como da cuenta su certificado de existencia y representación legal (fls. 557 a 600), no es la propietaria de los inmuebles en referencia, pues nótese que según los certificados de tradición de matricula inmobiliaria obrantes a folios 616 a 620, los mismos pertenecen a Inversiones Carlos Rovida y CIA S. en C. Nit 8600741274, con la cual la ejecutada ni siquiera comparte domicilio, dado que el último que se encuentra registrado para la llamada a juicio es la carrera 108 No. 23 F 26 (fl. 610), mientras que domicilio registrado en el caso de Inversiones Carlos Rovida es la Clle 40 No. 8-86 (fl. 650), que si bien también se refiere para la sociedad Inversiones Colombio San Marcos Limitada (fl. 600 y vuelto), ello en nada modifica la titularidad que se ostenta sobre los bienes inmuebles, la cual en todo caso no está llamada a ser desconocida por el juez ni por las partes, dado que el registro de bienes inmuebles es un servicio público y sus asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, conforme al artículo 2° de la Ley 1579 de 2012.

Dimanado en la confirmación del auto opugnado.

COSTAS. Sin costas en la alzada.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el día 7 de mayo de 2021, en el

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

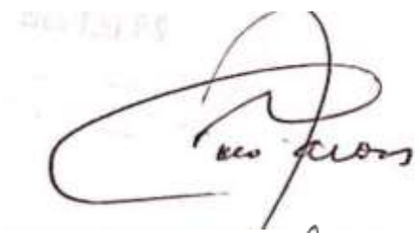
presente proceso ejecutivo laboral, acorde a lo manifestado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin lugar a costas en la instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR JACQUES ALAIN HUGHES RONCO RATEAU CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y LA SOCIEDAD DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A (RAD. 30 2019 00865 01)

Bogotá D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

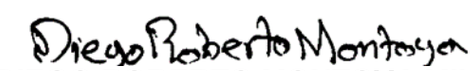
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 30 2019 00865 01

Demandante: JACQUES ALAIN HUGHES RONCO RATEAU

Demandada: COLPENSIONES Y OTRA

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR MANUEL ANIBAL VEGA RIVERA CONTRA MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A, SUCURSAL COLOMBIA, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, INTEGRANTES DEL CONSORCIO MASA ACCIONADA Y ECOPETROL S.A (RAD 11 2017 00094 01)

Bogotá D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 11 2017 00094 01

Demandante: MANUEL ANIBAL VEGA RIVERA

Demandada: ECOPETROL S.A Y OTROS.

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR JOSE SADY SUAVITA ROJAS CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A (RAD 16 2019 00380 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTANSE los recursos de apelación interpuestos por las demandadas PORVENIR S.A, y COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 16 2019 00380 01

Demandante: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ CONTRA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA S.A (RAD 37 2019 00916 01)

Bogotá D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada

De conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término común de cinco (5) días. Surtidos los traslados correspondientes se proferirá decisión por escrito.

Surtidos los traslados correspondientes se proferirá decisión por escrito.

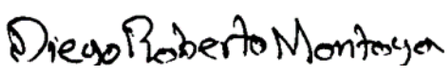
Expediente Nº: 37 2019 00916 01

Demandante: ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ

Demandada: AVIANCA S.A

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.

CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR JOSE MORA SUAREZ CONTRA AGUAS DE BOGOTÁ S.A ESP (RAD. 02 2020 00034 01)

Bogotá D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

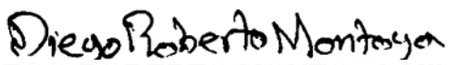
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 02 2020 00034 01

Demandante: JOSE MORA SUAREZ

Demandada: AGUAS DE BOGOTÁ S.A ESP

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR JAIRO FLOREZ GALLO CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES (RAD. 38 2020 00179 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandada COLPENSIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito, por el término común de cinco (5) días.

Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

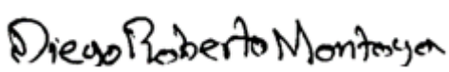
Expediente Nº: 38 2020 00179 01

Demandante: JAIRO FLOREZ GALLO

Demandada: COLPENSIONES

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.

CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR MARIA RODRIGUEZ FORERO CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A (RAD. 26 2019 00823 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTANSE los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la demandada PORVENIR S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 26 2019 00823 01

Demandante: MARIA RODRIGUEZ FORERO

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR MARIA YOSED CARRANZA SOTO CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, COLFONDOS S.A, Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A (RAD 14 2018 00713 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la demandada COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

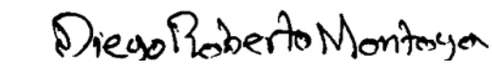
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 14 2018 00713 01

Demandante: MARIA YOSED CARRANZA SOTO

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR PATRICIA GOMEZ GONZALEZ CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, LA SOCIEAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A Y AFP PROTECCIÓN S.A (RAD 24 2019 00766 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTANSE los recursos de apelación interpuestos por las demandadas PORVENIR S.A, PROTECCIÓN S.A y COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

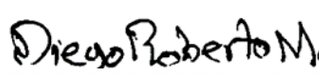
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 24 2019 00766 01

Demandante: PATRICIA GOMEZ GONZALEZ

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR LUIS HERNANDO PERILLA GOMEZ CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES (RAD. 30 2019 00637 02)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte demandante.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito, por el término común de cinco (5) días.

Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº: 30 2019 00637 02

Demandante: LUIS HERNANDO PERILLA GOMEZ

Demandada: COLPENSIONES

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.

CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR SILVIA DEL CARMEN ROBLEDO CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A, EL FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A Y SKANDIA S.A (RAD. 02 2019 00046 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTANSE los recursos de apelación interpuestos por las demandadas PORVENIR S.A, SKANDIA S.A y COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

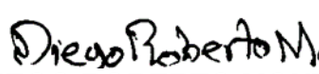
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 02 2019 00046 01

Demandante: SILVIA DEL CARMEN ROBLEDO

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR EDGAR FERNANDO RUIZ CONTENTO CONTRA CARNES FRIAS REICAR S.A.S (RAD. 32 2019 00659 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

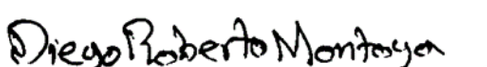
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 32 2019 00659 01

Demandante: EDGAR FERNANDO RUIZ CONTENTO

Demandada: CARNES FRIAS REICAR S.A.S

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR JUANITA MARIANA OSPINA CHICRALA CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A Y SKANDIA S.A (RAD. 32 2019 00127 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTANSE los recursos de apelación interpuestos por las demandadas PORVENIR S.A, SKANDIA S.A y COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 32 2019 00127 01

Demandante: JUANITA MARIANA OSPINA CHICRALA

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR SALVADOR CARREÑO MONSALVE CONTRA LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS – ECOPETROL S.A (27 2019 00086 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

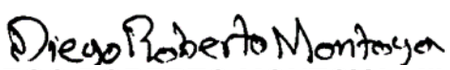
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 27 2019 00086 01

Demandante: SALVADOR CARREÑO MONSALVE

Demandada: ECOPETROL S.A

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR FRANCIA ELENA RICO TABARES CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A (RAD 30 2020 00239 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTANSE los recursos de apelación interpuestos por las demandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 30 2020 00239 01

Demandante: FRANCIA ELENA RICO TABARES

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR GLORIA CECILIA VASQUEZ DE CAICEDO CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES (RAD. 38 2019 00677 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la demandada COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

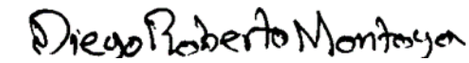
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 38 2019 00677 01

Demandante: GLORIA CECILIA VASQUEZ DE CAICEDO

Demandada: COLPENSIONES

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR PABLO ANDRES VILLEGAS VARON CONTRA LA AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA (RAD. 31 2021 00057 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

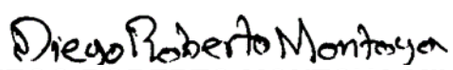
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 31 2021 00057 01

Demandante: PABLO ANDRES VILLEGAS VARON

Demandada: AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR ORLANDO ANTONIO VILLAMIL MEDINA CONTRA COLFONDOS S.A (RAD. 15 2019 00503 01)

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por la demandada COLFONDOS.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, una vez ejecutoriado éste proveído, córrase traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la (s) apelante (s), vencidos los cuales inicia el término para la (s) no recurrente (s).

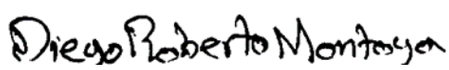
Surtidos los traslados correspondientes se proferirá sentencia escrita.

Expediente Nº 15 2019 00503 01

Demandante: ORLANDO ANTONIO VILLAMIL MEDINA

Demandada: COLFONDOS S.A.

NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA, en los términos del artículo 9 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 y demás normas concordantes.
CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO ORDINARIO LABORAL promovido por MAURICIO HERNANDO BARRERA TALERO contra SURAMERICA COMERCIAL S.A.S. Rad. 11001 31 05 025 2020 00223 01.

En la fecha, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral, previa deliberación al proyecto sometido a su consideración por el Magistrado Sustanciador, procede a dictar la siguiente:

PROVIDENCIA

En los términos y para los fines previstos en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con el Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre de 2020, procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la decisión del Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá proferida el 28 de julio de 2021, por medio de la cual se tuvo por no contestada la demanda.

ANTECEDENTES

El señor **MAURCIO HERNANDO BARRERA TALERO,** a través de apoderado judicial, instauró demanda ordinaria laboral en contra de SURAMERICA COMERCIAL S.A.S., con la finalidad de que se declare que su despido fue injusto e ilegal por haber violado su debido proceso, en consecuencia, se ordene a la accionada a efectuar su reintegro, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social, como si el vínculo laboral no hubiera finalizado. Finalmente, se condene a la accionada al pago de las costas procesales.

Como fundamento de sus pretensiones, señaló en síntesis, que el 27 de mayo de 2019 suscribió contrato de trabajo a término indefinido con SURAMERICA

COMERCIAL S.A.S., para desempeñar el cargo de Subgerente de Tienda en los establecimientos de Dollarcity. Explicó que la relación laboral finalizó el 24 de febrero de 2020 de forma unilateral por parte de la accionada, alegando una justa causa, esto es, el abandono del cargo. Precisó que el 25 de febrero de 2020 fue citado a descargos por lo ocurrido el día 23 de febrero de 2020, diligencia en la que rindió descargos y fue despedido, resaltando que para ese momento ya había sido desvinculado. Señaló que el 23 de febrero de 2020 al salir del establecimiento, le entregó el turno a la señora Yazmin Moreno, quien ocupaba el cargo de Tercera Llave, es decir, que era la encarga de reemplazar al gerente y al subgerente en sus ausencias, aclarando que hizo la entrega del dinero de acuerdo a los lineamientos establecidos, sin que quedara a cargo una persona supervisando, por lo que no es dable concluir que hubo un abandono del cargo (Fls. 2 a 3 y 34 a 38).

CONTESTACION DE LA DEMANDA

La accionada SURAMERICA COMERCIAL S.A.S. contestó la demanda en fecha catorce (14) de julio de 2021, con oposición a todas y cada de las pretensiones, explicando que el 31 de enero de 2020, el demandante solicitó al Gerente de la tienda que el 23 de febrero de 2020 le permitiera tener el turno de apertura, es decir, desde las 6 am hasta las 3 pm con una hora de descanso, para ir al aeropuerto a despedirse de su hija que viajaba hacia España a las 8:00 pm de ese día. Manifestó que la hora de descanso es otorgada en cumplimiento del artículo 167 del CST, empero, el demandante argumentó que renunció a ese descanso para salir a las 2 pm, sin que ello sea posible por tratarse de un derecho irrenunciable. Agregó que el 23 de junio de 2020, el demandante no cumplió con sus obligaciones al momento de salir, pues ignoró todos los procedimientos dispuestos para la entrega del turno de trabajo de Subgerente de tienda. Indicó que el demandante asistió a la diligencia de descargos el 24 de febrero de 2020 a las 2 pm, luego de lo cual, fue despedido teniendo en cuenta que había incurrido en algunas faltas graves, de acuerdo al Reglamento Interno del Trabajo, al contrato laboral y al CST. Formuló como excepciones de mérito las de «inexistencia de las obligaciones que se reclaman - cobro de lo no debido- falta de título y causa en el demandante», «buena fe de mi representada», «mala fe del demandante», «pago», «compensación» y «artículo 282 del Código General del Proceso» (Fls. 54 a 75).

DEL AUTO APELADO

El Juez de Primer grado mediante auto del veintiocho (28) de julio de 2021, dispuso tener por no contestada la demanda, por cuanto el término para allegar el escrito de contestación feneció el trece (13) de julio de 2021 y aquel sólo fue enviado hasta el catorce (14) de julio de 2021 (Fl. 91).

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la parte demandada apeló la decisión, argumentando que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, la notificación personal se entiende surtida una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje, por lo que los términos empiezan a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Explicó que el término "transcurrir" implica que deben pasar por completo los dos días hábiles siguientes, para que tenga lugar la notificación personal de la demanda. Indicó que el escrito de la demanda, la subsanación, los anexos y el auto que admitió la demanda fueron remitidos por correo electrónico el 24 de junio de 2021, es decir que la notificación se entiende surtida una vez transcurridos dos días hábiles, de tal forma que la notificación tuvo lugar el 29 de junio de 2021 y los términos comenzaron a correr a partir del día siguiente, esto es el 30 de junio de 2021, concluyendo que el término para contestar la demanda vencía el 14 de julio de 2021, día en el que fue enviado el escrito de contestación (Fls. 94 a 96).

SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el término del traslado previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 80 de 2020, en concordancia con el artículo 82 del CPT y SS, el apoderado judicial de la accionada presentó alegatos de conclusión, en similares términos a los expuestos en el recurso de alzada, solicitando se revoque la decisión y se proceda con el estudio de la contestación, a fin de tenerla por contestada. La parte actora guardó silencio.

PROBLEMA JURÍDICO

Reunidos los presupuestos procesales y no encontrando causal de nulidad que invalide lo actuado, corresponde a ésta Colegiatura determinar si la decisión adoptada por el A quo de tener por no contestada la demanda es ajustada a derecho.

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 65 del CPT y de la SS, modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, el proveído impugnado es susceptible del recurso de apelación, como quiera que se tuvo por no contestada la demanda.

A fin de resolver el problema jurídico planteado, se debe indicar que el artículo 74 del CPT y de la SS establece lo siguiente:

> *"Artículo 74. Traslado de la demanda. Admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso,* ***por un término común de diez (10) días****, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados."* (Negrillas y subrayas fuera de texto)

De otro lado, el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, modificó transitoriamente lo dispuesto en las normas procesales en cuanto a la notificación personal, estableciendo lo siguiente:

> *"Artículo 8. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*
>
> *El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*
>
> ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.***

Para los fines de esta norma se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.

Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.

Parágrafo 2. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales." (Negrilla y subrayas de la Sala).

Aunado a lo anterior, se debe recordar que para la contabilización de términos procesales se deben seguir las reglas establecidas en el artículo 118 del CGP, norma aplicable por remisión expresa del artículo 145 del CPT y de la SS, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 118. Cómputo de Términos. El término que se conceda en audiencia a quienes estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.

El término que se conceda fuera de audiencia correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.

Si el término fuere común a varias partes comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación a todas.

(…) Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

> *En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado."* (Subrayas y negrilla fuera de texto)

Teniendo en cuenta las normas citadas, considera la Corporación que la notificación personal se da por satisfecha una vez finalizados los dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje, por lo que el término comienza a correr a partir del siguiente día hábil, es decir, desde el tercer día contado desde el envío del mensaje.

En ese orden, en tratándose de la notificación de la demanda, el término de diez (10) días hábiles para dar contestación, inicia a partir del tercer día hábil siguiente desde que se envió el mensaje, pues no puede aceptarse que el tercer día corresponda al de la notificación de manera independiente y sin que corran términos, en tanto, la norma no lo consagró así, contrario sensu, de forma clara dispuso que la parte se encontrará notificada al culminar los dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje, sin establecer un término adicional.

De este modo, a folio 41 del plenario, aparece correo electrónico del 24 de junio de 2021, mediante el cual la parte actora envió a la accionada el escrito demandatorio, los anexos y el auto admisorio, mensaje que fue recibido en la misma fecha por parte de la demandada, tal como lo aceptó en el recurso de alzada. En ese orden, la notificación se entendió surtida una vez finalizados los dos (2) días hábiles siguientes, es decir, el veintiocho (28) de junio de 2021 a las 5:00 P.M., de forma tal, que el veintinueve (29) de junio de la misma calenda comenzó a correr el término de diez (10) días hábiles para dar contestación a la demanda, resultando que la parte tuvo hasta el trece (13) de julio de 2021 para allegar el escrito de contestación, el cual no fue enviado sino hasta el catorce (14) de julio del mismo año, siendo extemporáneo a todas luces (fl. 53).

Por lo anterior, para esta Corporación es claro, que la contestación de la demanda fue presentada de manera extemporánea tal como lo decidió el Juez de primera instancia, por lo cual se confirmará la decisión de primer grado y se ordenará continuar con el trámite procesal pertinente.

Así se decidirá, sin costas en esta instancia por considerar que no se causaron.

DECISIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

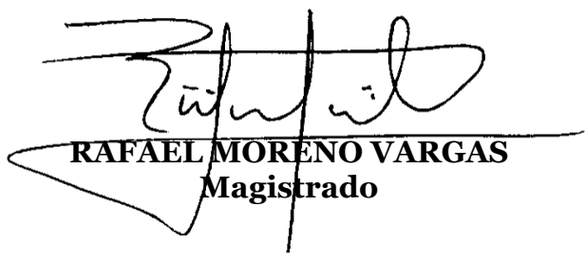
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 28 de julio de 2021 proferido por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la providencia.

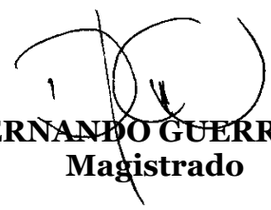
SEGUNDO: ORDENAR la devolución del presente proceso al juzgado de origen para que le imparta el trámite procesal que corresponda.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

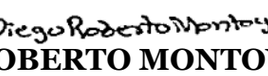
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO ORDINARIO LABORAL de JAVIER GERARDO ANAYA MORANTES contra COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. Rad. 11001 31 05 031 2021 00148 01.

En la fecha, con la finalidad de resolver el recurso de apelación formulado, la Sala Cuarta de Decisión Laboral, previa deliberación al proyecto sometido a su consideración por el Magistrado Sustanciador dicta la siguiente

PROVIDENCIA

En los términos y para los fines previstos en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con el Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre de 2020, procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante contra la decisión del Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá proferida el 02 de agosto de 2021.

ANTECEDENTES

El señor **JAVIER GERARDO ANAYA MORANTES,** promovió demanda ordinaria laboral con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 10 de noviembre de 2008 hasta el 23 de marzo de 2018, cuyo último salario fue de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS ($6.878.026); que las cláusulas primera y segunda del OTROSI firmado el 01 de junio de 2011 son ineficaces. Asimismo, que se declare que el contrato de trabajo finalizó sin justa causa, causando perjuicios morales al demandante.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la demandada al pago de indemnización por despido sin justa causa, intereses moratorios y perjuicios

morales; y, de manera subsidiaria se condene al pago de indexación por las sumas que resulten en favor del demandante.

Como fundamento fáctico a sus pretensiones, en síntesis, manifestó que empezó a laborar para la empresa el 10 de noviembre de 2008, mediante contrato de trabajo a término indefinido, el cual tuvo 3 OTROSI, suscritos en las siguientes fechas: 01 de junio de 2011, 01 de agosto de 2013 y 01 de marzo de 2015. Que el último cargo desempeñado fue el de Coordinador de Servicio Personalizado al Cliente, cumpliendo una jornada de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., con un último salario promedio de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS ($6.878.026).

Adujo que el 26 de febrero de 2018, la Señora Nadia Pérez Vásquez lo citó a diligencia de descargos por presuntos incumplimientos a políticas, procesos, directrices y procedimientos de la compañía, y al contrato de trabajo, específicamente por el incumplimiento de las metas establecidas en los meses de noviembre y diciembre de 2017, y enero de 2018; que posteriormente el 23 de marzo de 2018, la demandada dio por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral e injustificada, in tener en cuenta que en los meses de noviembre y diciembre de 2017, y enero de 2018, se realizaron mejoras locativas en la oficina donde prestaba sus servicios, y que además, se encontraban 14 consultores nuevos en etapa de crecimiento práctico. Agregó que a la finalización del contrato de trabajo, la demandada no canceló la indemnización por despido sin justa causa y omitió realizar el proceso de concertación de las faltas estipuladas como graves en el OTROSI del 1 de junio de 2011. Que la interrupción abrupta y sin justa causa, le ocasionó perjuicios morales (Expediente digital: 001. DEMANDA_19_3_2021 16_55_46, 027.2021-148 Contestación reforma demanda).

CONTESTACION DE LA DEMANDA

La demandada **COMUNICACIÓN CELULAR S.A.**, a través de apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, con excepción de la que solicitó declarar la existencia del contrato de trabajo. Para el efecto, aclaró que el salario del demandante era de CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($5.316.000), que las cláusulas del OTROSI suscrito el 01 de junio de 2011, son plenamente eficaces y que el contrato de trabajo finalizó por justa causa como consecuencia de los graves incumplimientos en que incurrió el actor, tal como lo describió en la carta de despido del 23 de marzo de 2018. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de las obligaciones, inexistencia de las obligaciones

indemnizatorias, justa causa para terminar el contrato de trabajo, cobro de lo no debido, compensación, pago», «buena fe» y la de «prescripción» (Expediente digital: 018. 2021-148 contestacion demanda, 027.2021-148 Contestación reforma demanda).

DECISIÓN DE PRIMER GRADO

Mediante proveído del 02 de agosto de 2021, el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, denegó la solicitud de las pruebas llamadas «documentales a solicitar» y «exhibición de documentos», y señaló que únicamente serían decretadas aquellas que versaran sobre los periodos de noviembre y diciembre de 2017, y enero de 2018.

Para arribar a la anterior decisión, el Despacho consideró que la mayoría de las pruebas solicitadas que se encuentran en poder de la demandada correspondían a certificaciones, y que de acuerdo con el criterio de pertinencia y conducencia de las pruebas, las mismas debían indicarse en los hechos de la demanda, no obstante, una vez verificados los hechos, nada se dijo de las pruebas solicitadas, como por ejemplo respecto de la «socialización de faltas graves estipuladas conforme a la sentencia C934 de 2004», entre otros.

Por lo anterior, consideró que la prueba no era pertinente ya que el debate probatorio se centró en hechos planteados en la demanda y en su contestación, y no en todos los hechos que se le ocurran al apoderado. Asimismo, lo indicó para el acápite denominado «exhibición de documentos».

RECURSO DE APELACIÓN

Frente a la negativa del despacho de decretar las pruebas antes mencionadas, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación donde en síntesis manifestó que los documentos sí son pertinentes por cuanto mediante los mismos, lo que se pretende es demostrar que el demandante cumplió con todas sus obligaciones y que, además, de conformidad con la jurisprudencia, las faltas graves deben ser socializadas, pero en el presente caso no lo fue. Además, adujo que no se conoce como fueron las mediciones y los incumplimientos por las otras desvinculaciones que se presentaron para la época por la misma causa.

Adicional a lo anterior, señaló que la Juez debía decretar las pruebas por cuanto en esta oportunidad su estudio fue ligero, pero que posteriormente al valorarlas antes de dictar

sentencia podría determinar cuáles eran conducentes y cuales aportaban valor probatorio, sin necesidad de desestimarlas desde ahora.

SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el término de traslado previsto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020, en concordancia con el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el apoderado de la parte demandante presentó alegatos de conclusión en similares términos a los expuestos en el recurso de apelación, solicitando se revoque la decisión y se decreten las pruebas solicitadas. La parte demandada COMUNICACIÓN CELULAR S.A., no presentó alegatos y guardó silencio.

PROBLEMA JURÍDICO

Reunidos los presupuestos procesales y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, corresponde a esta Corporación determinar si la decisión del A quo se ajusta a Derecho, o contrario sensu hay lugar a decretar las pruebas solicitadas por la parte demandante denominadas «documentales a solicitar» y «exhibición de documentos».

CONSIDERACIONES

El auto apelado es susceptible del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por cuanto con el mismo se negó el decreto de una prueba.

Para resolver la controversia, sea lo primero indicar que de conformidad con el escrito de demanda y su reforma, la parte actora solicita se decreten las pruebas que denominó «documentales a solicitar» y «exhibición de documentos», pruebas que de su lectura se puede extraer que lo pretendido en ambos acápites corresponde a las mismas pruebas, por lo tanto esta sala de decisión considera procedente realizar un estudio de las documentales solicitadas, partiendo desde la prueba “exhibición de documentos”, contenida en el artículo 54 B del CPT y de la SS, y los artículos 265 y 266 del CGP, aplicables por analogía al procedimiento laboral; lo anterior, como quiera que del análisis de la solicitud se pudo determinar que indistintamente de la denominación que el apoderado del actor le brindó a las pruebas, ambas persiguen lo mismo, esto es, la exhibición de documentos.

Es así como se observa que el apoderado de la parte actora solicitó decretar las siguientes pruebas documentales a fin de que la parte accionada las allegue, de conformidad:

B. DOCUMENTALES A SOLICITAR

*Le solicito de manera muy respetuosa a **COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A** allegar con la contestación de la demanda todos los documentos que relacionaré a continuación, de no adjuntarlos le impetro a Su Señoría imponer la sanción consagrada en el artículo 31 del C.P.L. y S.S. como es dar por no contestada la demanda.*
Estos documentos son de naturaleza privada y reposan en los archivos de la empresa y con ellos se demostrarán los hechos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo tercero de la presente demanda, así como, que mi mandante durante toda la relación contractual con la demandada, presentó una conducta intachable, proclive al cumplimiento de las metas y obligaciones, mostrando su responsabilidad y compromiso con los compromisos adquiridos, no recibió llamados de atención, y su despido no estuvo motivado por faltar a sus obligaciones laborales.

LOS DOCUMENTOS SON:

1. Certificado en el que se especifiquen las funciones y las actividades propias del último cargo que desempeñó el señor Javier Gerardo Anaya Morantes para Comunicación Celular S.A Comcel S.A.

2. Certificación de las sumas devengadas por el señor Javier Gerardo Anaya Morantes durante los últimos 12 meses anteriores a la finalización de su vínculo laboral, comprendido entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018, por concepto de salarios, bonificaciones, comisiones, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones.

3. Certificación de los topes de ventas o metas impuestas al señor Javier Gerardo Anaya Morantes entre el 23 de marzo de 2017 y el 23 de marzo de 2018, los últimos 12 meses anteriores a la finalización de su vínculo laboral, señalando los porcentajes de cumplimiento mes a mes y el alcance de la meta exigida.

4. Copia íntegra y legible de los siguientes documentos, manual de funciones del cargo que desempeñó mi mandante, prohibiciones, capacitaciones, proyección de ventas mes a mes y análisis de ventas cumplidas mes a mes entre el 23 de marzo de 2017 y el 23 de marzo de 2018.

5. Certificación en la que conste el lugar donde el señor Javier Gerardo Anaya Morantes desempeñó sus funciones, indicando bajo dirección de quien cumplía dichas funciones y el horario en el que las desempeñaba.

6. Copia íntegra y legible de los soportes de pago realizados mes a mes, cheques y transferencias electrónicas realizadas a Javier Gerardo Anaya Morantes, entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018.

7. Certificación de las metas impuestas y su porcentaje de cumplimiento, en todas las oficinas principales de cada ciudad a nivel nacional donde COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A tenga presencia, entre el 23 de marzo de 2017 y el 23 de marzo de 2018.

8. Certificación en la que conste la organización de toda la planta de Coordinadores de servicio personalizado al cliente, específicamente las metas que les fueron señaladas, los periodos de imposición de las metas, señalando el porcentaje de cumplimiento de las mismas por cada coordinador entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores, el cargo, antigüedad y los porcentajes de cumplimiento de metas.

9. Certificación en la que conste la organización de toda la planta de vendedores de la oficina en la que laboraba el señor Javier Gerardo Anaya Morantes, específicamente en las metas que les fueron señaladas, los periodos de imposición de las metas, señalando el porcentaje de cumplimiento de las mismas por cada vendedor entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores, el cargo, antigüedad y los porcentajes de cumplimiento de metas.

10. Certificación en la que conste, para la época en que mi poderdante prestó sus servicios personales, es decir, entre el mes de noviembre de 2008, al 23 de marzo de 2018, cuantos coordinadores de ventas y servicio al cliente prestaban sus servicios por contrato laboral para COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A, relacionando quienes fueron despedidos y las razones que motivaron esta decisión. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores, el cargo, antigüedad y los porcentajes de cumplimiento de metas.

11. Copia del estudio previo, realizado por COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A para la exigencia de metas y de objetivos de venta a alcanzar en la oferta de los servicios ofrecidos por la empresa.

12. De acuerdo al análisis y el estudio realizado para fijar la metas y objetivos de ventas, señalar de qué dependía lograr el 100% y el porcentaje mínimo de esas metas entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018, especificando los procesos y las tareas a realizar con el fin de lograr los porcentajes exigidos.

13. De acuerdo a los estudios realizados para la imposición de las metas exigidas, emitir certificación o señalar que factores se previeron que pudieran afectar el cumplimiento de estos objetivos.

14. De acuerdo a los estudios realizados para la imposición de las metas exigidas, certificar o señalar si su cumplimiento en los porcentajes señalados,

dependía 100% de las actividades y responsabilidades emanadas del cargo que desempeñaba el señor Javier Gerardo Anaya Morantes.

15. Certificación en la que conste, a cuantos Coordinadores de servicio personalizado al cliente fueron despedidos por cumplimiento de metas entre enero de 2016 y diciembre de 2018.

16. Certificación de si para los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018, se realizaron reparaciones o mejoras locativas en la oficina donde el señor Javier Gerardo Anaya Morantes prestó sus servicios en la ciudad de Cúcuta.

17. Certificación de si las metas logradas por el señor Javier Gerardo Anaya Morantes en los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018, fueron superiores en comparación con los mismos meses del año inmediatamente anterior, señalando cual era el porcentaje máximo y mínimo de ese año.

18. Certificado en el que se especifique las vinculaciones laborales, directas o indirectas, a la oficina de COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A donde laboró el señor Javier Gerardo Anaya Morantes, entre marzo de 2016 y marzo de 2018. Especificando los cargos que entraron a ocupar los nuevos trabajadores. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores y el cargo.

19. Copia íntegra y legible reglamento interno de trabajo.

20. Certificación del número de trabajadores despedidos entre el 23 de marzo de 2017 y el 23 de marzo de 2018 por incumplimiento de metas. Si por reserva de habeas data no pueden ser informados los nombres de los trabajadores, solo mencionar el número de los despedidos, las metas que tenían establecidas y los porcentajes de cumplimiento.

21. Copia del expediente disciplinario del señor Javier Gerardo Anaya, y de la hoja de vida.

22. Certificación del porcentaje de las metas asignadas e impuestas durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 a mi poderdante, y el cumplimiento que tuvo de las mismas durante esos periodos.

23. Certificación del porcentaje de las metas asignadas e impuestas durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 a todos los coordinadores de servicio personalizado al cliente, y los porcentajes de cumplimiento de cada uno. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores, antigüedad y los porcentajes de cumplimiento de metas.

24. Certificación de cuantas oficinas principales como en la que trabajaba el señor Javier Gerardo Anaya Morantes había en Colombia a marzo de 2018.

25. Copia o certificación de la estructura de los puestos de trabajo existentes en la oficina de COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A donde laboró mi poderdante, especificando el orden jerárquico de cada cargo y sus funciones.

26. Certificación de las metas impuestas a los trabajadores directos o indirectos vinculados entre marzo de 2016 y marzo de 2018, especificando el porcentaje de cumplimiento de cada uno durante noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de 2018.

27. Copia del acta de socialización de las faltas graves estipuladas, conforme a la sentencia C-934 de 2004.

28. Copia de evaluación o seguimiento de rendimiento laboral del señor Javier Gerardo Anaya Morantes durante los años que estuvo vinculado a COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.

C. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:

Le solicito a Su Señoría señalar fecha y hora para que la demandada COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A, con base en el artículo 265 del C.G.P aplicables por remisión del 145 del CPTSS exhiba y allegue copia de los documentos requeridos en el expediente.

Estos documentos son de naturaleza privada y reposan en los archivos de la empresa y con ellos se demostrarán los hechos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo tercero de la presente demanda, así como, que mi mandante durante toda la relación contractual con la demandada, presentó una conducta intachable, proclive al cumplimiento de las metas y obligaciones, mostrando su responsabilidad y compromiso con los compromisos adquiridos, no recibió llamados de atención, y su despido no estuvo motivado por faltar a sus obligaciones laborales.

LOS DOCUMENTOS SON:

1. Certificado en el que se especifiquen las funciones y las actividades propias del último cargo que desempeñó el señor Javier Gerardo Anaya Morantes para Comunicación Celular S.A Comcel S.A.

2. Certificación de las sumas devengadas por el señor Javier Gerardo Anaya Morantes durante los últimos 12 meses anteriores a la finalización de su vínculo laboral, comprendido entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018, por concepto de salarios, bonificaciones, comisiones, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones.

3. Certificación de los topes de ventas o metas impuestas al señor Javier Gerardo Anaya Morantes entre el 23 de marzo de 2017 y el 23 de marzo de 2018, los últimos 12 meses anteriores a la finalización de su vínculo laboral, señalando los porcentajes de cumplimiento mes a mes y el alcance de la meta exigida.

4. Copia íntegra y legible de los siguientes documentos, manual de funciones del cargo que desempeñó mi mandante, prohibiciones, capacitaciones, proyección de ventas mes a mes y análisis de ventas cumplidas mes a mes entre el 23 de marzo de 2017 y el 23 de marzo de 2018.

5. Certificación en la que conste el lugar donde el señor Javier Gerardo Anaya Morantes desempeñó sus funciones, indicando bajo dirección de quien cumplía dichas funciones y el horario en el que las desempeñaba.

6. Copia íntegra y legible de los soportes de pago realizados mes a mes, cheques y transferencias electrónicas realizadas a Javier Gerardo Anaya Morantes, entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018.

7. Certificación de las metas impuestas y su porcentaje de cumplimiento, en todas las oficinas principales de cada ciudad a nivel nacional donde COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A tenga presencia, entre el 23 de marzo de 2017 y el 23 de marzo de 2018.

8. Certificación en la que conste la organización de toda la planta de Coordinadores de servicio personalizado al cliente, específicamente las metas que les fueron señaladas, los periodos de imposición de las metas, señalando el porcentaje de cumplimiento de las mismas por cada coordinador entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores, el cargo, antigüedad y los porcentajes de cumplimiento de metas.

9. Certificación en la que conste la organización de toda la planta de vendedores de la oficina en la que laboraba el señor Javier Gerardo Anaya Morantes, específicamente en las metas que les fueron señaladas, los periodos de imposición de las metas, señalando el porcentaje de cumplimiento de las mismas por cada vendedor entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores, el cargo, antigüedad y los porcentajes de cumplimiento de metas.

10. Certificación en la que conste, para la época en que mi poderdante prestó sus servicios personales, es decir, entre el mes de noviembre de 2008, al 23 de marzo de 2018, cuantos coordinadores de ventas y servicio al cliente prestaban sus servicios por contrato laboral para COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A, relacionando quienes fueron despedidos y las razones que motivaron esta decisión. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores, el cargo, antigüedad y los porcentajes de cumplimiento de metas.

11. Copia del estudio previo, realizado por COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A para la exigencia de metas y de objetivos de venta a alcanzar en la oferta de los servicios ofrecidos por la empresa.

12. De acuerdo al análisis y el estudio realizado para fijar la metas y objetivos de ventas, señalar de qué dependía lograr el 100% y el porcentaje mínimo de

esas metas entre el 23 de marzo de 2017 y 23 de marzo de 2018, especificando los procesos y las tareas a realizar con el fin de lograr los porcentajes exigidos.

13. De acuerdo a los estudios realizados para la imposición de las metas exigidas, emitir certificación o señalar que factores se previeron que pudieran afectar el cumplimiento de estos objetivos.

14. De acuerdo a los estudios realizados para la imposición de las metas exigidas, certificar o señalar si su cumplimiento en los porcentajes señalados, dependía 100% de las actividades y responsabilidades emanadas del cargo que desempeñaba el señor Javier Gerardo Anaya Morantes.

15. Certificación en la que conste, a cuantos Coordinadores de servicio personalizado al cliente fueron despedidos por cumplimiento de metas entre enero de 2016 y diciembre de 2018.

16. Certificación de si para los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018, se realizaron reparaciones o mejoras locativas en la oficina donde el señor Javier Gerardo Anaya Morantes prestó sus servicios en la ciudad de Cúcuta.

17. Certificación de si las metas logradas por el señor Javier Gerardo Anaya Morantes en los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018, fueron superiores en comparación con los mismos meses del año inmediatamente anterior, señalando cual era el porcentaje máximo y mínimo de ese año.

18. Certificado en el que se especifique las vinculaciones laborales, directas o indirectas, a la oficina de COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A donde laboró el señor Javier Gerardo Anaya Morantes, entre marzo de 2016 y marzo de 2018. Especificando los cargos que entraron a ocupar los nuevos trabajadores. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores y el cargo.

19. Copia íntegra y legible reglamento interno de trabajo.

20. Certificación del número de trabajadores despedidos entre el 23 de marzo de 2017 y el 23 de marzo de 2018 por incumplimiento de metas. Si por reserva de habeas data no pueden ser informados los nombres de los trabajadores, solo mencionar el número de los despedidos, las metas que tenían establecidas y los porcentajes de cumplimiento.

21. Copia del expediente disciplinario del señor Javier Gerardo Anaya, y de la hoja de vida.

22. Certificación del porcentaje de las metas asignadas e impuestas durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 a mi poderdante, y el cumplimiento que tuvo de las mismas durante esos periodos.

23. Certificación del porcentaje de las metas asignadas e impuestas durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 a todos los coordinadores de servicio personalizado al cliente, y los porcentajes de cumplimiento de cada uno. Si en virtud del hábeas data, no es posible mencionar los nombres de estas personas, por favor señalar el número de trabajadores, antigüedad y los porcentajes de cumplimiento de metas.

24. Certificación de cuantas oficinas principales como en la que trabajaba el señor Javier Gerardo Anaya Morantes había en Colombia a marzo de 2018.

25. Copia o certificación de la estructura de los puestos de trabajo existentes en la oficina de COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A donde laboró mi poderdante, especificando el orden jerárquico de cada cargo y sus funciones.

26. Certificación de las metas impuestas a los trabajadores directos o indirectos vinculados entre marzo de 2016 y marzo de 2018, especificando el porcentaje de cumplimiento de cada uno durante noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de 2018.

27. Copia del acta de socialización de las faltas graves estipuladas, conforme a la sentencia C-934 de 2004.

28. Copia de evaluación o seguimiento de rendimiento laboral del señor Javier Gerardo Anaya Morantes durante los años que estuvo vinculado a COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.»

Para resolver el problema jurídico, es necesario señalar que para que sea procedente la exhibición de documentos, la solicitud de tal prueba deberá informar en primer lugar que el documento se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlos, además de indicar su clase y la relación que tenga con los hechos; si la solicitud realizada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 266 del CGP, el Juez de instancia deberá negar el decreto de dicha prueba.

En el presente asunto, se evidencia con claridad que pretende el apoderado del demandante se allegue una serie de documentos tales como certificaciones, manuales de funciones, evaluaciones y seguimientos a trabajadores de la demanda, copia de expediente disciplinario, certificación de trabajadores despedidos entre los años 2017 y 2018, certificación en la que conste cuántos coordinadores de ventas y servicio al cliente prestaron su servicio desde 2008 a 2018, así como la copia del reglamento interno del trabajo, entre otras; pruebas estas que a juicio de esta sala pudieron ser solicitadas de manera directa a la demandada, y sólo en el caso en que aquella se hubiere negado a hacer entrega de dichas documentales, sería labor del juez ordenar la exhibición de documentos por encontrarse las pruebas en poder de la demandada y sin que haya sido posible su obtención por la parte demandante.

Ahora bien, se reitera, de la lectura de las pruebas solicitadas se advierte que la parte demandante desplaza su responsabilidad para la consecución previa de unos documentos, que tal como lo señaló la juez de primera instancia no guardan relación con los hechos de la demanda, pues si bien es cierto que lo que se pretende a través de este proceso ordinario es la declaratoria de terminación injusta del contrato de trabajo, lo cierto es que en el recuento fáctico nada se expresó en referencia a las documentales que hoy pretende sean decretadas con la denominación de exhibición de documentos.

En este contexto, se tiene que la modalidad procesal en la jurisdicción ordinaria laboral exige una mayor diligencia para el trámite de las pruebas en la labor investigativa, pues al interior del proceso se debe incorporar los medios probatorios con que pretende sustentar las pretensiones o la tesis defensiva que se asuma en el proceso. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en precedencia y al no haber demostrado la parte actora la dificultad para obtener el medio probatorio o la imposibilidad física para su obtención no sería procedente que su desidia deba ser subsanada por el juzgado y menos aún por esta sala de decisión.

En consecuencia, no puede pretender el apelante que de manera automática se acceda a esa solicitud cuando no acreditó el trámite diligente previo a la presentación de la contestación de la demanda, y aun cuando no se observa que las documentales pedidas guarden relación directa con los hechos y las pretensiones de la demanda.

Por todo lo anterior, esta corporación confirmará el auto de primera instancia en el mismo sentido, esto es, accediendo únicamente a decretar la exhibición de documentos respecto de aquellas solicitudes encaminadas a probar el presunto despido injusto que abarquen, como lo señaló la juez A quo, los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018, por lo cual aquellas documentales que no correspondan a las mentadas calendas no serán requeridas a la parte accionada, como quiera que dichas pruebas no serían pertinentes ni conducentes para el objeto del litigio, sumado a que como ya se explicó las mismas se conforman por certificaciones y otros documentos que debió la parte interesada solicitar previo al inicio de esta demanda a fin de demostrar al menos que intentó obtenerlas sin que esto fuera posible.

Por lo anterior, esta corporación deberá confirmar la decisión de primer grado, adicionando que la parte demandada COMUNICACIÓN CELULAR S.A. deberá allegar las pruebas decretadas que se encuentran en su poder, en un término no mayor a quince (15) días hábiles ya que no fueron allegadas con la contestación, los cuales

comenzarán a contar a partir de la ejecutoria del auto de obedézcase y cúmplase que expida el despacho de primera instancia. Así se decidirá.

DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

R E S U E L V E

PRIMERO: **CONFIRMAR** la providencia del dos (02) de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, en el proceso de la referencia, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la providencia apelada, en ordenar que la demandada COMUNICACIÓN CELULAR S.A. dispone de un terminó de quince (15) días hábiles para allegar la documental decretada en favor del accionante, atendiendo el criterio previamente establecido.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Surtido el trámite en esta instancia en oportunidad devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO ORDINARIO LABORAL promovida por DAVID ANTONIO SOLANO CARPIO contra SICIM SOCIEDAD POR ACCIONES Y OTROS. Rad. 11001 31 05 009 2014 00430 04.

En la fecha, con la finalidad de resolver el recurso de queja interpuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral previa la deliberación correspondiente al proyecto sometido a su consideración por el Magistrado Sustanciador, dicta la siguiente

PROVIDENCIA

En los términos y para los fines previstos en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, procede la Sala decisión a resolver el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la demandada SICIM SOCIEDAD POR ACCIONES, en contra del auto proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el 02 de agosto del 2021, mediante el cual negó el recurso de apelación contra la decisión de no tramitar la tacha de falsedad ideológica.

TRÁMITE PROCESAL RELEVANTE

La accionada SICIM SOCIEDAD POR ACCIONES, contestó la demandada y formuló incidente de tacha de falsedad ideológica contra los documentos contenidos en los numerales 3, 4 y 10 del acápite de pruebas de la demanda, indicando que aquellos fueron entregados al demandante por sus maniobras engañosas, dado que, lo que allí se menciona no coincide con la realidad, pues aquel nunca fue trabajador de la sociedad.

En vista de lo anterior, en el desarrollo de la audiencia del artículo 77 del CST y SS, llevada a cabo el 02 de agosto de 2021, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, encontró que no es procedente tramitar la tacha de falsedad ideológica,

mediante lo preceptuado en el artículo 270 del CGP, puesto que el procedimiento allí establecido sólo aplica cuando se trata de falsedad material. Explicó que la falsedad material es susceptible de prueba pericial porque se trata de alteraciones, modificaciones, sustracciones o adiciones al contenido de un documento, mientras que, en tratándose de una falsedad ideológica, no es posible su revisión por parte de un perito, dado que el documento es auténtico pero involucra información que no corresponde a la realidad. Por lo anterior, concluyó que la veracidad de las declaraciones comprendidas en los documentos tachados, deberá ser analizada con las demás pruebas y bajo la libre valoración de la prueba.

El apoderado judicial de la accionada SICIM SOCIEDAD POR ACCIONES formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión, tras considerar que los documentos contienen información que no corresponde a la realidad, pues fueron obtenidos a través de artificios del demandante. Explicó que la sociedad rectificó lo declarado en esos documentos, mediante comunicaciones enviadas a la Embajada de Portugal, a la Embajada de Alemania y a Bancolombia, donde se expresó que el demandante no era trabajador de la entidad. Por ello, reiteró que sí procede el estudio de la tacha.

La A quo confirmó su decisión al resolver la reposición y negó el recurso de apelación, considerando que tal determinación no es apelable, por no estar prevista en el CPT y SS, ni en el CGP.

RECURSO DE QUEJA

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la accionada SICIM SOCIEDAD POR ACCIONES, presentó recurso de queja a fin de que se revoque la decisión y se conceda el recurso de apelación, teniendo en cuenta que se trata del supuesto contenido en el numeral 4 del artículo 65 del CPT y SS. Argumentó que la negativa de dar trámite a la tacha de falsedad versa sobre el decreto de la práctica de una prueba, pues se trata de los documentos presentados por la parte actora. Solicitó que se conceda el recurso de apelación, toda vez que la tacha versa sobre una prueba y fue debidamente sustentada.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala de Decisión establecer si procede el recurso de alzada interpuesto por el apoderado judicial de la demandada SICIM SOCIEDAD POR ACCIONES en contra del auto proferido el 02 de agosto del 2021, mediante el cual

negó el recurso de apelación contra la decisión de no tramitar la tacha de falsedad ideológica.

CONSIDERACIONES

Por virtud de los artículos 62 y 68 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 28 de la Ley 712 de 2001, en materia laboral es procedente la interposición del recurso de queja y, como en este caso se cumplió el trámite establecido por los artículos 352 y 353 del Código de General del Proceso, se impone establecer si la providencia del 02 de agosto de 2021, por medio de la cual se dispuso no conceder el recurso de apelación contra el auto de la misma fecha, se ajustó o no a derecho.

Con la finalidad de resolver el problema jurídico, debe advertirse que el apoderado judicial de SICIM SOCIEDAD POR ACCIONES pretende que se conceda el recurso de apelación contra la providencia del 02 de agosto de 2021 proferida por la Juez Novena Laboral del Circuito por medio de la cual decidió no tramitar la tacha de falsedad ideológica, considerando que aquella si es procedente, pues versa sobre una prueba documental, y que por lo tanto sí es apelable en aplicación del numeral 4° del artículo 65 del CPT y de la SS.

Lo primero que debe precisarse es que en materia laboral el legislador limitó los asuntos susceptibles del recurso de apelación a aquellos enlistados en el artículo 65 del CPT y SS, no siendo posible conceder el recurso de alzada en eventos que no estén allí plasmados. Resulta claro para esta Corporación que la decisión que decide no tramitar la tacha de falsedad en este momento procesal sino trasladarla al momento de dictar sentencia, no está dentro de los supuestos regulados en la aludida norma, sin embargo, teniendo en cuenta la consideración del recurrente, se procederá a estudiar si en efecto la decisión es apelable por tratarse de un medio de prueba.

En vista de lo anterior, se debe recordar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 51 del CPT y SS, en materia laboral son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, condicionando la prueba pericial a los eventos en los que es juez considere necesario su decreto y práctica. Por lo anterior, es menester verificar los medios de prueba establecidos en el artículo 165 del CGP, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del CST y SS, que estatuyó lo siguiente:

> *"Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.*

> *El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales."*

De otro lado, la tacha de falsedad fue instituida como una forma de controvertir los medios de prueba documentales, incluidas las reproducciones de voz o imágenes, pues así lo instauró el artículo 269 del CGP:

> *"La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.*
>
> *Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzca.*
>
> *No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión.*
>
> *Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo de falso en las mismas oportunidades."*

De esta forma, es claro para esta Corporación que la tacha de falsedad no se constituye en un medio probatorio, pues esta busca atacar o controvertir la falsedad de un documento, sin que propiamente adquiera el carácter de prueba; en virtud de ello, negar el trámite de una tacha no hace que esta se transforme en un medio probatorio y que como tal, deba dársele el tratamiento frente al no decreto de pruebas que señala el numeral 4 del artículo 65 del CPT y de la SS.

En gracia de discusión y teniendo en cuenta que, en la petición de tacha de falsedad ideológica, el apoderado judicial de SICIM SOCIEDAD POR ACCIONES solicitó que se siguiera el trámite de un «incidente de tacha», se debe recordar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 270 del CGP, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del CST y SS, sólo es dable tramitar por medio de incidente, las tachas de falsedad, así:

> *"Quien tache el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración. No se tramitará la tacha que no reúna estos requisitos.*
>
> *Cuando el documento tachado de falso haya sido aportado en copia, el juez podrá exigir que se presente el original.*
>
> *El juez ordenará, a expensas del impugnante, la reproducción del documento por fotografía u otro medio similar. Dicha reproducción quedará bajo custodia del juez.*

> *De la tacha se correrá traslado a las otras partes para que presenten o pidan pruebas en la misma audiencia.*
>
> *Surtido el traslado se decretarán las pruebas y se ordenará el cotejo pericial de la firma o del manuscrito, o un dictamen sobre las posibles adulteraciones. Tales pruebas deberán producirse en la oportunidad para practicar las del proceso o incidente en el cual se adujo el documento. La decisión se reservará para la providencia que resuelva aquellos.* ***En los procesos de sucesión la tacha deberá tramitarse y resolverse como incidente y en los de ejecución deberá proponerse como excepción.***
>
> *El trámite, de la tacha terminará cuando quien aportó el documento desista de invocarlo como prueba."* (Subrayas y negrillas fuera de texto)

En concordancia con lo manifestado, se tiene que el artículo 127 del CGP, establece que solo serán tramitados como incidentes, aquellos asuntos que expresamente señale la Ley. Ahora, en cuanto al trámite de la tacha de falsedad, se reitera, el artículo 270 del CGP dispuso que quien tache un documento, deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir pruebas para su demostración, especificando que no se tramitarán las tachas que no reúnan los requisitos de ley. Igualmente, la misma norma estableció de manera expresa que, en los procesos de sucesión, la tacha se tramitará como incidente, sin mención alguna respecto de la tacha propuesta en el procedimiento laboral.

De esta manera, siendo posible tramitar por medio de incidente únicamente asuntos a los cuales la ley expresamente les ha dado ese tratamiento, tampoco sería procedente admitir el recurso de apelación en el evento contemplado en el numeral 5 del artículo 65 del CPT y SS, por cuanto el trámite de un incidente no fue contemplado para la tacha de falsedad ideológica en los procesos laborales.

En consecuencia, se considera bien denegado el recurso de apelación contra la decisión adoptada el 02 de agosto de 2021, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del CPT y de la SS, la decisión sobre la tacha de falsedad no es susceptible de recurso de apelación, aunado a que, aquella se trata de una forma de dilucidar la autenticidad de los medios de prueba, pero de manera alguna se trata de uno de ellos. Igualmente, no es dable estudiar la procedencia del recurso de alzada como si se tratara de la decisión que negó el trámite de un incidente, por cuanto, aquel está reservado a las tachas formuladas en procesos de sucesión.

Por último, es claro que en este trámite es procedente imponer costas en instancia, conforme aparece reglado en el artículo 365-1 del CGP según el cual se condenara en costas a la parte a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de queja impetrado, para cuyo efecto se fijaran como agencias en derecho a cargo del recurrente la suma de seiscientos mil pesos ($600.000).

DECISIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones la Sala de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

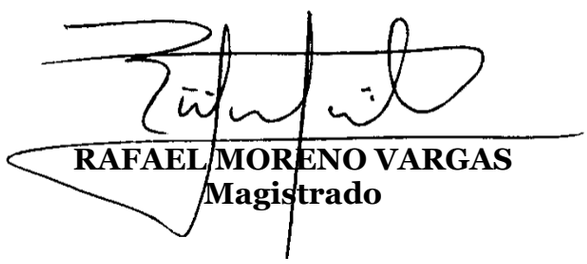
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de apelación invocado por el apoderado judicial de la accionada SICIM SOCIEDAD POR ACCIONES contra la decisión adoptada el día 02 de agosto de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

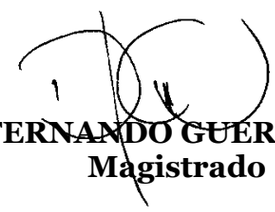
SEGUNDO: ORDENAR la devolución del presente proceso al juzgado de origen para que le imparta el trámite procesal que corresponda.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, para lo cual se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de seiscientos mil pesos ($600.000), por las razones expuestas en la parte motiva de la decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO ORDINARIO LABORAL promovido por IVOONE JOHANA UNIVIO JAIMES contra CITIBANK S.A. Rad. 11001 31 05 010 2021 00875 01.

En la fecha, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral, previa deliberación al proyecto sometido a su consideración por el Magistrado Sustanciador, procede a dictar la siguiente:

PROVIDENCIA

En los términos y para los fines previstos en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con el Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre de 2020, procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá proferida el dieciséis (16) de febrero de 2021, por medio del cual se rechazó la demanda.

ANTECEDENTES

La señora IVOONE JOHANA UNIVIO JAIMES, a través de apoderado judicial, interpuso demanda ordinaria laboral de primera instancia a través de apoderado judicial, donde pretende se declare la existencia de una relación laboral con la demandada CITIBANK S.A., bajo contrato a término indefinido desde el 13 de abril de 2012, el cual finalizó sin justa causa el 28 de mayo de 2018. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se condene a la demandada al pago de indemnización por despido sin justa causa, indexación, reconocimiento y pago de perjuicios morales y de la vida en relación, e igualmente se le ordene a la demandada publicar en las instalaciones del Banco con copia a las entidades del sector financiero, la forma en como terminó la relación laboral y el resumen de lo sucedido.

Como fundamento de sus peticiones, señaló, en síntesis, que fue vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 13 de abril de 2012, para CITIBANK

COLOMBIA S.A., en el cargo de «Asesor Op de Servicio y Ventas». Que el 28 de mayo de 2018 a las 11:00 am, fue citada a diligencia de descargos, para ser realizada a la misma hora y el mismo día, es decir, que no hubo una citación sino un llamado inmediato a descargos. Que el documento de citación a descargos, hace alusión a presuntos incumplimientos de la política Information Security y el Código de Conducta del banco, por conductas como: reproducción por parte de la trabajadora de la firma de un cliente en el formato «Instant City Autorización Consulta en Centrales de Riesgo» y «enmendadura en el mismo formato del número 7 de la cedula del cliente».

Añadió que dentro de la citación a descargos, la accionada omitió establecer las supuestas faltas disciplinarias, no calificó provisionalmente las conductas como falta, y no otorgó termino para que la actora pudiera controvertir las pruebas en su contra, limitando así su derecho de defensa. Que la demandada, puso de presente en la diligencia de descargos, el resultado de un estudio de firmas y huellas realizado por la consultora en grafología INCOCRÉDITO, donde el resultado mostró que no existía identidad grafológica y que se había realizado una enmendadura en el número 7 de la cedula del cliente. Que ante la anterior prueba, lo único que pudo decir fue que nunca firmó ni reprodujo la firma del cliente, que ella misma vio cuando el cliente firmó y que lo anterior se podía observar en el registro de cámaras, y que al ser el cliente nuevo, no había otro documento para confrontar la firma. Manifestó que solicitó pruebas en la dicha diligencia, pero que las mismas no fueron atendidas, decretadas ni practicadas.

Concluyó que el mismo día de la diligencia de descargos, le fue entregada por escrito carta de terminación del contrato laboral con justa causa, efectivo desde el 28 de mayo de 2018, pero que no obstante, las diligencias de descargos no fueron adelantadas apropiadamente, pues no brindaron a la accionante la posibilidad de defenderse ante las acusaciones (Fls. 75-99).

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá D.C. inadmitió la demanda mediante auto del veintiséis (26) de octubre de 2020 (fls. 101-102), dónde señaló:

> *«Como quiera que revisada la demanda no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 25 del C.P.T. y de S.S.* ***INADMÍTASE*** *la presente demanda toda vez que presenta las siguientes falencias:*
>
> 1. *En primer lugar, se va a requerir a la parte demandante que incorpore el acápite cuantía, para establecer la competencia de este Despacho Judicial.*
> 2. *Debe tener en cuenta la parte actora que en el acápite de los hechos deben ser narrados en forma breve, concisa y concreta, y que cada numeral*

constituya una situación fáctica, sin lugar a narraciones extensivas ni que acumulen hechos; asimismo absteniéndose de realizar en este acápite manifestaciones de apreciaciones, presunciones o calificativos.

a. En el acápite de los hechos, el enumerado como cuarto existe una indebida acumulación fáctica de apreciaciones de la parte actora. Sírvase corregir.
b. En el acápite de los hechos, los numerados como noveno, décimo, vigésimo debe enumerar cada situación, con el fin que haya un vigésimo tercero, no son situaciones fácticas, sino que son apreciaciones de la parte actora. Sírvase corregir.
e. En el acápite de las notificaciones, sírvase indicar la dirección electrónica de todas las partes, así como indicar los números telefónicos de contacto, de conformidad con el numeral 10 del artículo 82 del CGP.

En tal sentido, dispone el Art. 28 ibídem, modificado por el Art. 15 de la Ley 712 de 2.001:

"Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el Art. 25 de este código, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale..."»

DEL AUTO APELADO

El Juez de Primer grado mediante auto del dieciséis (16) de febrero de 2021, dispuso el rechazo de la demanda al considerar que la parte demandante no la subsanó dentro del término legal concedido para ello (fls. 104).

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión, para lo cual realizó un recuento de lo sucedido desde el auto que inadmitió la demanda. Al tenor señaló que, la demanda fue inadmitida el 27 de octubre de 2020 de acuerdo con la plataforma de la rama judicial sin que le dieran a conocer el contenido del auto y las razones de inadmisión; señaló que el día 29 de octubre solicitó que a través de correo electrónico le fuera remitido el auto que inadmitió la demanda y que se corriera el término sólo desde el momento en que llegará tal documento a fin de garantizar el derecho a la defensa. Agregó que posterior a ello, el despacho al realizar la anotación en el sistema registró como entrada "no subsana demanda", lo que trajo como consecuencia que el día 16 de febrero de 2021, la demanda fuera rechazada.

Por lo tanto, manifestó que de la relación cronológica de los hechos se pudo establecer que el juzgado nunca le dio a conocer las razones por las que se inadmitió la demanda por lo cual le era imposible subsanar los errores que la misma contenía. En virtud de lo anterior, solicitó se revoque el auto de primera instancia y, en su lugar, se dé a conocer el contenido completo y detallado del auto y se corran los términos en debida forma.

SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el término del traslado previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020, en concordancia con el artículo 82 del CPT y SS, el apoderado de la demandante presentó alegatos de conclusión, donde se manifestó en similares términos al recurso de alzada.

CONSIDERACIONES

El auto apelado es susceptible del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por cuanto con el mismo se rechazó la demanda.

De conformidad con lo narrado en precedencia, el problema jurídico se contrae en determinar si en el presente caso deberá concedérsele al demandante nuevamente termino para subsanar las falencias presentadas en el escrito de demanda, toda vez que el despacho de instancia no le dio a conocer el contenido del auto que inadmitió la demanda, razón por la que manifestó no haber podido dar cumplimiento a lo solicitado por el juzgado.

Descendiendo al caso de marras, se precisa que de conformidad con el artículo 9° del Decreto 806 de 2020, las notificaciones por estado deberán fijarse de manera virtual con acompañamiento de la providencia que se notifica, dejando totalmente claro que en esta norma no se hace alusión a la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial, ni a la remisión de las providencias por estado electrónico:

> ***«ARTÍCULO 90. NOTIFICACIÓN POR ESTADO Y TRASLADOS.*** *Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.*

No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.

De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia.

Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado.»

Establecido lo anterior, y una vez verificado el micrositio web del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, se pudo evidenciar que dicho juzgado realizó la notificación por estados en debida forma y atendiendo lo señalado por la norma, esto es, publicar el estado electrónico en la página web que ha sido destinada para el efecto, junto con el enlace que remite al usuario a la providencia que busca conocer. Para mayor ilustración, se anexa captura de pantalla tomada desde el sitio web https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-10-laboral-del-circuito-de-bogota/34, dónde se encuentran los Estados electrónicos del juzgado de primera instancia, propiamente el Estado No. 072 del 28 de octubre de 2020, con el cual fue notificada la providencia que inadmitió la demanda:

	201900856	/documents/35753502/49936793/2019-856+%281%29.pdf/356beb82-c38e-48c4-83eb-1d232e58539f
	201900857	/documents/35753502/49936793/2019-857+%281%29.pdf/89237a2f-7316-4f35-82ea-776c59632c45
	201900859	/documents/35753502/49936793/2019-859.pdf/26d2ca8e-ab65-4644-85b4-f2c35fe06341
	201900860	/documents/35753502/49936793/2019-860+%281%29.pdf/f321d56b-efd7-410a-9d81-6738c31f2633
	201900863	/documents/35753502/49936793/2019-863.pdf/748759a5-ff3d-4a25-bf67-c6dbf4de462c
	201900873	/documents/35753502/49936793/2019-873+MAL+NOMBRADAS+LAS+DDADAS.pdf/f2afa53a-4ed6-4131-bd64-187ef60cebde
	201900875	/documents/35753502/49936793/2019-875+ACUMULA+HECHOS+%281%29.pdf/a8f8872d-2737-4b0d-9aaa-7a79acccc1b3
	201900879	/documents/35753502/49936793/2019-879+EAAB.pdf/21d5e218-00ed-4b7f-859a-19ae0bef7582
	202000037	/documents/35753502/49936793/2020-037+COLPENSIONES+Y+PROTECCI%C3%93N+S.A..pdf/04424129-4e33-435a-9312-f5b549f7d863
	202000038	/documents/35753502/49936793/2020-038+COLPENSIONES+Y+PROTECCI%C3%93N+S.A..pdf/580f7ed1-66f4-4359-b5da-db32b0bbd7bb
	202000040	/documents/35753502/49936793/2020-040+PRIVADO.pdf/e8777a95-8f89-4f24-8a2d-cc9f9f8fe2a6

Por lo anterior, no es de recibo para esta corporación lo señalado por el apoderado de la demandante, relativo a que la decisión debió ser remitida por correo electrónico, como quiera que como ya se explicó las providencias serán cargadas al micro sitio web del juzgado a fin de que las partes e interesados puedan realizar el pertinente seguimiento a los procesos y conocer las decisiones sin la necesidad de desplazarse a los despachos judiciales, acto mediante el cual se da cumplimiento a lo señalado en el Decreto 806 de 2020 en su artículo 9.

Adicional a lo manifestado, no se observa que la norma establezca de ninguna manera que las providencias que se expiden dentro de este tipo de procesos deban remitirse a los apoderados vía correo electrónico, pues es labor de estos realizar la verificación constante de los estados electrónicos; ahora bien, aunque el Despacho no dio contestación al correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2020, esto no es óbice para que el apoderado pretenda que los términos transcurran de manera diferente a la normada o que se le conceda nuevo término para subsanar la demanda, pues resulta claro que no es posible, máxime si se tiene en cuenta que el Despacho de primera instancia, realizó la notificación por estados con el lleno de los requisitos establecidos para el efecto.

En consonancia con lo manifestado, se confirmará el auto apelado recordándole a la parte actora que no basta con la verificación de la página web de consulta de procesos de la rama judicial, como quiera que en múltiples ocasiones se ha explicado que esta página es meramente informativa más no es un medio de notificaciones. Por lo tanto, considera esta corporación que la falta de presentación de la subsanación de la demanda obedece única y exclusivamente a la incuria del apoderado de la demandante, toda vez que fue este quien dejó pasar la oportunidad de corregir los yerros advertidos en la demanda dentro del término concedido y establecido para ello.

Por todo lo anteriormente expuesto, se confirmará el auto recurrido en todas sus partes. Sin costas en esta instancia al no encontrarse causadas.

DECISIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.

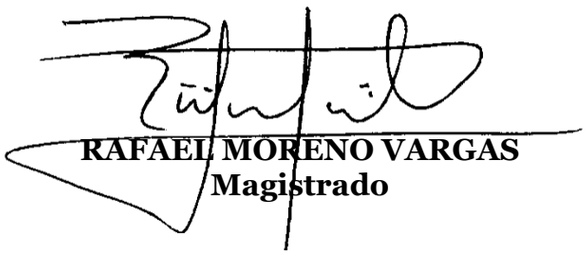
RESUELVE

PRIMERO: **CONFIRMAR** el proveído del dieciseis (16) de febrero de 2021, proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en la motiva de la providencia.

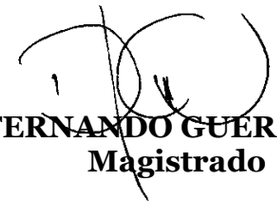
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Surtido el trámite en esta instancia en oportunidad devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

AUDIENCIA PÚBLICA ESCRITURAL EN EL PROCESO EJECUTIVO LABORAL DE **JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN** CONTRA **ISRAEL LÓPEZ MORENO** (Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020).

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Magistrado sustanciador la declaró abierta en asocio de los H. Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, en atención a los parámetros dispuestos por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020[1], así como las directrices del H. Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020*;* se corrió traslado a las partes en segunda instancia quienes tuvieron la oportunidad procesal de pronunciarse.

Acto seguido, el Tribunal procede a dictar la siguiente DECISIÓN ESCRITURAL,

---

[1] *«Artículo 15. Apelación en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitar así:*

1. *Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita.*

   Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

2. *Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito»*

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

P R O V I D E N C I A

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN, contra el auto del 6 de mayo de 2021 proferido por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Laboral del Circuito de esta ciudad, por medio del cual negó librar el mandamiento de pago solicitado.

A N T E C E D E N T E S

1. El señor **JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN**, obrando a nombre propio, demandó ejecutivamente a **ISRAEL LÓPEZ MORENO** para obtener el pago de la suma equivalente a 69,582 S.M.L.M.V. por concepto de honorarios por la prestación de servicios profesionales de abogado, costas y agencias en derecho, archivo 02 del expediente digital.

2. El *A quo* mediante providencia datada 6 de mayo de 2021 resolvió abstenerse de librar mandamiento de pago, por considerar que en el presente caso se allegó como título ejecutivo la prueba anticipada prevista en el artículo 184 del CGP, en concordancia con el artículo 422 *ejusdem*, que se adelantó ante el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil Municipal de Bogotá, la cual en verdad no reúne las condiciones de titulo base de recaudo, por cuanto ante la inasistencia del ejecutado para resolver el interrogatorio de parte, solo se aplicó la confesión presunta a las preguntas 4, 9, 10, 11, 12 y 13, siendo rechazadas las preguntas referidas al porcentaje de honorarios pactados y a la base sobre la cual estos se deben cuantificar. Concluyendo que el título ejecutivo, que, en este caso, es complejo, no refiere con claridad la obligación que se reclama por esta vía, y de contera carece de los atributos previstos en los artículos 422 del CGP y 100 del CPT y de la SS.

3. A su turno, la parte ejecutante **JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN impetró recurso de apelación** aduciendo para el efecto que*:*

> *«(…) Frente a un **TITULO COMPLEJO** considero respetuosamente no debe ceñirse el estudio y atención solamente en lo concerniente a la **PRUEBA ANTICIPADA DE INTERROGATORIO DE PARTE**, debe asumirse el estudio de los demás elementos de prueba y si es del caso se hecha por faltante alguno señalarlo de manera precisa otorgándome la oportunidad de aportarlo de encontrarse en mi poder o ser viable y posible su obtención.*
>
> *Su tajante determinación me sitúa en un limbo jurídico que de contera me niega el acceso a la justicia y me hace nugatoria la posibilidad de hacer valer mi legítimo, sagrado y fundamental **DERECHO AL TRABAJO**.*
>
> *El titulo compuesto por el **INTERROGATORIO DE PARTE y otros elementos de prueba que se adelantado (sic) ante el Juzgado 36 Civil Municipal** en cuanto a las preguntas que señala su señoría fueron rechazadas por no admitir prueba de confesión contienen el relato de diversas circunstancias que han rodeado mi gestión por algo más de **QUINCE (15) AÑOS** con ser su señoría que continúo **VELANDO POR LOS INTERESES del señor LOPEZ MORENO** sin recibir **NINGUNA REMUNERACIÓN PROFESIONAL**.*
>
> *El mencionado señor **LOPEZ MORENO** no atiende mis requerimientos, llamadas, razones sustrayéndose totalmente a su deber y obligación de **PAGAR MIS HONORARIOS PROFESIONALES.***
>
> *Tal vez no se aportó la sentencia emitida por la sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Bogotá en donde consta el monto de la condena, ni tampoco se aportó el expediente en su integridad que contiene la prueba anticipada, pero si se aportó **UNA CERTIFICACION (sic) DEBIDAMENTE EXPEDIDA POR EL JUZGADO SEXTO (6) DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD** en donde cursa en la actualidad el mencionado proceso y de la cual se extracta esencialmente mi inicio como abogado representante de víctima, mi desempeño, mi atención y cuidado frente al asunto encomendado por el señor **LOPEZ MORENO**.*
>
> *(…)*
>
> *Entre otras algo parecido a lo antes sintetizado se desprende de la certificación expedida por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad cuya aportación poco y nada revela la providencia que me permito atacar».*

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA:

Surtido el traslado en los términos previstos por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 los extremos procesales se manifestaron indicando, en síntesis:

Parte ejecutante: Advierte que formuló recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, no obstante, el Juzgado de Conocimiento procedió a desatar un recurso de reposición que no fue invocado. Indica que se limitó a solicitar lo que ha merecido por su labor durante más de 15 años, narrando de manera clara las diferentes instancias en que tuvo lugar la representación del ejecutado, acotando que no ha invocado las obligaciones derivadas de otras gestiones, sino solamente aquella que consta en el interrogatorio de parte y la certificación expedida por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Concluye indicando que, en el interrogatorio de parte quedó claro que la suma que corresponde a sus honorarios se pactó en el 20% del valor que se consignara mediante sentencia debidamente ejecutoriada por daños y perjuicios, los cuales fueron tasados por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal en 347.91 SMLMV.

Razón por la cual, procede la Sala a decidir previas las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

PROBLEMA JURÍDICO

Precisa la Sala que, en estricta consonancia con el recurso elevado, el problema jurídico por estudiar y resolver, se concreta en determinar sí, procede librar mandamiento de pago por concepto de honorarios profesionales de abogado, a tono con el título ejecutivo.

EJECUCIÓN HONORARIOS DE ABOGADO

De conformidad con los artículos 100 del Código de Procedimiento Laboral y 422 del CGP, para que una obligación sea exigible ejecutivamente se requiere que conste en documento que provenga del deudor o de su causante, o que emane de una sentencia judicial o arbitral en firme, o de

una conciliación, los cuales deben constituir plena prueba contra ese deudor y contener obligaciones expresas, claras y exigibles.

Es expresa cuando aparezca plenamente delimitada; es clara cuando todos sus elementos resultan completamente determinados en el título, es decir, que sea nítida sin asomo de ambigüedad, oscuridad o confusión y, es exigible cuando se encuentra en situación de pago por no estar sometida a plazo o condición, o si lo está, cuando se ha cumplido o acaecido el mismo.

En atención a lo anterior, la jurisprudencia y la doctrina han considerado que para librar mandamiento de pago basta examinar si el título ejecutivo realmente contiene una obligación clara, expresa y exigible contra el deudor, en todo su contenido sustancial, sin necesidad de indagación preliminar alguna, que no se preste a confusiones ni que su cumplimiento esté sujeto a plazo o condición o que estos hayan cesado en sus efectos.

En el *sub lite*, la demanda señala que la cuestión litigiosa planteada hace relación a la ejecución por sumas de dinero que emanan de un acuerdo de prestación de servicios profesionales de abogado celebrado entre las partes, y en virtud del cual el ejecutante ha actuado y representado al aquí ejecutado durante la fase de instrucción, juzgamiento y actual vigilancia de la condena impuesta al señor Horacio Enrique Daza Cuello, que tuvo lugar dentro del proceso penal 2012-00025, y sobre lo cual el poderdante se comprometió a pagar un 20% de la suma de dinero que se consignara como condena en sentencia debidamente ejecutoriada, que para el caso tuvo lugar el 26 de junio de 2013, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en la que se condenó al señor Horacio Enrique Daza Cuello a pagar al ejecutado en calidad de víctima, la cantidad equivalente a 397,41 SMLMV para el momento de los hechos, acaecidos en el año 2004.

Sobre el punto, debe advertirse que el pago de los honorarios pretendidos se encuentra supeditado al cumplimiento o ejecución por parte del actor de

la labor convenida, circunstancia que se acredita no solo con la existencia del contrato de prestación de servicios o del acuerdo de voluntades celebrado por ambas partes del cual emanen las obligaciones adquiridas por las mismas, sino también con la documental idónea que pruebe el cumplimiento de los servicios profesionales contratados, configurándose la existencia de un título ejecutivo complejo, aspecto que se predica para efectos de certificar los emolumentos otorgados por el contratante –ejecutado- con ocasión a la gestión.

Así las cosas, rogando se establezcan los honorarios profesionales con la documental obrante a folios 6 a 7 archivo 02 del expediente digital, atinentes a interrogatorio de parte dirigido a Israel López dentro del trámite de prueba extraprocesal de que trata el artículo 184 del CGP surtido ante el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil Municipal bajo el radicado 2020 00013, auto que fija fecha para llevar a cabo diligencia de interrogatorio de parte, actas de las audiencias celebradas los días 15 y 27 de julio de 2020 y certificación expedida por el Juez Sexto (6º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá sobre la gestión realizada por el apoderado Jorge Alfonso de Paz Rincón, fluye innegable que los citados no tienen la virtualidad de erigirse en un instrumento que preste mérito ejecutivo al tenor de lo previsto en el artículo 100 del CPTSS, en concordancia con el artículo 422 del estatuto instrumental Civil, esto es, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Y ello es así, porque el ejecutante pretende derivar la existencia de la obligación de representar en su condición de abogado al señor Israel López Moreno dentro del proceso 2012 00025 desde la fecha en que se le reconoció personería dentro de la fase de instrucción, es decir, desde el 20 de febrero de 2006, así como la remuneración a la que se comprometió a pagar el accionado, a partir del acta de fecha 27 de julio de 2020, que fue elevada con ocasión a la celebración de la audiencia de interrogatorio de parte como prueba extraprocesal y en la que el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil Municipal de Bogotá, tuvo por ciertas las preguntas 4, 9 11 y 13 del

mentado interrogatorio, sin allegar la grabación correspondiente de la diligencia, omitiendo por tanto, que el acta que se eleva con ocasión a la celebración de cualquier diligencia, no tiene la virtud de sustituir el medio de audio o audiovisual que contiene la actuación en ella adelantada.

Sobre el particular, adviértase que el artículo 46 del CPT y de la SS, sobre las actas y grabación de audiencias consagró:

> *«**Las audiencias serán grabadas con los medios técnicos que ofrezcan fidelidad y seguridad de registro,** los cuales deberán ser proporcionados por el Estado, o excepcionalmente, con los que las partes suministren.*
>
> *Si la audiencia es grabada, se consignará en el acta el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia.*
>
> *El acta será firmada por el juez y el secretario y de ella hará parte el formato de control de asistencia de quienes intervinieron.*
>
> *Cualquier interesado podrá solicitar una copia de las grabaciones o del acta, y para su obtención deberá proporcionar los medios necesarios para ello.*
>
> ***En ningún caso se hará la reproducción escrita de las grabaciones. Las grabaciones se incorporarán al expediente**».*

A su vez, el artículo 107 del CGP, previó en su numeral 4º que *«La actuación adelantada en una audiencia o diligencia se grabará en medios de audio, audiovisuales o en cualquiera otro que ofrezca seguridad para el registro de lo actuado».*

Igualmente, en el numeral 6º de la normatividad *ejusdem*, se consagró que:

> *«**Las intervenciones orales no podrán ser sustituidas por escritos**.*
>
> *El acta se limitará a consignar el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, la relación de los documentos que se hayan presentado y, en su caso, la parte resolutiva de la sentencia.*
>
> *Solo cuando se trate de audiencias o diligencias que deban practicarse por fuera del despacho judicial o cuando se presenten fallas en los medios de grabación, el juez podrá ordenar que las diligencias consten en actas **que***

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

sustituyan *el sistema de registro a que se refiere el numeral 4 anterior o que la complementen*».

Por manera que, aun cuando el artículo 100 del CPT y de la SS en concordancia con el artículo 422 del CGP previó que constituye título ejecutivo la confesión que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184 del CGP, no puede la Sala otórgale ese alcance únicamente al acta elevada con ocasión a la audiencia celebrada el 27 de julio de 2020, por el Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Bogotá dentro del trámite de interrogatorio de parte iniciada por JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN contra ISRAEL LOPEZ MORENO, por cuanto la misma no se encuentra acompañada de la videograbación de la audiencia en referencia, que se *itera*, no está llamada a ser sustituida por tal acta.

A lo dicho, se suma que los demás documentales allegadas al informativo, corresponden o son relativas a la certificación emitida por el Juzgado Sexto (6º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en la que consta únicamente que dentro del proceso 2012 00025 el profesional del derecho Jorge Alfonso de Paz Rincón *«funge como apoderado del ciudadano Israel López Moreno, víctima dentro de las presentes diligencias, personería jurídica que le fue reconocida desde la fase de instrucción mediante auto 20 de febrero de 2006 por la Fiscal Setenta y Uno (71) Delegada, Unidad de Delitos Contra el Orden Económico y Social la Unidad Seccional de Fiscalías de Bogotá. Que de la revisión del proceso, desde la mencionada fecha el citado profesional del derecho ha presentado al señor Israel López Moreno continuamente y sin interrupción en todas las fases procesales, instrucción, juzgamiento y ejecución de la pena y no se evidenció que hubiese dentro del plenario por parte de su apoderado llamado de atención, requerimiento y/o señalamiento alguno que implique omisión o descuido respecto de su representación».*

Deviene de lo anterior, que de la documental allegada como soporte del recaudo ejecutivo, no se advierte que tales medios de convicción demuestren la existencia de una relación entre las partes con obligaciones

reciprocas de los contratantes, como tampoco si el actor llevó a cabo su gestión profesional **en las condiciones acordadas y conforme con los requisitos exigidos por el contrato de mandato**, que es la situación fáctica relevante para generar el pago de los honorarios que reclama, situación notable para asignarle mérito ejecutivo a los documentos aportados por la parte activa como título base de recaudo, pues se repite, el acta allegada a las diligencias no puede ser valorada en reemplazo de la audiencia celebrada el 27 de julio de 2020, amén que la certificación de la gestión del ejecutante no arroja ninguna luz sobre las condiciones en que las partes acordaron la prestación del servicio de abogado y su consecuente remuneración.

Por manera que, los medios de convicción arrimados en el proceso no tienen la virtualidad de erigirse en un instrumento que preste mérito ejecutivo al tenor de lo previsto en el artículo 100 del CPTSS, en concordancia con el artículo 422 del estatuto instrumental Civil, esto es, que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible, conclusión que además no se desconoce por el ejecutante, quien en su alzada insinuó que el Juzgado de Conocimiento debió inadmitir la demanda ejecutiva, a efectos de requerirle las documentales que le permitieran completar el título ejecutivo complejo, proceder que no es el que corresponde en el presente caso, como subsanada, cuando quiera que no reúna los requisitos formales de que tratan el artículo 25 y 26 del CPT y de la SS, los cuales en nada se encaminan a componer el título ejecutivo, que debe ser allegado por la parte ejecutante como carga que le impone la ley, sí pretende que a su favor se libre mandamiento de pago.

Dimanado en la confirmación del auto opugnado.

COSTAS.

Sin costas en la alzada.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**,

R E S U E L V E

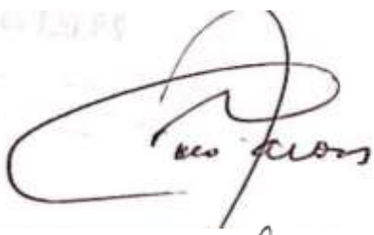
PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el día 6 de mayo de 2021, en el presente proceso ejecutivo laboral, acorde a lo manifestado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin lugar a costas en la instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

AUDIENCIA PÚBLICA ESCRITURAL EN EL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE **TARSICIO HUMBERTO LEÓN TORRES** CONTRA **COLPENSIONES Y OTROS**

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: **DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS**

En Bogotá D.C, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Magistrado sustanciador la declaró abierta en asocio de los H. Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, en atención a los parámetros dispuestos por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020[1], así como las directrices del H. Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020*;* se corrió traslado a las partes en segunda instancia quienes tuvieron la oportunidad procesal de pronunciarse.

Acto seguido el Tribunal procede a dictar la siguiente,

---

[1] *«Artículo 15. Apelación en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitar así:*

1. *Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita.*

   Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

2. *Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito»*

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

P R O V I D E N C I A

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, **SKANDIA S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.,** contra el auto proferido por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de esta ciudad el 28 de julio de 2021, a través del cual se negó la solicitud de llamamiento en garantía solicitada por la parte accionada con escrito allegado el 23 de septiembre de 2020 (fl. 250 expediente digital).

ANTECEDENTES

1. **TARSICIO HUMBERTO LEÓN FLÓREZ,** por intermedio de apoderado judicial promovió demanda ordinaria laboral contra **COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A.** a fin que se declare la ineficacia del traslado de régimen efectuado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual, en el año 1995 y 2003 respectivamente.

2. Como consecuencia de las declaraciones pretendidas, reclama se condene a Skandia S.A a trasladar a Colpensiones los aportes realizados durante su vinculación en dicha entidad; se ordene a Colpensiones contabilizar las semanas cotizadas, se condene al reconocimiento de derechos conforme a las facultades ultra y extra petita; al pago de las costas y agencias en derecho.

3. Con auto del 28 de julio de 2021 se dio por contestadas las demandas de Colpensiones, Colfondos y Skandia, sin embargo, en el mismo proveído se negó la solicitud de llamamiento en

garantía formulado por Skandia Pensiones y Cesantías (fl. 441 Archivo 2020-276 ok).

4. El juez de conocimiento, al momento de resolver sobre el llamamiento en garantía solicitado, indicó que, de acuerdo a las presuntas resultas del proceso y a la naturaleza del mismo se podía establecer que "…*en una eventual condena a esa sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías, se ordenaría la devolución de los aportes que hubiere recibido de la demandante, mas no, de pagos de pólizas o contratos previsionales, pues el pago de esas pólizas o contratos esta a cargo de la sociedad administradora respectiva con el fin de garantizar a sus afiliados los pagos de las prestaciones económicas derivadas de los riesgos de invalidez, muerte o sobrevivientes, si se llegare a causar, no así, en una eventual condena dentro de un proceso como el que nos ocupa".*

5. Inconforme con la decisión del *A quo*, la apoderada de Skandia interpuso recurso de apelación contra el auto que negó el llamamiento reclamado.

6. La apelante alega que, en el caso de que fuese declarada la ineficacia del traslado se deberán restituir las cosas, por lo que, el contrato que se hubiesen suscrito del vínculo legal deberán quedar sin efecto también.

7. Que, al celebrarse un contrato de seguro previsional con Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., y al ser declarada la ineficacia es la aseguradora la encargada de hacer la devolución de este concepto y por ello, resulta imperativa su vinculación.

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA:

Surtido el traslado en los términos previstos por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 los extremos procesales se manifestaron indicando, en síntesis:

La apoderada de **Skandia S.A.**, señala que es procedente el llamamiento en garantía reclamado, ya que, en el eventual caso, sea declarada la nulidad o ineficacia de traslado efectuado por el demandante al RAIS, la consecuencia jurídica es restituir las cosas a su estado anterior, y consecuencia de ello, los actos o contratos derivado de dicho vínculo; que la administradora celebró un contrato con Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., y en caso de ordenarse la devolución de la prima pagada, la llamada a devolver dicha suma de dinero es la aseguradora y no la AFP.

Razón por la cual se remite el expediente para que se surta la apelación en esta instancia, por lo que bajo los anteriores presupuestos procede la Sala a decidir, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO

Precisa la Sala que, en estricta consonancia con el recurso elevado, el problema jurídico por estudiar y resolver, se concreta en determinar si es procedente admitir el llamamiento en garantía propuesto por la convocada a juicio SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Sobre el particular, y en lo que atañe al motivo de inconformidad expuesto por la parte recurrente, se constata que el artículo 64 del CGP al que se acude por remisión analógica del artículo 145 del CPT y de la SS, en relación con el llamamiento en garantía establece que: *«Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dice en el proceso que promueva o se le promueva, …, podrá pedir en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.»*

Al respecto, se advierte que a folio 255 del archivo 2020-276 del expediente digital, contiene la póliza No. 9201407000002 suscrito el 2 de enero de 2007 entre Skandia S.A., y Mapfre Colombia, en el que se aseguró "*AFILIADOS AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA Y AL FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA*", amparándose con dicha póliza los riesgos de muerte e invalidez por riesgo común, la cual fue renovada en forma anualiza desde dicha calenda.

Ahora bien, no pasa inadvertido esta Sala de Decisión que, en el enunciado convenio contractual, se estableció que se cubrirían los riesgos de muerte e invalidez de origen común, motivos que hacen concluir que la enunciada póliza no ampara ningún hecho relacionado en la demanda, es decir, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen y mucho menos el reconocimiento y pago de devolución de dineros, en el eventual caso, que estos fueran ordenados.

Consecuencia de lo anterior, es claro que en el presente caso no se encuentran reunidos los presupuestos para la procedencia del llamamiento en garantía establecido en el artículo 64 del CGP, dado que los riesgos contratados resultan disímiles a los aquí debatidos.

En ese orden, no se equivocó el Juzgado de primera instancia, al negar el llamamiento solicitado, pues es claro que la demandada busca exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, como lo establece la norma en mención, no siendo esta la jurisdicción competente para resolver sobre esa relación en caso de determinarse alguna condena respecto de la demandada.

Así las cosas, se confirmará el numeral cuarto del auto del 28 de julio de 2021.

COSTAS. Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,** Sala de Decisión Laboral,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral **CUARTO** del auto proferido por el Juzgado Diecisiete (17) Laboral del Circuito de Bogotá el 28 de julio de 2021, dentro del proceso ordinario laboral seguido por **TARSICIO HUMBERTO LEÓN TORRES** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, SKANDIA FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS y Otros**, de acuerdo a la parte motiva del presente proveído.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

SEGUNDO: COSTAS. Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

AUDIENCIA PÚBLICA ESCRITURAL EN EL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE **MARÍA STELLA BETANCOURT** CONTRA **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES** Y **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020).

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

En Bogotá D.C, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Magistrado sustanciador la declaró abierta en asocio de los H. Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, en atención a los parámetros dispuestos por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020[1], así como las directrices del H. Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020*;* se corrió traslado a las partes en segunda instancia quienes tuvieron la oportunidad procesal de pronunciarse.

A U T O

Conforme al memorial incorporado por correo electrónico, se reconoce personería adjetiva a **Alida del Pilar Mateus Cifuentes** identificada con cedula de ciudadanía No. 37.627.008 de Puente Nacional y tarjeta

---

[1] *«Artículo 15. Apelación en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitar así:*

1. *Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita.*

   Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

2. *Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito»*

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

profesional 221.228 del C.S. de la J., para que actúe en representación de Colpensiones, por sustitución concedida por la Dra. María Camila Bedoya García.

Igualmente, conforme al memorial incorporado por correo electrónico, se reconoce personería adjetiva a **Jorge Andrés Narváez Ramírez** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.020.819.595 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional 345.374 del C.S. de la J., para que actúe en representación de la AFP Porvenir S.A.

Acto seguido, el Tribunal procede a dictar la siguiente DECISIÓN ESCRITURAL,

P R O V I D E N C I A

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 18 de mayo de 2021 proferido por el Juzgado Décimo (10º) Laboral del Circuito de esta ciudad, por medio del cual declaró probada la excepción previa propuesta por Colpensiones que denominó *"Falta de Agotamiento de Reclamación Administrativa"*.

A N T E C E D E N T E S

1. La señora **MARÍA STELLA BETANCOURT,** a través de apoderado judicial, pretende se declare la nulidad del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que realizó a través de la AFP Porvenir, al igual que se encuentra afiliada al RPM administrado por Colpensiones; en consecuencia, se ordene a la AFP Porvenir S.A. girar a Colpensiones los aportes de su cuenta de ahorro individual; condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de la

pensión de vejez consagrada en la Ley 100 de 1993, junto con el retroactivo y la indexación. (folios 28 a 29).

2. La convocada a juicio, **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, al contestar el *libelo genitor*, formuló como excepción previa la que denominó *«Falta de Competencia por no Agotamiento de Reclamación Administrativa»*, la cual sustentó en que la accionante no dio estricto cumplimiento al artículo 6º del CPT y de la SS, en tanto que no acreditó la reclamación elevada ante la entidad, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión, no permitiéndole a la administradora del RPMPD conocer vía administrativa los supuestos fácticos y normativos en que se sustenta el *petitum* de la demanda, lo cual implica la falta de competencia del Juzgado para conocer el presente asunto, folio 52.

3. En audiencia pública virtual celebrada el 18 de mayo de 2021, el A quo resolvió declarar probado el medio exceptivo formulado por Colpensiones y terminar el proceso, junto con el archivo de las diligencias, al considerar que en el expediente obra formulario de afiliación diligenciando por la demandante a Colpensiones el 5 de marzo de 2018, por medio del cual pretendió su traslado de régimen pensional, que fue negado por la entidad mediante comunicación de la misma data, por encontrarse a menos de 10 años de la edad mínima de pensión; mismo que no tiene la virtud de acreditar el agotamiento de la reclamación administrativa, por cuanto en él la demandante no formuló los pedimentos que motivan la acción, como lo es la nulidad de su traslado al RAIS por la omisión en la información de la AFP Porvenir S.A., siendo diáfano que, como lo refiere Colpensiones, en el *examine* no se agotó el requisito de que trata el artículo 6º del CPT y de la SS (medio magnetofónico fl. 169).

4. A su turno, **la demandante MARÍA STELLA BETANCOURT interpuso recurso apelación**, exteriorizando como disidencia que,

la reclamación administrativa fue formulada en su oportunidad en el Departamento del Valle del Cauca, donde Colpensiones no recibe documentos adicionales al formulario de afiliación, ni siquiera por vía de correo electrónico, por ello es que la documental allegada con el expediente administrativo no contiene la solicitud que realmente se formuló. Añade que Colpensiones no contiene una matriz a nivel nacional y en el Valle del Cauca a las personas les hacen firmar un formulario, sin aceptar ningún tipo de comunicación disímil, el cual además es contestado en la misma fecha en que este se diligencia, de manera que la decisión del *a quo* desconoce el derecho defensa de la activa, más aun cuando muchos procesos que versan sobre la nulidad de traslado se han tramitado por la jurisdicción, respecto de las cuales a la fecha existen decisiones favorables.

5. Acto seguido el *A quo* concedió el recurso de alzada y procedió a remitir las diligencias a esta Colegiatura.

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA:

Surtido el traslado en los términos previstos por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 los extremos procesales se manifestaron indicando, en síntesis:

Parte demandante: Este extremo procesal aduce que el 5 de marzo de 2018, la actora presentó reclamación administrativa a Colpensiones, la cual fue registrada con el radicado No. 2018-2633377; que el mismo día la demandada respondió negativamente la reclamación administrativa, acotando que la entidad no tiene una opción para solicitar la nulidad de traslado, por lo que debía acudir a la opción de traslado de régimen, para que una vez negado lo anterior, pudiera formular ante la jurisdicción laboral la demanda respectiva de nulidad de traslado. En ese orden, solicita se declare que la demandante

cumplió con el requisito de reclamación administrativa ante Colpensiones y se continúe con el trámite del proceso.

Parte demandada: El apoderado de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** solicita la confirmación del auto proferido por el A Quo, aduciendo en síntesis que dentro del proceso la accionante no acreditó el cumplimiento de la reclamación administrativa ante Colpensiones previo a la presentación de la demanda, pues no se allegó escrito alguno radicado en dicha entidad frente a la solicitud de nulidad del traslado del régimen pensional. Agrega que la comunicación dirigida a COLPENSIONES y firmada por la accionante, se limita a un formulario de vinculación a la mencionada entidad, en el que se solicita la aplicación de la Sentencia SU-062 de la Corte Constitucional, sin realizar la petición de nulidad de traslado de régimen pensional por omisión al deber de información, por lo que con este documento no es viable considerar agotada la reclamación administrativa tal y como lo consideró el A Quo, ya que no existe certeza respecto de la identidad que debe haber entre la reclamación y las pretensiones de la demanda.

A su turno, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, al descorrer el traslado otorgado, indica que no es procedente declarar que el contrato de afiliación suscrito entre la demandante y las AFP convocada es nulo, toda vez que obran dentro del presente proceso medios de prueba documentales suficientes, los cuales conllevan a determinar que el traslado efectuado por la accionante al Régimen de Ahorro Individual, se llevó a cabo de manera libre y voluntaria, así como que el respectivo asesor del fondo privado, suministró la totalidad de la información clara y precisa, respecto de los efectos jurídicos que le acarrearía el trasladarse del Régimen de Prima media administrado por el Instituto de los Seguros Sociales, con destino al régimen de Ahorro Individual. Manifiesta que en ningún momento se logró observar vicio del consentimiento, ni por error, fuerza

o dolo, como quiera que la demandante siempre estuvo consciente de la afiliación que estaba realizando, sabía que se trataba del traslado de sus aportes en pensión, no fue obligada ni muchos menos se ejerció presión o fuerza para que se trasladara, y por último referente al dolo el cual es de resaltar que el mismo no se presume sino que se prueba, no hay prueba idónea y contundente que el asesor de manera dolosa y con la intensión de ocasionar un daño la indujo al traslado. Refiere que la demandante recibió toda la información necesaria para realizar el traslado, por ende, no se le vulneró ninguno de los derechos descritos en la parte petitoria de la demanda, *contrario sensu*, a la demandante se le respetó su derecho de afiliación al suscribir formulario con el RAIS.

Razón por la cual, procede la Sala a decidir previas las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Precisa la Sala que, en estricta consonancia con el recurso elevado, el problema jurídico por estudiar y resolver, se concreta en determinar si se encuentra llamada a prosperar la excepción previa de *«Falta de competencia por no agotamiento de Reclamación Administrativa»*, propuesta por Colpensiones.

FALTA DE COMPETENCIA POR NO AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA

Sobre el particular, y en lo que atañe al motivo de inconformidad expuesto por la parte recurrente, se constata que el artículo 6º del C.P.T y la S.S, modificado por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, establece que cualquier acción contenciosa que se trámite en contra de la Nación, entidades territoriales o cualquier otra entidad de la administración

pública, tan solo puede ser tramitada previa reclamación administrativa, la cual, consiste en el simple reclamo escrito elevado por el servidor público o el trabajador sobre el derecho que se pretenda.

Ahora, dicha reclamación ha sido concebida como la oportunidad que le confiere el legislador a la administración de enmendar su propio error, en aras de evitar los conflictos judiciales, instituyéndose así como una herramienta de autocomposición y corrección para la administración, siendo este el fin último de la reclamación administrativa, como de tiempo atrás lo puntualizó la Corporación de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral en sentencia con Rad. 12221 del 13 de octubre de 1999, al indicar *«De otro lado, como el fin último del agotamiento de la vía gubernativa es que la administración pública tenga la oportunidad de decidir de manera directa y autónoma si resulta procedente o no el reconocimiento de los derechos reclamados por el peticionario y de esta forma enmendar cualquier error que hubiera podido cometer sobre el particular, precaviendo a través del instrumento de la autocomposición un eventual pleito judicial (…)»*

Es por lo anterior, que la principal característica de la reclamación administrativa, radica en su falta de formalidad en tanto no se requiere que cumpla con ningún tipo de solemnidad para su presentación, de suerte que basta con cualquier tipo de escrito en el cual el accionante ponga de presente a la administración, las mismas pretensiones que servirán de sustento en el libelo introductorio. Criterio, asentado en reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral en sentencia con Rad. 12719 del 23 de febrero de 2000, M.P Carlos Isaac Nader, en la cual tuvo la oportunidad de precisar:

> *«Con todo, huelga resaltar que la demanda contra una entidad oficial, para su habilitación procesal y prosperidad, ha de guardar coherencia con el escrito de agotamiento de la vía gubernativa, de suerte que las pretensiones del libelo y su causa no resulten diferentes a las planteadas en forma directa a la empleadora, porque de lo contrario se afectaría el legítimo derecho de contradicción y defensa e, incluso, se violaría el principio de lealtad procesal» (Subrayado fuera de texto)*

Con todo, pese a la falta de formalidad que caracteriza a este requisito, su agotamiento cobra vital importancia para que pueda ser tramitado el proceso por la jurisdicción ordinaria laboral, por cuanto es un elemento que habilita al Juez Laboral para conocer del asunto en debate, al punto que de no agotarse, este carece de competencia para conocer de la *litis*, pues la jurisprudencia lo ha concebido como un factor de competencia, de manera que su falta de agotamiento redunda no solo la inadmisión de la demanda, sino su posterior rechazo de no superarse tal dislate jurídico. Así lo explica Alta Corporación de cierre en proveído Rad. 1221 del 13 de octubre de 1999 con ponencia del H. Magistrado German Valdés, reiterada en la sentencia del 24 de mayo de 2007, Rad. 30056 M.P Luis Javier Osorio, en la que se precisó:

> *«En cuanto a la naturaleza jurídico-procesal de la exigencia del agotamiento de la vía gubernativa en el procedimiento laboral, si bien para explicar la misma se han construido varias tesis, tales como asimilarla a un requisito de la demanda, o considerarla un presupuesto de la acción, o de calificarla como un factor de competencia, lo cierto es que la Jurisprudencia de la Sala Laboral siempre que se ha ocupado del tema se ha inclinado por esta última, esto es, que la misma constituye un factor de competencia para el juez laboral, pues mientras este procedimiento preprocesal no se lleve a cabo el Juez del Trabajo no puede aprehender el conocimiento del conflicto planteado» (subrayado fuera de texto)*

Es por lo anterior, que la mentada regla aplica para cualquier tipo de proceso que se eleve ante las entidades a las que hace referencia el artículo 6° del C.P.T y la S.S. Como lo dejó en claro la Corte Constitucional en sentencia C-792 de 2006 al estudiar la exequibilidad de la precitada norma, refiriendo frente al tema:

> *«(…)el artículo 6° del C.P.L.S.S. se adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad para la autotutela administrativa, porque al señalarse que la reclamación administrativa cuyo agotamiento es presupuesto para ocurrir ante la justicia ordinaria laboral, consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, la sustrae del ámbito del agotamiento de la vía gubernativa previsto en el C.C.A. como requisito para que los particulares puedan acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a demandar los actos administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto, para someterla a una regulación más general y sencilla, conforme a la cual, **en todos los eventos en que se pretenda demandar a una entidad pública ante la justicia ordinaria laboral, un presupuesto de procedibilidad de la acción es esa previa reclamación administrativa**» (Acentúa la Sala)*

Discernimiento que comparte la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, la cual siempre ha aludido que es indispensable agotar el requisito de la reclamación administrativa, cuando quiera que la demanda se dirija en contra de cualquiera de las entidades públicas a las que se refiere el artículo 6º del C.P.T y la S.S, siendo una obligación legal del Juez evaluar al momento de calificar la demanda, el lleno de este requisito. Así en sentencia con Rad. 30056 del 24 de mayo de 2007, M.P Luis Javier Osorio, indicó *«entonces, dado que la exigencia del artículo 6º del C. de P.L es un factor de competencia, y por ende un presupuesto procesal, la misma debe encontrarse satisfecha en el momento de la admisión de la demanda. Por tanto, cuando se pretenda una demanda contra alguna de las entidades públicas o sociales señaladas en la norma precitada es deber ineludible del juez laboral constatar, **antes de pronunciarse sobre la admisión de tal escrito introductorio**, que se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario previsto en dicho precepto, obligación procesal que el dispensador de justicia debe cumplir con sumo cuidado y acuciosidad»*

En claro lo precedente, es patente que la falladora de primera instancia declarara probada la excepción previa propuesta por Colpensiones, al constatar que no obra dentro del proceso la correspondiente reclamación administrativa, en la cual la actora pretendiera no solo la nulidad del traslado que efectuó del RPM al RAIS a través de la AFP Porvenir S.A., sino también el reconocimiento de la pensión de vejez a la luz de la Ley 100 de 1993, al ser estos los pedimentos que se formulan con la demanda, conforme se constata de los legajos visibles a folios 27 y 28 de las diligencias.

Lo anterior, habida consideración que de los anexos allegados con la demanda y del expediente administrativo contenido en el medio magnetofónico obrante a folio 169, solo se advierte un formulario de afiliación radicado el 5 de marzo de 2018 por la activa ante Colpensiones, en el cual se solicita el traslado desde la AFP Porvenir, que fue negado mediante comunicación de la misma fecha, por encontrarse la señora Betancourt a 10 años o menos de cumplir la edad mínima de pensión,

petición que claramente en nada coincide con las pretensiones que fueron formuladas en el *líbelo genitor*.

De manera que, resulta acertada la decisión de la falladora de primera instancia en cuanto declaró probado en medio exceptivo propuesto por la llamada a juicio, la cual no está llamada a ser modificada ni aun por los argumentos expuestos en la alzada, como lo es la negativa de Colpensiones de recibir la correspondiente reclamación administrativa, al ser ello una circunstancia que no encuentra ningún respaldo en los medios de convicción allegados a las diligencias y tampoco se encuentra aceptada por la convocada, pues frente a los hechos décimo primero y décimo segundo de la demanda, contestó únicamente que es cierto que la demandante presentó solicitud de traslado del RAIS al RPM, la cual le fue negada mediante Oficio BZ2018_2633377 del 5 de marzo de marzo de 2018.

Aunado a ello, tampoco se allegan al expediente aquellas decisiones a las que hace alusión al recurrente, y que según su dicho corresponden a procesos similares al que ocupa la atención de la Sala, en los que se aceptó como reclamación administrativa la radicación del formulario de afiliación ante Colpensiones.

Dimanando en la confirmación de la providencia aquí discutida.

COSTAS. Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,** Sala de Decisión Laboral,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Décimo (10º) Laboral del Circuito de Bogotá el 18 de mayo de 2021, dentro del

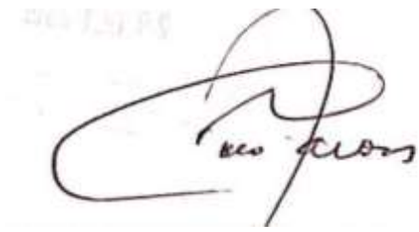
proceso ordinario laboral seguido por **MARÍA STELLA BETANCOURT contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES** y **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** por medio del cual declaró probada la excepción previa propuesta por Colpensiones, acorde con lo analizado.

SEGUNDO: COSTAS. Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

PROCESO SUMARIO **ORICA COLOMBIA S.A.S.** CONTRA **COOMEVA EPS S.A.**

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

Efectuado un estudio preliminar del presente asunto, se evidencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no es competente para resolver el *sub judice* sometido a escrutinio por la empresa Activos S.A.

Al punto, se evidencia que con arreglo a lo dispuesto en el numeral 1°, artículo 30 del Decreto 2462 de 2013 al establecer las funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, se precisó que será competente para resolver la apelación de las decisiones dictadas en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del domicilio del apelante.

Normatividad que en su literalidad impetró:

> *«**ARTÍCULO 30. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN.** Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, las siguientes:*
>
> *1. Conocer a petición de parte y fallar en derecho, con carácter definitivo, en primera instancia y con las facultades propias de un juez, los asuntos contemplados en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 y en las demás normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. **En caso que sus decisiones sean apeladas**, el competente para*

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

resolver el recurso, conforme a la normativa vigente ***será el Tribunal Superior del Distrito Judicial –Sala Laboral– del domicilio del apelante*** (…)» (resalta fuera de texto)

De manera que, al constatarse que la parte recurrente en el *examine* corresponde a **COOMEVA EPS S.A.,** empresa que conforme obra en certificado de existencia y representación legal contenido en el medio magnetofónico obrante a folio 61A, tiene su domicilio judicial en la carrera 100 No. 11-60 LC 250 Y 14 de Cali – Valle del Cauca, es que emana diáfana la falta de competencia por esta Corporación.

En consecuencia, se ordena por Secretaría **REMITIR DE CARÁCTER INMEDIATO** el expediente de la referencia a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali – Oficina de Reparto, para lo de su cargo.

Comuníquese esta decisión a las partes por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **39 2019 00308** 01
DEMANDANTE: LILIA ESPERANZA MORENO BECERRA
DEMANDADO: COLPENSIONES Y AFP PORVENIR S.A.

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la aclaración y corrección propuesta por la parte demandante a la sentencia proferida el 30 de junio de 2021, en el cual expone que *"el nombre de la demandante no corresponde a la señora LILIA ESPERANZA MORENO BECERRA."*

Sobre el particular, la aclaración y corrección, se consagró en los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso, así:

"ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.

ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

En ese horizonte, la aclaración de sentencia procede únicamente ante la verdadera duda frente a conceptos o frases, siempre y cuando estén inmersos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. Mientras que la corrección de providencia opera únicamente en los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, esto es, por errores netamente aritméticos, y siempre y cuando estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

Bajo ese prisma, la Sala encuentra oportuno realizar la aclaración de la sentencia proferida el 30 de junio de 2020, dado que el nombre determinado en el encabezado no corresponde al de la demandante LILIA ESPERANZA MORENO BECERRA.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: ACLARAR la sentencia del 30 de junio de 2021, en el sentido de señalar que el nombre de la demandante es LILIA ESPERANZA MORENO BECERRA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **28 2020 00314 01**
Demandante:	YUDE PARADA RINCÓN
Demandado:	PORVENIR S.A., SKANDIA S.A. y COLPENSIONES
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Se reconoce personería para actuar en representación de COLPENSIONES a la abogada ALIDA DEL PILAR MATEUS CIFUENTES, identificada con C.C. 37.627.008 y T.P. 221.228 del C.S. de la Judicatura, en los términos y fines del poder conferido.

Procede la Sala a analizar el recurso de apelación interpuesto por SKANDIA S.A, contra el auto proferido el 26 de abril de 2021 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual negó la solicitud de llamamiento en garantía.

I.- ANTECEDENTES:

La señora YUDE PARADA RINCÓN promovió demanda ordinaria laboral en contra de PORVENIR S.A., SKANDIA S.A. y COLPENSIONES, a efectos que se declare la ineficacia del traslado de régimen, y en razón de ello, se ordene a COLPENSIONES tenerla entre sus afiliados por pertenecer al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

COLPENSIONES al operar la *litis contestatio* se opuso a las pretensiones y propuso como medios exceptivos los denominados perfeccionamiento actos de relacionamiento, hecho de la víctima/afiliado, perfeccionamiento del acto existente, saneamiento nulidad, protección sostenibilidad fiscal y equilibrio financiero, inexistencia del derecho, pago de lo no debido, prescripción y caducidad y la innominada o genérica.

PORVENIR S.A. de igual forma, se opuso a los pedimentos y formuló como excepciones las de prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

SKANDIA S.A. a su turno se opuso a la prosperidad de las pretensiones atinentes a la ineficacia del traslado, proponiendo las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, SKANDIA S.A. no participó ni intervino en el momento de selección de régimen ni el traslado de fondo, la demandante se encuentra inhabilitada para el traslado de régimen en razón de la edad y tiempo cotizado, ausencia de configuración de causales de nulidad, inexistencia de violación al debido proceso para el momento de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ausencia de falta al deber de asesoría e información, los supuestos fácticos de este proceso no son iguales o similares ni siquiera parecidos al contexto de las sentencias invocadas por la demandante, prescripción, buena fe y genérica.

También allegó escrito de llamamiento en garantía respecto de la MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., en atención a los contratos de seguro provisional suscritos con dicha entidad.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

Mediante auto del 26 de abril de 2021, el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá tuvo por contestadas las demandas de las encartadas, y negó el llamamiento en garantía presentado por SKANDIA S.A.

Como fundamento de su determinación refirió que el seguro previsional al que hizo referencia SKANDIA S.A. fue adquirido para el eventual reconocimiento de una pensión de invalidez o sobrevivencia, rubro que forma parte dentro de los gastos de administración que en atención a los postulados emanados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia debe ser asumido por la administradora pensional a cargo de su mismo peculio.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión de primera instancia, SKANDIA S.A. ante la negativa de la prosperidad del llamamiento en garantía la apeló. Argumentó en su alzada que el objeto de las pretensiones de la demanda versan sobre la declaratoria de la ineficacia de la afiliación que realizara la demandante en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por lo que de proceder tal súplica, la consecuencia implicaría restituir las cosas al estado natural, esto es, como si nunca se hubiese celebrado el acto jurídico, de ahí que todos los aspectos que hubiesen surgido como consecuencia de dicho actuar quedarían sin efectos legales.

Que por tal razón, en cumplimiento de la obligación legal que le asiste de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, fue que celebró con MAPFRE COLOMBIA SEGUROS S.A. un contrato de seguro previsional destinado a amparar los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados al fondo obligatorio de pensiones, incluida la aquí demandante, por lo que es evidente que en caso de que la sentencia que ponga fin al presente asunto condene la devolución de la prima pagada como contraprestación legal por ese seguro, quien debe realizarla es la asegurada suscitada al llamamiento, pues fue precisamente la que recibió la prima pagada.

Refiere que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en eventos de ineficacias, que se deben reintegrar los gastos de administración y aseguramiento, y si bien tal decisión es controvertible según lo previsto en el ordenamiento jurídico

vigente, lo cierto es que, de proferirse condena, la devolución de la prima del seguro previsional debe estar dirigida contra MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente caso resulta procedente ordenar el llamamiento en garantía de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

a. Llamamiento en garantía:

En aras de desatar el objeto del debate resulta oportuno recordar que el llamamiento en garantía es una figura que permite a la parte convocada a litis convocar a juicio a un tercero, cuando se estime que este tiene la obligación legal de responder por la obligación que pudiere existir en cabeza suya. En tal sentir, el artículo 64 del C.G.P, aplicable a los juicios laborales por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S, reza:

> *"Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación".*

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL 5031-2019, Radicación No. 71196 del 9 de octubre de 2019, explicó que esta figura aplica cuando quiera que se corrobore que el llamado en garantía debe responder por el derecho que esta peticionando el libelista, donde precisó:

> *"Así, el aludido llamamiento se caracteriza porque una de las partes tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar en el juicio, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. Pero esa no es la única posibilidad, porque suele suceder, que el derecho a citar al tercero proviene de una relación diferente entre los dos, como cuando se discute en materia laboral, si el empleador se subrogó en la ARL en las prestaciones de ese sistema.*
>
> *"Aquí, lo importante es que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, pues eso es la esencial del término "garantía", esto es, protección o defensa contra el ataque de otro sujeto, que por Ley o por convención, el llamado debe salir a cubrir en nombre del llamante."*

Ahora bien, en el *sub-examine* alega el recurrente que MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A debe ser llamada en garantía en virtud del seguro previsional que fue suscrito con la misma y que en efecto corresponde a la Póliza No. 9201407000002.

No obstante lo anterior, no debe soslayarse que el juicio que hoy nos convoca gira en torno a establecer si es ineficaz o no el traslado de régimen pensional suscrito por la demandante con la AFP hoy demandada, para que en razón de ello, se ordene su traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin que para desatar tal controversia sea necesaria la vinculación de la entidad aseguradora y con ocasión del objeto de la póliza que se contrató con la misma, por manera que no cumple los requisitos exigidos por el legislador para tenerla como llamada en garantía.

De forma adicional no es dable establecer en el estudio del llamamiento en garantía el debate planteado por la AFP, esto es, que la devolución de los gastos de seguros previsionales debe correr a cargo de la aseguradora, en tanto tal situación se debe desatar en la sentencia que ponga fin al proceso, por lo que se reitera, no se advierte que se deba convocar en virtud del llamamiento en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Dimana de lo que se explica en líneas precedentes la indiscutible confirmación de la providencia recurrida. **SIN COSTAS** en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 26 de abril de 2021 por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral:	1100131050 **07 2018 00371 01**
Demandante:	ISABEL ANTONIETA CABRERA CALVACHE
Demandado:	COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Se reconoce personería a la abogada LINDA VANNESA BARRETO SANTAMARIA, identificada con C.C. 1.013.637.319 y T.P. 280.300 del C.S. de la J., para actuar en representación de COLPENSIONES con las facultades y fines en el poder otorgado.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A en contra del auto del 26 de marzo del 2021 proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual aprobó la liquidación de las costas.

1. TRÁMITE PROCESAL:

Agotadas la primera y segunda instancia, la secretaría del Juzgado primigenio liquidó las costas de primera instancia determinándolas en la suma de $1.817.052, las cuales fueron aprobadas mediante proveído del 26 de marzo del 2021 (Fl 302).

2. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de PROTECCIÓN S.A. presenta recurso de apelación en el que en suma indica que:

"En efecto, en dicho proveído nada se dispuso respecto de condena de las partes en proporción a su interés en el proceso, razón por la cual aquella suma se entiende distribuida por partes iguales entre todos los demandados (numeral 6° del artículo 365 del CGP), que para el caso fueron tres, por lo que la suma a cargo de cada uno de los demandados por concepto sería de $605.684,00.

"Tanto la primera decisión de su despacho como lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia, con la cual no se profirió condena en costas ante esta superioridad y tampoco se proporcionó la manera como deberían pagarse en primera instancia, guardan consonancia, razón por la cual cabe el argumento expuesto para la interposición del recurso que nos ocupa".

3. DEL PROBLEMA JURÍDICO:

Conforme con el numeral 12 del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., en concordancia con el numeral 5° del artículo 366 del C.G.P., el auto recurrido es apelable.

Por lo que el objeto principal de la presente decisión es determinar si la suma fijada por el Juzgado de primigenio como agencias en derecho en primera instancia se acompasa con las normas que regulan la materia.

4. CONSIDERACIONES:

Para desatar la controversia, es preciso indicar que para la fijación de las agencias en derecho, se debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado de la parte, así como la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que estas puedan exceder las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo dispone el artículo 366 del C.G.P.

En el presente caso, se tiene que el objeto de inconformidad planteado por PORTECCIÓN S.A. se centra en que se determine que el valor de las costas fijado por el fallador de primer grado en cuantía de $1.817.052, debe ser asumido por las tres entidades demandadas COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A y PORVENIR S.A, en cuantía de $605.684.

Sobre este punto, es necesario recordar las reglas establecidas por el legislador en materia de costas en el C.G.P., por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S. Al respecto el numeral 6° del articulo 365 del C.G.P, reza:

> *"6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderá distribuida por partes iguales entre ellos".*

En tal sentir, es preciso tener en cuenta que el propio legislador definió de forma clara que si el fallador no establece el valor de las costas a imponer a cada una de las partes que resultó vencida en el juicio, se asumirá que el monto que se indica debe ser cancelado por todas por un monto igual.

Al descender al *sub-examine* se tiene que esta Sala mediante sentencia del 30 de octubre del 2020 revocó el fallo que fue proferido en primera instancia el 7 de febrero del 2020 (Fl 282) y en su lugar, accedió a declarar la ineficacia de la afiliación y traslado, procediendo a fulminar condena en contra de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, disponiendo en lo que atañe a las costas, que las de primera instancia corrieran a cargo de las entidades accionadas.

A su turno, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá al momento de liquidar las costas estableció de forma clara:

> *"LIQUIDACIÓN:*
> *AGENCIAS EN DERECHO 1° INSTANCIA A CARGO DE COLPENSIONES*_____
> *$1.817.052*
> *AGENCIAS EN DERECHO 1° INSTANCIA A CARGO DE PROTECCIÓN*_____
> *$1.817.052*
> *AGENCIAS EN DERECHO 1° INSTANCIA A CARGO DE PROTECCIÓN*_____
> *$1.817.052"*

Liquidación que fue aprobada mediante el auto del 26 de marzo del 2021 (Fl 302), hoy recurrido.

En tal sentir, debe indicar la Sala que en el *sub-lite* es patente que el Juzgador definió de forma clara el monto de las costas que debía asumir cada una de las demandadas por valor de $1.817.052, sin que resulte acertado entrar a inferir, como lo pretende el recurrente, que acorde lo prescrito en el numeral 6° del artículo 365 del C.G.P, se deba entender que el valor de las costas corresponde únicamente al monto de $1.817.052 y que este debe ser asumido en partes iguales por las demandadas. Pues el legislador fue claro al referir que, tal regla tan solo se aplica en aquellos casos puntuales, en los cuales no se indique el monto que debe asumir cada una de las partes que resultó condenada en costas. Supuesto que no se cumple en este caso, por cuanto el Juzgado señaló de forma clara que este correspondía al monto que debía cancelar cada uno de las demandadas.

Aunado a lo anterior, vale la pena indicar que el presente proceso fue radicado el 6 de septiembre del 2017 (Fl 1). Por tanto, se tiene que la norma que regula la materia de las agencias en derecho es el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en el que se establece algunos criterios a tener en cuenta para su fijación, así:

> *"ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites".*

Aunado a lo anterior, se tiene que en el artículo 5° del precitado Acuerdo, se dispuso:

> *"ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:*
>
> *1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL*
> *"[…]*
>
> *"En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:*
> *(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.*
> *(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto.*

(iii) En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V."

Así las cosas, como en el presente asunto giró en torno a la declaratoria de ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, era dable al fallador de primer grado imponer el valor de las costas entre 1 y 10 S.M.L.M.V., por ende, las costas impuestas a cada una de las demandadas por valor de $1.817.052, se encuentran ajustadas a derecho.

Como corolario de lo anterior, se confirmará la decisión de primer grado.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMARN el auto proferido el 26 de marzo del 2021, acorde lo indicado en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Proceso Ejecutivo Laboral:	1100131050 **01 2019 01349 01**
Demandante:	MANUEL JOSÉ PARRA CÉSPEDES
Demandado:	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada en contra del auto proferido el 15 de octubre de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual libró mandamiento de pago y dispuso decretar el embargo y retención de unas sumas dinerarias.

I.- ANTECEDENTES:

El señor MANUEL JOSÉ PARRA CÉSPEDES promovió demanda ejecutiva en contra de la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, a efectos que se libre orden de pago cuyo título ejecutivo lo basa en una sentencia judicial debidamente ejecutoriada.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

En virtud de ello, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá en decisión adiada el 15 de octubre de 2020, libró orden de pago en la siguiente forma:

*"**PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO** POR VÍA LABORAL en favor de MANUEL JOSÉ PARRA CÉSPEDES y contra SEGUROS LA PREVISORA S.A., por las siguientes sumas y conceptos:*

***a)** Por el reajuste de la primera mesada pensional del demandante MANUEL PARRA CÉSPEDES, a partir de 1992. A la suma de $459.926, junto con los aumentos legales, causados año tras año.*

***b)** Como consecuencia del numeral inmediatamente anterior, condénese a la demandada SEGUROS LA PREVISORA S.A., a pagar al demandante MANUEL PARRA CÉSPEDES, las diferencias dinerarias causadas a partir del 09 de febrero de 2007, sumas estas que deberán pagarse debidamente indexadas.*

***c)** Sobre costas del proceso ejecutivo se decidirá en oportunidad.*

***SEGUNDO:** Sobre los anteriores valores téngase como pago la suma de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($540.533.019.19) conforme se evidencia en las órdenes de pago entregadas y vistas a folios No. 177, 218, por concepto de pago de condena y costas.*

***TERCERO: DECRETAR** EL EMBARGO Y RETENCIÓN de saldos bancarios (dineros) que los ejecutados posean o lleguen a poseer en cuentas de ahorros y/o corrientes de las tres primeras entidades financieras relacionadas a folio 181. **Ofíciese**. Previamente **préstese juramento** previsto en el artículo 101 CPTSS. Limítese la medida a la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.oo).*

***CUARTO: NOTIFICAR** a la ejecutada de conformidad con el artículo 108 CPTSS que al tenor dice: "Las providencias que se dicten en el curso de este proceso se notificarán por estados, SALVO LA PRIMERA QUE LO SERÁ PERSONALMENTE al ejecutado, y solo serán apelables en el efecto devolutivo". En concordancia con lo previsto en el parágrafo del artículo 41 del CPTSS.*

(…)"

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión la parte ejecutada presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Argumentó la alzada en el hecho que la suma que se ordenó imputar al proceso por valor de $530.533.019.91 fue consignada a través de depósito judicial en el Banco Agrario, lo que conlleva a que se

configure pago total de la obligación como se denota de las documentales que reposan en el plenario, de ahí que no se debió librar mandamiento de pago, ni mucho menos ordenar embargo alguno.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá mediante auto del 18 de junio de 2021 no accedió a la reposición, bajo el entendido que lo que pretende es el pago total de la obligación, lo cual constituye una excepción del mandamiento de pago la cual se interpuso incluso con el escrito de excepciones.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente asunto era procedente que el Juzgado de instancia librara mandamiento de pago atendiendo que la parte ejecutada insiste sobre un pago total de la condena que le fuese impuesta dentro del proceso ordinario.

c. Del caso en concreto:

Como ya se advirtió, lo pretendido por el extremo ejecutado es que se revoque la decisión emitida por el Juzgado de primera instancia atinente al mandamiento de pago adiado el 15 de octubre de 2020, recurso que no será atendible favorablemente en esta oportunidad como pasa a exponerse.

Se basa el apelante en el hecho que previo a que se librara orden de pago había cancelado en su totalidad la condena impuesta dentro del proceso ordinario laboral.

Ahora, precisa la Sala que si bien el proveído que decide sobre el mandamiento ejecutivo es susceptible de recurso de apelación de conformidad con lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 65 del C.P.T y de la S.S., lo cierto es que de efectuarse un análisis en esta oportunidad sobre la cancelación de las sumas dinerarias aludidas por el apelante, se estaría pretermitiendo la instancia propia del proceso ejecutivo y por demás el debido proceso de las partes, pues según se desprende del plenario, la pasiva adicional al hecho de interponer el recurso de apelación que aquí nos ocupa, también presentó ante el *a-quo* escrito de excepciones en los términos dispuestos en el 442 del C.G.P., aplicable por remisión analógica a la especialidad laboral conforme al precepto del artículo 145 del C.G.P., formulando las denominadas pago, inexistencia de la obligación, carencia de derecho, prescripción y cobro de lo no debido, medios exceptivos que en la actualidad no han sido objeto de resolución.

Por tal razón, la Sala considera que es en esa oportunidad procesal en la que el operador judicial debe hacer el análisis correspondiente en el que se determine si en efecto existe pago alegado, circunstancia por la cual, la Sala confirmará la decisión de primer grado.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 18 de junio de 2021 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Proceso Ejecutivo Laboral:	1100131050 **34 2019 00138 01**
Demandante:	MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA
Demandado:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONESPARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, contra el auto proferido el 9 de diciembre de 2019 por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, por medio del cual se libró mandamiento de pago.

I.- ANTECEDENTES:

La señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA promovió demanda ejecutiva laboral en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP, con la finalidad que se libre orden de pago cuyo título ejecutivo lo basa en una sentencia judicial debidamente ejecutoriada.

En el escrito de solicitud de orden de pago, relata la actora que el mandamiento debe ser librado sobre un valor de $251.346.631 por concepto de diferencia

pensional por el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2007 y el 25 de febrero de 2013, junto con el valor de $91.398.091 por concepto de indexación.

Lo anterior, con el argumento que las mesadas comprendidas por el interregno ya referido debieron reconocerse en un 62.64%, conforme lo ordenó la sentencia judicial dentro del proceso ordinario laboral, y no sobre un 31.32%, como quiera que DAVID PLATA ROJAS, quien actuó representado por su madre, presentó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes el 26 de febrero de 2016, de ahí que solo se podían reconocer mesadas retroactivas desde el 26 de febrero de 2013, atendiendo a que operó el fenómeno prescriptivo.

Al unísono, refirió que la encartada erró al realizar el cálculo de la indexación, en virtud a que se tomó como IPC final el de la ejecutoria de la sentencia que lo fue el 28 de marzo de 2014, cuando debió ser el de la última anualidad en la fecha del pago.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante proveído del 9 de diciembre de 2019 decidió:

> *"**PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** por la vía ejecutiva laboral, en favor de la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, por la suma de cincuenta y cinco millones quinientos nueve mil doscientos cincuenta y siete pesos ($55.509.257 M/CTE), por concepto de diferencias en el pago de la indexación del retroactivo pensional, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.*
>
> ***SEGUNDO: NEGAR LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** por concepto de diferencia pensional del periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2007 y el 25 de febrero de 2013, de conformidad con la parte considerativa del presente proveído.*

TERCERO: *Sobre las costas que se generen en la presente actuación se resolverá en su oportunidad procesal correspondiente.*

CUARTO: NOTIFICAR *de forma personal a la ejecutada, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 108 del CPTSS.*

QUINTO: ORDENAR *a la parte ejecutada dar cumplimiento a lo dispuesto en esta providencia y efectuar el pago de las sumas señaladas precedentemente en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 431 del CGP. Advirtiéndole además, que cuenta con el término de diez (10) días para proponer excepciones (artículo 442 CGP), término que correrá de manera concomitante.*

SEXTO: REQUERIR *a la apoderada de la parte ejecutante para que presente juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 101 del CPTSS.*

SÉPTIMO: NOTIFICAR *por la Secretaría del Despacho a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 612 del C.G.P. (Ley 1564 de 2012) y désele traslado haciendo entrega de copia de la solicitud de ejecución y de la presente providencia en medio magnético formato PDF para surtir dicha notificación por correo electrónico. En tal sentido, se* ***REQUIERE*** *a la parte ejecutante, allegar el CD contentivo de las piezas procesales antes mencionadas."*

Para arribar a dicha conclusión, manifestó la falladora de instancia que se allegó al plenario copia de la Resolución RDP 020406 del 25 de mayo de 2016, mediante la cual la entidad ejecutada le concedió al menor JUAN DAVID PLATA ROJAS la pensión de sobrevivientes causada por el deceso del señor JAIRO PLATA NARANJO (q.e.p.d.), por tener la calidad de hijo, al igual que reposa copia de la Resolución RDP 012260 del 9 de abril de 2018 que modificó la Resolución RDP 007225 del 23 de febrero de 2018, última que dispuso que en cumplimiento a la decisión judicial proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Descongestión Laboral del 28 de marzo de 2014, dentro del proceso ordinario laboral No. 2011-00004 que cursara en el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, se levantara el 50% dejado en suspenso en la Resolución RDP 048087 del 20 de diciembre de 2016, reconociendo a favor de la señora EMILIA CAMPO CORTÉS un 18.68% en calidad de cónyuge, y a favor de la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA un

31.32% también en calidad cónyuge, a partir del 4 de agosto de 2007, fecha en la cual falleció la señora MARCELINA NARANJO, quien se encontraba incluida en nómina de pensionados en calidad de beneficiaria del señor JAIRO PLATA NARANJO, como madre.

Que adicionalmente, la UGPP informó que en la nómina del mes de enero de 2017 se reportó a favor del joven JUAN DAVID PLATA ROJAS la mesada pensional del 50%, junto con las mesadas causadas desde el 5 de agosto de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2016, conforme a la liquidación que se anexó y que advierte que en efecto se desembolsó el retroactivo sobre dicho periodo.

Por tal razón, indicó la *a-quo* no ser posible librar orden de pago en favor de la señora MARTHA HERMINDA TARAZON PEÑA por el 62.64% de las mesadas pensionales causadas desde el 4 de agosto de 2007 y el 25 de febrero de 2013, en la medida que conforme a lo puntualizado por la UGPP, por vía administrativa a quien se le realizó el pago de dichas mesadas fue a JUAN DAVID PLATA ROJAS, de ahí que a la ejecutante le corresponda el 31.32%, sin que pueda ordenarse el doble pago respecto de un rubro que ya fue cancelado por parte de la entidad, máxime si no ha existido un pronunciamiento judicial que indique que las mesadas pensionales pretendidas por la actora respecto del mencionado interregno y que se le cancelaran a JUAN DAVID PLATA ROJAS como hijo del causante se encuentren prescritas, situación que por demás no fue objeto de controversia dentro del proceso ordinario laboral.

En lo que respecta a la solicitud de librar mandamiento de pago por concepto de indexación en la suma de $91.398.091, manifestó la operadora judicial que una vez realizados los cálculos correspondientes se pudo denotar que las mesadas que se cancelaron como retroactivo pensional no se encuentran debidamente liquidadas, en la medida que su pago se hizo en el año 2018 y el IPC que fue calculado no corresponde al de esa anualidad, pero precisando que tal indexación sería por el valor de $55.509.257.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión la parte ejecutante la apeló. Argumentó en primer lugar que atendiendo los postulados jurisprudenciales emanados por la Corte Constitucional, la sentencia judicial producida dentro del proceso ordinario laboral debe cumplirse a cabalidad, de ahí que la operadora judicial no pueda desconocer el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia como consecuencia del fallecimiento del señor JAIRO PLATA NARANJO (q.e.p.d.) sobre el 62.64%, pues nada se dijo que ese porcentaje debía tomarse en un 50%, con ocasión del reconocimiento otorgado a JUAN DAVID PLATA ROJAS en calidad de hijo del causante.

Frente a la indexación, sostuvo en su alzada el deber que en esta instancia se efectúe una revisión de la liquidación determinada por la *a-quo*, pues insiste que tal emolumento asciende a la suma de $91.398.091.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente asunto el mandamiento de pago librado por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá se ajustó a los preceptos contenidos en la decisión del proceso ordinario laboral con radicación No. 34-2011-00004 respecto del derecho pensional de sobrevivientes de la aquí ejecutante señora MARTHA HERMINDA TARAZONA

PEÑA, o si por el contrario, debe librarse orden de pago en los precisos términos pretendidos por la actora.

c. Del caso en concreto:

Sea lo primero indicar la procedencia del recurso de apelación frente al proveído que decidió sobre el mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 65 del C.P.T y de la S.S.

Ahora bien, no es objeto de reproche que: (i) la UGPP emitió la Resolución RDP 020406 del 25 de mayo de 2015 por medio de la cual le reconoció al menor JUAN DAVID PLATA ROJAS la pensión de sobrevivientes como hijo del causante (Fl. 692 a 691 – Expediente Digital); (ii) la Resolución RDP 012260 del 9 de abril de 2018 en la que modificó la Resolución RDP 007225 del 23 de febrero de 2018 y decidió lo siguiente:

> *"En cumplimiento al fallo proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL, de fecha 28 de marzo de 2014, reconocer la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor JAIRO PLATA NARANJO, ya identificado, y en consecuencia levantar 50% dejado en suspenso en la Resolución RDP 048087 del 20 de diciembre de 2016, a favor de la señora EMILIA CAMPO CORTÉS, en un porcentaje del 18.68%, en calidad de cónyuge, y a favor de la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA, en un porcentaje del 31.32%, en calidad de cónyuge, a partir del 4 de agosto de 2007, fecha en la cual falleció la señora MARCELINA NARANJO, quien se encontraba incluida en nómina de pensionados en calidad de beneficiaria del señor JAIRO PPLATA NARANJO, como madre del causante."* (Fls. 689 a 681 – Expediente Digital).

(iii) Que la UGPP informó al Juzgado de primera instancia que en la nómina del mes de enero de 2017 se reportó a favor de JUAN DAVID PLATA ROJAS la mesada pensional en un 50% junto con las mesadas causadas por el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2007 y el 31 de diciembre de 2016, conforme da cuenta la liquidación obrante a folios 741 a 742 del Expediente Digital.

Al unísono, advierte la Sala que confrontada la decisión final dentro del proceso ordinario laboral No. 34-2011-00004, en la que se determinó que la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor JAIRO PLATA NARANJO sería cancelada a la señora EMILIA CAMPPO CORTÉS en el $37.36%, y a la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA sobre un $62.64%.

A pesar de lo anterior, se advierte que en sede administrativa la encartada reconoció el 50% de la prestación al beneficiario JUAN DAVID PLATA ROJAS, quien acreditó la calidad de hijo menor del causante, aspecto que en atención de los presupuestos legales, por ostentar la calidad de menor de edad era procedente su inclusión a percibir el derecho que aquí se depreca, pues fue precisamente en sede administrativa que acreditó los requisitos necesarios, máxime si dentro del presente asunto no se refleja que por orden judicial previa se haya restringido el derecho a percibir la pensión.

En tal sentido, acertada resulta la decisión de la *a-quo* en considerar la disminución de la pensión reconocida a la aquí ejecutante MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA sobre el 31.32% de las mesadas pensionales por el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2007 y el 25 de febrero de 2013, aunado a que, de llegarse a reconocer el pago en la proporción pretendida, se estaría incurriendo en un doble pago de la mesada pensional ya solucionada a quien acreditó ser hijo del causante.

Tampoco puede refutar la ejecutante una prescripción de mesadas pensionales frente a las reconocidas a JUAN DAVID PLATA, pues se insiste, no obra decisión judicial que así lo comprenda.

En atención de lo expuesto, la Sala resalta que si bien existió una decisión judicial que ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA, la misma en ningún momento se está desconociendo, como quiera que, ante la comparecencia de JUAN DAVID PLATA en su calidad de hijo menor, era obligación de la entidad pronunciarse

sobre su derecho, lo que conlleva a que la decisión de primer grado se confirme por este aspecto.

De otra parte, pretende la ejecutante que se modifique la indexación determinada en primer grado, por cuanto estima que la misma asciende a la suma de $91.398.091, y no por el valor consignado en el mandamiento de pago, que asciende a la suma de $55.509.257.

Pues bien, confrontada la liquidación que realizara la *a-quo* (Fl. 751 – Expediente Digital), con la liquidación allegada por la UGPP (Fls. 746 a 748 – Expediente Digital), y que se circunscribe a la indexación de las mesadas pensionales que se cancelaron como retroactivo por el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2007 y el 30 de abril de 2018, se aprecia que los valores tomados por la operadora judicial, en especial los IPC de cada anualidad, se encuentran ajustados a derecho, por lo que la suma determinada por concepto de indexación del interregno enunciado, asciende en efecto a $55.509.257; circunstancia por la cual, la decisión de primer grado sobre la resolución del mandamiento de pago habrá de confirmarse en su integridad.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el auto proferido el 9 de diciembre de 2019 por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **30 2015 00220 01**
Demandante:	RICARDO BARBOSA BUSTOS
Demandado:	CORTAZAR Y GUTIÉRREZ LTDA, ASFALTOS LA HERRERA S.A.S., ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE MOVILIDAD UNIDAD ASMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Procede la Sala a analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión proferida el 27de julio del 2021 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, mediante la cual declaró probada la excepción previa de prescripción formulada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV.

I.- ANTECEDENTES:

El señor RICARDO BARBOSA BUSTOS promovió demanda ordinaria laboral en contra de CORTAZAR Y GUTIÉRREZ LTDA., ASFALTOS LA HERRERA S.A.S. y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV, a efectos de declararse que las dos primeras referidas conforman el CONSORCIO LUZ, así como la existencia de un contrato de trabajo por el periodo

comprendido entre el 22 de marzo de 2011 y el 21 de septiembre de 2012, de ahí que las demandadas deban reconocer y pagar de manera solidaria salarios, primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, indemnización de que trata el artículo 65 del C.S.T. y costas procesales.

Las demandadas CORTAZAR Y GUTIÉRREZ LTDA. y ASFALTOS LA HERRERA S.A.S. fueron representadas por curador *ad litem*.

Luego de notificada la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV, contestó la demanda presentando como medio exceptivo previo el de prescripción.

Argumentó la excepción bajo el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del C.G.P. aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral según lo regulado en el artículo 145 del C.P.T y de la S.S., el auto de notificación de la demanda deberá notificarse al sujeto pasivo dentro del año siguiente a la admisión de la misma.

Que por tal razón, el auto admisorio se profirió el 8 de abril de 2015, siendo notificado de este en forma electrónica el día 25 de junio de 2021 en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado en proveído del 31 de mayo de 2021, lo que significa que transcurrieron más de seis años desde la admisión de la demanda y la notificación, interregno suficiente para que este medio exceptivo goce de prosperidad.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá en diligencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. llevada a cabo el día 27 de julio de 2021, en la respectiva etapa de decisión de excepciones previas declaró probada la de prescripción.

Para arribar a dicha conclusión, indicó que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 94 del C.G.P., 151 del C.P.T. y de la S.S. y los artículos 488 y 489 del C.S.T., la parte demandante presentó la reclamación administrativa de que trata el artículo 6º del ya referido Estatuto Procesal del Trabajo ante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV el día 15 de enero de 2014.

Así las cosas, sostuvo el *a-quo* que las acreencias laborales perseguidas por el demandante se circunscriben al periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2011 y el 21 de septiembre de 2012, por lo que en principio el término prescriptivo operaría hasta el 21 de septiembre de 2015, pero en razón a que se presentó reclamación administrativa el 15 de enero de 2014, la prescripción se extendería hasta el 15 de enero de 2017.

Que no obstante, la parte accionante optó por interponer la demanda el 25 de marzo de 2015, admitiéndose el 8 de abril de 2015, lo que condujo a que se efectuara la interrupción según lo regulado en el artículo 94 del C.G.P., sin que se notificara a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV dentro del año siguiente, e incluso la parte activa dejó en suspenso las diligencias por un interregno superior a los seis meses, lo que denota la falta la falta de gestión, por lo que la excepción goza de prosperidad, pues tan solo se notificó mediante correo electrónico el 25 de junio de 2021, esto es, transcurriendo un lapso superior a los cinco años.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

La parte demandante apeló la decisión argumentando que si bien se excedió el término de prescripción con relación a la encartada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV, esa situación no le puede ser atribuible como quiera que el artículo 41 del C.P.T. y de la S.S. establece la forma de notificación de las entidades públicas, de ahí que fuese obligación del Juzgado adelantar la notificación de la pasiva, máxime si desde el *petitum*

claramente se estableció al sujeto demandado, incurriendo el Juzgado en la falencia de admitir la demanda en contra de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE MOBILIDAD, creyendo que esta era quien subsumía a la UMV.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones, las que se aportaron al plenario.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente caso goza de prosperidad la excepción previa de prescripción formulada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV.

a. Excepción previa de prescripción:

Destaca la Sala en primer lugar que el Estatuto Procesal del Trabajo en su artículo 32 dispone:

> *"ARTICULO 32. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.*
>
> *"Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia."*

Así las cosas, clara es la norma en reseñar la prosperidad de este medio exceptivo siempre y cuando no exista motivo de duda frente a la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión.

A diferencia de lo decidido por el fallador de instancia, a juicio de la Sala la excepción previa de prescripción no goza de vocación, pues las condiciones que envuelve el artículo 32 del C.P.T. y de la S.S. para su procedencia, en el caso *sub examine* no se presentan en la medida en que no puede hablarse de una pretensión exigible cuando la vinculación que se hace de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV lo es en calidad de responsable subsidiaria, frente a la cual se requiere, primeramente, que se determine la obligación a cargo del empleador y de contera, la existencia de la invocada solidaridad que por demás debe analizarse desde el aspecto final del proceso como lo es la sentencia que ponga fin a la instancia.

Tampoco se tiene certeza frente a la fecha de interrupción, precisamente atendiendo las discusiones suscitas en torno a la notificación de la demanda; circunstancia por la cual, en esas condiciones la excepción no puede analizarse como previa, siendo necesario que se postergue su estudio al análisis de fondo que se haga del asunto, ya que la existencia del *petitum* versa sobre la declaratoria de un contrato de trabajo, tópico que envuelve como repercusión un análisis probatorio en aras de determinarse si la modalidad contractual perseguida saldrá avante.

Es por ello, que al tenor de lo considerado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala logra colegir que no se presentaron los suficientes elementos de juicio para la procedencia de este medio exceptivo, aspecto que se denota en ciertas decisiones del órgano de cierre, siendo una de ellas la SL3693-2017, Radicación No. 56998 del 15 de marzo de 2017 en la que sostuvo:

> *"La ley procesal determina que las excepciones previas deben ser resueltas por el juez laboral en la audiencia pública de "conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio" (artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo*

39 de la Ley 712 de 2001). Por su parte, las excepciones de mérito deben ser decididas por el juez con la sentencia.

"Empero lo precedente, según la exposición de motivos de la Ley 712 de 2001, en aras de "la economía procesal y la descongestión judicial, y considerando el desarrollo que en el procedimiento civil han tenido las llamadas excepciones mixtas, se consagra un trámite especial para dos excepciones de mérito; la de prescripción y las de cosa juzgada, que podrán en ciertos casos decidirse en la primera audiencia de trámite" (negrillas fuera de texto).

"Así las cosas, no es que la ley permitió una mutación de la naturaleza jurídica de la excepción de prescripción, es decir, que haya cambiado de ser una excepción de fondo a dilatoria, sino que, se itera, por economía procesal y celeridad, al juez laboral le es dable resolverla en la primera audiencia de trámite, siempre y cuando, como lo establece el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 19 de la Ley 712 de 2001, "no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión".

"En este orden de ideas, para que el juez pueda decidir sobre la prescripción, al comienzo de la litis, no debe tener duda en cuanto a la claridad y existencia del derecho; pero si hay controversia en cuanto a la exigibilidad, interrupción o suspensión de la prescripción, la resolución de la misma debe esperar a la sentencia.

"Si el juzgador tiene la certeza que el derecho reclamado se extinguió por el paso del tiempo, por su inactividad, por medio de auto interlocutorio así lo debe declarar en la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y en este evento no le es dable retomar en el fallo el punto debatido.

"Pero, a contrario sensu, si el juez, como sucede en el sub examine, consideró que no tenía los suficientes elementos de juicio para decidir de entrada sobre la excepción de prescripción en la audiencia de trámite, era su deber legal pronunciarse sobre ella al momento de la sentencia. Resalta la Sala.

"De acuerdo con lo anterior, el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno al estudiar la excepción de prescripción, que había sido propuesta válidamente por la demandada como excepción de fondo, dentro de la contestación de la demanda."

Atendiendo lo expuesto, se revocará el auto que tuvo por probada la excepción previa de prescripción formulada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV, y en su lugar, disponer que la misma se estudie como perentoria o de fondo conforme se consideró en precedencia.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 27 de julio de 2021 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **DISPONER** que la excepción de prescripción sea estudiada como de mérito, por lo que el *a-quo* deberá continuar con el trámite procesal correspondiente sin desvincular del pleito a la demandada la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV lo que implica a su vez que no se excluya de la litis al referido sujeto.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

La apoderada de la **parte demandada SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, interpuso recurso extraordinario de casación, dentro del término de ejecutoria, contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia declaró la nulidad del traslado de régimen realizado por la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad realizado el 4 de marzo de 2003 por intermedio de Horizonte Hoy Porvenir S.A. y en consecuencia declaró como afiliaición valida la del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.

Por otra parte, condenó a la demandada a trasladar los aportes pensionales o cotizaciones o bonos pensionales con todos sus frutos e intereses sin deducción alguna por gastos de administración y seguro de invalidez y sobrevivencia contenida en la cuenta de ahorro individual de la demandante, asimismo, condenó a Colpensiones a activar la afiliación de la demandante en el régimen de prima media con prestación definida y proceda a actualizar la historia laboral de la misma; decisión que fue apelada por las demandadas, modificada, adicionada y confirmada en segunda instancia por esta Corporación.

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia en providencia CSJ AL, 13 mar. 2012, rad. 53798 reiterada en proveídos CSJ AL3805-2018 y CSJ AL2079-2019, señaló que los fondos privados administradores de pensiones no tienen interés para recurrir en casación, por lo siguiente:

> *(…) La carga económica que se impuso a la demandada, con la sentencia proferida por el ad quem se concreta al traslado al I.S.S. del valor de los saldos por concepto de: cotizaciones, rendimientos y bono pensional, que figuren en la cuenta de ahorro individual de la actora.*
>
> *De cara a la orden impartida por el Tribunal es claro que la demandada no sufre ningún perjuicio económico con la decisión proferida por el ad quem, si se tiene en cuenta que dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, rendimientos y bono pensional, aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien deben ser administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente, dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los afiliados al RAIS.*
>
> *Por tanto, los recursos que figuran en dicha subcuenta individual, las efectuó únicamente la demandante, tales como las cotizaciones, rendimientos financieros y bono pensional, que por tratarse de un traslado no hay lugar a redención, y por tanto, Radicación n.° 85430 SCLAJPT-06 V.00 6 continúa a cargo de la oficina de misma O.B.P del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estricta sujeción al espíritu, características y principios que informan el RAIS; de suerte que la convocada a juicio, no incurre en erogación alguna que sirva para determinar el importe de agravio o perjuicio que la sentencia puede estar ocasionándole (…).*[2]

Teniendo en cuenta el anterior criterio jurisprudencial asumido por la Sala de Casación Laboral, se observa que la **parte demandada SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.,** no tiene interés económico para recurrir en casación, dado que cuándo el ad quem decreto la nulidad del traslado y la entrega de los dineros a Colpensiones, no hizo otra cosa que ordenar al fondo privado retornar los dineros tales como cotizaciones, rendimientos y bono pensional, los cuales son de propiedad de la demandante.

A folio 224 y siguientes obra certificado de existencia y representación legal de Godoy Córdoba Abogados S.A.S. y escritura pública proferida por Porvenir S.A. donde se confiere poder a la Doctora **JUANITA ALEXANDRA SILVA TELLEZ** para actuar como apoderada de dicha parte.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

---

[2] Auto N. AL1223 del 24 de junio de 2020. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Magistrada Ponente. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A**

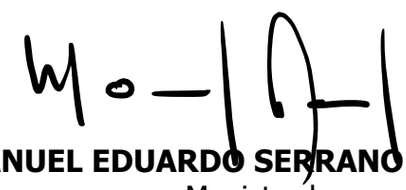
SEGUNDO: Reconózcase personería a la doctora **JUANITA ALEXANDRA SILVA TELLEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.023.967.067 y tarjeta profesional número 334.300 del C. S de la J, para representar judicialmente a la **parte demandada SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A**, en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 224 y siguientes.

TERCERO: En firme este proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrada



MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
Magistrado



LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

LPJR

H. MAGISTRADA DRA. **MARLENY RUEDA OLARTE**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310502820180053101,** informándole que la apoderado de la parte demandada **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, dentro del término de ejecutoria, interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Corporación el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinte (2020).

Asimismo, le informo que a folio 224 y siguientes obra certificado de existencia y representación legal de Godoy Córdoba Abogados S.A.S. y escritura pública proferida por Porvenir S.A. donde se confiere poder a la Doctora **JUANITA ALEXANDRA SILVA TELLEZ** para actuar como apoderada de dicha parte.

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

LINA PAOLA JIMÉNEZ ROMERO
Oficial Mayor

LPJR

H. MAGISTRADA DRA. MARLENY RUEDA OLARTE.

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **1100131 05 011201600643-01 Demandante: Alberto Margarito Montaño ;** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde **NO CASA** la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 20 de noviembre de 2018.

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2021.

CATERINE MATEUS PRECIADO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2021

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DRA. MARLENY RUEDA OLARTE.
Magistrado Ponente

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310503420130080801** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 23 d junio de 2015.

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501020180000601** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 21 de mayo de 2019.

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501720170080001** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, donde **ACEPTA DESISTIMIENTO** del recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 03 de diciembre de 2019.

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310500820170045501** informando que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Sala de Casación Laboral, declarando **BIEN DENEGADO** el recurso extraordinario de casación formulado por la apoderada de la demandante, contra la sentencia proferida por esta Corporación el **30 de julio de 2020.**

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501320160022501** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 12 de abril de 2018.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310503520160000701** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 30 de noviembre de 2017.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310500520150081301** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 24 de mayo de 2018, solo en cuanto absolvió del auxilio de cesantías. **NO SE CASA** en lo demás.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501020150005501** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 23 de noviembre de 2017.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Inclúyase la suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/C ($500.000) en que se estima el valor de las agencias en derecho, a cargo de la **demandada,** las cuales serán liquidadas en primera instancia de conformidad con lo previsto en el Artículo 366 del C.G.P.

3) En firme la presente providencia, devuélvanse las diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310502420150087601** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 05 de octubre de 2018.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310503420150083201** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 25 de enero de 2018.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501520150004201** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 18 de mayo de 2017.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501120160041001** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 20 de septiembre de 2018.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

AUDIENCIA PÚBLICA ESCRITURAL EN EL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE **TARSICIO HUMBERTO LEÓN TORRES** CONTRA **COLPENSIONES Y OTROS**

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: **DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS**

En Bogotá D.C, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Magistrado sustanciador la declaró abierta en asocio de los H. Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, en atención a los parámetros dispuestos por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020[1], así como las directrices del H. Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020*;* se corrió traslado a las partes en segunda instancia quienes tuvieron la oportunidad procesal de pronunciarse.

Acto seguido el Tribunal procede a dictar la siguiente,

---

[1] *«Artículo 15. Apelación en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitar así:*

1. *Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita.*

   Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

2. *Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito»*

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

P R O V I D E N C I A

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, **SKANDIA S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.,** contra el auto proferido por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de esta ciudad el 28 de julio de 2021, a través del cual se negó la solicitud de llamamiento en garantía solicitada por la parte accionada con escrito allegado el 23 de septiembre de 2020 (fl. 250 expediente digital).

ANTECEDENTES

1. **TARSICIO HUMBERTO LEÓN FLÓREZ,** por intermedio de apoderado judicial promovió demanda ordinaria laboral contra **COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A.** a fin que se declare la ineficacia del traslado de régimen efectuado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual, en el año 1995 y 2003 respectivamente.

2. Como consecuencia de las declaraciones pretendidas, reclama se condene a Skandia S.A a trasladar a Colpensiones los aportes realizados durante su vinculación en dicha entidad; se ordene a Colpensiones contabilizar las semanas cotizadas, se condene al reconocimiento de derechos conforme a las facultades ultra y extra petita; al pago de las costas y agencias en derecho.

3. Con auto del 28 de julio de 2021 se dio por contestadas las demandas de Colpensiones, Colfondos y Skandia, sin embargo, en el mismo proveído se negó la solicitud de llamamiento en

garantía formulado por Skandia Pensiones y Cesantías (fl. 441 Archivo 2020-276 ok).

4. El juez de conocimiento, al momento de resolver sobre el llamamiento en garantía solicitado, indicó que, de acuerdo a las presuntas resultas del proceso y a la naturaleza del mismo se podía establecer que "…*en una eventual condena a esa sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías, se ordenaría la devolución de los aportes que hubiere recibido de la demandante, mas no, de pagos de pólizas o contratos previsionales, pues el pago de esas pólizas o contratos esta a cargo de la sociedad administradora respectiva con el fin de garantizar a sus afiliados los pagos de las prestaciones económicas derivadas de los riesgos de invalidez, muerte o sobrevivientes, si se llegare a causar, no así, en una eventual condena dentro de un proceso como el que nos ocupa".*

5. Inconforme con la decisión del *A quo*, la apoderada de Skandia interpuso recurso de apelación contra el auto que negó el llamamiento reclamado.

6. La apelante alega que, en el caso de que fuese declarada la ineficacia del traslado se deberán restituir las cosas, por lo que, el contrato que se hubiesen suscrito del vínculo legal deberán quedar sin efecto también.

7. Que, al celebrarse un contrato de seguro previsional con Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., y al ser declarada la ineficacia es la aseguradora la encargada de hacer la devolución de este concepto y por ello, resulta imperativa su vinculación.

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA:

Surtido el traslado en los términos previstos por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 los extremos procesales se manifestaron indicando, en síntesis:

La apoderada de **Skandia S.A.**, señala que es procedente el llamamiento en garantía reclamado, ya que, en el eventual caso, sea declarada la nulidad o ineficacia de traslado efectuado por el demandante al RAIS, la consecuencia jurídica es restituir las cosas a su estado anterior, y consecuencia de ello, los actos o contratos derivado de dicho vínculo; que la administradora celebró un contrato con Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., y en caso de ordenarse la devolución de la prima pagada, la llamada a devolver dicha suma de dinero es la aseguradora y no la AFP.

Razón por la cual se remite el expediente para que se surta la apelación en esta instancia, por lo que bajo los anteriores presupuestos procede la Sala a decidir, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO

Precisa la Sala que, en estricta consonancia con el recurso elevado, el problema jurídico por estudiar y resolver, se concreta en determinar si es procedente admitir el llamamiento en garantía propuesto por la convocada a juicio SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Sobre el particular, y en lo que atañe al motivo de inconformidad expuesto por la parte recurrente, se constata que el artículo 64 del CGP al que se acude por remisión analógica del artículo 145 del CPT y de la SS, en relación con el llamamiento en garantía establece que: *«Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dice en el proceso que promueva o se le promueva, …, podrá pedir en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.»*

Al respecto, se advierte que a folio 255 del archivo 2020-276 del expediente digital, contiene la póliza No. 9201407000002 suscrito el 2 de enero de 2007 entre Skandia S.A., y Mapfre Colombia, en el que se aseguró "*AFILIADOS AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA Y AL FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA*", amparándose con dicha póliza los riesgos de muerte e invalidez por riesgo común, la cual fue renovada en forma anualiza desde dicha calenda.

Ahora bien, no pasa inadvertido esta Sala de Decisión que, en el enunciado convenio contractual, se estableció que se cubrirían los riesgos de muerte e invalidez de origen común, motivos que hacen concluir que la enunciada póliza no ampara ningún hecho relacionado en la demanda, es decir, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen y mucho menos el reconocimiento y pago de devolución de dineros, en el eventual caso, que estos fueran ordenados.

Consecuencia de lo anterior, es claro que en el presente caso no se encuentran reunidos los presupuestos para la procedencia del llamamiento en garantía establecido en el artículo 64 del CGP, dado que los riesgos contratados resultan disímiles a los aquí debatidos.

En ese orden, no se equivocó el Juzgado de primera instancia, al negar el llamamiento solicitado, pues es claro que la demandada busca exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, como lo establece la norma en mención, no siendo esta la jurisdicción competente para resolver sobre esa relación en caso de determinarse alguna condena respecto de la demandada.

Así las cosas, se confirmará el numeral cuarto del auto del 28 de julio de 2021.

COSTAS. Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,** Sala de Decisión Laboral,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral **CUARTO** del auto proferido por el Juzgado Diecisiete (17) Laboral del Circuito de Bogotá el 28 de julio de 2021, dentro del proceso ordinario laboral seguido por **TARSICIO HUMBERTO LEÓN TORRES** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, SKANDIA FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS y Otros**, de acuerdo a la parte motiva del presente proveído.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

SEGUNDO: COSTAS. Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

AUDIENCIA PÚBLICA ESCRITURAL EN EL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE **MARÍA STELLA BETANCOURT** CONTRA **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES** Y **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020).

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

En Bogotá D.C, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Magistrado sustanciador la declaró abierta en asocio de los H. Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, en atención a los parámetros dispuestos por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020[1], así como las directrices del H. Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020*;* se corrió traslado a las partes en segunda instancia quienes tuvieron la oportunidad procesal de pronunciarse.

A U T O

Conforme al memorial incorporado por correo electrónico, se reconoce personería adjetiva a **Alida del Pilar Mateus Cifuentes** identificada con cedula de ciudadanía No. 37.627.008 de Puente Nacional y tarjeta

---

[1] *«Artículo 15. Apelación en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitar así:*

1. *Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita.*

   Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

2. *Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito»*

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

profesional 221.228 del C.S. de la J., para que actúe en representación de Colpensiones, por sustitución concedida por la Dra. María Camila Bedoya García.

Igualmente, conforme al memorial incorporado por correo electrónico, se reconoce personería adjetiva a **Jorge Andrés Narváez Ramírez** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.020.819.595 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional 345.374 del C.S. de la J., para que actúe en representación de la AFP Porvenir S.A.

Acto seguido, el Tribunal procede a dictar la siguiente DECISIÓN ESCRITURAL,

P R O V I D E N C I A

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 18 de mayo de 2021 proferido por el Juzgado Décimo (10º) Laboral del Circuito de esta ciudad, por medio del cual declaró probada la excepción previa propuesta por Colpensiones que denominó *"Falta de Agotamiento de Reclamación Administrativa"*.

A N T E C E D E N T E S

1. La señora **MARÍA STELLA BETANCOURT,** a través de apoderado judicial, pretende se declare la nulidad del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que realizó a través de la AFP Porvenir, al igual que se encuentra afiliada al RPM administrado por Colpensiones; en consecuencia, se ordene a la AFP Porvenir S.A. girar a Colpensiones los aportes de su cuenta de ahorro individual; condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de la

pensión de vejez consagrada en la Ley 100 de 1993, junto con el retroactivo y la indexación. (folios 28 a 29).

2. La convocada a juicio, **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, al contestar el *libelo genitor*, formuló como excepción previa la que denominó *«Falta de Competencia por no Agotamiento de Reclamación Administrativa»*, la cual sustentó en que la accionante no dio estricto cumplimiento al artículo 6º del CPT y de la SS, en tanto que no acreditó la reclamación elevada ante la entidad, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión, no permitiéndole a la administradora del RPMPD conocer vía administrativa los supuestos fácticos y normativos en que se sustenta el *petitum* de la demanda, lo cual implica la falta de competencia del Juzgado para conocer el presente asunto, folio 52.

3. En audiencia pública virtual celebrada el 18 de mayo de 2021, el A quo resolvió declarar probado el medio exceptivo formulado por Colpensiones y terminar el proceso, junto con el archivo de las diligencias, al considerar que en el expediente obra formulario de afiliación diligenciando por la demandante a Colpensiones el 5 de marzo de 2018, por medio del cual pretendió su traslado de régimen pensional, que fue negado por la entidad mediante comunicación de la misma data, por encontrarse a menos de 10 años de la edad mínima de pensión; mismo que no tiene la virtud de acreditar el agotamiento de la reclamación administrativa, por cuanto en él la demandante no formuló los pedimentos que motivan la acción, como lo es la nulidad de su traslado al RAIS por la omisión en la información de la AFP Porvenir S.A., siendo diáfano que, como lo refiere Colpensiones, en el *examine* no se agotó el requisito de que trata el artículo 6º del CPT y de la SS (medio magnetofónico fl. 169).

4. A su turno, **la demandante MARÍA STELLA BETANCOURT interpuso recurso apelación**, exteriorizando como disidencia que,

la reclamación administrativa fue formulada en su oportunidad en el Departamento del Valle del Cauca, donde Colpensiones no recibe documentos adicionales al formulario de afiliación, ni siquiera por vía de correo electrónico, por ello es que la documental allegada con el expediente administrativo no contiene la solicitud que realmente se formuló. Añade que Colpensiones no contiene una matriz a nivel nacional y en el Valle del Cauca a las personas les hacen firmar un formulario, sin aceptar ningún tipo de comunicación disímil, el cual además es contestado en la misma fecha en que este se diligencia, de manera que la decisión del *a quo* desconoce el derecho defensa de la activa, más aun cuando muchos procesos que versan sobre la nulidad de traslado se han tramitado por la jurisdicción, respecto de las cuales a la fecha existen decisiones favorables.

5. Acto seguido el *A quo* concedió el recurso de alzada y procedió a remitir las diligencias a esta Colegiatura.

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA:

Surtido el traslado en los términos previstos por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 los extremos procesales se manifestaron indicando, en síntesis:

Parte demandante: Este extremo procesal aduce que el 5 de marzo de 2018, la actora presentó reclamación administrativa a Colpensiones, la cual fue registrada con el radicado No. 2018-2633377; que el mismo día la demandada respondió negativamente la reclamación administrativa, acotando que la entidad no tiene una opción para solicitar la nulidad de traslado, por lo que debía acudir a la opción de traslado de régimen, para que una vez negado lo anterior, pudiera formular ante la jurisdicción laboral la demanda respectiva de nulidad de traslado. En ese orden, solicita se declare que la demandante

cumplió con el requisito de reclamación administrativa ante Colpensiones y se continúe con el trámite del proceso.

Parte demandada: El apoderado de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** solicita la confirmación del auto proferido por el A Quo, aduciendo en síntesis que dentro del proceso la accionante no acreditó el cumplimiento de la reclamación administrativa ante Colpensiones previo a la presentación de la demanda, pues no se allegó escrito alguno radicado en dicha entidad frente a la solicitud de nulidad del traslado del régimen pensional. Agrega que la comunicación dirigida a COLPENSIONES y firmada por la accionante, se limita a un formulario de vinculación a la mencionada entidad, en el que se solicita la aplicación de la Sentencia SU-062 de la Corte Constitucional, sin realizar la petición de nulidad de traslado de régimen pensional por omisión al deber de información, por lo que con este documento no es viable considerar agotada la reclamación administrativa tal y como lo consideró el A Quo, ya que no existe certeza respecto de la identidad que debe haber entre la reclamación y las pretensiones de la demanda.

A su turno, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, al descorrer el traslado otorgado, indica que no es procedente declarar que el contrato de afiliación suscrito entre la demandante y las AFP convocada es nulo, toda vez que obran dentro del presente proceso medios de prueba documentales suficientes, los cuales conllevan a determinar que el traslado efectuado por la accionante al Régimen de Ahorro Individual, se llevó a cabo de manera libre y voluntaria, así como que el respectivo asesor del fondo privado, suministró la totalidad de la información clara y precisa, respecto de los efectos jurídicos que le acarrearía el trasladarse del Régimen de Prima media administrado por el Instituto de los Seguros Sociales, con destino al régimen de Ahorro Individual. Manifiesta que en ningún momento se logró observar vicio del consentimiento, ni por error, fuerza

o dolo, como quiera que la demandante siempre estuvo consciente de la afiliación que estaba realizando, sabía que se trataba del traslado de sus aportes en pensión, no fue obligada ni muchos menos se ejerció presión o fuerza para que se trasladara, y por último referente al dolo el cual es de resaltar que el mismo no se presume sino que se prueba, no hay prueba idónea y contundente que el asesor de manera dolosa y con la intensión de ocasionar un daño la indujo al traslado. Refiere que la demandante recibió toda la información necesaria para realizar el traslado, por ende, no se le vulneró ninguno de los derechos descritos en la parte petitoria de la demanda, *contrario sensu*, a la demandante se le respetó su derecho de afiliación al suscribir formulario con el RAIS.

Razón por la cual, procede la Sala a decidir previas las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Precisa la Sala que, en estricta consonancia con el recurso elevado, el problema jurídico por estudiar y resolver, se concreta en determinar si se encuentra llamada a prosperar la excepción previa de *«Falta de competencia por no agotamiento de Reclamación Administrativa»*, propuesta por Colpensiones.

FALTA DE COMPETENCIA POR NO AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA

Sobre el particular, y en lo que atañe al motivo de inconformidad expuesto por la parte recurrente, se constata que el artículo 6º del C.P.T y la S.S, modificado por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, establece que cualquier acción contenciosa que se trámite en contra de la Nación, entidades territoriales o cualquier otra entidad de la administración

pública, tan solo puede ser tramitada previa reclamación administrativa, la cual, consiste en el simple reclamo escrito elevado por el servidor público o el trabajador sobre el derecho que se pretenda.

Ahora, dicha reclamación ha sido concebida como la oportunidad que le confiere el legislador a la administración de enmendar su propio error, en aras de evitar los conflictos judiciales, instituyéndose así como una herramienta de autocomposición y corrección para la administración, siendo este el fin último de la reclamación administrativa, como de tiempo atrás lo puntualizó la Corporación de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral en sentencia con Rad. 12221 del 13 de octubre de 1999, al indicar *«De otro lado, como el fin último del agotamiento de la vía gubernativa es que la administración pública tenga la oportunidad de decidir de manera directa y autónoma si resulta procedente o no el reconocimiento de los derechos reclamados por el peticionario y de esta forma enmendar cualquier error que hubiera podido cometer sobre el particular, precaviendo a través del instrumento de la autocomposición un eventual pleito judicial (…)»*

Es por lo anterior, que la principal característica de la reclamación administrativa, radica en su falta de formalidad en tanto no se requiere que cumpla con ningún tipo de solemnidad para su presentación, de suerte que basta con cualquier tipo de escrito en el cual el accionante ponga de presente a la administración, las mismas pretensiones que servirán de sustento en el libelo introductorio. Criterio, asentado en reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral en sentencia con Rad. 12719 del 23 de febrero de 2000, M.P Carlos Isaac Nader, en la cual tuvo la oportunidad de precisar:

> *«Con todo, huelga resaltar que la demanda contra una entidad oficial, para su habilitación procesal y prosperidad, ha de guardar coherencia con el escrito de agotamiento de la vía gubernativa, de suerte que las pretensiones del libelo y su causa no resulten diferentes a las planteadas en forma directa a la empleadora, porque de lo contrario se afectaría el legítimo derecho de contradicción y defensa e, incluso, se violaría el principio de lealtad procesal» (Subrayado fuera de texto)*

Con todo, pese a la falta de formalidad que caracteriza a este requisito, su agotamiento cobra vital importancia para que pueda ser tramitado el proceso por la jurisdicción ordinaria laboral, por cuanto es un elemento que habilita al Juez Laboral para conocer del asunto en debate, al punto que de no agotarse, este carece de competencia para conocer de la *litis*, pues la jurisprudencia lo ha concebido como un factor de competencia, de manera que su falta de agotamiento redunda no solo la inadmisión de la demanda, sino su posterior rechazo de no superarse tal dislate jurídico. Así lo explica Alta Corporación de cierre en proveído Rad. 1221 del 13 de octubre de 1999 con ponencia del H. Magistrado German Valdés, reiterada en la sentencia del 24 de mayo de 2007, Rad. 30056 M.P Luis Javier Osorio, en la que se precisó:

> *«En cuanto a la naturaleza jurídico-procesal de la exigencia del agotamiento de la vía gubernativa en el procedimiento laboral, si bien para explicar la misma se han construido varias tesis, tales como asimilarla a un requisito de la demanda, o considerarla un presupuesto de la acción, o de calificarla como un factor de competencia, lo cierto es que la Jurisprudencia de la Sala Laboral siempre que se ha ocupado del tema se ha inclinado por esta última, esto es, que la misma constituye un factor de competencia para el juez laboral, pues mientras este procedimiento preprocesal no se lleve a cabo el Juez del Trabajo no puede aprehender el conocimiento del conflicto planteado» (subrayado fuera de texto)*

Es por lo anterior, que la mentada regla aplica para cualquier tipo de proceso que se eleve ante las entidades a las que hace referencia el artículo 6° del C.P.T y la S.S. Como lo dejó en claro la Corte Constitucional en sentencia C-792 de 2006 al estudiar la exequibilidad de la precitada norma, refiriendo frente al tema:

> *«(…)el artículo 6° del C.P.L.S.S. se adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad para la autotutela administrativa, porque al señalarse que la reclamación administrativa cuyo agotamiento es presupuesto para ocurrir ante la justicia ordinaria laboral, consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, la sustrae del ámbito del agotamiento de la vía gubernativa previsto en el C.C.A. como requisito para que los particulares puedan acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a demandar los actos administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto, para someterla a una regulación más general y sencilla, conforme a la cual, **en todos los eventos en que se pretenda demandar a una entidad pública ante la justicia ordinaria laboral, un presupuesto de procedibilidad de la acción es esa previa reclamación administrativa**» (Acentúa la Sala)*

Discernimiento que comparte la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, la cual siempre ha aludido que es indispensable agotar el requisito de la reclamación administrativa, cuando quiera que la demanda se dirija en contra de cualquiera de las entidades públicas a las que se refiere el artículo 6º del C.P.T y la S.S, siendo una obligación legal del Juez evaluar al momento de calificar la demanda, el lleno de este requisito. Así en sentencia con Rad. 30056 del 24 de mayo de 2007, M.P Luis Javier Osorio, indicó *«entonces, dado que la exigencia del artículo 6º del C. de P.L es un factor de competencia, y por ende un presupuesto procesal, la misma debe encontrarse satisfecha en el momento de la admisión de la demanda. Por tanto, cuando se pretenda una demanda contra alguna de las entidades públicas o sociales señaladas en la norma precitada es deber ineludible del juez laboral constatar, **antes de pronunciarse sobre la admisión de tal escrito introductorio**, que se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario previsto en dicho precepto, obligación procesal que el dispensador de justicia debe cumplir con sumo cuidado y acuciosidad»*

En claro lo precedente, es patente que la falladora de primera instancia declarara probada la excepción previa propuesta por Colpensiones, al constatar que no obra dentro del proceso la correspondiente reclamación administrativa, en la cual la actora pretendiera no solo la nulidad del traslado que efectuó del RPM al RAIS a través de la AFP Porvenir S.A., sino también el reconocimiento de la pensión de vejez a la luz de la Ley 100 de 1993, al ser estos los pedimentos que se formulan con la demanda, conforme se constata de los legajos visibles a folios 27 y 28 de las diligencias.

Lo anterior, habida consideración que de los anexos allegados con la demanda y del expediente administrativo contenido en el medio magnetofónico obrante a folio 169, solo se advierte un formulario de afiliación radicado el 5 de marzo de 2018 por la activa ante Colpensiones, en el cual se solicita el traslado desde la AFP Porvenir, que fue negado mediante comunicación de la misma fecha, por encontrarse la señora Betancourt a 10 años o menos de cumplir la edad mínima de pensión,

petición que claramente en nada coincide con las pretensiones que fueron formuladas en el *líbelo genitor*.

De manera que, resulta acertada la decisión de la falladora de primera instancia en cuanto declaró probado en medio exceptivo propuesto por la llamada a juicio, la cual no está llamada a ser modificada ni aun por los argumentos expuestos en la alzada, como lo es la negativa de Colpensiones de recibir la correspondiente reclamación administrativa, al ser ello una circunstancia que no encuentra ningún respaldo en los medios de convicción allegados a las diligencias y tampoco se encuentra aceptada por la convocada, pues frente a los hechos décimo primero y décimo segundo de la demanda, contestó únicamente que es cierto que la demandante presentó solicitud de traslado del RAIS al RPM, la cual le fue negada mediante Oficio BZ2018_2633377 del 5 de marzo de marzo de 2018.

Aunado a ello, tampoco se allegan al expediente aquellas decisiones a las que hace alusión al recurrente, y que según su dicho corresponden a procesos similares al que ocupa la atención de la Sala, en los que se aceptó como reclamación administrativa la radicación del formulario de afiliación ante Colpensiones.

Dimanando en la confirmación de la providencia aquí discutida.

COSTAS. Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,** Sala de Decisión Laboral,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Décimo (10º) Laboral del Circuito de Bogotá el 18 de mayo de 2021, dentro del

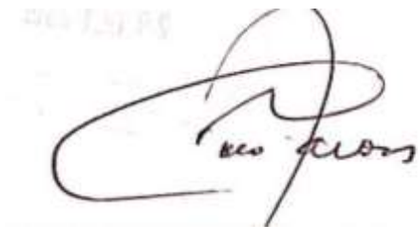
proceso ordinario laboral seguido por **MARÍA STELLA BETANCOURT contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES** y **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** por medio del cual declaró probada la excepción previa propuesta por Colpensiones, acorde con lo analizado.

SEGUNDO: COSTAS. Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

PROCESO SUMARIO **ORICA COLOMBIA S.A.S.** CONTRA **COOMEVA EPS S.A.**

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

Efectuado un estudio preliminar del presente asunto, se evidencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no es competente para resolver el *sub judice* sometido a escrutinio por la empresa Activos S.A.

Al punto, se evidencia que con arreglo a lo dispuesto en el numeral 1°, artículo 30 del Decreto 2462 de 2013 al establecer las funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, se precisó que será competente para resolver la apelación de las decisiones dictadas en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del domicilio del apelante.

Normatividad que en su literalidad impetró:

> *«**ARTÍCULO 30. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN.** Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, las siguientes:*
>
> *1. Conocer a petición de parte y fallar en derecho, con carácter definitivo, en primera instancia y con las facultades propias de un juez, los asuntos contemplados en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 y en las demás normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. **En caso que sus decisiones sean apeladas**, el competente para*

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

resolver el recurso, conforme a la normativa vigente ***será el Tribunal Superior del Distrito Judicial –Sala Laboral– del domicilio del apelante*** (…)» (resalta fuera de texto)

De manera que, al constatarse que la parte recurrente en el *examine* corresponde a **COOMEVA EPS S.A.,** empresa que conforme obra en certificado de existencia y representación legal contenido en el medio magnetofónico obrante a folio 61A, tiene su domicilio judicial en la carrera 100 No. 11-60 LC 250 Y 14 de Cali – Valle del Cauca, es que emana diáfana la falta de competencia por esta Corporación.

En consecuencia, se ordena por Secretaría **REMITIR DE CARÁCTER INMEDIATO** el expediente de la referencia a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali – Oficina de Reparto, para lo de su cargo.

Comuníquese esta decisión a las partes por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

AUDIENCIA PÚBLICA ESCRITURAL EN EL PROCESO EJECUTIVO LABORAL DE **JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN** CONTRA **ISRAEL LÓPEZ MORENO** (Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020).

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: DR. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Magistrado sustanciador la declaró abierta en asocio de los H. Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, en atención a los parámetros dispuestos por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 806 de 4 de junio de 2020[1], así como las directrices del H. Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020*;* se corrió traslado a las partes en segunda instancia quienes tuvieron la oportunidad procesal de pronunciarse.

Acto seguido, el Tribunal procede a dictar la siguiente DECISIÓN ESCRITURAL,

---

[1] *«Artículo 15. Apelación en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos dictados en materia laboral se tramitar así:*

1. *Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita.*

   Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

2. *Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito»*

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

P R O V I D E N C I A

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN, contra el auto del 6 de mayo de 2021 proferido por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Laboral del Circuito de esta ciudad, por medio del cual negó librar el mandamiento de pago solicitado.

A N T E C E D E N T E S

1. El señor **JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN**, obrando a nombre propio, demandó ejecutivamente a **ISRAEL LÓPEZ MORENO** para obtener el pago de la suma equivalente a 69,582 S.M.L.M.V. por concepto de honorarios por la prestación de servicios profesionales de abogado, costas y agencias en derecho, archivo 02 del expediente digital.

2. El *A quo* mediante providencia datada 6 de mayo de 2021 resolvió abstenerse de librar mandamiento de pago, por considerar que en el presente caso se allegó como título ejecutivo la prueba anticipada prevista en el artículo 184 del CGP, en concordancia con el artículo 422 *ejusdem*, que se adelantó ante el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil Municipal de Bogotá, la cual en verdad no reúne las condiciones de titulo base de recaudo, por cuanto ante la inasistencia del ejecutado para resolver el interrogatorio de parte, solo se aplicó la confesión presunta a las preguntas 4, 9, 10, 11, 12 y 13, siendo rechazadas las preguntas referidas al porcentaje de honorarios pactados y a la base sobre la cual estos se deben cuantificar. Concluyendo que el título ejecutivo, que, en este caso, es complejo, no refiere con claridad la obligación que se reclama por esta vía, y de contera carece de los atributos previstos en los artículos 422 del CGP y 100 del CPT y de la SS.

3. A su turno, la parte ejecutante **JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN impetró recurso de apelación** aduciendo para el efecto que*:*

> *«(…) Frente a un **TITULO COMPLEJO** considero respetuosamente no debe ceñirse el estudio y atención solamente en lo concerniente a la **PRUEBA ANTICIPADA DE INTERROGATORIO DE PARTE**, debe asumirse el estudio de los demás elementos de prueba y si es del caso se hecha por faltante alguno señalarlo de manera precisa otorgándome la oportunidad de aportarlo de encontrarse en mi poder o ser viable y posible su obtención.*
>
> *Su tajante determinación me sitúa en un limbo jurídico que de contera me niega el acceso a la justicia y me hace nugatoria la posibilidad de hacer valer mi legítimo, sagrado y fundamental **DERECHO AL TRABAJO**.*
>
> *El titulo compuesto por el **INTERROGATORIO DE PARTE y otros elementos de prueba que se adelantado (sic) ante el Juzgado 36 Civil Municipal** en cuanto a las preguntas que señala su señoría fueron rechazadas por no admitir prueba de confesión contienen el relato de diversas circunstancias que han rodeado mi gestión por algo más de **QUINCE (15) AÑOS** con ser su señoría que continúo **VELANDO POR LOS INTERESES del señor LOPEZ MORENO** sin recibir **NINGUNA REMUNERACIÓN PROFESIONAL**.*
>
> *El mencionado señor **LOPEZ MORENO** no atiende mis requerimientos, llamadas, razones sustrayéndose totalmente a su deber y obligación de **PAGAR MIS HONORARIOS PROFESIONALES.***
>
> *Tal vez no se aportó la sentencia emitida por la sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Bogotá en donde consta el monto de la condena, ni tampoco se aportó el expediente en su integridad que contiene la prueba anticipada, pero si se aportó **UNA CERTIFICACION (sic) DEBIDAMENTE EXPEDIDA POR EL JUZGADO SEXTO (6) DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD** en donde cursa en la actualidad el mencionado proceso y de la cual se extracta esencialmente mi inicio como abogado representante de víctima, mi desempeño, mi atención y cuidado frente al asunto encomendado por el señor **LOPEZ MORENO**.*
>
> *(…)*
>
> *Entre otras algo parecido a lo antes sintetizado se desprende de la certificación expedida por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad cuya aportación poco y nada revela la providencia que me permito atacar».*

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA:

Surtido el traslado en los términos previstos por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 los extremos procesales se manifestaron indicando, en síntesis:

Parte ejecutante: Advierte que formuló recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, no obstante, el Juzgado de Conocimiento procedió a desatar un recurso de reposición que no fue invocado. Indica que se limitó a solicitar lo que ha merecido por su labor durante más de 15 años, narrando de manera clara las diferentes instancias en que tuvo lugar la representación del ejecutado, acotando que no ha invocado las obligaciones derivadas de otras gestiones, sino solamente aquella que consta en el interrogatorio de parte y la certificación expedida por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Concluye indicando que, en el interrogatorio de parte quedó claro que la suma que corresponde a sus honorarios se pactó en el 20% del valor que se consignara mediante sentencia debidamente ejecutoriada por daños y perjuicios, los cuales fueron tasados por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal en 347.91 SMLMV.

Razón por la cual, procede la Sala a decidir previas las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

PROBLEMA JURÍDICO

Precisa la Sala que, en estricta consonancia con el recurso elevado, el problema jurídico por estudiar y resolver, se concreta en determinar sí, procede librar mandamiento de pago por concepto de honorarios profesionales de abogado, a tono con el título ejecutivo.

EJECUCIÓN HONORARIOS DE ABOGADO

De conformidad con los artículos 100 del Código de Procedimiento Laboral y 422 del CGP, para que una obligación sea exigible ejecutivamente se requiere que conste en documento que provenga del deudor o de su causante, o que emane de una sentencia judicial o arbitral en firme, o de

una conciliación, los cuales deben constituir plena prueba contra ese deudor y contener obligaciones expresas, claras y exigibles.

Es expresa cuando aparezca plenamente delimitada; es clara cuando todos sus elementos resultan completamente determinados en el título, es decir, que sea nítida sin asomo de ambigüedad, oscuridad o confusión y, es exigible cuando se encuentra en situación de pago por no estar sometida a plazo o condición, o si lo está, cuando se ha cumplido o acaecido el mismo.

En atención a lo anterior, la jurisprudencia y la doctrina han considerado que para librar mandamiento de pago basta examinar si el título ejecutivo realmente contiene una obligación clara, expresa y exigible contra el deudor, en todo su contenido sustancial, sin necesidad de indagación preliminar alguna, que no se preste a confusiones ni que su cumplimiento esté sujeto a plazo o condición o que estos hayan cesado en sus efectos.

En el *sub lite*, la demanda señala que la cuestión litigiosa planteada hace relación a la ejecución por sumas de dinero que emanan de un acuerdo de prestación de servicios profesionales de abogado celebrado entre las partes, y en virtud del cual el ejecutante ha actuado y representado al aquí ejecutado durante la fase de instrucción, juzgamiento y actual vigilancia de la condena impuesta al señor Horacio Enrique Daza Cuello, que tuvo lugar dentro del proceso penal 2012-00025, y sobre lo cual el poderdante se comprometió a pagar un 20% de la suma de dinero que se consignara como condena en sentencia debidamente ejecutoriada, que para el caso tuvo lugar el 26 de junio de 2013, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en la que se condenó al señor Horacio Enrique Daza Cuello a pagar al ejecutado en calidad de víctima, la cantidad equivalente a 397,41 SMLMV para el momento de los hechos, acaecidos en el año 2004.

Sobre el punto, debe advertirse que el pago de los honorarios pretendidos se encuentra supeditado al cumplimiento o ejecución por parte del actor de

la labor convenida, circunstancia que se acredita no solo con la existencia del contrato de prestación de servicios o del acuerdo de voluntades celebrado por ambas partes del cual emanen las obligaciones adquiridas por las mismas, sino también con la documental idónea que pruebe el cumplimiento de los servicios profesionales contratados, configurándose la existencia de un título ejecutivo complejo, aspecto que se predica para efectos de certificar los emolumentos otorgados por el contratante –ejecutado- con ocasión a la gestión.

Así las cosas, rogando se establezcan los honorarios profesionales con la documental obrante a folios 6 a 7 archivo 02 del expediente digital, atinentes a interrogatorio de parte dirigido a Israel López dentro del trámite de prueba extraprocesal de que trata el artículo 184 del CGP surtido ante el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil Municipal bajo el radicado 2020 00013, auto que fija fecha para llevar a cabo diligencia de interrogatorio de parte, actas de las audiencias celebradas los días 15 y 27 de julio de 2020 y certificación expedida por el Juez Sexto (6º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá sobre la gestión realizada por el apoderado Jorge Alfonso de Paz Rincón, fluye innegable que los citados no tienen la virtualidad de erigirse en un instrumento que preste mérito ejecutivo al tenor de lo previsto en el artículo 100 del CPTSS, en concordancia con el artículo 422 del estatuto instrumental Civil, esto es, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Y ello es así, porque el ejecutante pretende derivar la existencia de la obligación de representar en su condición de abogado al señor Israel López Moreno dentro del proceso 2012 00025 desde la fecha en que se le reconoció personería dentro de la fase de instrucción, es decir, desde el 20 de febrero de 2006, así como la remuneración a la que se comprometió a pagar el accionado, a partir del acta de fecha 27 de julio de 2020, que fue elevada con ocasión a la celebración de la audiencia de interrogatorio de parte como prueba extraprocesal y en la que el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil Municipal de Bogotá, tuvo por ciertas las preguntas 4, 9 11 y 13 del

mentado interrogatorio, sin allegar la grabación correspondiente de la diligencia, omitiendo por tanto, que el acta que se eleva con ocasión a la celebración de cualquier diligencia, no tiene la virtud de sustituir el medio de audio o audiovisual que contiene la actuación en ella adelantada.

Sobre el particular, adviértase que el artículo 46 del CPT y de la SS, sobre las actas y grabación de audiencias consagró:

> *«**Las audiencias serán grabadas con los medios técnicos que ofrezcan fidelidad y seguridad de registro,** los cuales deberán ser proporcionados por el Estado, o excepcionalmente, con los que las partes suministren.*
>
> *Si la audiencia es grabada, se consignará en el acta el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia.*
>
> *El acta será firmada por el juez y el secretario y de ella hará parte el formato de control de asistencia de quienes intervinieron.*
>
> *Cualquier interesado podrá solicitar una copia de las grabaciones o del acta, y para su obtención deberá proporcionar los medios necesarios para ello.*
>
> ***En ningún caso se hará la reproducción escrita de las grabaciones. Las grabaciones se incorporarán al expediente**».*

A su vez, el artículo 107 del CGP, previó en su numeral 4º que *«La actuación adelantada en una audiencia o diligencia se grabará en medios de audio, audiovisuales o en cualquiera otro que ofrezca seguridad para el registro de lo actuado».*

Igualmente, en el numeral 6º de la normatividad *ejusdem*, se consagró que:

> *«**Las intervenciones orales no podrán ser sustituidas por escritos**.*
>
> *El acta se limitará a consignar el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, la relación de los documentos que se hayan presentado y, en su caso, la parte resolutiva de la sentencia.*
>
> *Solo cuando se trate de audiencias o diligencias que deban practicarse por fuera del despacho judicial o cuando se presenten fallas en los medios de grabación, el juez podrá ordenar que las diligencias consten en actas **que***

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

sustituyan *el sistema de registro a que se refiere el numeral 4 anterior o que la complementen*».

Por manera que, aun cuando el artículo 100 del CPT y de la SS en concordancia con el artículo 422 del CGP previó que constituye título ejecutivo la confesión que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184 del CGP, no puede la Sala otórgale ese alcance únicamente al acta elevada con ocasión a la audiencia celebrada el 27 de julio de 2020, por el Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Bogotá dentro del trámite de interrogatorio de parte iniciada por JORGE ALFONSO DE PAZ RINCÓN contra ISRAEL LOPEZ MORENO, por cuanto la misma no se encuentra acompañada de la videograbación de la audiencia en referencia, que se *itera*, no está llamada a ser sustituida por tal acta.

A lo dicho, se suma que los demás documentales allegadas al informativo, corresponden o son relativas a la certificación emitida por el Juzgado Sexto (6º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en la que consta únicamente que dentro del proceso 2012 00025 el profesional del derecho Jorge Alfonso de Paz Rincón *«funge como apoderado del ciudadano Israel López Moreno, víctima dentro de las presentes diligencias, personería jurídica que le fue reconocida desde la fase de instrucción mediante auto 20 de febrero de 2006 por la Fiscal Setenta y Uno (71) Delegada, Unidad de Delitos Contra el Orden Económico y Social la Unidad Seccional de Fiscalías de Bogotá. Que de la revisión del proceso, desde la mencionada fecha el citado profesional del derecho ha presentado al señor Israel López Moreno continuamente y sin interrupción en todas las fases procesales, instrucción, juzgamiento y ejecución de la pena y no se evidenció que hubiese dentro del plenario por parte de su apoderado llamado de atención, requerimiento y/o señalamiento alguno que implique omisión o descuido respecto de su representación».*

Deviene de lo anterior, que de la documental allegada como soporte del recaudo ejecutivo, no se advierte que tales medios de convicción demuestren la existencia de una relación entre las partes con obligaciones

reciprocas de los contratantes, como tampoco si el actor llevó a cabo su gestión profesional **en las condiciones acordadas y conforme con los requisitos exigidos por el contrato de mandato**, que es la situación fáctica relevante para generar el pago de los honorarios que reclama, situación notable para asignarle mérito ejecutivo a los documentos aportados por la parte activa como título base de recaudo, pues se repite, el acta allegada a las diligencias no puede ser valorada en reemplazo de la audiencia celebrada el 27 de julio de 2020, amén que la certificación de la gestión del ejecutante no arroja ninguna luz sobre las condiciones en que las partes acordaron la prestación del servicio de abogado y su consecuente remuneración.

Por manera que, los medios de convicción arrimados en el proceso no tienen la virtualidad de erigirse en un instrumento que preste mérito ejecutivo al tenor de lo previsto en el artículo 100 del CPTSS, en concordancia con el artículo 422 del estatuto instrumental Civil, esto es, que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible, conclusión que además no se desconoce por el ejecutante, quien en su alzada insinuó que el Juzgado de Conocimiento debió inadmitir la demanda ejecutiva, a efectos de requerirle las documentales que le permitieran completar el título ejecutivo complejo, proceder que no es el que corresponde en el presente caso, como subsanada, cuando quiera que no reúna los requisitos formales de que tratan el artículo 25 y 26 del CPT y de la SS, los cuales en nada se encaminan a componer el título ejecutivo, que debe ser allegado por la parte ejecutante como carga que le impone la ley, sí pretende que a su favor se libre mandamiento de pago.

Dimanado en la confirmación del auto opugnado.

COSTAS.

Sin costas en la alzada.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**,

R E S U E L V E

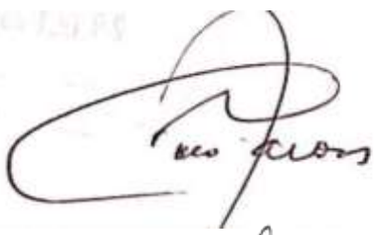
PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el día 6 de mayo de 2021, en el presente proceso ejecutivo laboral, acorde a lo manifestado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin lugar a costas en la instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **39 2019 00308** 01
DEMANDANTE: LILIA ESPERANZA MORENO BECERRA
DEMANDADO: COLPENSIONES Y AFP PORVENIR S.A.

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la aclaración y corrección propuesta por la parte demandante a la sentencia proferida el 30 de junio de 2021, en el cual expone que *"el nombre de la demandante no corresponde a la señora LILIA ESPERANZA MORENO BECERRA."*

Sobre el particular, la aclaración y corrección, se consagró en los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso, así:

"ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.

ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

En ese horizonte, la aclaración de sentencia procede únicamente ante la verdadera duda frente a conceptos o frases, siempre y cuando estén inmersos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. Mientras que la corrección de providencia opera únicamente en los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, esto es, por errores netamente aritméticos, y siempre y cuando estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

Bajo ese prisma, la Sala encuentra oportuno realizar la aclaración de la sentencia proferida el 30 de junio de 2020, dado que el nombre determinado en el encabezado no corresponde al de la demandante LILIA ESPERANZA MORENO BECERRA.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: ACLARAR la sentencia del 30 de junio de 2021, en el sentido de señalar que el nombre de la demandante es LILIA ESPERANZA MORENO BECERRA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral:	1100131050 **07 2018 00371 01**
Demandante:	ISABEL ANTONIETA CABRERA CALVACHE
Demandado:	COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Se reconoce personería a la abogada LINDA VANNESA BARRETO SANTAMARIA, identificada con C.C. 1.013.637.319 y T.P. 280.300 del C.S. de la J., para actuar en representación de COLPENSIONES con las facultades y fines en el poder otorgado.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A en contra del auto del 26 de marzo del 2021 proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual aprobó la liquidación de las costas.

1. TRÁMITE PROCESAL:

Agotadas la primera y segunda instancia, la secretaría del Juzgado primigenio liquidó las costas de primera instancia determinándolas en la suma de $1.817.052, las cuales fueron aprobadas mediante proveído del 26 de marzo del 2021 (Fl 302).

2. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de PROTECCIÓN S.A. presenta recurso de apelación en el que en suma indica que:

"En efecto, en dicho proveído nada se dispuso respecto de condena de las partes en proporción a su interés en el proceso, razón por la cual aquella suma se entiende distribuida por partes iguales entre todos los demandados (numeral 6° del artículo 365 del CGP), que para el caso fueron tres, por lo que la suma a cargo de cada uno de los demandados por concepto sería de $605.684,00.

"Tanto la primera decisión de su despacho como lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia, con la cual no se profirió condena en costas ante esta superioridad y tampoco se proporcionó la manera como deberían pagarse en primera instancia, guardan consonancia, razón por la cual cabe el argumento expuesto para la interposición del recurso que nos ocupa".

3. DEL PROBLEMA JURÍDICO:

Conforme con el numeral 12 del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., en concordancia con el numeral 5° del artículo 366 del C.G.P., el auto recurrido es apelable.

Por lo que el objeto principal de la presente decisión es determinar si la suma fijada por el Juzgado de primigenio como agencias en derecho en primera instancia se acompasa con las normas que regulan la materia.

4. CONSIDERACIONES:

Para desatar la controversia, es preciso indicar que para la fijación de las agencias en derecho, se debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado de la parte, así como la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que estas puedan exceder las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo dispone el artículo 366 del C.G.P.

En el presente caso, se tiene que el objeto de inconformidad planteado por PORTECCIÓN S.A. se centra en que se determine que el valor de las costas fijado por el fallador de primer grado en cuantía de $1.817.052, debe ser asumido por las tres entidades demandadas COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A y PORVENIR S.A, en cuantía de $605.684.

Sobre este punto, es necesario recordar las reglas establecidas por el legislador en materia de costas en el C.G.P., por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S. Al respecto el numeral 6° del articulo 365 del C.G.P, reza:

> *"6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderá distribuida por partes iguales entre ellos".*

En tal sentir, es preciso tener en cuenta que el propio legislador definió de forma clara que si el fallador no establece el valor de las costas a imponer a cada una de las partes que resultó vencida en el juicio, se asumirá que el monto que se indica debe ser cancelado por todas por un monto igual.

Al descender al *sub-examine* se tiene que esta Sala mediante sentencia del 30 de octubre del 2020 revocó el fallo que fue proferido en primera instancia el 7 de febrero del 2020 (Fl 282) y en su lugar, accedió a declarar la ineficacia de la afiliación y traslado, procediendo a fulminar condena en contra de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, disponiendo en lo que atañe a las costas, que las de primera instancia corrieran a cargo de las entidades accionadas.

A su turno, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá al momento de liquidar las costas estableció de forma clara:

> *"LIQUIDACIÓN:*
> *AGENCIAS EN DERECHO 1° INSTANCIA A CARGO DE COLPENSIONES*_____
> *$1.817.052*
> *AGENCIAS EN DERECHO 1° INSTANCIA A CARGO DE PROTECCIÓN*_____
> *$1.817.052*
> *AGENCIAS EN DERECHO 1° INSTANCIA A CARGO DE PROTECCIÓN*_____
> *$1.817.052"*

Liquidación que fue aprobada mediante el auto del 26 de marzo del 2021 (Fl 302), hoy recurrido.

En tal sentir, debe indicar la Sala que en el *sub-lite* es patente que el Juzgador definió de forma clara el monto de las costas que debía asumir cada una de las demandadas por valor de $1.817.052, sin que resulte acertado entrar a inferir, como lo pretende el recurrente, que acorde lo prescrito en el numeral 6° del artículo 365 del C.G.P, se deba entender que el valor de las costas corresponde únicamente al monto de $1.817.052 y que este debe ser asumido en partes iguales por las demandadas. Pues el legislador fue claro al referir que, tal regla tan solo se aplica en aquellos casos puntuales, en los cuales no se indique el monto que debe asumir cada una de las partes que resultó condenada en costas. Supuesto que no se cumple en este caso, por cuanto el Juzgado señaló de forma clara que este correspondía al monto que debía cancelar cada uno de las demandadas.

Aunado a lo anterior, vale la pena indicar que el presente proceso fue radicado el 6 de septiembre del 2017 (Fl 1). Por tanto, se tiene que la norma que regula la materia de las agencias en derecho es el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en el que se establece algunos criterios a tener en cuenta para su fijación, así:

> *"ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites".*

Aunado a lo anterior, se tiene que en el artículo 5° del precitado Acuerdo, se dispuso:

> *"ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:*
>
> *1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL*
> *"[…]*
>
> *"En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:*
> *(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.*
> *(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto.*

(iii) En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V."

Así las cosas, como en el presente asunto giró en torno a la declaratoria de ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, era dable al fallador de primer grado imponer el valor de las costas entre 1 y 10 S.M.L.M.V., por ende, las costas impuestas a cada una de las demandadas por valor de $1.817.052, se encuentran ajustadas a derecho.

Como corolario de lo anterior, se confirmará la decisión de primer grado.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMARN el auto proferido el 26 de marzo del 2021, acorde lo indicado en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Proceso Ejecutivo Laboral:	1100131050 **01 2019 01349 01**
Demandante:	MANUEL JOSÉ PARRA CÉSPEDES
Demandado:	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada en contra del auto proferido el 15 de octubre de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual libró mandamiento de pago y dispuso decretar el embargo y retención de unas sumas dinerarias.

I.- ANTECEDENTES:

El señor MANUEL JOSÉ PARRA CÉSPEDES promovió demanda ejecutiva en contra de la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, a efectos que se libre orden de pago cuyo título ejecutivo lo basa en una sentencia judicial debidamente ejecutoriada.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

En virtud de ello, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá en decisión adiada el 15 de octubre de 2020, libró orden de pago en la siguiente forma:

*"**PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO** POR VÍA LABORAL en favor de MANUEL JOSÉ PARRA CÉSPEDES y contra SEGUROS LA PREVISORA S.A., por las siguientes sumas y conceptos:*

***a)** Por el reajuste de la primera mesada pensional del demandante MANUEL PARRA CÉSPEDES, a partir de 1992. A la suma de $459.926, junto con los aumentos legales, causados año tras año.*

***b)** Como consecuencia del numeral inmediatamente anterior, condénese a la demandada SEGUROS LA PREVISORA S.A., a pagar al demandante MANUEL PARRA CÉSPEDES, las diferencias dinerarias causadas a partir del 09 de febrero de 2007, sumas estas que deberán pagarse debidamente indexadas.*

***c)** Sobre costas del proceso ejecutivo se decidirá en oportunidad.*

***SEGUNDO:** Sobre los anteriores valores téngase como pago la suma de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($540.533.019.19) conforme se evidencia en las órdenes de pago entregadas y vistas a folios No. 177, 218, por concepto de pago de condena y costas.*

***TERCERO: DECRETAR** EL EMBARGO Y RETENCIÓN de saldos bancarios (dineros) que los ejecutados posean o lleguen a poseer en cuentas de ahorros y/o corrientes de las tres primeras entidades financieras relacionadas a folio 181. **Ofíciese**. Previamente **préstese juramento** previsto en el artículo 101 CPTSS. Limítese la medida a la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.oo).*

***CUARTO: NOTIFICAR** a la ejecutada de conformidad con el artículo 108 CPTSS que al tenor dice: "Las providencias que se dicten en el curso de este proceso se notificarán por estados, SALVO LA PRIMERA QUE LO SERÁ PERSONALMENTE al ejecutado, y solo serán apelables en el efecto devolutivo". En concordancia con lo previsto en el parágrafo del artículo 41 del CPTSS.*

(…)"

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión la parte ejecutada presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Argumentó la alzada en el hecho que la suma que se ordenó imputar al proceso por valor de $530.533.019.91 fue consignada a través de depósito judicial en el Banco Agrario, lo que conlleva a que se

configure pago total de la obligación como se denota de las documentales que reposan en el plenario, de ahí que no se debió librar mandamiento de pago, ni mucho menos ordenar embargo alguno.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá mediante auto del 18 de junio de 2021 no accedió a la reposición, bajo el entendido que lo que pretende es el pago total de la obligación, lo cual constituye una excepción del mandamiento de pago la cual se interpuso incluso con el escrito de excepciones.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente asunto era procedente que el Juzgado de instancia librara mandamiento de pago atendiendo que la parte ejecutada insiste sobre un pago total de la condena que le fuese impuesta dentro del proceso ordinario.

c. Del caso en concreto:

Como ya se advirtió, lo pretendido por el extremo ejecutado es que se revoque la decisión emitida por el Juzgado de primera instancia atinente al mandamiento de pago adiado el 15 de octubre de 2020, recurso que no será atendible favorablemente en esta oportunidad como pasa a exponerse.

Se basa el apelante en el hecho que previo a que se librara orden de pago había cancelado en su totalidad la condena impuesta dentro del proceso ordinario laboral.

Ahora, precisa la Sala que si bien el proveído que decide sobre el mandamiento ejecutivo es susceptible de recurso de apelación de conformidad con lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 65 del C.P.T y de la S.S., lo cierto es que de efectuarse un análisis en esta oportunidad sobre la cancelación de las sumas dinerarias aludidas por el apelante, se estaría pretermitiendo la instancia propia del proceso ejecutivo y por demás el debido proceso de las partes, pues según se desprende del plenario, la pasiva adicional al hecho de interponer el recurso de apelación que aquí nos ocupa, también presentó ante el *a-quo* escrito de excepciones en los términos dispuestos en el 442 del C.G.P., aplicable por remisión analógica a la especialidad laboral conforme al precepto del artículo 145 del C.G.P., formulando las denominadas pago, inexistencia de la obligación, carencia de derecho, prescripción y cobro de lo no debido, medios exceptivos que en la actualidad no han sido objeto de resolución.

Por tal razón, la Sala considera que es en esa oportunidad procesal en la que el operador judicial debe hacer el análisis correspondiente en el que se determine si en efecto existe pago alegado, circunstancia por la cual, la Sala confirmará la decisión de primer grado.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 18 de junio de 2021 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **30 2015 00220 01**
Demandante:	RICARDO BARBOSA BUSTOS
Demandado:	CORTAZAR Y GUTIÉRREZ LTDA, ASFALTOS LA HERRERA S.A.S., ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE MOVILIDAD UNIDAD ASMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Procede la Sala a analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión proferida el 27de julio del 2021 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, mediante la cual declaró probada la excepción previa de prescripción formulada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV.

I.- ANTECEDENTES:

El señor RICARDO BARBOSA BUSTOS promovió demanda ordinaria laboral en contra de CORTAZAR Y GUTIÉRREZ LTDA., ASFALTOS LA HERRERA S.A.S. y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV, a efectos de declararse que las dos primeras referidas conforman el CONSORCIO LUZ, así como la existencia de un contrato de trabajo por el periodo

comprendido entre el 22 de marzo de 2011 y el 21 de septiembre de 2012, de ahí que las demandadas deban reconocer y pagar de manera solidaria salarios, primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, indemnización de que trata el artículo 65 del C.S.T. y costas procesales.

Las demandadas CORTAZAR Y GUTIÉRREZ LTDA. y ASFALTOS LA HERRERA S.A.S. fueron representadas por curador *ad litem*.

Luego de notificada la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV, contestó la demanda presentando como medio exceptivo previo el de prescripción.

Argumentó la excepción bajo el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del C.G.P. aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral según lo regulado en el artículo 145 del C.P.T y de la S.S., el auto de notificación de la demanda deberá notificarse al sujeto pasivo dentro del año siguiente a la admisión de la misma.

Que por tal razón, el auto admisorio se profirió el 8 de abril de 2015, siendo notificado de este en forma electrónica el día 25 de junio de 2021 en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado en proveído del 31 de mayo de 2021, lo que significa que transcurrieron más de seis años desde la admisión de la demanda y la notificación, interregno suficiente para que este medio exceptivo goce de prosperidad.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá en diligencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. llevada a cabo el día 27 de julio de 2021, en la respectiva etapa de decisión de excepciones previas declaró probada la de prescripción.

Para arribar a dicha conclusión, indicó que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 94 del C.G.P., 151 del C.P.T. y de la S.S. y los artículos 488 y 489 del C.S.T., la parte demandante presentó la reclamación administrativa de que trata el artículo 6º del ya referido Estatuto Procesal del Trabajo ante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV el día 15 de enero de 2014.

Así las cosas, sostuvo el *a-quo* que las acreencias laborales perseguidas por el demandante se circunscriben al periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2011 y el 21 de septiembre de 2012, por lo que en principio el término prescriptivo operaría hasta el 21 de septiembre de 2015, pero en razón a que se presentó reclamación administrativa el 15 de enero de 2014, la prescripción se extendería hasta el 15 de enero de 2017.

Que no obstante, la parte accionante optó por interponer la demanda el 25 de marzo de 2015, admitiéndose el 8 de abril de 2015, lo que condujo a que se efectuara la interrupción según lo regulado en el artículo 94 del C.G.P., sin que se notificara a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV dentro del año siguiente, e incluso la parte activa dejó en suspenso las diligencias por un interregno superior a los seis meses, lo que denota la falta la falta de gestión, por lo que la excepción goza de prosperidad, pues tan solo se notificó mediante correo electrónico el 25 de junio de 2021, esto es, transcurriendo un lapso superior a los cinco años.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

La parte demandante apeló la decisión argumentando que si bien se excedió el término de prescripción con relación a la encartada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV, esa situación no le puede ser atribuible como quiera que el artículo 41 del C.P.T. y de la S.S. establece la forma de notificación de las entidades públicas, de ahí que fuese obligación del Juzgado adelantar la notificación de la pasiva, máxime si desde el *petitum*

claramente se estableció al sujeto demandado, incurriendo el Juzgado en la falencia de admitir la demanda en contra de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE MOBILIDAD, creyendo que esta era quien subsumía a la UMV.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones, las que se aportaron al plenario.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente caso goza de prosperidad la excepción previa de prescripción formulada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV.

a. Excepción previa de prescripción:

Destaca la Sala en primer lugar que el Estatuto Procesal del Trabajo en su artículo 32 dispone:

> *"ARTICULO 32. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.*
>
> *"Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia."*

Así las cosas, clara es la norma en reseñar la prosperidad de este medio exceptivo siempre y cuando no exista motivo de duda frente a la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión.

A diferencia de lo decidido por el fallador de instancia, a juicio de la Sala la excepción previa de prescripción no goza de vocación, pues las condiciones que envuelve el artículo 32 del C.P.T. y de la S.S. para su procedencia, en el caso *sub examine* no se presentan en la medida en que no puede hablarse de una pretensión exigible cuando la vinculación que se hace de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV lo es en calidad de responsable subsidiaria, frente a la cual se requiere, primeramente, que se determine la obligación a cargo del empleador y de contera, la existencia de la invocada solidaridad que por demás debe analizarse desde el aspecto final del proceso como lo es la sentencia que ponga fin a la instancia.

Tampoco se tiene certeza frente a la fecha de interrupción, precisamente atendiendo las discusiones suscitas en torno a la notificación de la demanda; circunstancia por la cual, en esas condiciones la excepción no puede analizarse como previa, siendo necesario que se postergue su estudio al análisis de fondo que se haga del asunto, ya que la existencia del *petitum* versa sobre la declaratoria de un contrato de trabajo, tópico que envuelve como repercusión un análisis probatorio en aras de determinarse si la modalidad contractual perseguida saldrá avante.

Es por ello, que al tenor de lo considerado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala logra colegir que no se presentaron los suficientes elementos de juicio para la procedencia de este medio exceptivo, aspecto que se denota en ciertas decisiones del órgano de cierre, siendo una de ellas la SL3693-2017, Radicación No. 56998 del 15 de marzo de 2017 en la que sostuvo:

> *"La ley procesal determina que las excepciones previas deben ser resueltas por el juez laboral en la audiencia pública de "conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio" (artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo*

39 de la Ley 712 de 2001). Por su parte, las excepciones de mérito deben ser decididas por el juez con la sentencia.

"Empero lo precedente, según la exposición de motivos de la Ley 712 de 2001, en aras de "la economía procesal y la descongestión judicial, y considerando el desarrollo que en el procedimiento civil han tenido las llamadas excepciones mixtas, se consagra un trámite especial para dos excepciones de mérito; la de prescripción y las de cosa juzgada, que podrán en ciertos casos decidirse en la primera audiencia de trámite" (negrillas fuera de texto).

"Así las cosas, no es que la ley permitió una mutación de la naturaleza jurídica de la excepción de prescripción, es decir, que haya cambiado de ser una excepción de fondo a dilatoria, sino que, se itera, por economía procesal y celeridad, al juez laboral le es dable resolverla en la primera audiencia de trámite, siempre y cuando, como lo establece el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 19 de la Ley 712 de 2001, "no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión".

"En este orden de ideas, para que el juez pueda decidir sobre la prescripción, al comienzo de la litis, no debe tener duda en cuanto a la claridad y existencia del derecho; pero si hay controversia en cuanto a la exigibilidad, interrupción o suspensión de la prescripción, la resolución de la misma debe esperar a la sentencia.

"Si el juzgador tiene la certeza que el derecho reclamado se extinguió por el paso del tiempo, por su inactividad, por medio de auto interlocutorio así lo debe declarar en la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y en este evento no le es dable retomar en el fallo el punto debatido.

"Pero, a contrario sensu, si el juez, como sucede en el sub examine, consideró que no tenía los suficientes elementos de juicio para decidir de entrada sobre la excepción de prescripción en la audiencia de trámite, era su deber legal pronunciarse sobre ella al momento de la sentencia. Resalta la Sala.

"De acuerdo con lo anterior, el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno al estudiar la excepción de prescripción, que había sido propuesta válidamente por la demandada como excepción de fondo, dentro de la contestación de la demanda."

Atendiendo lo expuesto, se revocará el auto que tuvo por probada la excepción previa de prescripción formulada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV, y en su lugar, disponer que la misma se estudie como perentoria o de fondo conforme se consideró en precedencia.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 27 de julio de 2021 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **DISPONER** que la excepción de prescripción sea estudiada como de mérito, por lo que el *a-quo* deberá continuar con el trámite procesal correspondiente sin desvincular del pleito a la demandada la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UMV lo que implica a su vez que no se excluya de la litis al referido sujeto.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **28 2020 00314 01**
Demandante:	YUDE PARADA RINCÓN
Demandado:	PORVENIR S.A., SKANDIA S.A. y COLPENSIONES
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Se reconoce personería para actuar en representación de COLPENSIONES a la abogada ALIDA DEL PILAR MATEUS CIFUENTES, identificada con C.C. 37.627.008 y T.P. 221.228 del C.S. de la Judicatura, en los términos y fines del poder conferido.

Procede la Sala a analizar el recurso de apelación interpuesto por SKANDIA S.A, contra el auto proferido el 26 de abril de 2021 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual negó la solicitud de llamamiento en garantía.

I.- ANTECEDENTES:

La señora YUDE PARADA RINCÓN promovió demanda ordinaria laboral en contra de PORVENIR S.A., SKANDIA S.A. y COLPENSIONES, a efectos que se declare la ineficacia del traslado de régimen, y en razón de ello, se ordene a COLPENSIONES tenerla entre sus afiliados por pertenecer al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

COLPENSIONES al operar la *litis contestatio* se opuso a las pretensiones y propuso como medios exceptivos los denominados perfeccionamiento actos de relacionamiento, hecho de la víctima/afiliado, perfeccionamiento del acto existente, saneamiento nulidad, protección sostenibilidad fiscal y equilibrio financiero, inexistencia del derecho, pago de lo no debido, prescripción y caducidad y la innominada o genérica.

PORVENIR S.A. de igual forma, se opuso a los pedimentos y formuló como excepciones las de prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

SKANDIA S.A. a su turno se opuso a la prosperidad de las pretensiones atinentes a la ineficacia del traslado, proponiendo las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, SKANDIA S.A. no participó ni intervino en el momento de selección de régimen ni el traslado de fondo, la demandante se encuentra inhabilitada para el traslado de régimen en razón de la edad y tiempo cotizado, ausencia de configuración de causales de nulidad, inexistencia de violación al debido proceso para el momento de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ausencia de falta al deber de asesoría e información, los supuestos fácticos de este proceso no son iguales o similares ni siquiera parecidos al contexto de las sentencias invocadas por la demandante, prescripción, buena fe y genérica.

También allegó escrito de llamamiento en garantía respecto de la MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., en atención a los contratos de seguro provisional suscritos con dicha entidad.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

Mediante auto del 26 de abril de 2021, el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá tuvo por contestadas las demandas de las encartadas, y negó el llamamiento en garantía presentado por SKANDIA S.A.

Como fundamento de su determinación refirió que el seguro previsional al que hizo referencia SKANDIA S.A. fue adquirido para el eventual reconocimiento de una pensión de invalidez o sobrevivencia, rubro que forma parte dentro de los gastos de administración que en atención a los postulados emanados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia debe ser asumido por la administradora pensional a cargo de su mismo peculio.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión de primera instancia, SKANDIA S.A. ante la negativa de la prosperidad del llamamiento en garantía la apeló. Argumentó en su alzada que el objeto de las pretensiones de la demanda versan sobre la declaratoria de la ineficacia de la afiliación que realizara la demandante en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por lo que de proceder tal súplica, la consecuencia implicaría restituir las cosas al estado natural, esto es, como si nunca se hubiese celebrado el acto jurídico, de ahí que todos los aspectos que hubiesen surgido como consecuencia de dicho actuar quedarían sin efectos legales.

Que por tal razón, en cumplimiento de la obligación legal que le asiste de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, fue que celebró con MAPFRE COLOMBIA SEGUROS S.A. un contrato de seguro previsional destinado a amparar los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados al fondo obligatorio de pensiones, incluida la aquí demandante, por lo que es evidente que en caso de que la sentencia que ponga fin al presente asunto condene la devolución de la prima pagada como contraprestación legal por ese seguro, quien debe realizarla es la asegurada suscitada al llamamiento, pues fue precisamente la que recibió la prima pagada.

Refiere que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en eventos de ineficacias, que se deben reintegrar los gastos de administración y aseguramiento, y si bien tal decisión es controvertible según lo previsto en el ordenamiento jurídico

vigente, lo cierto es que, de proferirse condena, la devolución de la prima del seguro previsional debe estar dirigida contra MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente caso resulta procedente ordenar el llamamiento en garantía de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

a. Llamamiento en garantía:

En aras de desatar el objeto del debate resulta oportuno recordar que el llamamiento en garantía es una figura que permite a la parte convocada a litis convocar a juicio a un tercero, cuando se estime que este tiene la obligación legal de responder por la obligación que pudiere existir en cabeza suya. En tal sentir, el artículo 64 del C.G.P, aplicable a los juicios laborales por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S, reza:

> *"Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación".*

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL 5031-2019, Radicación No. 71196 del 9 de octubre de 2019, explicó que esta figura aplica cuando quiera que se corrobore que el llamado en garantía debe responder por el derecho que esta peticionando el libelista, donde precisó:

> *"Así, el aludido llamamiento se caracteriza porque una de las partes tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar en el juicio, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. Pero esa no es la única posibilidad, porque suele suceder, que el derecho a citar al tercero proviene de una relación diferente entre los dos, como cuando se discute en materia laboral, si el empleador se subrogó en la ARL en las prestaciones de ese sistema.*
>
> *"Aquí, lo importante es que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, pues eso es la esencial del término "garantía", esto es, protección o defensa contra el ataque de otro sujeto, que por Ley o por convención, el llamado debe salir a cubrir en nombre del llamante."*

Ahora bien, en el *sub-examine* alega el recurrente que MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A debe ser llamada en garantía en virtud del seguro previsional que fue suscrito con la misma y que en efecto corresponde a la Póliza No. 9201407000002.

No obstante lo anterior, no debe soslayarse que el juicio que hoy nos convoca gira en torno a establecer si es ineficaz o no el traslado de régimen pensional suscrito por la demandante con la AFP hoy demandada, para que en razón de ello, se ordene su traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin que para desatar tal controversia sea necesaria la vinculación de la entidad aseguradora y con ocasión del objeto de la póliza que se contrató con la misma, por manera que no cumple los requisitos exigidos por el legislador para tenerla como llamada en garantía.

De forma adicional no es dable establecer en el estudio del llamamiento en garantía el debate planteado por la AFP, esto es, que la devolución de los gastos de seguros previsionales debe correr a cargo de la aseguradora, en tanto tal situación se debe desatar en la sentencia que ponga fin al proceso, por lo que se reitera, no se advierte que se deba convocar en virtud del llamamiento en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Dimana de lo que se explica en líneas precedentes la indiscutible confirmación de la providencia recurrida. **SIN COSTAS** en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 26 de abril de 2021 por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CUARTA LABORAL

Proceso Ejecutivo Laboral:	1100131050 **34 2019 00138 01**
Demandante:	MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA
Demandado:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONESPARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, contra el auto proferido el 9 de diciembre de 2019 por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, por medio del cual se libró mandamiento de pago.

I.- ANTECEDENTES:

La señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA promovió demanda ejecutiva laboral en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP, con la finalidad que se libre orden de pago cuyo título ejecutivo lo basa en una sentencia judicial debidamente ejecutoriada.

En el escrito de solicitud de orden de pago, relata la actora que el mandamiento debe ser librado sobre un valor de $251.346.631 por concepto de diferencia

pensional por el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2007 y el 25 de febrero de 2013, junto con el valor de $91.398.091 por concepto de indexación.

Lo anterior, con el argumento que las mesadas comprendidas por el interregno ya referido debieron reconocerse en un 62.64%, conforme lo ordenó la sentencia judicial dentro del proceso ordinario laboral, y no sobre un 31.32%, como quiera que DAVID PLATA ROJAS, quien actuó representado por su madre, presentó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes el 26 de febrero de 2016, de ahí que solo se podían reconocer mesadas retroactivas desde el 26 de febrero de 2013, atendiendo a que operó el fenómeno prescriptivo.

Al unísono, refirió que la encartada erró al realizar el cálculo de la indexación, en virtud a que se tomó como IPC final el de la ejecutoria de la sentencia que lo fue el 28 de marzo de 2014, cuando debió ser el de la última anualidad en la fecha del pago.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante proveído del 9 de diciembre de 2019 decidió:

> *"**PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** por la vía ejecutiva laboral, en favor de la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, por la suma de cincuenta y cinco millones quinientos nueve mil doscientos cincuenta y siete pesos ($55.509.257 M/CTE), por concepto de diferencias en el pago de la indexación del retroactivo pensional, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.*
>
> ***SEGUNDO: NEGAR LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** por concepto de diferencia pensional del periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2007 y el 25 de febrero de 2013, de conformidad con la parte considerativa del presente proveído.*

TERCERO: *Sobre las costas que se generen en la presente actuación se resolverá en su oportunidad procesal correspondiente.*

CUARTO: NOTIFICAR *de forma personal a la ejecutada, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 108 del CPTSS.*

QUINTO: ORDENAR *a la parte ejecutada dar cumplimiento a lo dispuesto en esta providencia y efectuar el pago de las sumas señaladas precedentemente en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 431 del CGP. Advirtiéndole además, que cuenta con el término de diez (10) días para proponer excepciones (artículo 442 CGP), término que correrá de manera concomitante.*

SEXTO: REQUERIR *a la apoderada de la parte ejecutante para que presente juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 101 del CPTSS.*

SÉPTIMO: NOTIFICAR *por la Secretaría del Despacho a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 612 del C.G.P. (Ley 1564 de 2012) y désele traslado haciendo entrega de copia de la solicitud de ejecución y de la presente providencia en medio magnético formato PDF para surtir dicha notificación por correo electrónico. En tal sentido, se* ***REQUIERE*** *a la parte ejecutante, allegar el CD contentivo de las piezas procesales antes mencionadas."*

Para arribar a dicha conclusión, manifestó la falladora de instancia que se allegó al plenario copia de la Resolución RDP 020406 del 25 de mayo de 2016, mediante la cual la entidad ejecutada le concedió al menor JUAN DAVID PLATA ROJAS la pensión de sobrevivientes causada por el deceso del señor JAIRO PLATA NARANJO (q.e.p.d.), por tener la calidad de hijo, al igual que reposa copia de la Resolución RDP 012260 del 9 de abril de 2018 que modificó la Resolución RDP 007225 del 23 de febrero de 2018, última que dispuso que en cumplimiento a la decisión judicial proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Descongestión Laboral del 28 de marzo de 2014, dentro del proceso ordinario laboral No. 2011-00004 que cursara en el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, se levantara el 50% dejado en suspenso en la Resolución RDP 048087 del 20 de diciembre de 2016, reconociendo a favor de la señora EMILIA CAMPO CORTÉS un 18.68% en calidad de cónyuge, y a favor de la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA un

31.32% también en calidad cónyuge, a partir del 4 de agosto de 2007, fecha en la cual falleció la señora MARCELINA NARANJO, quien se encontraba incluida en nómina de pensionados en calidad de beneficiaria del señor JAIRO PLATA NARANJO, como madre.

Que adicionalmente, la UGPP informó que en la nómina del mes de enero de 2017 se reportó a favor del joven JUAN DAVID PLATA ROJAS la mesada pensional del 50%, junto con las mesadas causadas desde el 5 de agosto de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2016, conforme a la liquidación que se anexó y que advierte que en efecto se desembolsó el retroactivo sobre dicho periodo.

Por tal razón, indicó la *a-quo* no ser posible librar orden de pago en favor de la señora MARTHA HERMINDA TARAZON PEÑA por el 62.64% de las mesadas pensionales causadas desde el 4 de agosto de 2007 y el 25 de febrero de 2013, en la medida que conforme a lo puntualizado por la UGPP, por vía administrativa a quien se le realizó el pago de dichas mesadas fue a JUAN DAVID PLATA ROJAS, de ahí que a la ejecutante le corresponda el 31.32%, sin que pueda ordenarse el doble pago respecto de un rubro que ya fue cancelado por parte de la entidad, máxime si no ha existido un pronunciamiento judicial que indique que las mesadas pensionales pretendidas por la actora respecto del mencionado interregno y que se le cancelaran a JUAN DAVID PLATA ROJAS como hijo del causante se encuentren prescritas, situación que por demás no fue objeto de controversia dentro del proceso ordinario laboral.

En lo que respecta a la solicitud de librar mandamiento de pago por concepto de indexación en la suma de $91.398.091, manifestó la operadora judicial que una vez realizados los cálculos correspondientes se pudo denotar que las mesadas que se cancelaron como retroactivo pensional no se encuentran debidamente liquidadas, en la medida que su pago se hizo en el año 2018 y el IPC que fue calculado no corresponde al de esa anualidad, pero precisando que tal indexación sería por el valor de $55.509.257.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión la parte ejecutante la apeló. Argumentó en primer lugar que atendiendo los postulados jurisprudenciales emanados por la Corte Constitucional, la sentencia judicial producida dentro del proceso ordinario laboral debe cumplirse a cabalidad, de ahí que la operadora judicial no pueda desconocer el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia como consecuencia del fallecimiento del señor JAIRO PLATA NARANJO (q.e.p.d.) sobre el 62.64%, pues nada se dijo que ese porcentaje debía tomarse en un 50%, con ocasión del reconocimiento otorgado a JUAN DAVID PLATA ROJAS en calidad de hijo del causante.

Frente a la indexación, sostuvo en su alzada el deber que en esta instancia se efectúe una revisión de la liquidación determinada por la *a-quo*, pues insiste que tal emolumento asciende a la suma de $91.398.091.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente asunto el mandamiento de pago librado por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá se ajustó a los preceptos contenidos en la decisión del proceso ordinario laboral con radicación No. 34-2011-00004 respecto del derecho pensional de sobrevivientes de la aquí ejecutante señora MARTHA HERMINDA TARAZONA

PEÑA, o si por el contrario, debe librarse orden de pago en los precisos términos pretendidos por la actora.

c. Del caso en concreto:

Sea lo primero indicar la procedencia del recurso de apelación frente al proveído que decidió sobre el mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 65 del C.P.T y de la S.S.

Ahora bien, no es objeto de reproche que: (i) la UGPP emitió la Resolución RDP 020406 del 25 de mayo de 2015 por medio de la cual le reconoció al menor JUAN DAVID PLATA ROJAS la pensión de sobrevivientes como hijo del causante (Fl. 692 a 691 – Expediente Digital); (ii) la Resolución RDP 012260 del 9 de abril de 2018 en la que modificó la Resolución RDP 007225 del 23 de febrero de 2018 y decidió lo siguiente:

> *"En cumplimiento al fallo proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL, de fecha 28 de marzo de 2014, reconocer la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor JAIRO PLATA NARANJO, ya identificado, y en consecuencia levantar 50% dejado en suspenso en la Resolución RDP 048087 del 20 de diciembre de 2016, a favor de la señora EMILIA CAMPO CORTÉS, en un porcentaje del 18.68%, en calidad de cónyuge, y a favor de la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA, en un porcentaje del 31.32%, en calidad de cónyuge, a partir del 4 de agosto de 2007, fecha en la cual falleció la señora MARCELINA NARANJO, quien se encontraba incluida en nómina de pensionados en calidad de beneficiaria del señor JAIRO PPLATA NARANJO, como madre del causante."* (Fls. 689 a 681 – Expediente Digital).

(iii) Que la UGPP informó al Juzgado de primera instancia que en la nómina del mes de enero de 2017 se reportó a favor de JUAN DAVID PLATA ROJAS la mesada pensional en un 50% junto con las mesadas causadas por el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2007 y el 31 de diciembre de 2016, conforme da cuenta la liquidación obrante a folios 741 a 742 del Expediente Digital.

Al unísono, advierte la Sala que confrontada la decisión final dentro del proceso ordinario laboral No. 34-2011-00004, en la que se determinó que la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor JAIRO PLATA NARANJO sería cancelada a la señora EMILIA CAMPPO CORTÉS en el $37.36%, y a la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA sobre un $62.64%.

A pesar de lo anterior, se advierte que en sede administrativa la encartada reconoció el 50% de la prestación al beneficiario JUAN DAVID PLATA ROJAS, quien acreditó la calidad de hijo menor del causante, aspecto que en atención de los presupuestos legales, por ostentar la calidad de menor de edad era procedente su inclusión a percibir el derecho que aquí se depreca, pues fue precisamente en sede administrativa que acreditó los requisitos necesarios, máxime si dentro del presente asunto no se refleja que por orden judicial previa se haya restringido el derecho a percibir la pensión.

En tal sentido, acertada resulta la decisión de la *a-quo* en considerar la disminución de la pensión reconocida a la aquí ejecutante MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA sobre el 31.32% de las mesadas pensionales por el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2007 y el 25 de febrero de 2013, aunado a que, de llegarse a reconocer el pago en la proporción pretendida, se estaría incurriendo en un doble pago de la mesada pensional ya solucionada a quien acreditó ser hijo del causante.

Tampoco puede refutar la ejecutante una prescripción de mesadas pensionales frente a las reconocidas a JUAN DAVID PLATA, pues se insiste, no obra decisión judicial que así lo comprenda.

En atención de lo expuesto, la Sala resalta que si bien existió una decisión judicial que ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a la señora MARTHA HERMINDA TARAZONA PEÑA, la misma en ningún momento se está desconociendo, como quiera que, ante la comparecencia de JUAN DAVID PLATA en su calidad de hijo menor, era obligación de la entidad pronunciarse

sobre su derecho, lo que conlleva a que la decisión de primer grado se confirme por este aspecto.

De otra parte, pretende la ejecutante que se modifique la indexación determinada en primer grado, por cuanto estima que la misma asciende a la suma de $91.398.091, y no por el valor consignado en el mandamiento de pago, que asciende a la suma de $55.509.257.

Pues bien, confrontada la liquidación que realizara la *a-quo* (Fl. 751 – Expediente Digital), con la liquidación allegada por la UGPP (Fls. 746 a 748 – Expediente Digital), y que se circunscribe a la indexación de las mesadas pensionales que se cancelaron como retroactivo por el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2007 y el 30 de abril de 2018, se aprecia que los valores tomados por la operadora judicial, en especial los IPC de cada anualidad, se encuentran ajustados a derecho, por lo que la suma determinada por concepto de indexación del interregno enunciado, asciende en efecto a $55.509.257; circunstancia por la cual, la decisión de primer grado sobre la resolución del mandamiento de pago habrá de confirmarse en su integridad.

SIN COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el auto proferido el 9 de diciembre de 2019 por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

La apoderada de la **parte demandada SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, interpuso recurso extraordinario de casación, dentro del término de ejecutoria, contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia declaró la nulidad del traslado de régimen realizado por la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad realizado el 4 de marzo de 2003 por intermedio de Horizonte Hoy Porvenir S.A. y en consecuencia declaró como afiliaición valida la del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.

Por otra parte, condenó a la demandada a trasladar los aportes pensionales o cotizaciones o bonos pensionales con todos sus frutos e intereses sin deducción alguna por gastos de administración y seguro de invalidez y sobrevivencia contenida en la cuenta de ahorro individual de la demandante, asimismo, condenó a Colpensiones a activar la afiliación de la demandante en el régimen de prima media con prestación definida y proceda a actualizar la historia laboral de la misma; decisión que fue apelada por las demandadas, modificada, adicionada y confirmada en segunda instancia por esta Corporación.

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia en providencia CSJ AL, 13 mar. 2012, rad. 53798 reiterada en proveídos CSJ AL3805-2018 y CSJ AL2079-2019, señaló que los fondos privados administradores de pensiones no tienen interés para recurrir en casación, por lo siguiente:

> *(…) La carga económica que se impuso a la demandada, con la sentencia proferida por el ad quem se concreta al traslado al I.S.S. del valor de los saldos por concepto de: cotizaciones, rendimientos y bono pensional, que figuren en la cuenta de ahorro individual de la actora.*
>
> *De cara a la orden impartida por el Tribunal es claro que la demandada no sufre ningún perjuicio económico con la decisión proferida por el ad quem, si se tiene en cuenta que dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, rendimientos y bono pensional, aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien deben ser administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente, dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los afiliados al RAIS.*
>
> *Por tanto, los recursos que figuran en dicha subcuenta individual, las efectuó únicamente la demandante, tales como las cotizaciones, rendimientos financieros y bono pensional, que por tratarse de un traslado no hay lugar a redención, y por tanto, Radicación n.° 85430 SCLAJPT-06 V.00 6 continúa a cargo de la oficina de misma O.B.P del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estricta sujeción al espíritu, características y principios que informan el RAIS; de suerte que la convocada a juicio, no incurre en erogación alguna que sirva para determinar el importe de agravio o perjuicio que la sentencia puede estar ocasionándole (…).*[2]

Teniendo en cuenta el anterior criterio jurisprudencial asumido por la Sala de Casación Laboral, se observa que la **parte demandada SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.,** no tiene interés económico para recurrir en casación, dado que cuándo el ad quem decreto la nulidad del traslado y la entrega de los dineros a Colpensiones, no hizo otra cosa que ordenar al fondo privado retornar los dineros tales como cotizaciones, rendimientos y bono pensional, los cuales son de propiedad de la demandante.

A folio 224 y siguientes obra certificado de existencia y representación legal de Godoy Córdoba Abogados S.A.S. y escritura pública proferida por Porvenir S.A. donde se confiere poder a la Doctora **JUANITA ALEXANDRA SILVA TELLEZ** para actuar como apoderada de dicha parte.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

---

[2] Auto N. AL1223 del 24 de junio de 2020. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Magistrada Ponente. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A**

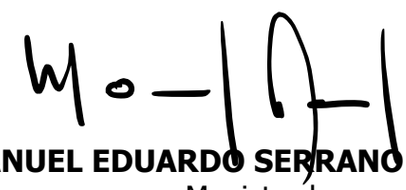
SEGUNDO: Reconózcase personería a la doctora **JUANITA ALEXANDRA SILVA TELLEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.023.967.067 y tarjeta profesional número 334.300 del C. S de la J, para representar judicialmente a la **parte demandada SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A**, en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 224 y siguientes.

TERCERO: En firme este proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrada



MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
Magistrado



LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

LPJR

H. MAGISTRADA DRA. **MARLENY RUEDA OLARTE**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310502820180053101,** informándole que la apoderado de la parte demandada **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, dentro del término de ejecutoria, interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Corporación el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinte (2020).

Asimismo, le informo que a folio 224 y siguientes obra certificado de existencia y representación legal de Godoy Córdoba Abogados S.A.S. y escritura pública proferida por Porvenir S.A. donde se confiere poder a la Doctora **JUANITA ALEXANDRA SILVA TELLEZ** para actuar como apoderada de dicha parte.

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

LINA PAOLA JIMÉNEZ ROMERO
Oficial Mayor

LPJR

H. MAGISTRADA DRA. MARLENY RUEDA OLARTE.

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **1100131 05 011201600643-01 Demandante: Alberto Margarito Montaño ;** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde **NO CASA** la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 20 de noviembre de 2018.

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2021.

CATERINE MATEUS PRECIADO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2021

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DRA. MARLENY RUEDA OLARTE.
Magistrado Ponente

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **002-2019-00171-**01

Demandante: **ALEJANDRO GARCÍA LAVERDE**

Demandada: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por las apoderadas de la parte accionada, contra la sentencia emitida el 11 de agosto de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **002-2018-00575-**01

Demandante: **JORGE EDUARDO CONTRERAS CIPAMOCHA**

Demandada: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por el apoderados de la parte accionada, contra la sentencia emitida el 02 de agosto de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **016-2021-00158-**01

Demandante: **FABIAN LEONARDO NIÑO**

Demandada: **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

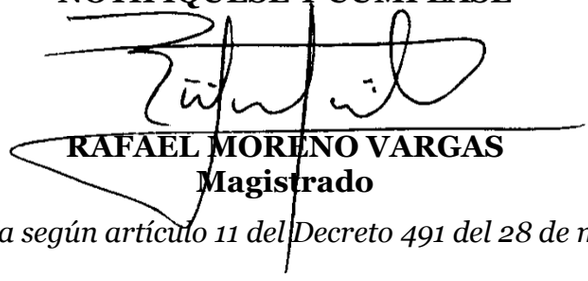
AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la accionada, contra la sentencia del 02 de agosto de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **002-2019-00285-**01

Demandante: **NARCISO HERNANDEZ AGUDELO**

Demandada: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por las apoderadas de la parte accionada, contra la sentencia emitida el 19 de agosto de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. – SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-016-2020-00444-01

Demandante: LUZ GIMENA CELY LOPEZ
Demandada(o): SOLUCIONES FACILITY COLOMBIA S.A.S.

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto proferido el 02 de junio de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral segundo (2°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **020-2019-00604-**01

Demandante: **FERNANDO ASDRUAL GUEVARA**

Demandada: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por el apoderados de la parte accionada, contra la sentencia emitida el 28 de mayo de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**008-2019-00074-**02

Demandante: **LUZ MERY SOTO AVILA**

Demandada: **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ -ETB S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

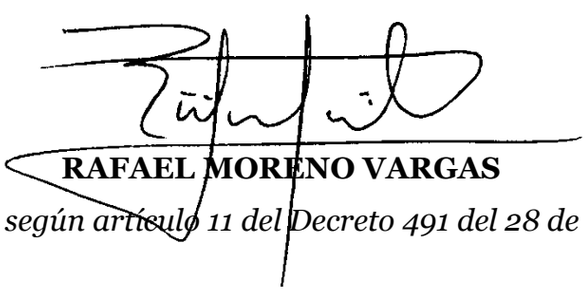
AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia emitida el 23 de agosto de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandante y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandante, empieza a correr el traslado para la parte demandada. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



RAFAEL MORENO VARGAS

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. – SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ejecutivo Laboral No. 110013105-016-2020-00343-01

Demandante: YINNA VANESSA ESGUERRA CELEMIN
Demandada(o): INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la parte demandante, contra el auto proferido el 10 de febrero de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral segundo (2°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **009-2019-00628-**01

Demandante: **ALEXANDER VELEZ ALCALA**

Demandada: **CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de parte accionada, contra la sentencia del 20 de agosto de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **008-2015-00796-**01

Demandante: **CAROLINA DEL PILAR SALAZAR**

Demandada: **LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISION FUTURO DE COLOMBIA Y OTROS**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la accionada SATVA LTDA, contra la sentencia emitida el 11 de agosto de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, término que empieza a correr de manera conjunta para las partes, a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL MORENO VARGAS

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **031-2019-00816-**01

Demandante: **JOSE ALFREDO SUAREZ VENEGAS**

Demandada: **FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES Y OTRO**

Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la accionada UGPP, contra la sentencia emitida el 09 de septiembre de 2021. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de la UGPP (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la parte demandada y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el término a favor de la parte demandada, empieza a correr el traslado para la parte demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310503420130080801** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 23 d junio de 2015.

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501020180000601** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 21 de mayo de 2019.

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501720170080001** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, donde **ACEPTA DESISTIMIENTO** del recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 03 de diciembre de 2019.

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310500820170045501** informando que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Sala de Casación Laboral, declarando **BIEN DENEGADO** el recurso extraordinario de casación formulado por la apoderada de la demandante, contra la sentencia proferida por esta Corporación el **30 de julio de 2020.**

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501320160022501** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 12 de abril de 2018.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310503520160000701** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 30 de noviembre de 2017.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310500520150081301** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 24 de mayo de 2018, solo en cuanto absolvió del auxilio de cesantías. **NO SE CASA** en lo demás.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501020150005501** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 23 de noviembre de 2017.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Inclúyase la suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/C ($500.000) en que se estima el valor de las agencias en derecho, a cargo de la **demandada,** las cuales serán liquidadas en primera instancia de conformidad con lo previsto en el Artículo 366 del C.G.P.

3) En firme la presente providencia, devuélvanse las diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310502420150087601** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 05 de octubre de 2018.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310503420150083201** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 25 de enero de 2018.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501520150004201** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 18 de mayo de 2017.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

H. MAGISTRADO (A) RAFAEL MORENO VARGAS

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310501120160041001** informándole que regresó de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 20 de septiembre de 2018.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021

YOLANDA DUITAMA REYES
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Comoquiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

RAFAEL MORENO VARGAS
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-
- SALA LABORAL-

Magistrada Ponente: DRA DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

La apoderada de **PORVENIR S.A** interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021), notificado en edicto de fecha nueve (9) de julio de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

En el presente caso, el fallo de primera instancia declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional del demandante, decisión que apelada fue revocada parcialmente en esta Instancia.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandada, se encuentra determinado por el monto de las condenas

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

impuestas en las instancias, de ellas, se advirte que el fallo de segunda instancia revocó parcialmente lo decidido por el A quo, que condenó a la UGPP, y en su defecto absolvió de las pretensiones incoadas en su contra, condenando a la AFP PORVENIR S.A. a devolver a COLPENSIONES los gastos de administración y comisiones que en su momento descontaron de la cuenta de ahorro individual del demandante, así como el traslado de los dineros que se encuentren en dicha cuenta.

Al respecto, la Sala de Casación laboral en providencia de fecha 24 de junio de 2020, Radicado No. 85430 AL1223-2020, con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, precisó que la sociedad administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no tiene interés para recurrir en casación, por lo siguiente:

"…En el *sub lite*, se tiene que el fallo que se pretende recurrir en casación confirmó la declaración de ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por la demandante, en consecuencia, ordenó a Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones todos los aportes y rendimientos que tuviera Nubia Stella Caicedo Díaz en su cuenta de ahorro individual.

Pues bien, la Sala en un caso similar, en providencia CSJ AL, 13 mar. 2012, rad. 53798 reiterada en proveídos CSJ AL3805-2018 y CSJ AL2079-2019, señaló:

> *(…) La carga económica que se impuso a la demandada, con la sentencia proferida por el ad quem se concreta al traslado al I.S.S. del valor de los saldos por concepto de: cotizaciones, rendimientos y bono pensional, que figuren en la cuenta de ahorro individual de la actora.*
>
> *De cara a la orden impartida por el Tribunal es claro que la demandada no sufre ningún perjuicio económico con la decisión proferida por el ad quem, si se tiene en cuenta que dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, rendimientos y bono pensional, aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien*

> *deben ser administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente, dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los afiliados al RAIS.*
>
> *Por tanto, los recursos que figuran en dicha subcuenta individual, las efectuó únicamente la demandante, tales como las cotizaciones, rendimientos financieros y bono pensional, que por tratarse de un traslado no hay lugar a redención, y por tanto, continúa a cargo de la oficina de misma O.B.P del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estricta sujeción al espíritu, características y principios que informan el RAIS; de suerte que la convocada a juicio, no incurre en erogación alguna que sirva para determinar el importe de agravio o perjuicio que la sentencia puede estar ocasionándole (…).*

De acuerdo con lo anterior, Porvenir S.A. no tiene interés para recurrir en casación, en la medida que el *ad quem* al ordenar la devolución de saldos, no hizo otra cosa que instruir a esta sociedad, en el sentido que el capital pensional de la accionante sea retornado, dineros que, junto con sus rendimientos financieros y el bono pensional son de la demandante.

Luego, en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional de la demandante, en tanto que dejaría de percibir, a futuro, los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que, además de no evidenciarse en la sentencia de segunda instancia, no se pueden tasar para efectos del recurso extraordinario.

Por lo anterior, se tiene que el Tribunal no incurrió en equivocación alguna al no conceder el recurso de casación a Porvenir S.A. que, por lo explicado, no tiene interés económico para recurrir, en la medida en que no existe erogación alguna que económicamente pueda perjudicar a la parte que pretende recurrir la decisión de segunda instancia…"

Teniendo en cuenta el anterior criterio jurisprudencial asumido por la Sala de Casación Laboral, no resulta procedente el recurso de casación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A, en consecuencia se negará.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

RESUELVE

PRIMERO.- NO CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la apoderada de la demandada PORVENIR S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- En firme el proveído, continúese con el trámite correspondiente.

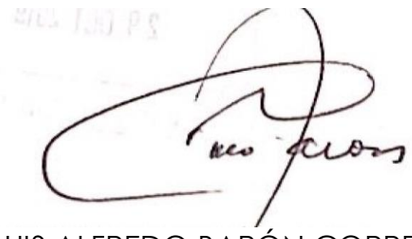
Notifíquese y Cúmplase,



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Magistrada





EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

Magistrado

Proyectó: ALBERSON

H. MAGISTRADA DRA. **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informando que el apoderado de la **parte demandada,** dentro del término legal interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-
- SALA LABORAL-

Magistrada Ponente: DRA DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

La apoderada de **PORVENIR S.A** interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), notificado en edicto de fecha siete (7) de julio de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

En el presente caso, el fallo de primera instancia declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional de la demandante, decisión que apelada fue confirmada.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandada, se encuentra determinado por el monto de las condenas

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

impuestas en las instancias, de ellas, se condenó a la AFP PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES todas las sumas de dinero que obren en la cuenta de ahorro del demandante, junto con rendimientos y comisiones por administración, de manera indexada.

Al respecto, la Sala de Casación laboral en providencia de fecha 24 de junio de 2020, Radicado No. 85430 AL1223-2020, con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, precisó que la sociedad administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no tiene interés para recurrir en casación, por lo siguiente:

"…En el *sub lite*, se tiene que el fallo que se pretende recurrir en casación confirmó la declaración de ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por la demandante, en consecuencia, ordenó a Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones todos los aportes y rendimientos que tuviera Nubia Stella Caicedo Díaz en su cuenta de ahorro individual.

Pues bien, la Sala en un caso similar, en providencia CSJ AL, 13 mar. 2012, rad. 53798 reiterada en proveídos CSJ AL3805-2018 y CSJ AL2079-2019, señaló:

> *(…) La carga económica que se impuso a la demandada, con la sentencia proferida por el ad quem se concreta al traslado al I.S.S. del valor de los saldos por concepto de: cotizaciones, rendimientos y bono pensional, que figuren en la cuenta de ahorro individual de la actora.*
>
> *De cara a la orden impartida por el Tribunal es claro que la demandada no sufre ningún perjuicio económico con la decisión proferida por el ad quem, si se tiene en cuenta que dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, rendimientos y bono pensional, aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien deben ser administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente, dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los afiliados al RAIS.*

> *Por tanto, los recursos que figuran en dicha subcuenta individual, las efectuó únicamente la demandante, tales como las cotizaciones, rendimientos financieros y bono pensional, que por tratarse de un traslado no hay lugar a redención, y por tanto, continúa a cargo de la oficina de misma O.B.P del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estricta sujeción al espíritu, características y principios que informan el RAIS; de suerte que la convocada a juicio, no incurre en erogación alguna que sirva para determinar el importe de agravio o perjuicio que la sentencia puede estar ocasionándole (…).*

De acuerdo con lo anterior, Porvenir S.A. no tiene interés para recurrir en casación, en la medida que el *ad quem* al ordenar la devolución de saldos, no hizo otra cosa que instruir a esta sociedad, en el sentido que el capital pensional de la accionante sea retornado, dineros que, junto con sus rendimientos financieros y el bono pensional son de la demandante.

Luego, en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional de la demandante, en tanto que dejaría de percibir, a futuro, los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que, además de no evidenciarse en la sentencia de segunda instancia, no se pueden tasar para efectos del recurso extraordinario.

Por lo anterior, se tiene que el Tribunal no incurrió en equivocación alguna al no conceder el recurso de casación a Porvenir S.A. que, por lo explicado, no tiene interés económico para recurrir, en la medida en que no existe erogación alguna que económicamente pueda perjudicar a la parte que pretende recurrir la decisión de segunda instancia…"

Teniendo en cuenta el anterior criterio jurisprudencial asumido por la Sala de Casación Laboral, no resulta procedente el recurso de casación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A, en consecuencia se negará.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

RESUELVE

PRIMERO.- NO CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la apoderada de la demandada PORVENIR S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- En firme el proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Magistrada

EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

Magistrado

Proyectó: ALBERSON

H. MAGISTRADA DRA. **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informando que el apoderado de la **parte demandada,** dentro del término legal interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL SEGUIDO POR MÓNICA CASTRILLÓN ARTEAGA CONTRA GRECIJULY MATEUS MORALES (RAD. 25 2018 00733 03).

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose presentado los alegatos de conclusión por la parte demandante (fl 343-344), y la parte demandada (fl 346-347), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandada GRECIJULY MATEUS MORALES contra la providencia proferida por el Juez Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el pasado 4 de junio de 2021 (folio 232) por medio del cual tuvo por no contestada la demanda presentada por la encartada el 6 de mayo de 2021 (folios 204 a 231), tras considerar que el escrito no fue radicado dentro del término procesal oportuno, el cual, dijo, finiquitó el 30 de abril de 2021. Puntualmente sostuvo el *a quo:*

> *"(...)*
> *Ahora bien, frente a la notificación se dirá lo siguiente: la demandada se notifica del auto que admite demandad el día diecinueve (19) de Noviembre de dos mil diecinueve (2019) para el día 26 de noviembre de 2019 se solicita aclaración a providencia, lo que significa que los términos de contestar la demanda se suspende, hasta tanto se resuelve la aclaración, así las cosas significa que van cuatro (4) días de términos para contestar y para el 23 se empiezan a contar los días faltantes para contestar la demanda, por lo que el término para contestar vence el día treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021)*
>
> *Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la demandada presentó escrito de contestación a la demanda el pasado seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), estando fuera del término para hacerlo en consecuencia se tiene por* ***NO contestada la demanda****.*

(…)

Como motivos de inconformidad la llamada a juicio, refiere, basta ver lo actuado para percatarse que la decisión del despacho no tiene asidero, y por el contrario, existe una plausible trasgresión de derechos fundamentales.

Al punto, indica, era imperante revisar el artículo 118 del C.G.P. para considerar que el término se interrumpió, no se suspendió con la solicitud de aclaración, para lo cual procede a distinguir ambos conceptos. Ello para significar que la contestación fue presentada dentro del término legal (folios 234 a 237).

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Inicialmente, señala la Sala, el auto que dé por no contestada la demanda, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

Pues bien, el artículo 74 del C.P.T. prevé que "*admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados".* La contestación que para el efecto presente la encartada debe ser radicada dentro de la oportunidad procesal antes aludida y sujetarse a los parámetros previstos en el artículo 31 de la norma ejusdem, so pena de tener por no contestado el escrito introductorio.

En el caso bajo examen, se tiene, la demanda fue admitida mediante proveído del 18 de junio de 2019 (folio 132), oportunidad en la cual se dispuso:

"(…)

Cítese a la demandada, a través de su representante legal o quien haga sus veces, a fin de que se notifique del auto admisorio de la demanda y córrasele traslado de la misma, por el término legal correspondiente de diez (10) días hábiles (art. 74 del C.P.TS.S.

> *modificado por el artículo 38 de la Ley 712 de 2011, haciéndoles entrega de la copia del libelo demandatorio, así como del escrito de subsanación y prevéngasele que debe designar apoderado para que la representen en el curso del proceso.*
>
> *Practíquese la notificación de la demandada de conformidad a lo dispuesto en el literal "A" del artículo 41 del CPT. S.S. De no ser hallada o se impida la notificación de la misma, se procederá conforme a lo establecido en el inciso tercero del art.29 de la misma norma procesal laboral."*

La demanda y su reforma fueron notificadas personalmente a GRECIJULY MATEUS MORALES el 19 de noviembre de 2019, según se verifica del acta que milita a folio 192 del plenario, por lo que, a partir del día siguiente iniciaba la contabilización de los términos para contestar la demanda, los cuales vencieron en silencio el 3 de diciembre siguiente, como quiera que el escrito contestatorio solo fue radicado hasta el 6 de mayo de 2021 (folios 204 a 211), resultando esta, por tanto, extemporánea.

Al respecto es importante precisar, aunque la demandada por memorial del 26 de noviembre de 2019 solicitó la aclaración de la providencia que admitió la reforma de la demanda (folio 197 a 199), lo cierto es que tal pedimento, al tenor del artículo 118[1] del C.G.P., no tiene la virtualidad de suspender, ni interrumpir los términos

---

[1] *"**ARTÍCULO 118. CÓMPUTO DE TÉRMINOS.** El término que se conceda en audiencia a quienes estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.*

El término que se conceda fuera de audiencia correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.

Si el término fuere común a varias partes comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación a todas.

Cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, este se interrumpirá y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación del auto que resuelva el recurso.

*Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras esté corriendo un término, no podrá ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran trámite urgente, previa consulta verbal del secretario con el juez, de la cual dejará constancia. En estos casos, el término **se suspenderá** y se reanudará a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que se profiera.*

*Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de la decisión del recurso de reposición. **Los términos se reanudarán el día siguiente al de la notificación de la providencia que se profiera**, o a partir del tercer día siguiente al de su fecha si fuera de cúmplase.*

judiciales o legales, pues, según esa disposición, se interrumpen cuando contra la providencia que lo concede se interponen ***recursos*** y se suspenden cuando el expediente ingresa al Despacho, no siendo en estricto sentido la petición de aclaración un medio de impugnación. Además, para resolver sobre tal pedimento, el expediente solo fue ingresado al Despacho el 20 de abril de 2021 según se lee de la constancia secretarial de folio 201, esto es, cuando se había superado el plazo para contestar la demanda.

Y es que no debe perderse de vista que si bien, en consonancia con lo regulado en el artículo 302 del C.G.P., "*cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud",* lo cierto es que para iniciar el cómputo de los términos, de acuerdo con el ya aludido artículo 118 del C.G.P. no se requiere que el proveído haya cobrado ejecutoria, esto por cuanto la norma prevé que los términos correrán "*a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió".*

Corolario de todo lo anterior, como ya se indicó, se confirmará el auto atacado por las razones expuestas por esta Sala de decisión.

COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C., SALA LABORAL,

R E S U E L V E

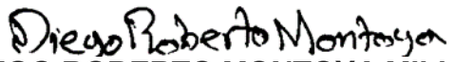
PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado de conformidad con las razones expuestas por esta Sala de decisión.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada.

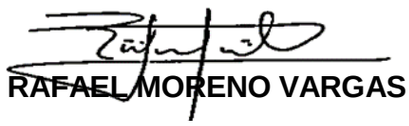
Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado."

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



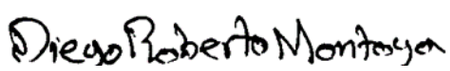
RAFAEL MORENO VARGAS



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $300.000, a cargo de la parte demandante, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO SUMARIO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SINDICAL PROMOVIDO POR SEGURIDAD ATEMPI CONTRA EL SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN COLOMBIA – UNASE (RAD. 12 2021 00104 01).

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

El Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, profieren de plano la siguiente

PROVIDENCIA

Asume la Sala el conocimiento de este proceso, en virtud del recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá el 31 de agosto de 2021 (*archivo "005. AUTO RECHAZA SUMARIO (FL. 113-114).pdf", expediente digital*), por el cual se rechazó la demanda por no haber cumplido la parte actora con la carga impuesta en el artículo 6 del Decreto 806 de 2020.

La demanda inicialmente fue devuelta por auto notificado por anotación en el estado No. 109 del 13 de julio de 2021 (*archivo "003.AUTO DEVUELVE DEMANDA (FL.77A78).pdf", expediente digital*), por las siguientes razones:

"*(…)*

Verificada la demandase encuentra que no reúne las exigencias contenidas en el artículo 25 y 26 del C.P.T. y de la S.S. por las siguientes razones:

a. Se presenta una indebida acumulación de pretensiones dado que las peticiones del proceso especial sumario se resuelven conforme lo dispuesto en el artículo 380 del C.S. del T., y las de fuero sindical se tramitan conforme lo señalado en el artículo 114 del C.P. de T. y de la S.S., sin que, a criterio del despacho, puedan acumularse en la misma causa. Adicionalmente, el apoderado no tiene facultades para formular la acción de fuero sindical conforme con el poder aportado.

b. Los numerales 1, 2 y 3 del título de hechos hacen parte de aspectos relacionados con el poder que no deben ir en este acápite, razón por la que deben excluirse.
c. Los numerales 21, 22 y 24 a 26 del título de hechos son conclusiones del apoderado, las cuales deben ir en el acápite correspondiente o excluirse.
d. No se aportó el certificado de existencia y representación de la organización sindical demandada, expedida por el Ministerio de Trabajo.
e. La documental aportada no se encuentra relacionada e individualizada, conforme lo exige el numeral 9 del artículo 25 del C.P. del T. y de la S. S.
f. El numeral 10 del artículo 78 del C.G. del P., señala que es deber del profesional del derecho abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir. En consecuencia, en aras de no vulnerar el derecho a la defensa, la información solicitada mediante oficios al Ministerio de Trabajo podrá ser aportada en el término fijado para los efectos de la subsanación.

(…)

TERCERO: Requiérase a la parte actora para que, al momento de presentar la subsanación de la demanda, acredite el requisito contemplado en el inciso 4 del artículo 6° del Decreto 806 de 2020, que establece "… el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados."

En cumplimiento de lo anterior la demandante allegó escrito de subsanación (*archivo "004.SUBSANACION DEMANDA (FL79A112).pdf", expediente digital*) radicado dentro del término legal (21 de julio de 2021), el cual mereció reproche por parte del juzgador de primer grado quien consideró que con lo advertido por la sociedad demandante no se superaban completamente los yerros advertidos en el proveído anterior, específicamente en lo atinente a la obligación que le incumbía de remitir copia del escrito demandatorio y sus anexos, así como la subsanación a la dirección electrónica de la demandada, al tenor de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 806 de 2020. Sobre ello entonces, anotó:

"Visto el informe secretarial que antecede, y revisado el plenario, se observa que, mediante proveído del 12 de julio de 2021, notificado por estado No. 109 del 13 de julio siguiente, este despacho resolvió inadmitir la demanda sumarial de la referencia y concedió el término de 5 días hábiles para que fueran subsanadas las falencias allí señaladas. Adicionalmente y dado que no se encontró acreditado el cumplimiento del artículo 6 del Decreto 806 de 2020 y que se solicitó presentar un nuevo escrito de demanda, se le ordenó a la parte demandante acreditar lo señalado en tal disposición.

Al revisar los nuevos documentos aportados por la empresa ATEMPI LTDA se tiene que no se atendió en su totalidad la orden impartida por el despacho, pues no se aportó prueba que demuestre que haya enviado al sindicato demandado copia de la demanda y sus anexos en los términos designados por el legislador.

(…)

Y en este asunto, no se han solicitado medidas cautelares y se allegaron los correos electrónicos de la organización sindical demandada, por lo que el despacho adoptó la medida pertinente, sin que exista justificación para que no se acatara lo ordenado por el Decreto Legislativo y en providencia pasada, lo que conlleva a rechazar el trámite sumarial"

Contra la anterior decisión, ATEMPI LTDA interpuso recurso de apelación para ante esta Corporación, solicitando se revoque el auto calendado 1 de septiembre de 2021 (sic). En sustento de ello, indica, en la orden impartida por el juzgado al momento de inadmitir la demanda, no se les informó sobre el "*deber de enviar al sindicato copia de la demanda, lo cual implicaría un asunto nuevo"* por ello, no se trataba de un requerimiento que debiera ser subsanado como se hizo ver en la providencia recurrida.

Frente a tal situación entonces, advierte, los yerros descritos por el Despacho en el auto inadmisorio se corrigieron en su totalidad, por lo que, lo relativo al envío de los documentos a la organización sindical convocada a juicio, siendo una circunstancia nueva, no evidenciada en la inadmisión, no podía dar lugar al rechazo de la demanda. Entenderlo en sentido contrario, estima, vulnera su derecho al debido proceso (*archivo "006. RECURSOS DE REPOSICION Y SUBSIDIO EL DE APELACION (FL. 115- 122).pdf", expediente digital*).

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Se aprecia que lo atacado por la impugnante es la decisión de la Juez de primer grado de rechazar la demanda, providencia que resulta susceptible del recurso de apelación a voces del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., razón por la cual se estima viable proceder a su estudio.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la causal esgrimida para el rechazo de la demanda consistió en el incumplimiento de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, pertinente resulta acudir al texto de dicha disposición, la cual en su tenor literal prevé:

> *"**Articulo 6. Demanda.** La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.*
>
> *Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.*
>
> *De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.*
>
> ***En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda.*** *De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*
>
> *En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado."*

En concordancia con el anterior precepto, la remisión de la demanda al demandado de manera simultánea a su radicación mediante mensaje de datos, se erige como un presupuesto para su admisión.

Al respecto, si bien el artículo 25[1] del C.P.T. y la S.S., en el cual se establece la forma y requisitos de la demanda en material laboral, no se contempla la obligatoriedad de remitir copia de la demanda y sus anexos, así como su

---

[1] *"**ARTICULO 25. FORMA Y REQUISITOS DE LA DEMANDA.** <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La demanda deberá contener:*
1. La designación del juez a quien se dirige.
2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas.
3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda.
4. El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
5. La indicación de la clase de proceso.
6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado.
7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados.
8. Los fundamentos y razones de derecho.
9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y
10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia.
Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo."

subsanación –si la hubiere- a la(s) demandada(s) y demás intervinientes, de manera concomitante a su presentación, ello no es óbice para que, entratándose de procesos iniciados con posterioridad a la vigencia del mentado Decreto 806 de 2020 -4 de junio de 2020-, como ocurre en el caso de marras, se omitan los requisitos adicionados por esa norma so pretexto de su desconocimiento.

En ese orden y descendiendo al caso de marras se tiene, aunque el recurrente advierte que no le fue puesta de presente la falencia que motivó el rechazo de la demanda por parte del juzgador de primer grado, lo cierto es que en el numeral tercero del auto calendado 12 de julio de 2021, por el cual se devolvió el libelo (*archivo "003.AUTO DEVUELVE DEMANDA (FL.77A78).pdf", expediente digital*), se ordenó:

> "*TERCERO: Requiérase a la parte actora para que, al momento de presentar la subsanación de la demanda, acredite el requisito contemplado en el inciso 4 del artículo 6° del Decreto 806 de 2020, que establece "… el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados."*

Bajo tal entendido, si bien es cierto no se le enlistó expresamente el cumplimiento de esa carga procesal como un motivo de inadmisión, como se hizo con los demás presupuestos de la norma, no puede echarse de menos que la consecuencia por omitir dicho trámite se encuentra inserta en la norma a cuyo contenido se remitió el juzgador.

En todo caso lo que deviene en el *sub judice* es que, contrario a lo que se alega en la alzada, a la demandante sí se le puso de presente la obligación de acatar lo previsto en el inciso 4 del artículo 6 del Decreto 806 de 2020, esto es, remitir por medio electrónico copia de la demanda, su subsanación y los anexos, a la organización sindical demandada, situación que fue advertida en el proveído que devolvió la demanda donde se le conminó a aportar la constancia de dicho trámite junto con la subsanación; sin embargo, la accionante no acreditó la observancia de esa orden, aun cuando adujo que la aportaría con el recurso, no encontrándose prueba alguna en el plenario que dé cuenta de la comunicación electrónica dirigida a la organización sindical por el cual se haga entrega los documentos antes anotados, conforme lo regulado en la mentada disposición.

Así entonces, correspondía a la parte actora adelantar las gestiones tendientes a superar el yerro advertido, dentro del término previsto en el artículo 28 del C.P.T y la S.S. y, como ello no ocurrió, lo consecuente era disponer el rechazo de la demanda.

Por lo expuesto, habrá de confirmarse la decisión apelada.

COSTAS en esta instancia a cargo del demandante.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL**- administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el 31 de agosto de 2021, acorde a las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

RAFAEL MORENO VARGAS

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $100.000, a cargo de la demandante, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Se encuentran las presentes diligencias para desatar el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Treinta y Nueve (39) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y el Juzgado Noveno (9º) Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C.

ANTECEDENTES

JUAN PABLO MOLINA VANEGAS instauró demanda en contra de la empresa **CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S** para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral, se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 6 de abril de 2017 y el 23 de junio de 2020, el cual terminó de manera unilateral por parte de su empleador, finalización viciada de nulidad por carecer de una justa causa demostrable y la ausencia de un debido proceso que lo reglamente. En consecuencia, se disponga su reintegro a un cargo que ofrezca iguales o mejores condiciones a las de aquel que desempeñaba al momento de su desvinculación, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social causados desde su retiro y hasta que se efectúe el reintegro, así como los derechos ultra y extra petita y las costas.

La demanda fue presentada el 14 de diciembre de 2020, correspondiendo por reparto al Juzgado Noveno Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá (*Página 89, archivo "Expediente 2020-530.pdf", expediente digital),* acta en la cual se consignó que correspondía a un proceso de única instancia.

Mediante providencia del 12 de enero de 2021 (*páginas 91 a 94, archivo "Expediente 2020-530.pdf", expediente digital*), ese juzgado rechazó la demanda por falta de competencia y ordenó la remisión de las diligencias a la oficina

judicial de reparto de esta ciudad a efectos de que fuera asignado a los Jueces Laborales del Circuito. Lo anterior tras considerar que en este asunto las pretensiones se circunscriben principalmente al reintegro del accionante, petición esta que carece de cuantía, por lo que al tenor del artículo 13 del C.P.T y la S.S. compete su conocimiento al Juez Laboral del Circuito en primera instancia, decisión que, asegura, se acompasa con algunos pronunciamientos de esta Corporación, advirtiendo, "*el procedimiento a seguir en el sub examine no se encuentra supeditado a la voluntad de las partes ni a la estimación que de manera caprichosa haga el demandante, pues ello conllevaría a permitir que el aludido canon normativo –y el art. 26 del C.G.P.-, fuera sustituido por la voluntad del promotor del proceso, quien con la mera consignación de una suma determinada en el acápite de cuantía de la demanda, podría adjudicarse la facultad de escoger el procedimiento aplicable a su caso e inclusive el juez que habría de conocerlo".*

Y seguidamente consideró: "*en gracia a la discusión, si pudiera determinarse la cuantía únicamente hasta la fecha de presentación de la demanda, sin atender a la pretensión de reingreso laboral, el valor delos salarios y prestaciones sociales arrojaría una suma inferior a 20 smlmv, aspecto que, de todos modos, no tiene virtud de radicar la competencia en los juzgados de pequeñas causas laborales, conforme el artículo 12 del C.P.T. y S.S., amén que evidentemente al momento del fallo serán emolumentos muy superiores, aunado −como se ha recalcado− a la innegable incidencia de la súplica de reintegro, que impone que el proceso deba ser tramitado como de primera instancia."*

Remitido el expediente, fue asignado su conocimiento por reparto al Juzgado Treinta y nueve (39) Laboral del Circuito de Bogotá (*página 98, expediente digital*), Despacho que mediante proveído adiado 24 de junio de 2021 (*páginas 101 y 102, ibíd.*), rechazó igualmente la demanda y ordenó su devolución al Juzgado Noveno Municipal de Pequeñas Causas Laborales. Ello, luego de estimar que, como la demanda no solo contiene una pretensiones declarativa sino otras que son consecuenciales a esta que si resultan cuantificables, al resultar estas inferiores a los 20 SMLMV debía tramitarse el proceso como de única instancia, siendo por tanto competente el despacho de la categoría inferior.

Adicionalmente, indicó, no le era posible al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas devolver las diligencias o proponer el conflicto de competencia atendiendo para el efecto el artículo 139 del C.G.P. y lo vertido por el doctrinante Hernán Fabio López Blanco.

Al ser remitido el proceso nuevamente al Juzgado Noveno Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá, este por proveído del 9 de septiembre de 2021 (*páginas 108 a 111, expediente digital*) reiteró el rechazo de la demanda y promovió conflicto negativo de competencia para ante este Tribunal, porque en su criterio de acogerse la intelección vertida por el Despacho del circuito "*se dejaría de lado que el pedimento cardinal y principal, del cual penden las condenas descritas, es precisamente el reingreso laboral del activante, que en el evento de salir avante tendría consecuencias jurídicas mucho mayores a las mencionadas (…) al involucrar la continuidad del nexo laboral con los respectivos efectos pecuniarios, siendo entonces perentorio resguardar la posibilidad de acceso a la doble instancia. Así, no es viable que se tramite el litigio por la vía procesal exclusiva de los jueces de única instancia, pues de hacerlo se haría ilusorio el fin del legislador al preceptuar en disposición especial la necesidad de la doble instancia".*

Procede la Sala a resolver previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

En aplicación a lo dispuesto por el literal b) del numeral 5 del artículo 15 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 10° de la Ley 712 de 2001, corresponde a ésta Sala del Tribunal Superior de Bogotá dirimir el conflicto de competencia surgido entre el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y el Juzgado Noveno (9º) Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C.

En esa dirección, conforme a los antecedentes reseñados de manera precedente, el asunto a resolver se circunscribe a determinar a quién corresponde el conocimiento de las pretensiones contempladas en el asunto puesto a consideración de la jurisdicción por el demandante.

Bajo tal orientación, pertinente resulta memorar, atendiendo el factor objetivo de competencia, esta puede ser determinada atendiendo el valor económico de la relación jurídico-sustancial siendo por tanto la cuantía el criterio determinante para adjudicar a determinado juez el conocimiento para tramitar el asunto.

En los juicios laborales, la competencia por razón de la cuantía se encuentra prevista en el artículo 12 del C.P.T y la S.S., subrogado por la ley 11 de 1984, modificado por el artículo 9º Ley 712 de 2001 y el artículo 46 de la Ley 1395 de 2010, en cuyo tenor literal dispone:

> *"**ARTICULO 12. COMPETENCIA POR RAZON DE LA CUANTÍA:** Los jueces laborales del circuito conocen e única instancia de los negocios cuya cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás".*
>
> *(...)*
> *"Los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, donde existen, conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente".*

Frente al particular, sea del caso señalar, conforme lo establecido en el artículo 26 del C.G.P.[1], la determinación de la cuantía se efectuará *"Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda"*.

Obsérvese, la norma es imperativa al señalar que la cuantía se determina por la suma de las pretensiones al momento de la presentación de la demanda, más no por la estimación que de manera caprichosa o amañada haga el demandante, pues ello conllevaría a permitir que el aludido canon normativo -art. 26 del C.G.P.- fuera sustituido por la voluntad del promotor del proceso, quien con la mera consignación de una suma determinada en el acápite de cuantía, o el señalamiento en la clase de proceso, podría abrogarse la facultad de escoger, a su arbitrio, el procedimiento aplicable a su caso e inclusive el Juez que habría de conocerlo.

En ese orden de ideas, no es la estimación de la cuantía que haga el demandante la que determina el procedimiento aplicable, ni el trámite que éste señale, sino, en principio, el resultado de la operación aritmética de las

[1] Aplicable al asunto por remisión que hiciere el artículo 145 del C.P.T y la S.S.

pretensiones que integran el petitum del libelo, teniendo en cuenta para ello, el acontecer fáctico relatado por la parte accionante, y que en últimas constituirá el marco de acción sobre el cual versará el proceso.

Ahora bien, no puede perderse de vista que existen pretensiones no cuantificables o que carecen de cuantía. En estos eventos, y conforme lo regula el artículo 13[2] del C.P.T., serán los Jueces Laborales del Circuito, o en su defecto los Jueces Civiles del Circuito, quienes conozcan del asunto en primera instancia.

Precisado lo anterior y descendiendo al caso de autos, se tiene, tal como se indicó de manera precedente, por un lado la Juez 9 Municipal de Pequeñas Causas Laborales considera no tener competencia para conocer del presente proceso en razón a que la pretensión principal de la demanda es el reintegro la cual no resulta cuantificable, y en ese escenario debe darse aplicación al artículo 13 del C.P.T.; en contraposición, la Juez 39 Laboral del Circuito arguye no ser la competente debido a que, si bien existe una petición no susceptible de ser cuantificada, en el libelo se consignaron otras pretensiones que sí tienen dicha característica, las cuales, una vez liquidadas no superan los 20 SMLMV.

Así pues, revisado el escrito demandatorio, da cuenta la Sala que lo pretendido por el actor se circunscribe a lo siguiente:

> *"**PRIMERO**: Que se declare que entre el señor JUAN PABLO MOLINA VANEGAS y la compañía CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S existió una relación laboral a término INDEFINIDO, comprendida entre las fechas 06de abril del 2017 hasta la fecha 23de Junio del 2020.*
>
> ***SEGUNDO**: Que se declare que la terminación del contrato se dio de manera unilateral por parte del demandado y se encuentra viciada de nulidad, por carecer de una justa causa demostrable, con ausencia del debido proceso que lo reglamente.*
>
> ***TERCERO**: Que se hace la valoración por medicina laboral para establecer el estado de salud del señor JUAN PABLO MOLINA VANEGAS.*

---

[2] "***ARTICULO 13. COMPETENCIA EN ASUNTOS SIN CUANTIA.*** *De los asuntos que no sean susceptibles de fijación de cuantía, conocerán en primera instancia los ~~Jueces del Trabajo~~, <Jueces Laborales del Circuito> salvo disposición expresa en contrario.*
En los lugares en donde no funcionen ~~Juzgados del Trabajo~~ <Laborales del Circuito>, conocerán de estos asuntos, en primera instancia, los Jueces del Circuito en lo Civil."

> ***CUARTO**: Que como consecuencia de lo anterior se condene al demandado, la compañía CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. a efectuar el reintegro al aquí afectado en un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del cargo que desempeñaba hasta su desvinculación.*
>
> ***QUINTO**: Que se condene la compañía CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S demandada a pagar los salarios dejados de percibir desde el momento de la DESVINCULACION esto es desde el 23 de Junio de 2020hastala fecha.*
>
> ***SEXTO**: Que se condene la compañía CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. a pagar las prestaciones sociales (PRIMA DE SERVICIOS, CESANTIAS), desde el momento de la desvinculación esto es desde el 23 de Junio de 2020 hasta la fecha que se efectué el reintegro.*
>
> ***SEPTIMO**: Que se condene la compañía CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. a pagar los aportes al sistema de seguridad social (SALUD Y PENSION), desde el momento de la desvinculación esto es desde el 23 de Junio de 2020 hasta la fecha que se efectué el reintegro.*
>
> ***OCTAVO**: Adicional lo ultra y extrapetita que su señoría considere en el proceso.*
>
> ***NOVENO**: Que la parte demandada debe pagar las costas y gastos del presente proceso."*

Como se ve, la intención principal del convocante no es otra que obtener el reintegro a su puesto de trabajo, previa declaratoria de ineficacia del despido pretensión a la que no es posible atribuirle valor alguno.

Considerando dicha circunstancia, es claro que la razón está del lado de la juez municipal de pequeñas causas, pues al tratarse la aspiración de un asunto sin cuantía, esta se rige por las previsiones del artículo 13 del C.P.T antes transcrito, y en consecuencia, resultaría claro que atendiendo únicamente la pretensión principal de la presente acción correspondería asumir el estudio de este litigio al Juez Laboral del Circuito por expresa disposición legal.

Al punto, es importante precisar, aunque existen en la demanda otras pretensiones además del reintegro, que sí son susceptibles de ser cuantificables como los salarios y prestaciones sociales, las cuales en autos, en efecto, no alcanzan a superar los 20 SMLMV[3] como bien lo consideraron ambos juzgados,

[3] **SALARIOS ADEUDADOS**

DESDE	**HASTA**	**SALARIO MENSUAL**	**SALARIO DIARIO**	**N° DÍAS**	**TOTAL**

lo cierto es que tal circunstancia no da lugar a desconocer la competencia asignada al Juez del Circuito porque en todo caso el eje principal de la demanda es la reincorporación del trabajador, obligación de hacer que no es susceptible de fijación de cuantía siendo las demás aspiraciones del escrito introductor, simplemente consecuenciales de tal declaración.

Por lo anterior se ordenará remitir el presente proceso al Juzgado Treinta y Nueve (39) Laboral del Circuito de Bogotá, para que asuma el conocimiento del presente litigio, al ser el competente conforme a lo anotado.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala laboral,

RESUELVE

PRIMERO: DIRIMIR el conflicto planteado en el sentido de determinar que el **JUZGADO TREINTA Y NUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.,** es el competente para conocer de la demanda promovida por **JUAN PABLO MOLINA VANEGAS** contra la empresa **CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S** y en consecuencia a ese Despacho debe remitirse el expediente.

23/ 06/2020	14/12/2020	$1.300.000	$43.333,333	172	$7.453.333,33

CESANTÍAS

DESDE	HASTA	SALARIO MENSUAL	N° DÍAS	CESANTÍAS	TOTAL
23/ 06/2020	14/12/2020	$1.300.000	172	$617.500	$ 621.111,11

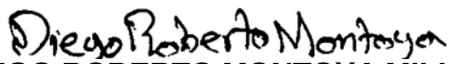
PRIMAS DE SERVICIO

DESDE	HASTA	SALARIO MENSUAL	N° DÍAS	CESANTÍAS	TOTAL
23/ 06/2020	14/12/2020	$1.300.000	172	$617.500	$ 621.111,11

TOTAL PRETENSIONES: $ 8.695.555,56
SALARIO MÍNIMO 2020: $877.803
20 SMLMV (2020): $17.556.060

SEGUNDO: COMUNÍQUESELE esta decisión al Juzgado Noveno Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C., remitiéndose copia de esta providencia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



RAFAEL MORENO VARGAS



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO EJECUTIVO LABORAL PROMOVIDO POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. CONTRA LOGISTICS & CUSTOMS SERVICES LTDA y solidariamente contra GLORIA PAULINA CORREDOR CIFUENTES Y DIEGO BERNARDO LONDOÑO PUENTES (RAD. 27 2021 00147 01).

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Vencido el término de traslado otorgado, sin que las partes hubiesen presentado los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad ejecutante (*archivo "04 Recurso de apelación.pdf", expediente digital*) contra la providencia proferida por la Juez Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el pasado 26 de mayo de 2021 (*archivo "03 LIBRA MANDAMIENTO PROTECCION - MORA APORTES (1).pdf", expediente digital*) por medio del cual se libró el mandamiento de pago en favor de la ejecutante y en contra de LOGISTICS & CUSTOMS SERVICES LTDA por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias dejadas de cancelar respecto de algunos de sus trabajadores y sus intereses, negándolo frente a los socios de dicha sociedad bajo el argumento que "*dentro del trámite previsto por la Ley 100/93 no se estableció que, dicho cobro se extendiera en contra de los socios de los empleadores".*

Como motivos de inconformidad, la ejecutante advierte, esa administradora de pensiones en uso de las facultades legales otorgadas por la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y el artículo 36 del C.S.T., requirió, con antelación a la presentación de la demanda a la empresa deudora y a sus socios individualmente considerados, tal como se verifica de los documentos que aportó la proceso.

Recuerda, el artículo 36 del C.S.T presume la solidaridad en los tipos societarios de personas, como es el caso de las sociedades de responsabilidad limitada que resulta ser el tipo de la demandada, sin que se exija que la obligación sea expresa con los socios, configurándose con ello una protección de los intereses de los trabajadores.

Sobre este punto además, indica, resulta contrario a la intención del legislador considerar que los socios no son obligados, asumiendo que únicamente es la empresa la responsable directa, y torna en ineficaces los postulados normativos que regulan la materia, pues no estamos ante un trámite declarativo sino uno de ejecución en el que existe un título ejecutivo por aportes a pensión en contra de una empresa de responsabilidad limitada, en la cual, por virtud de la ley laboral existe una responsabilidad solidaria sin que dicha condición deba ser declarada previamente.

Alude, esta Corporación ha reiterado que *“para solicitar la responsabilidad de los socios se requiere únicamente que estos sean llamados al proceso con el fin de permitirles que se allanen o se defienda mediante excepciones que de forma personal puedan proponer sin que exista ningún otro requisito, pues al ser una solidaridad legal que existe entre los socios y la sociedad limitada, no se requiere una condena previa, como erróneamente lo considero el a quo”.*

Por último dice, de conformidad con el artículo 1568 del Código Civil es posible que la solidaridad emane de la ley y eso es precisamente lo que aquí ocurre.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Preliminarmente se advierte, el auto que decida sobre el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

A efectos de resolver el recurso en análisis, pertinente resulta memorar, el artículo 100 del C.P.T, preceptúa que "*será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión arbitral firme"*.

Por su parte, el artículo 422 del C.G.P. prevé que *"Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contenciosos administrativos o de policía prueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia y los demás documentos que señale la ley"*.

Doctrinalmente[1] el título ejecutivo se ha definido como

> *"(...) el que además de afirmar la existencia del derecho, contiene en sí virtualmente la orden para el deudor de ejecutar la obligación, bajo pena de ser obligado por la autoridad pública."* Chiovenda, manifiesta: *"El titulo ejecutivo es el presupuesto o condición general de cualquiera ejecución, y, por lo mismo de la ejecución forzosa: nulla executio sine titulo.- Titulo ejecutivo es siempre una declaración, pero debiendo constar siempre esta declaración (ad solemnitatem) por escrito. ".*- Por último, Goldschmidt considera que el titulo ejecutivo *"es el documento público (auténtico) que da origen a la obligación por parte de los órganos ejecutivos de desarrollar su actividad ejecutiva, y que si existe el título, el acreedor puede promover la ejecución, tiene la posibilidad de promoverla y los órganos de ejecución tienen el deber de realizarla, como deber de oficio, que en caso de incumplimiento da lugar a responsabilidades."*

[1] Dr. HERNANDO MORALES MOLINA en su obra CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVIL PARTE ESPECIAL.

Además, el tratadista NELSON MORA G[2]., al hablar del proceso ejecutivo, ilustró:

> *"CLARIDAD DE LA OBLIGACIÓN".- Concepto General "La claridad, del latín claritas, hace relación especialmente al aspecto noseológico y consiste en que la obligación sea fácilmente inteligible, que no sea equívoca, ni confusa, y que únicamente pueda entenderse en un sólo sentido.... las características de la claridad son las siguientes; respecto de la obligación: la inteligibilidad, es decir, que la redacción esté estructurada en forma lógica y racional; la explicitación, o sea que lo expresado por cada uno de los términos consignados en el documento indiquen en forma evidente el contenido y alcance de la obligación..." (Subraya la Sala).*
>
> *La exigibilidad.- del latín exiger, la exigibilidad significa que la obligación puede pedirse, cobrarse o demandarse. - La obligación es exigible cuando válidamente puede pedirse o demandarse su cumplimiento al deudor. Dos hechos impiden la exigibilidad de la obligación: el plazo y la condición..."*
>
> *"Expresa, del latín expressio, expressus, que significa declarar precisamente lo que se quiere dar a entender. - El documento debe contener una obligación expresa, es decir, debe expresarse en él, sea en el escrito donde se encuentra consignada la obligación, sea oralmente, cuando se trata de documentos que permiten esa modalidad, como la cinta magnetofónica, el video-tape, el disco, o las películas cinematográficas con sonido, el contenido y alcance de la obligación, las partes vinculadas y los términos en que la obligación se ha estipulado. No valen pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, o de las características, partes y términos... Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente."*

En ese orden entonces, al juez de la ejecución únicamente le compete examinar, si la obligación contenida en el título ejecutivo reúne las condiciones contempladas en el artículo 100 del C.P.L y 422 del C.G.P, es decir, si es clara, expresa, exigible y proveniente del deudor, no reuniendo esos requisitos a cargo de todos los ejecutados, o alguno de ellos, no resulta viable, en tratándose de ejecuciones, controvertir o interpretar que las obligaciones laborales discriminadas en un título ejecutivo, obliguen de manera solidaria a un tercero.

Recuérdese en este aspecto, el proceso ejecutivo tiene una naturaleza jurídica propia, distinta de los demás de su género, o del ordinario. Es un juicio sumario en el que no se trata de aclarar derechos dudosos y controvertidos, sino de llevar a efecto lo que ya está determinado por el juez o consta evidentemente de uno de aquellos títulos que por sí mismos hacen plena prueba y que la ley da tanta fuerza como a la decisión judicial.

[2] "PROCESO DE EJECUCIÓN" Tomo I, quinta edición

En sentido estricto no se trata de un juicio, sino más bien de un modo de proceder para que se ejecuten y no queden ilusorias las obligaciones o deudas ventiladas y decididas en juicio o comprobadas por título o instrumentos tan eficaces como las sentencias judiciales; no se debate, pues, la existencia o la inexistencia del derecho, lo que se procura es la exigencia, por intermedio del juez de cumplimiento de una obligación preestablecida, por parte del deudor, con el fin que satisfaga el derecho del acreedor; obligación y derechos estos que deberán demostrarse de conformidad con el derecho probatorio.

Ahora, la naturaleza de los títulos base de recaudo ejecutivo que constituyen la fuente de la presente acción, corresponden a las liquidaciones que elabora la administradora del régimen pensional en la que determina el valor adeudado por el ejecutado o empleador que se encuentra en mora de trasladar los aportes pensionales de sus trabajadores.

Lo anterior, al tenor de lo previsto en el artículo 5° del Decreto 2633 de 1994[3] – para el asunto, por tratarse de una AFP privada- que orienta las acciones de cobro contra los empleadores que han incumplido su obligación de trasladar los aportes pensionales dentro del término legal, con fundamento en los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, así:

> *"ART. 5º—**Del cobro por vía ordinaria.** En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.*
>
> ***Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá**. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado**, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.***

[3]

La norma citada permite concebir el requerimiento previo como requisito de procedibilidad para poder iniciar la acción ejecutiva tendiente a efectuar el cobro de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, de manera tal que sin la satisfacción de ese requisito no es viable la ejecución, es decir, tanto el requerimiento previo como la consiguiente liquidación efectuada por la entidad conforman un título ejecutivo complejo o compuesto.

Frente a esto último, los doctrinantes Juan Guillermo Velásquez[4] y Nelson R. Mora G.[5] han señalado que se configura título ejecutivo complejo *"cuando la obligación se deduce de dos o más documentos dependientes o conexos. En este caso el mérito ejecutivo emerge de la unidad jurídica del título, al ser integrado éste por una pluralidad de documentos ligados íntimamente"*. Luego, *"lo que se requiere en el título no es unicidad material en el documento, sino unidad jurídica del título; que de la pluralidad material de documentos se deduzca la existencia de una obligación en forma expresa, clara y exigible en favor del acreedor y a cargo del deudor, aunque algunas o varias de estas condiciones consten en uno o varios documentos, pero siempre y cuando esté plenamente acreditado que tales documentos plurales están unidos por una relación de causalidad y que tienen por causa u origen el mismo negocio jurídico".*

Así pues, no es menester que exista unidad material o física del título, sino que en verdad de los plurales documentos base de recaudo pueda desprenderse unidad jurídica, valga precisar, que se encuentren íntimamente ligados por una relación de causalidad y se originen en el mismo negocio jurídico.

En cuanto al asunto que genera la disparidad de criterios entre la juez *a quo* y la entidad ejecutante, esto es, lo relativo a la responsabilidad solidaria de los socios de la sociedad LOGISTICS & CUSTOMS SERVICES LTDA respecto de quienes se procura se libre mandamiento de pago, es del caso indicar en primer lugar, no escapa a la Sala, que una de las obligaciones de un empleador es la de consignar oportunamente los aportes correspondientes de sus trabajadores a una entidad del régimen previsto en la ley 100 de 1993, por lo que, ante su incumplimiento, y al tenor de las normas citadas de manera precedente, las

[4] LOS PROCESOS EJECUTIVOS, novena edición.
[5] PROCESO DE EJECUCIÓN", Tomo I, quinta edición.

administradoras de los diferentes regímenes están facultadas para promover las respectivas acciones de cobro cuando se presente incumplimiento del empleador, siendo la liquidación elaborada por el fondo título base que prestará mérito ejecutivo según se infiere del inciso segundo, literal h del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.

Expuesto lo precedente, en autos no solo se trae como ejecutada a la accionada, sociedad de responsabilidad limitada, sino a sus socios, individualmente considerados, y que por supuesto no son los empleadores obligados al pago de las cotizaciones, empero que son convocados al juicio en virtud de la solidaridad a que se refiere el artículo 36 del C.S.T. que en su tenor literal dispone:

> ***ARTICULO 36. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.*** *Son solidariamente responsables de todas de las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión.*

Dicha solidaridad entonces, la del socio con su sociedad, es la causada por la vinculación laboral del trabajador frente al empleador, quien es el responsable directo de la obligación, esto es, "*la que se exige del solidario, no es deuda autónoma o diferente de aquella; lo que la ley manda garantizar con el pago es la debida por el empleador"* (SL11734 de 2014).

Por su parte, el artículo 1568 del C.C. prevé que *"La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley*".

Así, para que proceda la solidaridad anhelada en autos frente a los socios de la sociedad LTDA, cuya calidad se acredita con el certificado de existencia y representación legal incorporado a los autos (*páginas 61 a 65, archivo "01 DEMANDA.pdf", expediente digital*) se requiere que se reúna en su contra título ejecutivo o medie condena en proceso declarativo donde hubiese sido citado como parte en ese proceso, precisándose, no es característico de las obligaciones solidarias que el título constituido contra la persona jurídica obligada

se haga extensiva, *per sé* a otros eventuales deudores, como bien lo determinó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 9 de julio de 2004, radicación 22408[6].

---

[6] *"El tema que aquí nos interesa inicialmente es el relacionado con el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto establece la solidaridad de las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social pero solo hasta el límite de su responsabilidad, frente a todas las obligaciones surgidas del contrato de trabajo. La solidaridad que allí se impone, de tipo legal, es la nota característica de dicho precepto, la que ahora se discute frente a una sociedad de responsabilidad limitada.*

Debemos comprender que el Tribunal no desconoció dicha solidaridad, sino que por el contrario, la admitió expresamente, pues afirmó que "Para efectos de situar el debate en cuestión y la aplicación del efecto de la prescripción, debemos precisar previamente, que la solidaridad a que alude el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, emana de la relación laboral del trabajador con una empresa, negocio o sociedad de la cual el obligado solidario es condueño, comunero o socio, de tal forma que el incumplimiento del patrono como obligado directo compromete a los demás, es decir, los demandados RAFAEL FRANCISCO RAMÍREZ GANDUR, FRANCISCO RAMÍREZ FORERO, JACIBE GANDUR DE RAMÍREZ, YAMILE RAMÍREZ DE RESTREPO, ASTRID RAMÍREZ GANDUR, LUIS FERNANDO RAMÍREZ GANDUR y JUAN CARLOS RAMÍREZ GANDUR, son solidariamente responsables con la sociedad CRÉDITOS PARÍS LIMITADA respecto de las obligaciones laborales contraídas por esta última con SOCORRO HERMIDA DE LOZANO". Posteriormente dejó consignado que dicha solidaridad iba hasta el límite de los aportes de cada socio y desde este ángulo es evidente que no existe error de interpretación de su parte.

Se aúna a lo anterior que, tampoco se evidencia que el juez de la alzada le hubiera dado un sentido distinto a los artículos 1568 y 1570 del Código Civil. La primera de estas disposiciones simplemente expone el concepto de lo que debe entenderse por una obligación solidaria, así como sus fuentes, y sucede que el Tribunal también expresó con absoluta claridad que la solidaridad laboral nace de la ley. La segunda se refiere a la solidaridad activa y desde luego no es esa la clase de solidaridad que prevé el Código Sustantivo del Trabajo en el citado artículo 36, que consagra precisamente una solidaridad pasiva, en la que hay una pluralidad de deudores solidarios, cuyo acreedor puede dirigirse contra todos ellos conjuntamente o contra cualquiera de dichos deudores a su arbitrio.

Ahora bien, la censura sostiene que la exégesis correcta del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo es la que dejó sentado el a quo, en cuanto afirmó, según la transcripción del cargo, que "...a la fecha existe sentencia ejecutoriada que ordenó el cumplimiento de tal obligación, que se repite, se extiende a todos los socios de Créditos París Ltda..., por mandato legal (Art. 36 del C. S. del T.)". El Tribunal a su turno, sostuvo que la sentencia que se profirió en el proceso ordinario que la demandante instauró contra la sociedad Créditos París Ltda., "no puede vincular per se a los demás obligados solidarios que no fueron comprometidos en el proceso, pues esta solo tiene efectos Inter. Partes y no erga omnes, de tal manera que sus efectos y condena no vinculan sino a las partes trabadas en la litis".

Planteado así el problema, la razón la tiene el Tribunal. En efecto, de conformidad con el artículo 1571 del Código Civil, el acreedor puede dirigirse conjuntamente contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, situación que es uno de los rasgos distintivos de este tipo de obligaciones. Dentro de este marco ha de considerarse que la elección corresponde al acreedor, pues igualmente la ley le da la opción de escoger de entre sus deudores, a cuales se dirige en procura de obtener la satisfacción del crédito insoluto. Y cuando el acreedor escoge a uno de sus deudores solidarios como destinatario, por ejemplo, de la acción judicial en ese sentido, naturalmente el proceso contencioso se surtirá y tendrá efectos únicamente entre las partes enfrentadas. ***No es de la esencia de las obligaciones solidarias que la decisión proferida en la acción judicial contra uno de los deudores que culmine en contra de éste, se haga extensiva a los demás obligados solidarios que no fueron parte en la controversia judicial, resaltándose que no fueron partes precisamente por la voluntad del acreedor, que frente a su manera de obrar, debe asumir las consecuencias de ello.***

Es más, el artículo 28 del Código Civil le da fuerza al anterior aserto, pues claramente determina que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas, lo cual lógicamente supone el respeto por parte del juez de los sujetos enfrentados, así como los hechos, pretensiones y excepciones planteados y alegados por éstos, previsión que se armoniza y se complementa con el principio de la congruencia a que se refiere el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y que naturalmente también se relaciona estrechamente con la cosa juzgada que regula el artículo 332 ibídem.

Expuesto lo precedente, en el sub judice se tiene, en primer lugar, los socios de la sociedad LOGISTICS & CUSTOMS SERVICES no solo no se tratan del empleador obligado al pago de las cotizaciones, sino que además no han sido requeridos en los términos señalados al inicio de este proveído, lo que desde luego impide se configure título ejecutivo en contra de estos.

Al punto, revisado el expediente encuentra la Sala que si bien se observan comunicaciones adiadas 17 de febrero de 2021, dirigidas a GLORIA PAULINA CORREDOR y DIEGO BERNARDO LONDOÑO PUENTES con el asunto "*Requerimiento por Mora de Aportes Pensión Obligatoria –Previo a la demanda"* (*páginas 77 a 81, archivo "01 DEMANDA.pdf", expediente digital*), lo cierto es que estas tienen nota de devolución "*no reside"*, de lo cual se infiere, tales documentos no fueron entregados a sus destinatarios.

En este aspecto pertinente resulta destacar, el artículo 5° del Decreto 2633 de 1994 señala expresamente que *"**Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores",*** la administradora requerirá al empleador moroso, prescripción normativa que impone, por lo menos, que en el requerimiento se diga cuáles son las *"consignaciones respectivas"* que dejaron de hacerse, en otras palabras, en el requerimiento debe expresarse con precisión cuales son los periodos en mora, por lo que, tal comunicación tampoco resulta eficaz en orden a cumplir el requisito previo, pues allí se cita de manera genérica el estado de mora, sin especificar cuáles son los periodos que se adeudan, iterando que no hay certeza de la entrega del requerimiento al deudor, con lo cual se distorsiona la claridad que debe tener el título complejo para los efectos perseguidos en este especial, pues memórese igualmente que la labor del juez en el proceso ejecutivo es de verificación en cuyo esfuerzo tan solo debe constatar que la obligación sea clara expresa y exigible, todo lo cual impide a la Sala otorgarle validez al trámite así efectuado.

Precisado lo anterior, abundan los razonamientos jurídicos para que se ratifique que mal podría afirmarse, como lo hace la censura, que el ad quem hubiera interpretado erróneamente el mencionado artículo 36 del C. S. del T., pues lo cierto es que, se reitera, proferida una sentencia en proceso dirigido contra un deudor solidario o varios de ellos, sin comprender a su totalidad, sus efectos se extienden solamente a quienes fueron parte en la contienda judicial."

Lo anterior es así porque si se quiere dotar la obligación cuya ejecución se persigue de la característica de exigibilidad propia de los títulos ejecutivos, la deuda debe ponérsele de presente al empleador moroso para que éste, en términos de la norma, se pronuncie, y obvio es, deberá dársele a conocer como mínimo el aspecto sobre el cual debe emitir su pronunciamiento, situación que de paso desarrolla su derecho al debido proceso en su componente de derecho de defensa y permite que, siendo claras las obligaciones insolutas éste proceda al pago, o de no tener la claridad suficiente, se dirija a la entidad acreedora con el propósito de que se hagan las modificaciones y/o correcciones que sean del caso, todo lo cual permite que el diferendo pueda solucionarse previo a cualquier pronunciamiento judicial, directamente entre los sujetos de la relación jurídica.

Entonces, si no se tiene certeza en relación con la entrega de la liquidación allegada al presente proceso, se pone en serias dudas, además del requisito de claridad del título, la cabal satisfacción del requisito previo que permita la actual exigibilidad de la obligación.

En suma, debía la accionante configurar en debida forma el título ejecutivo en orden a iniciar la ejecución, en contra de los socios de la sociedad convocada a juicio en calidad de empleador moroso, conforme las disposiciones citadas al inicio.

Tales consideraciones conducen a confirmar la decisión del a-quo en cuanto negó librar mandamiento en contra de GLORIA PAULINA CORREDOR CIFUENTES y DIEGO BERNARDO LONDOÑO PUENTES, en calidad de deudores solidarios.

COSTAS en esta instancia a cargo de la ejecutante.

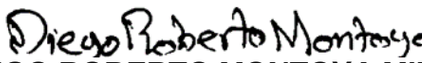
En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL** administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el JUZGADO VEINTISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ el 26 de mayo de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A.

CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



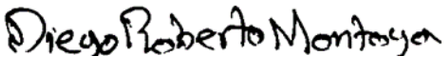
RAFAEL MORENO VARGAS



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $300.000, a cargo de la parte demandante, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR LUIS FERNANDO GALVIS CAICEDO CONTRA LA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. (RAD. 08 2019 00150 01).

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose presentado los alegatos en esta instancia por la demandada (folios 411 a 414), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente:

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por el apoderado de la demandada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P**.**, contra el auto proferido por el Juzgado Octavo (08) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el pasado 06 de julio de 2021, que resolvió declarar NO probadas las excepciones previas de habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso que no corresponde, caducidad, falta de competencia por falta de reclamación administrativa y cosa juzgada y declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones (fl.404 y 404 vto)

La Juez de primer grado argumentó su decisión en los siguientes puntos[1]; i) Respecto a la excepción de habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde consideró que, de la lectura de la demanda se aprecia sin mayor esfuerzo que, las pretensiones van encaminadas a obtener la declaratoria de ineficacia del despido y, en consecuencia el reintegro al cargo con el correspondiente pago de salarios, aportes y acreencias laborales que se dejaron de recibir desde la época del despido hasta cuando se ordene el reintegro;

[1] CD, Fl. 405 (record. 19:48)

igualmente señaló que el demandante persigue el pago de perjuicios materiales, morales por daño emergente y lucro cesante, la indemnización moratoria, el pago del importe completo señalado en pagaré de fecha 30 de septiembre de 2015, la indexación de las condenas e intereses moratorios.

Una vez relacionó las pretensiones hizo referencia a los fundamentos de derecho invocados en la demanda (fl. 65) y al procedimiento relacionado en el acápite séptimo (fl.77), concluyendo que por la claridad de los hechos y de las pretensiones el trámite al que debe darse aplicación es el procedimiento ordinario laboral y no el de un acoso laboral, precisó que si bien es cierto en los hechos se hace referencia a posibles conductas de acoso, las pretensiones se encaminaron al estado de salud del demandante y por ello es procedente que se tramite por el proceso ordinario laboral.

Frente a la excepción de caducidad que, la parte demandada fundo en el art. 18 de la Ley 1010 de 2006, explicó que no puede declararse su prosperidad toda vez que el trámite del proceso ordinario laboral debe ceñirse únicamente a las normas sustanciales laborales.

En cuanto a la excepción de falta de competencia por falta de reclamación administrativa se remitió al art. 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la declaró no probada por cuanto la sociedad demandada no hace parte de las entidades relacionadas en la norma, por ser una empresa de servicios púbicos constituida como sociedad anónima por acciones, razón por la cual y dada esa naturaleza no se le podía exigir al demandante el agotamiento de la reclamación administrativa.

Con relación a la excepción de cosa juzgada que, el apoderado de la demandada fundamentó en el hecho de que el actor interpuso una acción de tutela en la que, solicitó su reintegro haciendo alusión a sus condiciones de salud, acción que fue conocida en primera instancia por el Juzgado 16 Penal Municipal y en segunda instancia por el Juez 22 Penal del Circuito con funciones de conocimiento ambos de Bogotá, resolviendo su improcedencia; la Juez de primer grado señaló que si bien en principio podría concluirse una identidad de objeto y causa, ello no obsta para declararse probada la excepción propuesta toda vez que la decisión de tutela no ostenta la claridad necesaria para presentarse como decisión válida y

vinculante para las partes, como para facultar al juzgador a declarar la existencia de dicho medio exceptivo.

Frente a la ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, se tiene que la Juez de primer grado la declaró probada por encontrar que, las pretensiones contenidas en los numerales 6 y 7 en las cuales se pretende el pago de la indemnización moratoria contenida en el artículo 65 del código sustantivo del trabajo y de daños materiales en sus elementos de daño emergente y lucro cesante por el despido injusto establecido en el artículo 64 del código sustantivo del trabajo, indudablemente resultan excluyentes de cara a los demás pedimentos rogados en la demanda; resultando indebido acumularlas en un mismo proceso en razón en que, si el actor pretende la ineficacia del despido que conllevaría a la continuidad de la relación laboral no puede solicitar de igual manera la indemnización moratoria y la indemnización por despido injusto siendo que las mismas suponen que la relación laboral ya terminó.

Advirtió que, si bien es cierto en el escrito de demanda no se observa que dichas pretensiones hayan sido discriminadas como subsidiarias ello no implica que, la operadora judicial desconozca su deber de hacer una interpretación integra de la demanda sin que, el rigorismo de la aplicación de las disposiciones procesales impida la materialización de derecho sustancial.

En virtud de lo anterior, aclaró que el estudio de las pretensiones contenidas en los numerales 6 y 7 de la demanda se excluirían como principales, por ser indebida su acumulación pero que, sin embargo se tendrían en cuenta como subsidiarias; Precisando que de manera principal se estudiaría la ineficacia del despido y en evento de prosperar aquella se estudiaría de forma subsidiaria la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del código de procedimiento sustantivo del trabajo y de igual forma se estudiaría la indemnización establecida en el artículo 64 del mismo compendio normativo.

Frente a la anterior decisión el apoderado judicial de la demandada interpuso recurso de apelación (CD folio 405, record. 32:41)[2].

[2] Gracias su señoría, bueno en este estado de la diligencia conforme a la oportunidad legal señalada me permito interponer recurso de reposición ante la decisión que usted acaba de proferir y de forma subsidiaria recurso de apelación con miras y tendiente a que sea revocado el auto mediante el cual se declara no probadas las excepciones previas planteadas en la contestación de la demanda fundamento en lo siguiente y digamos que estructuralmente quizá iniciar por el final no sea lo debido pero para efectos para una mayor organización en mi recurso y en los argumentos que lo fundamenta lo considero necesario quisiera llamar la atención del

El apoderado de la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. empezó sustentando su inconformidad respecto a lo decidido en la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, manifestó que entiende el deber de interpretación que recae en los operadores judiciales, sin

---

despacho en cuanto a que su decisión incluso al declarar prospera la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones entendiendo el nivel de interpretación recae en su despacho en la rama judicial para el estudio completo de las pretensiones solicitadas en la demanda sin embargo pues si llama la atención del suscrito que el común denominador o deber ser de este tipo de excepción si bien es subsanar evitar un fallo inhibitorio más adelante también debe ser el ajustar el comportamiento o la presentación de las solicitadas de declaración y condena formuladas por la parte actora ajustarlas a la norma porque a consideración del suscrito debió haber pasado en el presente proceso es que se tenía que correr traslado a la parte actora para que manifestara si se ratificada o no en el planteamiento que gozo la demanda so pena incluso de ser rechazada en caso tal que el apoderado de la parte actora reiterar el orden y no subsanara como se hizo de forma oficiosa por el despacho respecto a habérsele dado tramite diferente al que corresponde el presente proceso y también bajo el entendido veo que su señoría hizo una interpretación integral si llama la atención del suscrito que en el proceso se pretenden declaraciones y condenas relacionadas con la supuesta tipificación de conductas de acoso laboral en particular la primera pretensión relacionada con la declaración de la eficacia del despido por hechos relacionados por las supuesta comunicaciones entregadas a mi representada y que si integralmente nos vamos a validar los hechos que fundamentan esa pretensión pues no son otros distintas a que el actor manifiesta que para el momento en que se tomó la decisión por parte de mi representada de despedirlo sin justa causa y con previo pago0 de la indemnización correspondiente se encontraba supuestamente siendo objeto de conductas de acoso laboral si entonces si bien encamina o trata de vincular esta situación a su supuesto estado de salud lo que aquí bajo m i interpretación o bajo mi perspectiva lo que aquí está en discusión si son conductas que para los ojos de la compañía no fueron constitutivas de acoso laboral y para la interpretación del actor o demandante si lo fueron y que eso haya desencadenado o no en situaciones en situaciones dirigidas o direccionadas a su condición de salud pues ya lo dirá el proceso más adelante conforme al material probatorio que se haya aportado sin embargo acá lo que sí está en discusión es el tema del acoso laboral que es la manifestación o afirmación que plantea el apoderado en sud emanada entonces que considera el suscrito que el tramite a surtirse si debió o debió haber sido el tramite establecido en la ley 1010 de 2006 y que en ese trámite ya sea el despacho que resuelva si el demandante fue o no víctima de esas conductas alegadas en la demanda como se hizo suponiendo levantamiento de esa acción especial y no bajo ninguna óptica el proceso ordinario que nos tiene hoy aquí en audiencia respecto a la excepción previa de caducidad pues con los mismos argumentos de la excepción anterior pues acá se trata bajo la interpretación integra de los hechos de la demanda de que situación que el actor presento una queja de acoso laboral entre el 11 y el 18 de septiembre de 2015 y esto le daba conforme a lo que establece la ley 1010 de 2006 un término de 6 meses impostergables para promover esa acción especial o ese proceso especial de acoso laboral termino que pues dejo vencer claramente y sencillamente debemos limitarnos al cómputo exacto y matemático de los términos para que se declara la caducidad de los términos de la misma respecto a la falta de competencia por ausencia de reclamación administrativa está claro que es deber del interesado agotar la reclamación previa que se trata de entidades públicas si es nación en la entidad que conforme parte del gobierno nacional en materia de lo contencioso administrativo y manifiesta en la parte motiva del auto proferido por su despacho el día de hoy no hace parte de este tipo de entidades públicas porque en atención a su naturaleza es una sociedad por acciones sin embargo se desconoce que su composición accionaria representa una mayor participación del estado y basta con remitirse al certificado de existencia y representación legal para así determinar que en efecto es una entidad de derecho público aunado a que presta un servicio público y amplia jurisprudencia hay al respecto frente a la naturaleza de empresa pública de naturaleza pública se le atribuye a las entidades que prestan este tipo de servicios públicos domiciliarios me faltaba la cosa juzgada con ocasión a la declaración de no prosperidad de la excepción de la cosa juzgada sírvase por parte del suscrito lo que en esa acción de tutela promovida por el actor ante el juzgado 16 penal municipal de Bogotá ya se resolvió aquí los solicitado existe claramente como lo identifico el despacho una identidad de partes una identidad de causa una identidad de objeto haciendo así que calcado el argumento usado en la acción promovida de forma pues constitucional por parte del actor respecto o frente a la acción promovida ante la jurisdicción ordinaria encontrado que claramente existió un pronunciamiento previo por parte del juez de tutela confirmado en segunda instancia si se quiere llamar así por objeto de la impugnación que se hiciera por parte de la parte actora y claramente encontrándonos hoy precisamente la situación busca evitar el despacho y es un desgaste innecesario de la administración de justicia dada la congruencia entre ambas acciones estas sentencias ya presto ese merito ejecutivo y ese tránsito a cosa juzgada toda que exige la norma para declarar hoy prospera la excepción y como consecuencia la terminación del proceso bajo estos argumentos señoría dejo sentado mis argumentos solicitando como se dijo al inicio se revoque el auto por usted promulgado bien sea por vía de reposición o de forma subsidiaria ante el Honorable Tribunal muchas gracias.

embargo, aduce que de las excepciones previas propuestas no se corrió traslado a la parte demandante, para que manifestara si se ratificada o no en el planteamiento de la demanda y tuviera la oportunidad de reiterar el orden de las pretensiones y no se subsanara de forma oficiosa como lo hizo la Juez de primera instancia.

En cuanto a la excepción de haberse dado un trámite diferente al que corresponde reitera que, de la lectura de la demanda se infiere que lo puesto en discusión es un tema de acoso laboral que debe surtirse conforme lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006 y que con base en dicha Ley debe también estudiarse la excepción previa de caducidad, pues, reitera que debe tenerse en cuenta la interpretación integra de los hechos de la demanda, en los que el actor argumenta que presentó una queja de acoso laboral entre el 11 y el 18 de septiembre de 2015, razón por la que conforme a lo que establece la Ley 1010 de 2006, el demandante tenía un término de 6 meses impostergables para promover esa acción especial o ese proceso especial de acoso laboral, término que a su juicio dejo vencer.

En lo que atañe a la falta de competencia por ausencia de reclamación administrativa argumentó que es claro que es deber del interesado agotar la reclamación previa, por cuanto contrario a lo dispuesto por la a quo, la composición accionaria de la demandada representa una mayor participación del estado y basta con remitirse al certificado de existencia y representación legal para así determinar que en efecto es una entidad de derecho público, que presta un servicio público.

Y, frente a lo que se dispuso de la excepción de cosa juzgada alega que lo debatido en este proceso, ya fue objeto de decisión en el trámite de la acción de tutela promovida por el actor ante el Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá donde claramente asegura, se identifica una identidad de partes, una identidad de causa y una identidad de objeto,

Para resolver se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De conformidad con el numeral tercero del artículo 65 del C. P. del T. y la S.S. el auto mediante el cual se *"…decida sobre excepciones previas"* es susceptible del

recurso de apelación y en consecuencia procede la Sala a resolver el punto concreto de inconformidad, en los términos del artículo 66A del estatuto procesal laboral.

Al punto y en lo que tiene que ver con el primer motivo de inconformidad respecto de la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, se tiene que la a quo resolvió en principio declararla probada respecto de las pretensiones 6 y 7; aclarando que se estudiarían de forma subsidiaria de no prosperar las pretensiones principales, ello en virtud de la obligación que reviste a los Jueces de hacer una interpretación integra de la demanda.

En contraposición a dicha decisión el apoderado de la encartada manifestó que pese a entender el deber de interpretación aludido por la a quo, no se podía pasar por alto que se corriera el correspondiente traslado de las excepciones previas a la parte demandante quien en dicha oportunidad debía manifestar si se ratificaba o no en el planteamiento de la demanda.

Frente a lo argumentado por el recurrente esta sala se remite a lo dispuesto en el art. 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que en el parágrafo 1 numeral 1 dispone:

> **"ARTICULO 77:**
> **…**
>
> **PARÁGRAFO 1o.** Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia:
>
> 1. Decidirá las excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 32.

En el art. 32 del mismo compendio normativo establece:

> **"ARTICULO 32. *TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES.*** El juez decidirá las excepciones previas en la *audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio.* También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.
>
> Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia.

De la revisión de dichos apartes normativos no se observa que en el procedimiento laboral se haya establecido, la obligación de correr traslado de las excepciones previas propuestas en la contestación a la demanda.

Sin embargo y, atendiendo a las obligaciones que tiene el Juez como director del proceso[3] aunado al deber que tiene de garantizar el derecho fundamental de defensa y debido proceso[4], se advierte que el trámite de las excepciones debe ceñirse únicamente a lo establecido en el art. 1 de la Ley 1149 de 2007 que modifica el art. 32 del Compendio de Procedimiento Laboral, lo que impone llevar al entendimiento de que el actor, una vez sea contestada la demanda por su contraparte, está en condiciones de conocer los eventuales medios exceptivos propuestos[5] para que al momento de la práctica de la audiencia de que trata el art. 77 del CPT y de la SS, una vez se declare surtida la etapa de conciliación conforme lo dispuesto en el parágrafo 1 de dicho precepto, solicite al Juez su intervención, a fin de pronunciarse y contraprobar las excepciones que se propongan con el carácter de previas, actuación que en esta etapa procesal es exclusiva del demandante y por ende, sería el único legitimado para alegar algún tipo de afectación en su derecho de defensa o debido proceso, hecho que en el caso en estudio no ocurrió, pues, el demandante decidió guardar silencio respecto a los medios exceptivos propuestos por la pasiva quien, en este caso no sería el afectado o legitimado para alegar una vulneración al derecho de defensa de las partes en punto al traslado por él invocado.

---

[3] **CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL**: **ARTÍCULO 48. EL JUEZ DIRECTOR DEL PROCESO.** El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.

[4] **ARTICULO 29.** El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

[5] Ver Art. 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Ahora, en gracia de discusión y de estimarse que la apelación también controvierte la interpretación que le asignó la Juez de primer grado al contenido de la demanda, advierte esta instancia que se avala la decisión atacada, pues, si bien es cierto la redacción de las pretensiones de la parte actora no son un modelo a seguir, en los términos del art. 25 y 25 A; es claro que los anhelos principales del actor son el obtener la declaratoria de ineficacia del despido acaecido el 29 de febrero de 2016 por cuanto para esa data se encontraba en delicada situación de salud física y mental (fl.65) y en virtud de ello se ordene el reintegro; lo anterior se infiere de la lectura de los hechos que en síntesis hacen referencia a que para la época del despido se encontraba en tratamiento psicológico y médico[6].

Aunado a ello ha de tenerse en cuenta que, el operador judicial tiene la facultad de interpretar los segmentos de la demanda, en conjunto, de manera lógica y racional e integral; sin embargo, dicha facultad no es ilimitada, pues en este aspecto el fallador debe tener especial cuidado en que con su interpretación no sustituya la voluntad de las partes, ni traspase el límite del debido proceso.

Acorde a lo anterior, esta instancia encuentra que la decisión de primera instancia de excluir como principales las pretensiones 6 y 7 de la demanda y estudiarlas como subsidiarias, se ajusta a los lineamientos establecidos en el ya nombrado art. 48 del CPT y de la SS, pues, esta decisión respeta la intención del demandante de que se estudien de forma integral sus pretensiones.

Sumado a ello, dicha medida de saneamiento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 25 A, pues las pretensiones de la demanda están dentro de la competencia de la Juez Laboral, corresponden al mismo procedimiento y el hecho de estudiar como principal el reintegro y de forma subsidiaria las indemnizaciones reclamadas, garantiza la no exclusión entre ellas y, además el cumplimiento del objeto de la norma procesal en cita que no es otro que materializar el principio de economía procesal, al permitirse que en una sola causa judicial se pueda debatir y decidir distintas relaciones sustanciales.

En lo que corresponde a la excepción de haberse dado un trámite diferente al que corresponde de entrada esta instancia confirma la decisión de la Juez en este punto, como pasa a fundamentarse:

---

[6] Ver folio 64 hechos 1-24.

El numeral 7º del artículo 100 del C.G.P., aplicable por remisión analógica del artículo 145 C.P.L y S.S. señala de forma taxativa que puede proponerse como previo dicho medio exceptivo; la convocada a juicio lo presentó aduciendo que, de la lectura de los hechos y pretensiones de la demanda se infiere que lo puesto en discusión es un tema de acoso laboral que debe surtirse conforme lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006.

Pues bien, para resolver los motivos de inconformidad del recurrente basta con traer a colación de manera sucinta los supuestos de hecho y pretensiones de la demanda, los cuales se contraen en que el demandante laboró por espacio de 5 años a favor de la demandada (hechos 1 y15)[7] , que durante la vigencia de la relación laboral le devino estrés emocional y laboral, que le ocasionaron graves padecimientos de salud y por ende tuvo que someterse a tratamientos médicos y psicológicos que aduce fueron puestos en conocimiento de la empleadora (fls.63 y 64), la que asegura no tuvo en cuenta dicha situación y aún así tomó la decisión de terminar el contrato de trabajo.

A su turno, las pretensiones principales se circunscriben en la declaratoria de ineficacia del despido acaecido el 29 de febrero de 2016, por encontrarse el trabajador en "*delicada situación de salud física y mental"* (sic)[8] y en consecuencia se ordene el reintegro y el pago de salarios, prestaciones sociales, incrementos salariales, aportes, indexación o intereses y costas.

Descendiendo al sub examine considera este Juez Colegiado que el argumento esgrimido por la A quo para declarar no probada la excepción bajo estudio fue el acertado, toda vez que estimó que las pretensiones de la demanda deben ventilarse a través de un proceso ordinario laboral y, no a través de un proceso especial, como quiera que el legislador frente a este última naturaleza de proceso atribuyó la competencia del juez laboral exclusivamente en un proceso sancionatorio, previa demostración de alguna conducta constitutiva de acoso laboral conforme al artículo 12 de la Ley 1010 de 2006; máxime cuando, de la lectura de las 14 pretensiones, no se observa que alguna vaya dirigida a la imposición de sanción alguna en contra del empleador por haberse configurado

[7]Folios 63 y 64.
[8] Folio 65, pretensión 1.

en vigencia de la relación contractual algún tipo de conducta de acoso laboral en contra del trabajador, tal y como lo dispone el artículo 7 ibidem [9].

Respecto a la excepción de caducidad se advierte que corre la misma suerte de la excepción antes estudiada pues, en el caso en estudio no puede darse aplicación a lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 1010 de 2006, por cuanto, se reitera estamos en presencia de un proceso ordinario laboral que ha de regirse por las normas contenidas en el Código Procesal del Trabajo y no por la norma en cita que sólo se dirige a reglamentar el debido proceso en asuntos especiales destinados a sancionar conductas de acoso laboral como se advirtió en precedencia.

En lo que concierne a la falta de competencia por ausencia de reclamación administrativa argumentó el recurrente que, en el caso en estudio la parte actora debía agotar la reclamación administrativa d que trata el art. 6 del CPT y de la SS, por cuanto la composición accionaria de la demandada representa una mayor participación del estado y que basta con remitirse al certificado de existencia y representación legal para así determinar que en efecto es una entidad de derecho público, que presta un servicio público.

Los argumentos esbozados por el recurrente para fundamentar este medio exceptivo también están llamados al fracaso, por lo que se pasa a explicar.

El art. 6 del CPT y de la SS dispone:

> **"ARTICULO 6o. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA.** Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta..

[9] La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia de 2 de agosto de 2010, radicación 47080, reiterada en sentencia SL17063-2017 de 5 de julio de 2017, radicación 45992, indicó que el procedimiento especial que determinó la ley 1010 de 2006 lo fue para emitir decisión sobre las sanciones del artículo 10 de la mencionada ley, pero no para determinar los perjuicios morales, la reinstalación, los daños materiales y las demás anexidades jurídicas cuyo conocimiento le corresponde a los jueces en el trámite del procedimiento ordinario.

Al revisar el certificado de existencia y representación legal de la demandada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.[10] se observa que fue constituida por escritura pública No. 67 del 16 de febrero de 2007 de la notaria 11 de Bucaramanga, como una sociedad comercial, sin embargo en el proceso la convocada a juicio no aportó la escritura pública de su constitución, ni documento alguno del que se pueda inferir su naturaleza jurídica.

Pese a ello y al consultar la página web de la sociedad demandada se encontró que[11], la Transportadora de Gas Internacional S.A ESP es una empresa de servicios públicos constituida como sociedad por acciones, asimilada a las sociedades anónimas, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.

Y de acuerdo con el art 27.7 de la Ley 142 de 1994 [12]esta clase de sociedades con independencia de su composición accionaria, se rigen para todos los efectos, por las reglas del derecho privado, es decir que sus actos, documentos, contratos, patrimonio, régimen de presupuesto, régimen laboral, etc., son por completo privados.

Por lo que se concluye que, en este proceso y dada la naturaleza privada de la entidad, no tiene por qué exigirse el agotamiento de la reclamación administrativa en los términos del art. 6 de la norma procesal laboral.

Por último y, en virtud de la excepción de cosa juzgada propuesta por la accionada ha de indicarse que este medio exceptivo es una ficción legal amparada en el artículo 32 del C.P.T y de la SS, modificado por el artículo 19 de la Ley 712 de 2001, por el artículo 1º de la Ley 1149 de 2007 y en el artículo 303 del C.G.P.[13], por medio

---

[10] Folios 111-122.
[11] https://www.tgi.com.co/
[12] Ley 142 de 1994, artículo 27.7.: "Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado. La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su representante legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a ellas todos los actos que la ley y los estatutos permiten a los socios particulares." (Resaltado fuera del texto)
[13] *"**Artículo 303. Cosa juzgada.** La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes".*

del cual las partes que se someten a una decisión judicial están obligadas a respetar su pronunciamiento.

Igualmente será acatada por todos los funcionarios de la rama jurisdiccional, quienes no podrán ni desconocer ni modificar la decisión, como tampoco tramitar nuevo proceso cada vez que se proponga la misma pretensión, entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, pues la ley prohíbe que sobre una misma petición haya doble pronunciamiento, ya que un segundo pronunciamiento puede ser contradictorio, y sobre el mismo caso no puede haber distinta solución.

Es la decisión del Estado la que se impone a las partes querellantes, porque es necesario garantizar los derechos adquiridos. *"La cosa juzgada es el fin natural del proceso"* y ella debe garantizar la estabilidad del orden legal.

En el caso de autos se tiene que el demandante instauró acción de tutela en contra de la empresa demandada con el objeto de que se ordenara el reintegro al cargo que desempeñaba a la fecha de terminación del contrato y se le pagaran los salarios adeudados y las prestaciones dejadas de percibir (fl.292).

Luego de realizarse el trámite respectivo el Juez de tutela en primera instancia, decidió negar por improcedente la acción de tutela promovida por el demandante , como consta con la sentencia de fecha 05 de abril de 2016 [14], decisión que fue confirmada por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, en segunda instancia.[15]

La improcedencia declarada por el Juez Constitucional se fundamentó en que en el trámite de la acción de tutela no se acreditó que el accionante fuera sujeto de especial protección constitucional, ni la existencia de un perjuicio irremediable; aunado a ello acotó que:

> *"el conflicto planteado por el accionante, gira en torno a una discusión de carácter laboral, que debe ser dirimida a través del mecanismo idóneo, por no configurarse los requisitos para la intervención del Juez Constitucional."*

Si bien es cierto, de la revisión de lo solicitado en la acción de tutela y las pretensiones de la demanda[16] existe una identidad de objeto, causa y partes, ha de

[14] Folios 306-313
[15] Folio 314.
[16] Folio 65.

advertirse que la decisión proferida por el Juez Constitucional no resolvió de fondo la situación fáctica sometida a su conocimiento, sino que simplemente su decisión verso respecto de los requisitos para la procedencia de su estudio en forma extraordinaria, ello en virtud de lo dispuesto en el art. 6 del Decreto 2591 de 1991; concluyendo entonces que, por no encontrarse acreditados, no era procedente dar un trámite especial y extraordinario a dicha controversia, que por ende debía ser sometida al proceso ordinario laboral.

Respecto a la existencia de cosa juzgada constitucional la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia enseñó:

> "La cosa juzgada constitucional derivada de un fallo de tutela que ampara de manera definitiva los ius fundamentales, se proyecta sobre el proceso ordinario. En efecto, si desde el prisma de la Constitución es procedente la tutela de los derechos fundamentales, es equivocado sostener que en el plano legal – que hoy redimensiona e integra en un plano constitucional- la protección no tiene cabida"[17]

Atendiendo entonces a lo leído, se tiene que en el presente litigio, no se puede declarar la existencia de una cosa juzgada constitucional que repercuta en el proceso ordinario laboral por cuanto no existe una decisión de fondo respecto de las pretensiones del demandante y no se causa efecto jurídico alguno.

En las condiciones expuestas, le merece a la Sala coincidencia con la providencia dictada por el Juez del conocimiento en los puntos decididos, razón por la cual se confirmará el auto apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de las recurrentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el auto proferido por el JUZGADO 8 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., en la audiencia del pasado 06 de julio de 2021.

[17] SL5375-2018 de 10 de diciembre de 2018, en la que se rememora la sentencia SL15882-2017.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



RAFAEL MORENO VARGAS



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $300.000, a cargo de LA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO EJECUTIVO LABORAL PROMOVIDO POR MÓNICA LADINO LOZANO CONTRA C.I. LAS AMALIAS S.A. EN LIQUIDACIÓN (RAD. 06 2011 00217 01).

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose presentado los alegatos de instancia por la parte demandada (folios 84 a 86), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente

P R O V I D E N C I A

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del ejecutante contra la providencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esta ciudad, en audiencia llevada a cabo el 18 de junio de 2021 (CD. folio 80, record: 09:09, acta a folio 79), en el cual se resolvió:

> *"**PRIMERO: DECLARAR** probada la excepción de prescripción propuesta por la sociedad ejecutada C.I LAS AMALIAS S.A. EN LIQUIDACIÓN, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.*
>
> *De acuerdo con lo previsto por el numeral 3 del artículo 443 del Código General del Proceso se declarar terminado el proceso de la referencia y el levantamiento de las medidas cautelares. Se ordena librar las comunicaciones correspondientes.*
>
> *En firme la presente decisión se ordena el archivo del expediente.*
>
> ***SIN COSTAS** en sede de esta instancia".*

Para arribar a la anterior decisión, la juez de primer grado consideró, si bien es cierto la demanda se interpuso dentro de los 3 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia que sirve de base a la ejecución, con ella no logró interrumpir el término prescriptivo toda vez que la notificación a la demandada se realizó el 20 de febrero de 2017, esto es, más de un año después de haberse librado mandamiento de pago -15 de junio de 2011- pese a que era una carga de la parte actora adelantar las gestiones respectivas para lograr la comparecencia de la encartada. En esa medida, dijo, devenía próspera la excepción (CD. folio 80, record: 05:03, acta a folio 79).

Contra dicha determinación, el apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación, señalando, el documento en el que se fundamenta la ejecución es una sentencia que contiene una obligación clara, expresa y exigible, de allí que no se debe tener en cuenta el artículo 151 del C.P.T y la S.S., sino lo contenido en el artículo 2536 del Código Civil modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002 que prevé una prescripción de 5 años.

Señala, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-2203 de 2017, reiterando los argumentos de la SL-1300 de 2015, SL-171665 de 2015, indicó que "*lo que pretende el proceso ejecutivo es hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa sentencia, lo que se trata no es de debatirse los derechos que ya fueron analizados y controvertidos en sede judicial sino cobrar ejecutivamente dichas acciones.".*

De otra parte, indica, a folio 67 del expediente obra constancia de los trámites de notificación adelantados por ese extremo procesal, que dan cuenta no solo de la mala fe de la pasiva en ocultarse, sino también, que estos se empezaron a realizar dentro del término del año de expedido el mandamiento de pago respectivo.

Adicionalmente, sostiene, cuando hay controversia entre una norma de orden laboral y una de carácter general, debe emplearse aquella que resulte más favorable al trabajador, por lo que en el asunto debe darse aplicación al principio de favorabilidad al que alude el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo,

concordante con el artículo 53 de la Constitución Política[1] (CD. folio 80, record: 10:00, acta a folio 79).

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Asume la Sala el conocimiento de este especial, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por el apoderado de la parte ejecutante, contra el auto que declaró probada la excepción de prescripción.

Así las cosas, lo que se evidencia en primer término es que el título ejecutivo está constituido por la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral adelantado por MÓNICA LADINO LOZANO contra C.I. LAS AMALIAS EN LIQUIDACIÓN (folios 74 a 83, cuaderno proceso ordinario), así como la liquidación de costas de primera instancia (folio 85) y el auto que les impartió aprobación (folio 86), conforme se señala en providencia mediante la cual se

---

[1] *"Gracias señora juez de acuerdo a la decisión que este estrado judicial ha tomado interpongo recurso de apelación contra la decisión en el sentido o teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

Primero es importante señalar que la finalidad y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del documento base de la ejecución es una sentencia, la cual contiene una obligación clara, expresa y exigible ello es por lo que se debe tener en cuenta, no el artículo 151 del Código procesal del trabajo y de la seguridad social sino en su defecto el artículo 2536 del Código Civil que señala que la prescripción de la sentencia que contiene una obligación que ya ha sido debatida en sede judicial pues se le debe dar el término prescriptivo de los 5 años, ello en virtud de la ley 791 del año 2002 artículo 8 y lo contendido en la sentencia C-531 del 2014.

De igual manera es importante señalar su señoría que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2203 del 2017 la cual trae argumentos de la sentencia SL 1300 del 2015, SL 17165 del año 2015, señala que lo que pretende el proceso ejecutivo es hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa sentencia, lo que trata no es debatirse los derechos que ya fueron analizados y controvertidos en sede judicial sino cobrar ejecutivamente dichas acciones.

Además, téngase en cuenta su señoría a folio 67 del expediente obra notificaciones elevadas por la parte actora donde se demuestra la mala fe del demandado en ocultarse para hacer efectiva la notificación y es por ello que desde esta foliatura que fue radicada en debida forma en el juzgado se observa efectivamente que se empezaron a realizar las debidas notificaciones estando dentro del término del año en que se expide el respectivo mandamiento ejecutivo de pago.

Ahora bien, téngase en cuenta su señoría que cuando existe una controversia entre una norma de orden laboral y una norma de carácter general pues debe aplicarse la norma más favorable al trabajador y en este caso solicito respetuosamente al Honorable Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral aplicar el principio de favorabilidad es decir el contendido en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional.

En este orden de ideas su señoría, dejo presentado mi recurso de apelación no sin antes solicitarle por favor tenga en cuenta también el memorial radicado con fecha 07 de diciembre del año 2020 donde este

libró mandamiento de pago (7 y 8, cuaderno ejecutivo) decisiones que prestan mérito ejecutivo, ya que se trata de cumplir con una obligación impuesta a favor del ejecutante y en contra de la ejecutada, siendo ésta clara, expresa y exigible en términos del artículo 100 del C.P.L., en concordancia con el artículo 488 del C.P.C[2] (hoy 422 del C.G.P.).

De tal manera, mediante proveído calendado 15 de junio de 2011 (folios 7 y 8) se libró mandamiento ejecutivo, en los siguientes términos:

> *"**PRIMERO**: LIBRAR ORDEN DE PAGO POR LA VÍA EJECUTIVA laboral en contra C.I. LAS AMALIAS S.A. EN LIQUIDACIÓN y a favor de MONICA LADINO LOZANO por las siguientes sumas de dinero y conceptos:*
>
> *A.- Por la suma de **TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA MCENTAVOS** **(sic)** ($327.039,50), por concepto de cesantías causadas por el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 04 de septiembre de 2007, **MAS,** el valor que corresponda por indexación, causada, entre el **04 de septiembre de 2007,** HASTA, la fecha en que el ente accionado realice el pago de la cantidad aquí determinada como obligación principal al* (sic) *demandante*
>
> *B.- Por la suma de **VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($27.490,19)** por concepto de intereses causadas* (sic) *por el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 04 de septiembre de 2007, **MAS,** el valor que corresponda por indexación, causada, entre el **04 de septiembre de 2007,** HASTA, la fecha en que el ente accionado realice el pago de la cantidad aquí determinada como obligación principal al* (sic) *demandante.*
>
> *C.- Por la suma de **CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($171.593,75)** por concepto de vacaciones causadas por el periodo comprendido entre el 19 de diciembre hasta el 04 de septiembre de 2007, **MAS,** el valor que corresponda por indexación, causada, entre el **04 de septiembre de 2007,** HASTA, la fecha en que el ente accionado realice el pago de la cantidad aquí determinada como obligación principal al* (sic) *demandante.*
>
> *D.- Por la suma de **OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS** ($84.787,50) por concepto de prima de servicios causadas por el periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 04 de septiembre de 2007, **MAS,** el valor que corresponda por indexación, causada, entre el **04 de septiembre de 2007,** HASTA, la fecha en que el ente accionado realice el pago de la cantidad aquí determinada como obligación principal al* (sic) *demandante.*
>
> *E.- Por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($4.294.931) por concepto de indemnización por despido sin justa causa, **MAS,** el valor que corresponda por indexación, causada, entre el **04 de septiembre de 2007,***

---

apoderado renuncia al proceso de la demandada de la demandante, perdón. Muchísimas gracias señora juez."

[2] Aplicable al asunto para el momento en que se libró orden de apremio.

> *HASTA, la fecha en que el ente accionado realice el pago de la cantidad aquí determinada como obligación principal al* (sic) *demandante.*
>
> *F.- Por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS ($1.384.024), por concepto de costas del proceso ordinario en primera instancia.*
>
> *G.- Por concepto de los intereses legales, es decir sobre el 6%. Lo anterior de conformidad con el artículo 489 del C.P.C.*
>
> ***SEGUNDO:** Por las costas del presente proceso, las cuales se tasarán en su debida oportunidad.*
>
> ***TERCERO:** Notifíquese a la parte ejecutada PERSONALMENTE conforme lo establecido en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, mod. D.E2282/89, art. 1°, Mod. Art. 29 L.794/2003 y 505 del C.P.C ordenando el pago de la suma contenida en el presente auto en el término de cinco días siguientes a la notificación (art. 498 C.P.C).*
>
> *(…)"*

Dentro del término legal, el apoderado de la ejecutada propuso como excepción de mérito la de prescripción (*folios 52 vto. a 54, cuaderno ejecutivo*) la cual, como se anunció desde el inicio de este proveído, fue resuelta por la Juez de primera instancia declarándola probada, y en ese orden, debido a que en la alzada el recurrente insiste en su improcedencia, aborda la Sala el estudio de los argumentos expuestos en el recurso, en virtud del principio de consonancia.

Bajo tal estructura, los problemas jurídicos a solventar se circunscriben, en primer lugar, a establecer cuál es la norma que debe tenerse en cuenta a efectos de contabilizar el término prescriptivo en este asunto, y en segundo, determinar si operó el fenómeno de la prescripción respecto de las obligaciones objeto de mandamiento de pago.

En esa medida, y con miras a solventar la primera cuestión, se tiene, en criterio de la demandante y considerando que el título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial debidamente ejecutoriada, la norma aplicable es el artículo 2536 del C.C., modificado por el artículo 8° de la Ley 791 de 2002, que en su tenor literal dispone:

> *"**ARTICULO 2536. <PRESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTIVA Y ORDINARIA>.** <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).*

> *La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).*
> *Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término."*

Sin embargo, y si bien estamos ante una acción ejecutiva, no es posible dar aplicación a dicha disposición toda vez que en el ordenamiento laboral, norma especial que regula la materia, está expresamente reglado lo relativo a la prescripción. Así, los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T. prevén, *grosso modo,* que las acciones emanadas de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, que se contabilizaran desde que la obligación se haya hecho exigible.

En ese sentido, lo dejó sentado la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia con radicación No. 41048 del 2 de agosto de 2011[3], en la cual, explicó:

> "*Visto lo anterior, la razón está de parte del Tribunal y no del recurrente, por cuanto el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva de acciones y obligaciones en el derecho laboral y de la seguridad social, tiene su* ***regulación propia*** *que no permite acudir al Código Civil de la manera sugerida en el ataque, y que corresponde a lo consagrado en los* ***artículos 151 del Código Procesal del Trabajo*** *y* ***de la Seguridad Social*** *y* ***488 del Código Sustantivo del Trabajo,*** *que establecen un término trienal.*
>
> *Sobre la improcedencia de acudir al estatuto civil en casos de prescripción de acciones laborales, esta Corporación tuvo la oportunidad de estudiar el tema y pronunciarse en un asunto que si bien aludía a la prescripción civil de la acción en caso de la ocurrencia de un acto punible, en relación con una indemnización laboral plena de perjuicios demandada, sus enseñanzas y directrices son plenamente aplicables al proceso que ahora ocupa la atención de la Sala. Así, que en sentencia del 2 de mayo de 2003 radicado 19854, puntualizó:*
>
> *"(.....) La disciplina que contiene las normas de Derecho del Trabajo, desde antaño obtuvo independencia de las demás ramas del derecho, de tal manera que tiene unas instituciones con características, identidad y regulación normativa propias, y solo se recurre a las disposiciones de otras codificaciones, ante la ausencia de regulación legal del respectivo tema. Como el artículo 2º del C. P. del T. y la Seguridad Social, fijó la competencia de la justicia laboral, para dirimir, entre otros, <Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo>, y eso fue lo que aceptó el demandante cuando adujo en los hechos de la demanda que <NEMESIO BORJA CUCUNUBA, sufrió un accidente en su sitio de trabajo, con su respectiva*

1

denominación de ACCIDENTE DE TRABAJO> y que <La responsabilidad del empleador se haya en el propio contrato de trabajo que lo liga con el obrero>, puede afirmarse, sin dubitación, que se está aduciendo la relación de trabajo y ¡a culpa del empleador, como fuentes generadoras de la indemnización impetrada. Acorde con la sentencia de segunda instancia, cuya quiebra se pretende, los razonamientos en ella plasmados partieron de la figura de la prescripción extintiva. que al declararla probada, no permitió que prosperaran las pretensiones de la parte accionante.

Es sabido que la esencia de la prescripción expresada desde el Derecho Romano, radica en la inacción, durante el lapso consagrado en las leyes para el ejercicio de la acción, haciendo presumir el abandono del derecho; que no es más, que el silencio jurídico voluntario del acreedor frente al desconocimiento que de su derecho hace el deudor, pues, al presentarse, la prescripción extintiva, por su naturaleza y aún por su esencia, su efecto es la muerte de la acción para reclamar el derecho porque ya lo ha perdido. Ciertamente, que el fenómeno jurídico de la prescripción, se justifica como lo advierten los doctrinantes, por razones de orden práctico, dado que la seguridad social exige que las relaciones jurídicas, no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas en el tiempo se solucionen, siendo una de las formas de asegurar la paz social.

***La aludida figura, como fenómeno extintivo de acciones** y **de obligaciones en el derecho laboral** y **de la seguridad social, está regulada en los artículos 151 del C.P.L.** y **488 del C.S. del T., que tratan de manera completa** y **específica, todo lo concerniente a la prescripción de las acciones judiciales en esa materia, estableciendo un término trienal para tal efecto.** Desde la perspectiva expuesta, ante la ausencia de vacío legal; es inadecuado plantear, como lo quiere hacer ver el ataque, que como lo pretendido era una indemnización plena de perjuicios, se debía recurrir al Código Civil en cuanto regula la prescripción de la acción en caso de la ocurrencia de un acto punible, puesto que de verdad el tema en controversia corresponde a la justicia laboral y por supuesto, son las disposiciones laborales, las llamadas a gobernar el sub lite, específicamente las del Código Sustantivo del Trabajo y del Código de Procedimiento Laboral y no las de otras codificaciones, porque resultaría impertinente sobre todo en materia de la prescripción extintiva de las acciones que surgen del contrato de trabajo".*

Así, al estar regulado este fenómeno por normas procesales laborales, no podía el juzgado, ni ahora esta Sala, acudir a otros ordenamientos para definir el asunto, en razón a que la sentencia judicial que sirve de título ejecutivo en esta acción especial contiene obligaciones emanadas de derechos del trabajo, por lo que la disposición que debe aplicarse es entonces el artículo 151 del C.P.T y S.S. previamente citado.

Bajo tal orientación, se itera, ante la existencia de una disposición que gobierna el asunto debatido, debe acudirse a este criterio, según el cual la prescripción de

la acción ejecutiva es de 3 años desde la exigibilidad de la obligación, más cuando se trata de un crédito laboral porque al tenor de lo preceptuado en el artículo 145 del C.P.T y la S.S. sólo se permite la aplicación analógica de normas a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, esto es, cuando la misma norma procesal laboral no contemple la solución al conflicto.

Sobre este tema también debe decirse, no se analiza la aplicabilidad de las normas de cara al principio de favorabilidad pues no se dan los presupuestos para ello, como quiera que no existe duda en la aplicación o interpretación de las disposiciones jurídicas.

Ahora bien, no puede perderse de vista que, para que la demanda tenga la virtualidad de interrumpir la prescripción, el auto que libra mandamiento de pago debe notificarse al ejecutado dentro del término previsto en el artículo 90 del C.P.C –hoy 94 del C.G.P.-, esto es, dentro de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de dicha providencia al demandante.

Sin embargo, frente a ese tópico ha de recordarse lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de Casación Laboral, entre otras, en la SL 1533 del 2 de mayo del 2018, radicación No. 60514, en la cual se señaló:

> *"(...) se recuerda que esta Corporación, frente al tema propuesto en los cargos, ha sostenido que, entre la presentación de una demanda y su notificación, pueden presentare ciertas circunstancias que no son imputables al demandante y, en consecuencia, no pueden perjudicarle. De allí, que se admitan excepciones a lo dispuesto en el artículo 90 del CPC, y se ha aceptado que la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción, no obstante que la notificación del auto admisorio de la demanda no se efectuó oportunamente, ya sea, por negligencia del juzgado o por la elusión de la demandada.*
>
> *(...)*
>
> *Además, se precisa, que aun cuando es cierto que todo proceso se debe adelantar de manera diligente y oportuna, para realizar la finalidad de pronta y cumplida justicia, ejerciendo el Juez los poderes de dirección, así como el de velar por su rápida solución, adoptar las medidas para impedir su paralización, a través de lo que se ha llamado «oficiosidad laboral», teniendo además por presente, que es regla del derecho laboral la gratuidad de los actos procedimentales, tal como lo dispone el artículo 39 del CPTSS, no lo es menos, que a las partes les compete asumir ciertas cargas procesales, en atención a que sus resultados pueden beneficiarlos, o su olvido, los pueden perjudicar.*

> *Entre esas cargas, se encuentra la relativa al trabamiento de la relación jurídico procesal, que se constituye como el acto procesal necesario para garantizar el derecho de defensa y contradicción, de quien es llamado al proceso. De allí, que el beneficio dispuesto en el artículo 90 del CPC, estuviera supeditado a la notificación del auto admisorio de la demanda, dentro del año siguiente a la notificación al demandante del mismo. Así, si no ocurre esa situación, esa prerrogativa se perdería, generando, como consecuencia, la prescripción de la acción."*

Precisado ello entonces, se tiene, la sentencia base de la ejecución data del 8 de abril de 2010 (folios 74 a 83), declarándose legalmente ejecutoriada mediante auto del 11 de mayo de ese mismo año (folio 84).

Al respecto, téngase en cuenta, al tenor de lo previsto en el artículo 302 del C.G.P. *"Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos*", además, el artículo 305 ejusdem, prevé "*podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo",* a menos que se haya previsto una condición o plazo para su cumplimiento. En esa media, considerando que no se interpuso recurso alguno contra la sentencia de primer grado y que la decisión fue notificada en estrados (folio 83 vto. cuaderno ordinario), esta cobró ejecutoria en la misma fecha en que fue dictada, esto es, el 8 de abril de 2010, siendo exigible la obligación allí contenida a partir del día siguiente.

Ahora, mediante escrito radicado el 1 de marzo de 2011, la parte actora solicitó la ejecución de la sentencia (folio 87 vto., cuaderno ordinario), esto es, dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad del título, librándose mandamiento de pago el 15 de junio de 2011 (folio 7 a 8, cuaderno ejecutivo), el cual se notificó por anotación en estado No. 106 el 16 de junio de 2011 (folio 8 vto. ibídem). No obstante, revisadas las diligencias se encuentra que dentro del año siguiente ninguna gestión adelantó la convocante con el fin de lograr la notificación de la sociedad ejecutada, razón por la cual con la interposición de la acción no se interrumpió el término prescriptivo.

Al punto de hecho se advierte, ante la inactividad de la ejecutante y en aplicación del artículo 30 del C.P.T y la S.S., la juez *a quo,* mediante auto del 20 de julio de 2012 dispuso el archivo de las diligencias (folio 10, cuaderno ejecutivo), siendo solicitado el desarchivo solo hasta el 28 de enero de 2013 (folio 10 vto., ibíd.) y tramitada la citación para notificar personalmente a la demandada el 14 de abril de 2016 según el sello de recibido de la empresa de mensajería INTERRAPIDÍSIMO (folio 40) y el certificado de devolución respectivo (folio 40 vto., cuaderno ejecutivo), situación que fue puesta en conocimiento de la sede judicial de primer grado mediante escrito radicado el 5 de mayo de 2016 (folio 39 vto.), calenda para la cual se había superado el año que prevé la disposición aludida en apartados anteriores, siendo notificada personalmente la encartada, del auto que libró mandamiento de pago en su contra, solo hasta el 20 de febrero de 2017 (folio 52).

Visto todo lo anterior, encuentra la Sala que la mora en la integración adecuada del contradictorio no es atribuible al operador judicial que intervino en el trámite, ya que precisamente ese Despacho dada la inactividad por parte del extremo actor dispuso el archivo del expediente, sin que frente a dicha decisión se presentara reparo alguno. Además, entre la fecha en que se produjo el archivo del expediente y la solicitud que hiciera la parte actora para desarchivarlo y dar impulso al proceso, transcurrieron aproximadamente 6 meses.

Debe anotarse, que solo hasta cuando la demandante cumplió con la carga que le impone el artículo 41 del C.P.T, en concordancia con el artículo 315 de. C.P.C vigente para la época en que se libró mandamiento de pago, fue posible lograr la comparecencia del extremo pasivo.

En consonancia con lo analizado, para el momento en que se surte la notificación de la llamada a juicio ya se había vencido el término para concluir dicho trámite, pues solo se tenía hasta el 16 de junio de 2012, razones por las cuales estima ésta Corporación, la parte demandante no asumió las cargas procesales que le eran propias, debiendo soportar los efectos de la excepción de prescripción, la cual debía declararse probada, tal como lo hizo la juez de primer grado.

Conforme a lo anterior, se agota la competencia en esta instancia frente al recurso de apelación interpuesto y dado que se arribaron a las mismas conclusiones de la *a quo*, se confirmará el auto apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la recurrente.

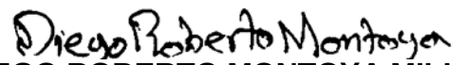
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido en audiencia llevada a cabo el 18 de junio de 2021, mediante el cual se declaró probada la excepción de prescripción y en consecuencia se dispuso la terminación del proceso, de conformidad con las motivaciones precedentes.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



RAFAEL MORENO VARGAS



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $200.000, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA LABORAL

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

La apoderada de la **parte demandante** interpuso, dentro del término legalmente, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno(2021), notificado por edicto de fecha diez (10) de mayo de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de $109.023.120.

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del demandante, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del demandado, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

En el presente asunto, la sentencia de primera instancia absolvió de todas las pretensiones de la demanda, decisión que apelada, fue confirmada.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandante, se encuentra determinado por el monto de la pretensiones que, apeladas, fueron negadas en las instancias, entre otras, la reliquidación pensional, que presenta incidencias a futuro que la Sala procede a estimar, para efectos de este recurso, con base en la diferencia pensional estimada y reclamada por el demandante para el año 1999 ($1´386.681.12-fl.215), por 14 mesadas anuales, sin actualizar o indexar, acogiendo la tabla de mortalidad rentistas hombres [2], de acuerdo a los siguientes cálculos:

INCIDENCIAS FUTURAS	
Fecha de nacimiento (fl. 26)	2 de junio de 1949
Edad fecha de fallo (años)	72
Valor de la diferencia x mesada	$ 1´386.681, 12
Mesadas año	14
Índice	14
Total	**$ 271´789.515.0**

Lo anterior permite un estimado de **$271´789.515,0**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

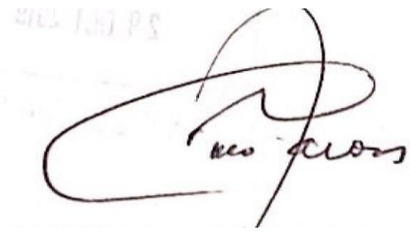
[2] SUPERINTENDENCIA FINANCIARA DE COLOMBIA . RESOLUCION No 1555 de 2010

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación impetrado por la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el proveído, continúese con el trámite correspondiente

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNANDEZ

Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

Proyecto: ALBERSON

H. MAGISTRADO DR. LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informado que la apoderada de la **parte demandante** interpuso, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA LABORAL

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

El apoderado de la **parte demandante** interpuso, dentro del término legalmente, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), notificado por edicto de fecha diez (10) de mayo de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de $109.023.120.

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del demandante, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del demandado, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

En el presente asunto, la sentencia de primera instancia absolvió de todas las pretensiones de la demanda, decisión que apelada, fue confirmada.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandante, se encuentra determinado por el monto de la pretensiones que, apeladas, fueron negadas en las instancias, entre otras, la nivelación salarial y el pago de la indemnización moratoria por la no consignación oportuna de cesantías (fl.2-Prets-5), que la Sala procede a liquidar, **para efectos de este recurso**, tomando el salario del señor BERNARDO BELTRAN RODRIGEZ ($3.642.554-FL.94) de quien se predica la igualdad salarial, liquidando la sanción para los años 2016 a 2019, sin actualizar, conforme al siguiente cuadro.

Sanción art`.99/ Ley 50/90	Año	Periodo	No. Días de sanción	Sanción
(Salario $3´642.554)	2016	16/02/2017 – 15/02/2018	360	43´710.648
	2017	16/02/2018 – 15/02/2019	360	43´710.648
	2018	16/02/2019 – 15/02/2020	360	43´710.648
Total				**$131.131.944**

Lo anterior permite un estimado de **$131.131.944**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandante.

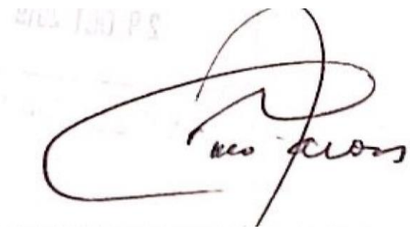
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación impetrado por la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el proveído, continúese con el trámite correspondiente

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNANDEZ

Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

Proyecto: ALBERSON

H. MAGISTRADO DR. LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informado que el apoderado de la **parte demandante** interpuso, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-
-SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

El apoderado de la parte **demandante**[1] dentro del término legal establecido, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de abril de 2021, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Con arreglo al artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social "sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente".

Así, el interés jurídico para recurrir, consiste en el perjuicio que sufre la parte con la sentencia impugnada[2], definiéndose para el demandante, en las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia, que fueron objeto de impugnación.

---

[1] *Folio 189*

[2] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "el desarrollo histórico muestra que se han manejado dos conceptos: el de la cuantía del juicio y el del interés jurídico para recurrir en casación o cuantía del recurso. (…) puede decirse que el concepto cuantía del juicio corresponde a la cuantía de la demanda inicial del proceso. **Esta noción de cuantía del juicio estuvo vigente hasta el año 1964, cuando fue introducida la de interés jurídico para recurrir** por el decreto 528 de ese año, (…) El interés jurídico para recurrir en casación **es el agravio o perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada.** La resolución judicial, que no la demanda inicial, marca la pauta para determinar si el negocio judicial admite o no el recurso de casación." Auto del 29 de junio de 1999, Sala de Casación Laboral. M.P. GERMAN G. VALDÉS SÁNCHEZ. Rad. 12.696.

Así las cosas, el interés jurídico de la parte demandante se funda en el reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa, pretensión ésta que le fuera revocada a través del fallo de segunda instancia, siendo este el único perjuicio, por cuanto la parte actora estuvo conforme con esta decisión, al no presentar recurso de alzada.

Al cuantificar las pretensiones obtenemos:

CONCEPTO	VALOR
Indemnización por despido sin justa causa	$18.587.764,00
VALOR TOTAL	**$18.587.764,00**

Al realizar la liquidación correspondiente, arrojó la suma de **$18.587.764,00** cifra que **no supera** el monto exigido por el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo, de 120 salarios mínimos legales mensuales, para conceder el recurso extraordinario de casación a la parte accionante, que para esta anualidad, ascienden a **$109.023.120[3].**

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

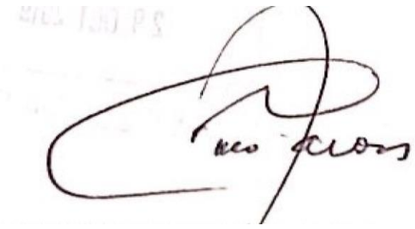
RESUELVE

PRIMERO.- NEGAR el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte accionante, contra la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), con arreglo a lo expresado en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO.- En firme el proveído, continúese con el trámite correspondiente.

[3] Salario Mínimo año 2021 $908.526

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

Magistrado



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Magistrada

Proyectó: Luz Adriana S.

H. MAGISTRADO **DR LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **029201700656 01** informándole que el apoderado de la **parte demandante,** dentro del término de ejecutoria interpuso recurso extraordinario de casación contra providencia dictada por esta Corporación el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

LUZ ADRIANA SANABRIA VERA
Escribiente Nominado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA LABORAL

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

La apoderada de la **parte demandada** interpuso, dentro del término legal, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno(2021), notificado por edicto de fecha dos (2) de junio de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del demandante, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del demandado, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

En el presente asunto, la sentencia de primera instancia condenó al pago de la pensión de jubilación de naturaleza compartida, decisión que apelada, fue modificada.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandada, se encuentra determinado por el monto de las condenas impuestas en las instancias, de ellas, el pago de la pensión de jubilación convencional de naturaleza compartida, que presenta incidencias a futuro que la Sala procede a estimar, para efectos de este recurso, con base en el valor de $ 699.556, diferencia causada entre la primera mesada, liquidada en la sentencia para el año 2010, en la suma de $1´553.345 (fl.142) y la liquidada por COLPENSIONES para el mismo año en cuantía de $853.789 (fl.3), por 14 mesadas anuales (fl.142), sin actualizar o indexar, acogiendo la tabla de mortalidad rentistas hombres [2], de acuerdo a los siguientes cálculos:

INCIDENCIAS FUTURAS	
Fecha de nacimiento (fl. 2)	5 de octubre de 1955
Edad fecha de fallo (años)	65
Valor de la diferencia x mesada	$ 699.556
Mesadas año	14
Índice	19
Total	**$ 186´081.896**

Lo anterior permite un estimado de **$186´081.896**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones impuestas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandada.

[2] SUPERINTENDENCIA FINANCIARA DE COLOMBIA . RESOLUCION No 1555 de 2010

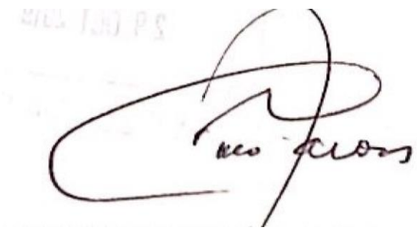
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación impetrado por la parte demandada.

SEGUNDO: En firme el proveído, continúese con el trámite correspondiente

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÀNDEZ

Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

Proyecto: ALBERSON

H. MAGISTRADO DR. LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informado que la apoderada de la **parte demandada** interpuso, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

SALA LABORAL

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Bogotá D.C. treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Procede la Sala al estudio del recurso de reposición interpuesto por la apoderada de la parte demandada COLFONDOS S.A, contra el auto de fecha once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Sostiene la recurrente que se debe conceder el recurso de casación por cuanto los argumentos jurídicos que se esgrimen en el auto recurrido no pertenecen a un caso similar, pues se está omitiendo que en la sentencia recurrida, además que se ordena el traslado de cotizaciones, rendimientos y bono pensional, también se ordena realizar los pagos realizados por concepto de pensión de vejez, retornar el bono pensional y sin que COLFONDOS pueda cesar el pago de las mesadas, por lo que a su juicio no se tuvieron en cuenta la totalidad de las condenas al momento de estimar la cuantía.

Finalmente, manifiesta que, en caso de no reponerse la decisión, subsidiariamente interpone recurso de queja.

CONSIDERACIONES

El artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que. "solo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "interés jurídico para recurrir", que de forma clara la H. corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada, definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

Con lo anterior, se advierte que el auto objeto de reposición en el cual se analizó la viabilidad del recurso extraordinario de casación a la parte accionada (AFP COLFONDOS), se condena a devolver todos los valores que hubiere recibido por motivo de la afiliación, como cotizaciones, bonos pensionales, costos cobrados por administración, sumas adicionales con los respectivos intereses y rendimientos, no así se le impuso a la recurrente el pago por concepto de pensión de vejez, ni cesar el pago de mesada alguna, que ameriten un nuevo estudio frente al caso.

Por lo anterior, encuentra la Sala que no son de recibo los argumentos manifestados por el recurrente, por cuanto el estudio de la casación, se ajusta a los preceptos jurisprudenciales de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, como ha sido reiterado en providencia de fecha 24 de junio de 2020, Radicado No. 85430 AL1223-2020, con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, precisando que la sociedad administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no tiene interés para recurrir en casación, decisión está que fue reiterada en autos CSJ AL, 13 marzo de 2012, rad. 53798 reiterada en proveídos CSJ AL3805-2018 y CSJ AL2079-2019.

Los criterios antes citados, reiteran la posición de la H corte suprema de Justicia en exponer las circunstancias por la cuales no es procedente conceder el recurso extraordinario de casación a las administradoras de fondos de pensiones, ya que:

> "… Si se tiene en cuenta que dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, *rendimientos y bono pensional, aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien deben ser administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente, dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los afiliados al RAIS…*".

Conforme lo anterior, no hay lugar a realizar un nuevo análisis del caso en concreto, ya que en la proveniencia objeto de censura se expuso claramente las razones por las cuales las AFP no tienen interés para recubrir en casación.

Bajo este entendimiento, la Sala encuentra ajustada a derecho la decisión de negar el recurso extraordinario de casación a la parte demandada y por lo anterior, se sostiene la decisión tomada en el auto recurrido.

En consecuencia, se concederá el recurso de Queja según lo dispuesto en los artículos 352 y 353 del C.G.P.

Finalmente, se observa que en el auto por medio del cual se niega el recurso de casación a la parte demandada, quedó consignado como año en que se profirió, "dos mil veinte (2020)", cuando corresponde al año dos mil veintiuno (2021), por lo que para todos los efectos, se corregirá esta anualidad, estableciendo la ya señalada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

RESUELVE

PRIMERO. – CORREGIR el auto del once (11) de junio de 2020, por medio del cual se negó el recurso de casación a la parte demandada, el cual para todos los efectos legales, se tendrá como emitido en el año dos mil veintiuno (2021).

-SEGUNDO: NO REPONER, el auto de fecha once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021), por las razones anteriormente expuestas.

TERCERO: Como quiera que el recurso de queja resulta procedente en los términos de los artículos 352 y 353 del C.G.P, se concede dicho recurso. Por Secretaría de la Sala, para que se surta lo pertinente ante el Superior.

CUARTO: En firme el proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÀNDEZ

Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

Proyecto: ALBERSON

H. MAGISTRADO DR. LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informándo que la apoderada de COLFONDOS S.A. presentó recurso de reposición contra el auto del once de junio de "2020" (sic) por medio del cual se negó el recurso de casación.

Lo anterior para proveer lo pertinente.

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **09 2018 00210 01**
DEMANDANTE: RAUL REYES BERNAL
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **08 2019 00415 01**
DEMANDANTE: MARIA LUISA MEDINA DELGADO
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de abril de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada 3-2019-415.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **13 2019 00298 01**
DEMANDANTE: ADOLFO SERRADA GONZALES
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 30 de abril de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 30 de abril de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **09 2018 00338** 01
DEMANDANTE: ANA GRACIELA MORALES GONZALES
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 30 de abril de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 30 de abril de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada 9. 2018 - 338

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **21 2018 00654 01**
DEMANDANTE: SANDRA GITZEL GARZON MORENO
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **18 2019 00316 01**
DEMANDANTE: MARTHA JULIANA COTE PEÑA
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **28 2019 00505 01**
DEMANDANTE: LUZ MIRIAM ESPINEL NARANJO
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 30 de abril de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 30 de abril de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **28 2019 00488 01**
DEMANDANTE: DIOGENES MUNCA LEAL
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 30 de abril de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 30 de abril de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada 28 2019-488

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **38 2019 00358 01**
DEMANDANTE: DELIA PEREA BUENA AVENTURA
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada 38 - 2019 - 358

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **38 2018 00617 01**
DEMANDANTE: NELCY TELLEZ MARIN
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 30 de abril de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 30 de abril de 2020, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada 38- 278 617.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **039 2019 00370** 01
DEMANDANTE: SANDRA ESTHER CASTRO BALCAZAR
DEMANDADO: COLPENSIONES.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 30 de abril de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 30 de abril de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **39 2019 00055 01**
DEMANDANTE: LUIS CARLOS LOAIZA CUBIDES
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LA ADICIÓN a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada 34 2019 - 00

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **03 2019 00495 01**
DEMANDANTE: CARLOS JULIO GRANADOS RUIZ
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **01 2018 00669 01**
DEMANDANTE: ANA DORIS TORRES RODRIGUEZ
DEMANDADO: COLPENSIONES.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada 01-2018-669.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **03 2019 00807 01**
DEMANDANTE: AURA ELIDA PINTO AREVALO
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **03 2019 00583**
DEMANDANTE: BLANCA LEONOR MORENO MORENO
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 30 de abril de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 30 de abril de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada 03-2019-583.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado Ponente

REFERENCIA: **ADICIÓN SENTENCIA - ORDINARIO**
RADICACIÓN: 11001 31 05 **04 2019 00764 01**
DEMANDANTE: WILLIAM FABIAN ALVAREZ
DEMANDADO: COLPENSIONES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

ADICIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a decidir la adición propuesta por la parte demandada Porvenir S.A. a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, en el cual expone las siguientes circunstancias: ***i)*** indebido análisis probatorio para descartar que la accionada no suministró la información completa; ***ii)*** se indique el fundamento legal para declarar la ineficacia; ***iii)*** se aclare que supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 probó la parte actora; ***iv)*** se indique que norma jurídica se aplicó para ordenar la devolución de saldos; ***v)*** se precise que norma jurídica consagra la devolución de gastos de administración y primas previsionales; ***vi)*** se señale la facultad legal que permitió al Tribunal confirmar la sentencia y ***vii)*** se resuelva sobre la prescripción respecto a los gastos de administración.

Sobre el particular, la adición se consagró en el artículo 287 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de*

[redacted]

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

En ese horizonte, la adición de sentencia faculta al Juez para que, al verificar que frente algún tópico se omitió realizar alguna manifestación, proceda a hacerlo a través de una sentencia complementaria, sin que dicho instrumento sirva de excusa para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que es objeto de la solicitud. De ahí, que el presupuesto indispensable de esta figura sea la ausencia de manifestación en relación con algún determinado tema de la controversia.

Bajo ese prisma, la Sala Considera la improcedencia de la adición, como quiera que se pretende reabrir el debate probatorio y jurídico, ante circunstancias que ya fueron objeto de discusión y resolución a través de la sentencia del 31 de mayo de 2021, pues obsérvese que sus cuestionamientos no versan sobre omisiones respecto a la litis, ya que pretende la emisión de nuevos juicios de valor respecto de situaciones que ya se abordaron, como lo son la ineficacia, gastos de administración, devolución de saldos y otros, por lo que cualquier reparo frente a dichas circunstancias debe ser ventilado a través de los medios idóneos otorgados por el ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, la solicitud de adición es negada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR LA ADICIÓN** a la sentencia del 31 de mayo de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

- SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

El apoderado de la **parte demandante** interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), notificado en edicto de fecha diez (10) de junio de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

En el asunto de la referencia, la sentencia de primera instancia, absolvió de las pretensiones incoadas, decisión que apelada, fue confirmada.

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandante se encuentra determinado por el monto de las pretensiones que fueron negadas en las instancias, de ellas, el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, que la Sala procede a estimar, para efectos de este recurso, desde la fecha de despido hasta la fecha de fallo de segunda instancia, sin indexar o actualizar, conforme al contenido del siguiente cuadro.

SALARIOS REINTEGRO				
Fecha despido Fl-12 Cud. Trib	**Fecha Fallo** Fl-12 Cud. Trib	**No. Días**	**Salario mensual** Fl-13 Cud. Trib	**Total Sanción**
12 de enero/18	31 de mayo/21	1219	$ 12´316.140	**$ 500´445.822**

Guarismo éste, que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

En consecuencia, por hallarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, **se concede** el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la **parte demandante.**

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá D.C

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante.

SEGUNDO: En firme este proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

HUGO ALEXANDER RIOS GARAY
Magistrado

Proyecto: ALBERSON

624

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

- SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

La apoderada de la **parte demandante** interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), notificado en edicto de fecha doce (12) de mayo de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

En el asunto de la referencia, la sentencia de primera instancia, absolvió de todas las pretensiones incoadas, decisión que apelada, fue confirmada.

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandante se encuentra determinado por el monto de las pretensiones que fueron negadas en las instancias, de ellas, el pago de la pensión de invalidez, que por su naturaleza presenta incidencias a futuro, que la Sala procede a cuantificar, para efectos de este recurso, sobre el valor del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha del fallo de segunda instancia, por 13 mesadas al año, acogiendo la tabla de mortalidad rentistas mujeres [2], de acuerdo a los siguientes cálculos:

Fecha de nacimiento (fl.2- Exp. Digital)	6 de junio de 1971
Edad fecha de fallo	49
Valor de la mesada	$ 908.526
Mesadas año	13
Índice	37.1
TOTAL	**$ 438´182.090**

Así las cosas, se tiene un estimado por las incidencias futuras pensionales en cuantía de **$438´182.090**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario abordar el cálculo para las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concede el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte **demandante.**

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá D.C

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante.

[2] SUPERINTENDENCIA FINANCIARA DE COLOMBIA . RESOLUCION No 1555 de 2010

SEGUNDO: En firme este proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

HUGO ALEXANDER RIOS GARAY
Magistrado

ALBERSON

[redacted]

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

- SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Los apoderados de las **partes demandante y demandada** interpusieron recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021), notificado en edicto de fecha catorce (14) de abril de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

En el asunto de la referencia, la sentencia de primera instancia, declaró la existencia del nexo laboral y condenó al pago de los aportes pensionales por todo el periodo laborado, decisión que **apelada por las partes**, la alzada revocó un punto de la sentencia e impuso nueva condena, confirmando en lo demás.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandante se encuentra determinado por el monto de las pretensiones que apeladas, fueron negadas en las instancias, entre ellas, fue negado el pago de la **sanción por no consignación de cesantías, art.99 Ley 50 de 1990**, que la Sala procede a liquidar para para efectos de este recurso, liquidando únicamente los años 2017 y 2018, tomando el valor de los salarios reconocidos en el fallo de primera instancia (fl.597-Cuad, Prim) conforme al siguiente cuadro.

Sanción art°.99/ Ley 50/90	Año	Periodo	No. Días de sanción	salario	Sanción
	2017	16/02/2018 – 15/02/2019	360	7.414.215	$ 88.970.580
	2018	16/02/2019 – 15/02/2020	360	7.857.585	$ 94.291.020
Total					**$183.261.600**

Lo anterior permite un estimado de **$183.261.600**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte **demandante.**

En lo que respecta al interés jurídico para recurrir en casación de la **parte demandada**, este se encuentra determinado por las condenas que fueron impuestas en las instancias, entre ellas, el pago de los aportes pensionales por todo el periodo laborado, que la Sala procede a liquidar, para efectos de este recurso, estimando únicamente los aportes debidos por los años 2012 a 2019, con el porcentaje total de cotización (16%) sin intereses, sobre

el valor de los salarios reconocidos en el fallo de primera instancia (fl.597) conforme al siguiente cuadro.

Año	Periodo	Salario	Cotización 16%	
2019	12 meses	8.218.215	1.314.914.4	15.778.973
2018	12 meses	7.857.585	1.257.213.6	15.086.563
2017	12 meses	7.414.215	1.186.274.4	14.235.293
2016	12 meses	6.929.172	1.108.667.5	13.304.010
2015	12 meses	6.589.171	1.054.267.3	12.651.208
2014	12 meses	6.370.042	1.019.207.0	12.230.480
2013	12 meses	6.066.707	970.673.1	11.648.077
2012	12 meses	5.737.924	918.068.0	11.016.814
2011	12 meses	5.481.918	877.107.0	10.525.282
Total				**$116.476.700**

Lo anterior permite un estimado de **$116.476.700**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones impuestas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte **demandada.**

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá D.C

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por los apoderados de las partes **demandante y demandada**.

SEGUNDO: En firme este proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

HUGO ALEXANDER RIOS GARAY
Magistrado

Proyecto: ALBERSON

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

- SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

El apoderado de la **parte demandante** interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), notificado en edicto de fecha doce (12) de mayo de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

En el asunto de la referencia, la sentencia de primera instancia, absolvió de todas las pretensiones incoadas, decisión que apelada, fue confirmada.

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandante se encuentra determinado por el monto de las pretensiones que fueron negadas en las instancias, para ello es necesario advertir, que si bien el proceso lo fue de naturaleza declarativa, sus efectos pueden ser cuantificados.

En primer lugar, por cuanto se pretendió que se declarara que el pensionado JOSÉ MANUEL TRIVIÑO VANEGAS, no causó derecho alguno para el reconocimiento de la pensión especial de vejez que fue otorgada por COLPENSIONES, lo que de suyo permitiría estimar como interés del recurrente, los valores que dicha derogatoria causaría, atendiendo su afectación sobre obligaciones ya consolidadas de tracto sucesivo con incidencia futura, permitiendo que el caso pueda ser remitido ante el Alto Tribunal de cierre de la jurisdicción del trabajo.

En segundo lugar, también resulta procedente la concesión del recurso en estudio, al cuantificarse el valor de las pretensiones que en forma directa, considera la parte actora, le son lesivas desde el punto de vista económico, como quiera que por su naturaleza pensional, se le demandan pagos por cotizaciones en alto riesgo de quien fuera su trabajador, pretensiones que fueron estimadas en su momento por la misma demandada, para el año 2016, en la suma de **$186´552.0,00**,(fl.112) monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

En consecuencia, al hallarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, **se concede** el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá D.C

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante.

SEGUNDO: En firme este proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

HUGO ALEXANDER RIOS GARAY
Magistrado

Proyecto: ALBERSON

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá, veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

El apoderado de la **parte demandada SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, interpuso recurso extraordinario de casación, dentro del término de ejecutoria, contra el fallo proferido en esta instancia el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.*"

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia declaró la nulidad del traslado de régimen pensional del demandante; decisión que fue apelada por la parte demandada y adicionada en segunda instancia por esta Corporación.

Al respecto, la Sala de Casación laboral en providencia de fecha 24 de junio de 2020, Radicado No. 85430 AL1223-2020, con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, precisó que la sociedad administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no tiene interés para recurrir en casación, por lo siguiente:

> *En el sublite, se tiene que el fallo que se pretende recurrir en casación confirmó la declaración de ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por la demandante, en consecuencia, ordenó a Porvenir S.A, trasladar a Colpensiones todos los aportes y rendimientos que tuviera Nubia Stella Caicedo Diaz en su cuenta de ahorro individual.*

---

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado*" Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Pues bien, la Sala en un caso similar, en providencia CSJ AL, 13 mar.2012, rad.53798 reiterada en proveídos CSJ AL3805-2018 y CSJ AL2079-2019, señaló:

(...) La carga económica que se impuso a la demandada, con la sentencia proferida por el ad quem se concreta al traslado al I.S.S del valor de los saldos por concepto de: cotizaciones, rendimientos y bono pensional, que figuren en la cuenta de ahorro individual de la actora.

De cara a la orden impartida por el Tribunal es claro que la demandada no sufre ningún perjuicio económico con la decisión proferida por el ad quem, si se tiene en cuenta que dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, rendimientos y bono pensional, aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien deben ser administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente, dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los afiliados al RAIS.

Por tanto, los recursos que figuran en dicha subcuenta individual, las efectuó únicamente la demandante, tales como las cotizaciones, rendimientos financieros y bono pensional, que por tratarse de un traslado no hay lugar a redención, y por tanto, continúa a cargo de la oficina de misma O.B.P del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estricta sujeción al espíritu, características y principios que informan el RAIS; de suerte que la convocada a juicio, no incurre en erogación alguna que sirva para determinar el importe de agravio o perjuicio que la sentencia puede estar ocasionándole (...).

De acuerdo con lo anterior, Porvenir S.A, no tiene interés para recurrir en casación, en la medida que el ad quem al ordenar la devolución de saldos, no hizo otra cosa que instruir a esta sociedad, en el sentido que el capital pensional de la accionante sea retornado, dineros que, junto con sus rendimientos financieros y el bono pensional son de la demandante.

Luego, en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional de la demandante, en tanto que dejaría de percibir, a futuro, los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que, además de no evidenciarse en la sentencia de segunda instancia, no se pueden tasar para efectos del recurso extraordinario.

Por lo anterior, se tiene que el Tribunal no incurrió en equivocación alguna al no conceder el recurso de casación a Porvenir S.A. que, por lo explicado, no tiene interés económico para recurrir, en la medida en que no existe erogación alguna que económicamente pueda perjudicar a la parte que pretende recurrir la decisión de segunda instancia...

Teniendo en cuenta el anterior criterio jurisprudencial asumido por la Sala de Casación Laboral, se torna improcedente el recurso de casación interpuesto por la AFP Porvenir S.A.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A**

SEGUNDO: En firme este proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
MAGISTRADO

HUGO ALEXANDER RIOS GARAY
MAGISTRADO

ÁNGELA LUCIA MURILLO VARÓN
MAGISTRADA

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

-SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR HUGO ALEXANDER RIOS GARAY

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

El apoderado de la **demandada** COLPENSIONES, aportando poder para el efecto, dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Corporación el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), notificado por edicto de fecha diecisiete (17) de junio de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

Previo a resolver, en virtud a lo dispuesto en los artículos 74 y 77 del CGP y conforme al contenido de la Escritura Publica 3373 del 2 de septiembre de 2019 (fl.24 y siguientes) se reconoce personería para actuar al abogado WINDERSON JOSÉ MONCADA RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.232.398.851, portador de la T.P 334.200, del C.S.J. como apoderado de COLPENSIONES

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación

Escaneado con CamScanner

está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

En el presente asunto, la sentencia de primera instancia condenó al pago de la pensión de sobrevivientes en la proporción indicada, decisión que apelada, fue confirmada.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandada, se encuentra determinado por el monto de las condenas impuestas en las instancias, de ellas, el pago pensional, que la Sala procede a estimar, para efectos de este recurso, tomando el retroactivo causado y liquidado por el a quo, a noviembre de 2019 (fl.11-cuad. Trib), en la sumas de $ 70.511.427 y 19.602.020 para cada una de las demandantes y a partir de esta fecha y en adelante, la suma de $674.967 y 193.492, para ANA ELVIA DE LEYTON y LUCILA BELLO GARCIA, respectivamente. Luego acumulando el retroactivo estimado más las mesadas causadas desde noviembre de 2019 a la fecha de fallo, suman $15.632.262, generando un saldo de **$105.745.709**.

Igualmente se liquida la incidencia futura, para la demandante ANA ELVIA DE LEYTON, conforme al siguiente contenido.

Fecha de nacimiento (expediente administrativo)	26 de noviembre de 1931
Edad fecha de fallo	90
Valor de la mesada	$674.967
Mesadas año	14
Indice	5.8
TOTAL	**$ 54.807.320**

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

Escaneado con CamScanner

Así las cosas, se observa que el retroactivo causado junto con las incidencias futuras pensionales estimadas, superan ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario abordar el cálculo para las demás obligaciones impuestas. En consecuencia se concede el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte **demandada.**

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER personería al abogado WINDERSON JOSÉ MONCADA RAMIREZ como apoderado de COLPENSIONES.

SEGUNDO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada.

TERCERO: En firme el proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

21 SEP 29 AM 9:1

HUGO ALEXANDER RIOS GARAY
Magistrado

ANGELA LUCIA MURILLO VARON
Magistrada

HERNAN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

Proyectó: ALBERSON

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador

RADICACIÓN No. 17-2018-00506-01
CARLOS ARTURO MENDEZ MENDEZ VS COLPENSIONES Y OTRAS

Bogotá D.C., octubre primer (1º) de dos mil veintiuno (2021)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, una vez vencido el término de traslado para que las partes presentaran sus alegaciones, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: SEÑALAR la hora de las 3:30 de la tarde del día once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021) para proferir por escrito la decisión de segunda instancia, dentro del proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Magistrado Sustanciador: MILLER ESQUIVEL GAITÁN

AUDIENCIA PÚBLICA DE TRÁMITE Y JUZGAMIENTO EN EL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE WILLIAM ALFONSO BUITRAGO GONZÁLEZ CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

En Bogotá, D.C., a los treinta (30) días de septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), día y hora señalados por auto anterior para llevar a cabo la presente en el juicio referenciado, el Magistrado Sustanciador la declara abierta en asocio de los demás magistrados que integran la Sala.

Acto seguido, el Tribunal procedió a dictar el siguiente,

A U T O :

Si bien mediante auto anterior se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada AFP Porvenir S.A., conforme al acta vista a folios 85 y 86 del proceso, al revisar el medio magnético incorporado a folio 84, con el fin de estudiar la alzada interpuesta contra la sentencia proferida el 9 de julio de 2021, por el Juzgado Segundo Laboral Transitorio del Circuito de esta ciudad dentro del proceso de la referencia y en consulta frente aquellas condenas no apeladas y que afectan a Colpensiones; se observa que no contiene grabación del instante en que se concretó la sentencia que profirió ese estrado judicial, ni mucho menos del recurso

interpuesto por la encartada; circunstancia que hace imposible a esta corporación pronunciarse al respecto.

Por lo que se ordenara devolver el expediente al ***Juzgado Segundo Laboral Transitorio del Circuito de esta ciudad,*** *para lo pertinente.*

Notifíquese y Cúmplase.



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

Magistrado Sustanciador: ***MILLER ESQUIVEL GAITAN***

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE SANRA MILENA HERNÁNDEZ HUERTAS CONTRA OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. Y OTROS

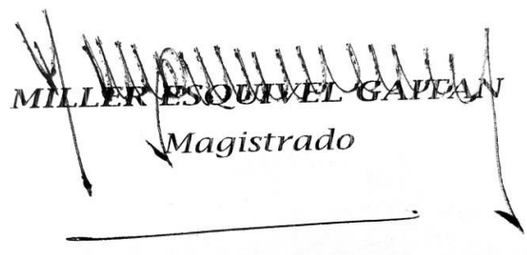
Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

El proceso de la referencia fue remitido a fin de surtirse recurso de apelación contra sentencia de 1° de febrero de 2021. Sin embargo a esta corporación se allegó escrito en el que la demandante junto con su apoderado, ***desiste del proceso****, el cual se encuentra coadyuvado por la parte demandada; en razón a que las partes suscribieron acuerdo de transacción el cual se anexa.*

En razón a lo anterior, admítase el desistimiento de la demanda presentado en el escrito recibido el 28 de septiembre de 2021 a través de correo institucional. Como la petición fue coadyuvada por la parte demandada, no hay lugar a la imposición de costas a ninguna de las partes.

Por secretaría devuélvanse las diligencias al juzgado de origen, previas las desanotaciones del caso en los libros radicadores.

Notifíquese y cúmplase



Expediente Nro. 026 2018 00063 01 ***folio***

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Magistrado Sustanciador: MILLER ESQUIVEL GAITÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE GERMÁN GUTIÉRREZ CORREDOR CONTRA ADMINISTRTADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES LA AFP COLFONDOS S.A. Y LA NACIÓN, MINISTERIOP DE HACIENDA Y CRÉDITÓ PÚBLICO.

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

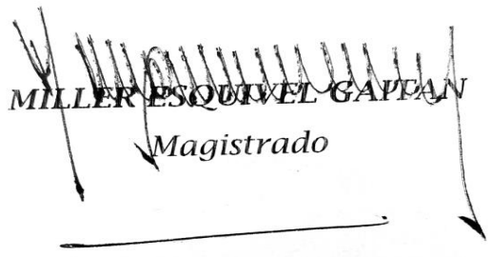
A U T O :

El proceso de la referencia fue recibido con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la sentencia proferida el 13 de agosto de 2021, por el Juzgado Segundo Laboral Transitorio del Circuito de esta ciudad dentro del proceso de la referencia. No obstante se observa, que a través de correo electrónico institucional se allegó memorial presentado por el Abogado Fabio Hernán Ortiz Riveros en su condición de apoderado de la Nación , Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirigido al juzgado que profirió la decisión de fondo; en el que promueve incidente de nulidad contra la audiencia llevada a cabo el 13 de agosto del año que cursa, fundada en la falta de oportunidad que tuvo la entidad incidentante de actuar en esa diligencia; a pesar de las solicitudes de envío de link presentadas por el Dr. José Humberto Alvarado Niño, delegado por la Coordinación de la Subdirección Jurídica de esa cartera ministerial presentada el 11 de agosto.

En razón de lo anterior, atendiendo que la solicitud de nulidad está dirigida al estrado judicial de conocimiento que profirió la decisión de fondo y en

contra su actuación procesal; en aras de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y en especial el principio de doble instancia, se considera pertinente ordenar el expediente al ***Juzgado Segundo Laboral Transitorio del Circuito de esta ciudad,*** *para lo pertinente.*

Notifíquese y Cúmplase.



Expediente Nro. 034 2017 00705 01

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Magistrado Sustanciador: MILLER ESQUIVEL GAITÁN

AUDIENCIA PÚBLICA DE TRÁMITE Y JUZGAMIENTO CELEBRADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE MARÍA TRINIDAD LEÓN VILLABOS CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES Y BLANCA ESTER PARRA

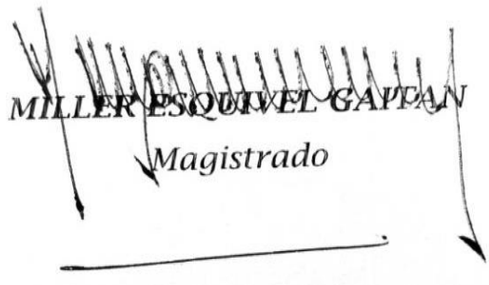
En Bogotá, D.C., a los treinta (30) días de septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), día y hora previamente señalados por auto anterior para llevar a cabo la presente en el juicio referenciado, el Magistrado Sustanciador la declaró abierta.

Acto seguido, el Tribunal procedió a dictar el siguiente,

A U T O :

Si bien mediante auto anterior se admitió la apelación de la sentencia proferida por el a quo el 19 de abril de 2021 al revisar el medio magnético incorporado a folio 22, así como el enlace del expediente digital, ninguno de estos incorpora la grabación completa de que trata el artículo 80 del CPTSS; circunstancia que hace imposible a esta corporación pronunciarse al respecto. Por lo que se ordenara devolver el expediente al juzgado de origen para lo pertinente.

Notifíquese y Cúmplase.



República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **11 2018 00533 01**
Demandante:	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ
Demandado:	COLPENSIONES
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, se admite el presente proceso en el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de la parte demandante, de conformidad con lo reglado por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, ello por cuanto la sentencia fue adversa a sus intereses, de conformidad con los artículos 13 y 137 de la Ley 100 de 1993.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y al conocerse el presente trámite procesal en sede de consulta, se concede el término común de cinco (5) días a las partes para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Según lo dispuesto en el Art. 612 del C.G.P., en concordancia con el Art.41 del C.P.T. y S.S., **NOTIFICAR** a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO,** con el fin que si a bien lo tiene, se sirva manifestar su interés en intervenir en el presente proceso, de conformidad con la discrecionalidad con la que cuenta al tenor el Art. 1 del Dec. 1365 del 27 de junio de 2013.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. En tal sentido se,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **14 2020 00025 01**
Demandante:	ZOILO RODRIGUEZ CASTILLO
Demandado:	COLPENSIONES Y PROTECCION S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admiten los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, así como por los extremos demandados, esto es, COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., en contra de la sentencia de primera instancia, por cumplir con los requisitos legales.

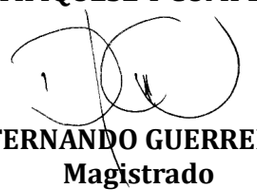
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, se admite el presente proceso en el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo reglado por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, ello por cuanto la Nación funge como garante de las obligaciones de la entidad demandada, de conformidad con los artículos 13 y 137 de la Ley 100 de 1993.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y al conocerse el presente trámite procesal en sede de consulta, se concede el término común de cinco (5) días a las partes para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el Art. 612 del C.G.P., en concordancia con el Art. 41 del C.P.T. y S.S., se dispone **NOTIFICAR** a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO,** con el fin que si a bien lo tiene, se sirva manifestar su interés en intervenir en el presente proceso, de conformidad con la discrecionalidad con la quecuenta al tenor el Art. 1 del Dec. 1365 del 27 de junio de 2013.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **21 2017 00034 02**
Demandante:	MARIA FERNANDA GUERRERO LOPEZ
Demandado:	SINTRAEMSDES
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admite el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada, en contra de la sentencia de primera instancia, por cumplir con los requisitos legales.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020, dado que las partes apelaron la decisión de primer grado, se concede el término común de cinco (5) días a las partes para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **30 2019 00658 01**
Demandante:	LUIS ALBERTO REAL RAMIREZ
Demandado:	COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admite el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR S.A., en contra de la sentencia de primera instancia, por cumplir con los requisitos legales.

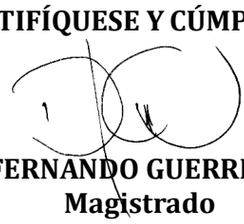
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, se admite el presente proceso en el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo reglado por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, ello por cuanto la Nación funge como garante de las obligaciones de la entidad demandada, de conformidad con los artículos 13 y 137 de la Ley 100 de 1993.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y al conocerse el presente trámite procesal en sede de consulta, se concede el término común de cinco (5) días a las partes para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el Art. 612 del C.G.P., en concordancia con el Art. 41 del C.P.T. y S.S., se dispone **NOTIFICAR** a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO,** con el fin que si a bien lo tiene, se sirva manifestar su interés en intervenir en el presente proceso, de conformidad con la discrecionalidad con la quecuenta al tenor el Art. 1 del Dec. 1365 del 27 de junio de 2013.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **38 2019 00755 01**
Demandante:	CLODOMIRO SOLER MORA
Demandado:	MARIA HELENA GOMEZ Y OTROS
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia, por cumplir con los requisitos legales.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y al conocerse el presente trámite procesal en sede de apelación, se corre traslado a la parte recurrente para alegar de conclusión por escrito, para lo cual se concede el término de **cinco** (5) días.

Vencida dicha temporalidad, se corre traslado por el término de **cinco (5) días** a los no apelantes para alegar de conclusión por escrito. Vencidos éstos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **12 2020 00192 01**
Demandante:	JAIME POSADA BOLIVAR
Demandado:	POLLO ANDINO S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

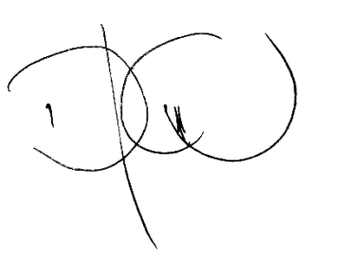
De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia, por cumplir con los requisitos legales.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y al conocerse el presente trámite procesal en sede de apelación, se corre traslado a la parte recurrente para alegar de conclusión por escrito, para lo cual se concede el término de **cinco (5) días**.

Vencida dicha temporalidad, se corre traslado por el término de **cinco (5) días** a los no apelantes para alegar de conclusión por escrito. Vencidos éstos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **30 2019 00709 01**
Demandante:	JUAN CARLOS CORTES DELGADO
Demandado:	COLPENSIONES Y PROTECCION S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admiten los recursos de apelación interpuestos por COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., en contra de la sentencia de primera instancia, por cumplir con los requisitos legales.

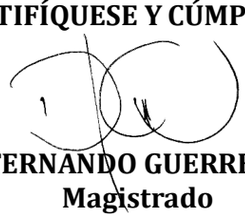
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, se admite el presente proceso en el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo reglado por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, ello por cuanto la Nación funge como garante de las obligaciones de la entidad demandada, de conformidad con los artículos 13 y 137 de la Ley 100 de 1993.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y al conocerse el presente trámite procesal en sede de consulta, se concede el término común de cinco (5) días a las partes para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el Art. 612 del C.G.P., en concordancia con el Art. 41 del C.P.T. y S.S., se dispone **NOTIFICAR** a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO,** con el fin que si a bien lo tiene, se sirva manifestar su interés en intervenir en el presente proceso, de conformidad con la discrecionalidad con la quecuenta al tenor el Art. 1 del Dec. 1365 del 27 de junio de 2013.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **02 2017 00466 01**
Demandante:	MARIA ELVIRA DUARTE NIETO
Demandado:	COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, se admite el presente proceso en el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de la parte demandante, de conformidad con lo reglado por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, ello por cuanto la sentencia fue adversa a sus intereses, de conformidad con los artículos 13 y 137 de la Ley 100 de 1993.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y al conocerse el presente trámite procesal en sede de consulta, se concede el término común de cinco (5) días a las partes para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Según lo dispuesto en el Art. 612 del C.G.P., en concordancia con el Art.41 del C.P.T. y S.S., **NOTIFICAR** a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO,** con el fin que si a bien lo tiene, se sirva manifestar su interés en intervenir en el presente proceso, de conformidad con la discrecionalidad con la que cuenta al tenor el Art. 1 del Dec. 1365 del 27 de junio de 2013.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. En tal sentido se,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **34 2017 00022 01**
Demandante:	LUZ DARY RAMIREZ VARGAS
Demandado:	COLPENSIONES Y MARIA INES ORJUELA RAMIREZ
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admiten los recursos de apelación interpuestos por COLPENSIONES y la integrada como tercera ad – excludendum, en contra de la sentencia de primera instancia, por cumplir con los requisitos legales.

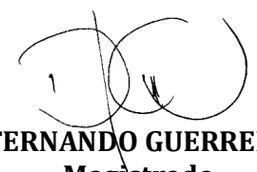
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, se admite el presente proceso en el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo reglado por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, ello por cuanto la Nación funge como garante de las obligaciones de la entidad demandada, de conformidad con los artículos 13 y 137 de la Ley 100 de 1993.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y al conocerse el presente trámite procesal en sede de consulta, se concede el término común de cinco (5) días a las partes para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el Art. 612 del C.G.P., en concordancia con el Art. 41 del C.P.T. y S.S., se dispone **NOTIFICAR** a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO,** con el fin que si a bien lo tiene, se sirva manifestar su interés en intervenir en el presente proceso, de conformidad con la discrecionalidad con la quecuenta al tenor el Art. 1 del Decreto 1365 del 27 de junio de 2013.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado
Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **20 2020 00029 01**
Demandante:	MILTON DANIEL VIZCAINO NISPERUZA y otros
Demandado:	AVIANCA S.A. y OTROS
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

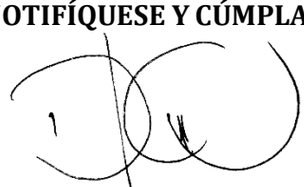
AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admiten los recursos de apelación interpuestos por la totalidad de sujetos que conforman la litis, en contra de la sentencia de primera instancia, por cumplir con los requisitos legales.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020, dado que las partes apelaron la decisión de primer grado, se concede el término común de cinco (5) días para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado
Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **18 2019 00512 01**
Demandante:	HILDA MARÍA RODRÍGUEZ MORENO
Demandado:	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admiten los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y las demandadas AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., en contra de la sentencia de primera instancia, por cumplir con los requisitos legales.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020, dado que las partes apelaron la decisión de primer grado, se concede el término común de cinco (5) días para que presenten sus alegatos. Vencidos estos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado
Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CUARTA LABORAL

Ejecutivo Laboral	1100131050 **1 5 2012 00260 06**
Demandante:	JESÚS ALBERTO RAMÍREZ CORRALES
Demandado:	FIDUDAVIVIENDA S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

AUTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra del auto proferido el 6 de agosto de 2021, por cumplir con los requisitos legales.

Ejecutoriado el presente auto, conforme lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y al conocerse el presente trámite procesal en sede de apelación, se corre traslado a la parte recurrente para alegar de conclusión por escrito, para lo cual se concede el término de **cinco** (5) días.

Vencida dicha temporalidad, se corre traslado por el término de **cinco (5) días** a los no apelantes para alegar de conclusión por escrito. Vencidos éstos, se proferirá la sentencia que en derecho corresponda.

Los partes deberán remitir los alegatos de conclusión dentro del precitado término al correo electrónico secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

República de Colombia

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
SALA LABORAL

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Magistrada Ponente: **Dra. LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO**

Ref.: Radicación N° 11-001-31-05-030 2015 00456 01. Proceso Ordinario de Saludcoop EPS en liquidación contra Nación – Ministerio de Salud y la Protección Social y otros (Recurso de Queja – Auto Interlocutorio).

Resuelve la Sala el recurso de queja interpuesto por la demandada ADRES contra el auto proferido, el 16 de marzo de 2021, por el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el que se negó el recurso de apelación contra la providencia que aceptó el desistimiento de las pretensiones frente a alguna de las demandadas.

ANTECEDENTES:

Pretende la sociedad accionante el reconocimiento y pago de solicitudes de recobro presentadas, junto con la indexación las sumas adeudadas o el reconocimiento de los intereses que establece el Decreto Ley 1281 de 2002.

Para lo que interesa al asunto, conviene señalar que mediante escrito radicado el 18 de septiembre de 2019, la parte demandante presentó escrito de desistimiento de las pretensiones frente a las demandadas Carvajal Tecnología y Servicios SAS, Grupo Asesoría en Sistematización de Datos –Grupo ASD

SAS y Servis Outsourcing Informático Servis SAS en condición de integrantes de la Unión Temporal Nuevo Fosyga y Unión Temporal Fosyga 2014; el cual fue aceptado por el servidor judicial de primer grado en audiencia celebrada el 16 de marzo de 2021.

Inconforme con la anterior determinación la apoderada de la ADRES quien actúa en condición de sucesora procesal del Ministerio de Salud y la Protección Social, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

El servidor judicial de primer grado, no repuso la providencia recurrida y no concedió el recurso de apelación al considerar que la determinación recurrida no se encuentra enlistada en el artículo 65 del C.P.T. y S.S.

En contra de dicha decisión la apoderada de ADRES interpuso el recurso de queja.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En lo que interesa al asunto, aduce la recurrente en esencia que el recurso de apelación interpuesto se encuentra expresamente enlistado en el numeral 2° del artículo 65 del C.P.T. y S.S., en donde se prevé su procedencia cuando se niegue la representación de una de las partes o la intervención de terceros; lo que a su juicio constituye que un llamado en garantía es una figura jurídica a través de la cual se puede hacer parte otro sujeto o un tercero que por sus características pueden tener la obligación de cumplir en caso de una condena.

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

Recuerda la Sala que la queja es un recurso autónomo ante la segunda instancia, para resolver sobre la viabilidad del recurso de apelación cuya

concesión fue denegada en primera, sin entrar a considerar las razones que se exponen en el recurso de alzada para atacar la decisión objeto de inconformidad y, que corresponden al trámite propio de aquel.

Para la interposición del recurso de queja, se debe cumplir estrictamente la ritualidad previa que dispone el artículo 353 del Código General del Proceso como requisito obligatorio de trámite; es decir, que quien quiera recurrir en queja deberá interponer recurso de reposición contra el auto que niega el recurso de apelación y, en subsidio, la queja.

Sea lo primero entonces, verificar si la quejoso cumplió a cabalidad la instrucción impartida por la norma durante el trámite previo a la interposición del recurso ante esta Colegiatura.

Al efecto advierte la Sala que conforme se observa en el registro de audio allegado al proceso, la apoderada de la demandada ADRES no cumplió con el trámite antes referido, pues procedió a interponer de manera directa el recurso de queja, sin interponer previamente el recurso de reposición en contra de la providencia mediante la cual se negó el recurso de apelación, tal como se lo imponía el artículo 353 del CGP.

Debe recordarse que las exigencias formales del aludido recurso son de obligatorio cumplimiento, en la medida que por la finalidad de este medio de impugnación, se requiere de unos términos judiciales precisos que eviten dilaciones injustificadas de la parte interesada, así como el de obligar a que se agoten en la primera instancia todos los recursos a su alcance para obtener la concesión de la apelación, surgiendo entonces la queja como la última alternativa para lograr que se dé trámite a la alzada, ante la definitiva negativa del *aquo* de que se surta la doble instancia.

Efectuado el anterior examen, no le resta a la Sala que rechazar el recurso de queja interpuesto el 16 de marzo de 2021.

DECISIÓN:

En razón y mérito de lo expuesto, la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, D. C., **RECHAZA** el recurso de queja remitido interpuesto el 16 de marzo de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Remítase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO
Magistrada

LILLY YOLANDA VEGA BLANCO
Magistrada

LUÍS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

- SALA LABORAL-

Magistrada Ponente: DRA LUCY STELLA VASQUEZ SARMIENTO

Bogotá D.C. 16 SEP 2021

Los apoderados de la **parte demandante** y de la **demandada** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS interpusieron recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), notificado en edicto de fecha treinta y uno (31) de mayo de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

En el presente asunto, el fallo de segunda instancia revocó la decisión absolutoria de primer grado y condenó a algunas de las demandadas al cumplimiento de las obligaciones que impuso en el fallo.

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

Así las cosas, el interés jurídico para acudir en casación de la **demandada** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, recae sobre las condenas que le fueron impuestas, de ellas, el pago de los derechos pensionales, estimados con base en el cálculo actuarial de las cotizaciones causadas, entre el 2 de agosto de 1982 al 28 de agosto de1990 y entre el 31 de agosto de 1994 al 19 de septiembre de 1994, teniendo como salario la suma de $ 540.566.00

Para efectos de la anterior estimación se remitió el presente proceso al grupo liquidador creado por el Acuerdo PSAA 15 – 10402 de 2015 del C.S.J[2]. para el apoyo de estos procesos, quien, realizadas las operaciones pertinentes para el primer período causando (1982 a 1990), estableció la suma de **$ 222.282.454,00,** guarismo que supera los ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo cual se concederá el recurso de casación a la parte demandada, sin que resulte necesario calcular las demás obligaciones impuestas.

Por otro lado, en lo que respecta al recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte **demandante**, el interés para recurrir corresponde al valor de las pretensiones que, apeladas, no fueron otorgadas en las instancias, de ellas, se reclama el pago del cálculo actuarial con base en **salario promedio mensual de $ 1´207.730.00** (fl.2185), luego de sumar al valor del salario básico mensual los demás factores salariales de origen contractual y convencional, como prima de antigüedad, salario en especie, horas extras, viáticos nacionales e internacionales y primas extralegales.

[2]Grupo liquidador de actuarios creado por el acuerdo PSAA 15-1343

Para lo anterior, el grupo liquidador estimó el mismo calculo actuarial, con base en el salario reclamado por el actor($ 1´207.730.00), para el mismo periodo (1982-1990), obteniendo la suma de $ 496´305.355, a la que **se descuenta el valor reconocido** con el cálculo actuarial realizado a la parte demandada($ 222.282.454,00), quedando un saldo en reclamación de **$ 274.022.901,0**, que supera los ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la **parte demandante.**

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la **parte demandante** y por la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS contra el fallo proferido en esta instancia el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), con arreglo a lo expresado en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: En firme este proveído, remítase el expediente a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para el surtimiento del recurso, previas las anotaciones a que haya lugar.

Notifíquese y Cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO
Magistrada

LILLY YOLANDA VEGA BLANCO
Magistrada

LUIS AGUSTIN VEGA CARVAJAL
Magistrado

Alberson

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Magistrado

REFERENCIA: EJECUTIVO DE ORALIDAD– APELACION AUTO
RADICACIÓN: 11001 31 05 **030 2017 000359 04**
DEMANDANTE JESUS ANTONIO ACOSTA HURTADO
DEMANDADO: COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá D.C., 29 de septiembre de dos mil veintiuno (2.021).

AUTO

Revisado el expediente se advierte que el mismo se encuentra incompleto, como quiera que se omitió incorporar las piezas correspondientes al recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto del 4 de mayo de 2021, pues únicamente se hace alusión en la constancia secretarial del 14 de julio de 2021 (flº. 1942), pero no se adjuntó o incorporó el mismo al expediente.

Así las cosas, se solicita al *a quo* proceder a su incorporación correctamente o a su reconstrucción de ser el caso, a la mayor brevedad.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firma electrónica)
HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

Firmado Por:

Hernan Mauricio Oliveros Motta
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 009 Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **71ead2dbc362e4fec0ca62e884e41ab8ccdc0d8c0a4d54c6e915a41065264d41**
Documento generado en 29/09/2021 04:25:17 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Magistrado

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL
RADICACIÓN: 11001 31 05 **27 2019 00401 01**
DEMANDANTE: JOSE EMILIO MENDEZ QUINTERO
DEMANDADO: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C.,29 de septiembre de dos mil veintiuno (2.021).

AUTO

Revisado el expediente se advierte que el mismo carece del medio audio visual de la audiencia consagrada en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así las cosas, se solicita al *a quo* proceder a la incorporación del mismo correctamente o a su reconstrucción de ser el caso, a la mayor brevedad.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firma electrónica)
HERNAN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

Firmado Por:

Hernan Mauricio Oliveros Motta
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 009 Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c32b68d1cdfe75efb2b4f48b2b5b30acf80e34ef5675d6d77c42217e58ef9591**
Documento generado en 29/09/2021 04:25:30 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Magistrado

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL
RADICACIÓN: 11001 31 0 **35 2020 00394 01**
DEMANDANTE: MARIA FANNY ARIAS BETACOUNRT
DEMANDADO: COLPENSIONES.

AUTO

Bogotá D.C., 29 de septiembre de dos mil veintiuno (2.021).

Sería del caso entrar a definir la admisión del asunto a tratar por este Tribunal, de no ser, porque no es posible ingresar al vínculo que contiene el expediente virtual. Por consiguiente, se requiere al juzgado de conocimiento, que remita el expediente en un CD o, de ser posible en físico, a efectos de proceder con el examen correspondiente.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(FIRMA ELECTRÓNICA)
HERNAN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

Firmado Por:

Hernan Mauricio Oliveros Motta
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 009 Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **01cb626309f0d3bd226bd72968df91e62b319cb43527198c5c805ed5f7d32cf7**
Documento generado en 29/09/2021 04:25:23 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Magistrado

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL
RADICACIÓN: 11001 31 05 **31 2021 00012 01**
DEMANDANTE: JANETH PUNGO HERRAN
DEMANDADO: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., 29 de septiembre de dos mil veintiuno (2.021).

AUTO

Revisado el expediente se advierte que el CD de expediente virtual presenta problemas de apertura y reproducción en medio audio visual.

Por consiguiente, se requiere al juzgado de conocimiento, que remita la totalidad del expediente virtual en un CD o de manera física, a efectos de proceder con el examen correspondiente.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firma electrónica)
HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

Firmado Por:

Hernan Mauricio Oliveros Motta
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 009 Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a9f6743b7fed78432d32592b13047f23953254ae58cf96b8cbf4b2bbf54cb188**
Documento generado en 29/09/2021 04:25:13 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Magistrado

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL
RADICACIÓN: 11001 31 05 **12 2019 01013 01**
DEMANDANTE: LUIS ORLANDO PARRA VARGAS
DEMANDADO: COLPENSIONES Y OTROS

AUTO

Bogotá D.C., 29 de septiembre de dos mil veintiuno (2.021).

AUTO

Revisado el expediente se advierte que el mismo se encuentra incompleto, como quiera que el CD que obra a folio 144 se encuentra vacío.

Así las cosas, se solicita al *a quo* proceder a la incorporación del mismo correctamente o a su reconstrucción de ser el caso, a la mayor brevedad.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firma electrónica)
HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

Firmado Por:

Hernan Mauricio Oliveros Motta
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 009 Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1560c431167103c50b8dcc8f5b1da9943f552af0a8c1e9ebc1c14bbe04ec13d4**
Documento generado en 29/09/2021 04:25:33 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Magistrado

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL
RADICACIÓN: 11001 31 05 **02 2019 00479 01**
DEMANDANTE: ALEJANDRO JOSE OCAMPO MORA
DEMANDADO: COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá D.C., 29 de septiembre de dos mil veintiuno (2.021).

AUTO

Sería del caso entrar a definir la admisión del asunto a tratar por este Tribunal, de no ser, porque no es posible ingresar al vínculo que contiene el expediente virtual. Por consiguiente, se requiere al juzgado de conocimiento, que remita el expediente en un CD o, de ser posible en fisico, a efectos de proceder con el examen correspondiente.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firma electrónica)
HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

Firmado Por:

Hernan Mauricio Oliveros Motta
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 009 Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d3cb0aaceceec4ec5b5b37a018fd3f3d1f903122d89edeefb1632615f788f041**
Documento generado en 29/09/2021 04:25:20 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Quinta de Decisión Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Magistrado

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL
RADICACIÓN: 11001 31 05 **26 2018 00629 01**
DEMANDANTE: SANDRA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ
DEMANDADO: COLPENSIONES Y OTROS

AUTO

Bogotá D.C., 29 de septiembre de dos mil veintiuno (2.021).

Revisado el expediente se advierte que el mismo se encuentra incompleto, como quiera que la audiencia que milita a folio nº. 375 se encuentra solo una parte y presenta problemas en su reproducción.

Así las cosas, se solicita al *a quo* proceder a la incorporación del mismo correctamente o a su reconstrucción de ser el caso, a la mayor brevedad.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firma electrónica)
HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

Firmado Por:

Hernan Mauricio Oliveros Motta
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 009 Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1d93569c7f2d71b8ee996c6569091fc1f0a8d9366440ca359c708c006ac8125a**
Documento generado en 29/09/2021 04:25:27 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica